



UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FACULDADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Departamento de Teoría da Educación, Historia da Educación e
Pedagogía Social

TESIS DOCTORAL

**DELINCUENCIA FEMENINA E
INMIGRACIÓN. PERFIL SOCIOEDUCATIVO
Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
CENTRADA EN LA COMPETENCIA SOCIAL**

Cristina Varela Portela

DIRECTORES:

Profa. Dra. Mar Lorenzo Moledo

Prof. Dr. Miguel A. Santos Rego

Santiago de Compostela, 2015



MIGUEL ÁNGEL SANTOS REGO, Catedrático de Universidad, y **MAR LORENZO MOLEDO**, Profesora Titular de Universidad, ambos del Departamento de Teoría de la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social, con sede en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidade de Santiago de Compostela, estando en activo y dedicación a tiempo completo,

INFORMAN Y HACEN CONSTAR:

QUE la investigación realizada bajo la dirección de los firmantes por la Licenciada Doña **CRISTINA VARELA PORTELA**, y que lleva por título **“DELINCUENCIA FEMENINA E INMIGRACIÓN. PERFIL SOCIOEDUCATIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA COMPETENCIA SOCIAL”** cuenta con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser presentada y defendida públicamente, ante la correspondiente Comisión, para la colación del **Grado de Doctor en Ciencias de la Educación** por la Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, a de Septiembre de 2015

Fdo.

Dr. Miguel A. Santos Rego

Dra. Mar Lorenzo Moledo



“Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el
corazón comprende instantáneamente”

Concepción Arenal

“El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la
esperanza perdida”

Federico García Lorca





AGRADECIMIENTOS

Son muchas las personas que me han acompañado en este camino y me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todos aquellos que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo:

En primer lugar a los profesores Mar Lorenzo Moledo y Miguel A. Santos Rego por la orientación, el seguimiento y la supervisión constante. Su persistencia y su paciencia los han convertido en guías imprescindibles para la consecución de esta Tesis y mi formación como investigadora en Ciencias de la Educación.

No puedo dejar atrás a las mujeres que han participado en la investigación ofreciéndome su tiempo desde su complicada situación así como a los profesionales del Sistema Penitenciario que se han involucrado desinteresadamente. Su implicación, sin duda, ha facilitado el proceso.

A los compañeros del Grupo de Investigación Esculca, por tantas horas de trabajo juntos y las muestras de ánimo en los momentos bajos, de todos ellos he aprendido mucho en este proceso a través de valiosas sugerencias y orientaciones.

A mis amigos, por estar aunque no esté y tenderme la mano cuando ha sido necesario.

A mis padres, fuente de apoyo constante e incondicional en toda mi vida. De ellos he recibido siempre el soporte entusiasta en mis inquietudes personales e intelectuales y todos los medios posibles para conseguirlo. Por enseñarme, ante todo, a ser persona. A ellos debo, más que a nadie, el estar hoy aquí.

A mis hermanos, porque además de consejeros son amigos, por servirme de ejemplo y estar a mi lado en todo momento y por Anita y Roi, que me sirvieron de aliento en el último empujón.

Y, por supuesto, a Emilio, testigo diario de este trabajo, por su comprensión, paciencia y ánimo, por acompañarme en la vida, por confiar en mí sin dudar ni un solo momento y estar orgulloso de cada paso que doy.

A todos ellos, gracias.



ÍNDICE



TESIS DOCTORAL

DELINCUENCIA FEMENINA E INMIGRACIÓN. PERFIL SOCIOEDUCATIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA COMPETENCIA SOCIAL

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	17
PRIMERA PARTE. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO DE LA INMIGRACIÓN Y LA DELINCUENCIA	
CAPÍTULO PRIMERO. LA CÁRCEL Y EL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA. UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO	27
1.1. Introducción	29
1.2. Evolución histórica de la prisión en Europa: el caso específico de las mujeres	30
1.2.1. La prisión y la pena privativa de libertad en Europa. Breve reseña histórica	30
1.3. El Sistema penitenciario español en clave femenina. De las galeras a las unidades de madres	43
1.3.1. La pena privativa de libertad para las mujeres en España antes de la Ley Orgánica General Penitenciaria (1979)	44
1.3.2. Las bases del moderno sistema penitenciario español: la LOGP y sus Reglamentos	54
1.3.3. La Red de establecimientos Penitenciarios en España: clasificación y características	63
CAPÍTULO SEGUNDO. DELITO Y DELINCUENCIA: LAS TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA DELINCUENCIA FEMENINA	75
2.1. Introducción	77
2.2. La distinta consideración del delito y la delincuencia de las mujeres	78

2.3. La explicación de la delincuencia femenina: las principales teorías.....	88
2.3.1. Teorías basadas en explicaciones individuales.....	89
2.3.1.1. Explicaciones de contenido biológico.....	89
2.3.1.2. Explicaciones de contenido psicoanalítico.....	92
2.3.1.3. Explicaciones de contenido psiquiátrico.....	95
2.3.2. Teorías intermedias.....	96
2.3.3. Teorías de carácter social.....	99
2.3.3.1. Enfoque funcionalista.....	100
2.3.3.2. Enfoques críticos.....	106
CAPÍTULO TERCERO. MUJER, EXTRANJERA Y DELINCUENTE. LA TRIPLE DISCRIMINACIÓN.....	115
3.1. Introducción.....	117
3.2. El papel de la mujer en los flujos migratorios.....	118
3.3. Evolución de la delincuencia en España: La invisibilidad de las mujeres.....	130
3.3.1. Las mujeres delincuentes en las estadísticas oficiales: mujeres detenidas y presas.....	131
3.3.2. La investigación sobre mujer y delincuencia.....	139
3.4. La asociación entre inmigración y delincuencia: la criminalización de la inmigración.....	147
3.5. La presencia de extranjeras en las prisiones españolas: su perfil individual y social.....	154
CAPÍTULO CUARTO. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA REINSERCIÓN SOCIAL.....	161
4.1. Introducción.....	163

4.2. El tratamiento penitenciario en la legislación española: el eje de la Educación.....	164
4.3. Modelos de intervención con delincuentes.....	173
4.3.1. El modelo de justicia.....	173
4.3.2. El modelo médico de rehabilitación o de enfermedad mental.....	175
4.3.3. El modelo de tratamiento educativo-comunitario o de reintegración.....	177
4.4. La prisión como institución de ayuda educativa.....	181
4.4.1. Los programas institucionales de intervención psico-socio-educativa.....	181
4.4.2. La eficacia en la intervención educativa con delincuentes.....	204
4.4.3. Los profesionales de la educación en los Centros Penitenciarios.....	210

SEGUNDA PARTE. LAS MUJERES EXTRANJERAS EN PRISIÓN: DIMENSIÓN EMPÍRICA DEL ESTUDIO

CAPÍTULO QUINTO. PLANTEAMIENTO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN.....	217
5.1. Introducción.....	219
5.1.1. Oportunidad del estudio.....	219
5.1.2. Objetivos de la investigación.....	221
5.2. El problema de investigación.....	222
5.2.1. Formulación del problema.....	222
5.2.2. Metodología de la investigación.....	224

5.2.3. Definición de las hipótesis de trabajo.....	227
5.2.4. Definición de las variables.....	228
5.2.5. Diseño de la investigación.....	231
5.3. Población y muestra.....	233
5.3.1. Selección de la muestra de estudio.....	233
5.3.2. Características de la muestra.....	235
5.4. Instrumentos de la investigación.....	244
5.4.1. Diseño de los instrumentos.....	244
5.4.2. Descripción de los instrumentos.....	247
5.4.3. Aplicación de los instrumentos y recogida de datos.....	248
5.5. Codificación y análisis de datos.....	251
5.5.1. Procesamiento de la información.....	251
5.5.2. Análisis de datos.....	252
CAPÍTULO SEXTO. ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. LAS MUJERES EXTRANJERAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, BRIEVA, MADRID I, TEIXEIRO, PEREIRO DE AGUIAR, BONXE Y A LAMA.....	255
6.1. Introducción.....	257
6.2. Las prisiones y módulos de mujeres en España: la perspectiva de los Subdirectores de Tratamiento.....	257
6.2.1. Datos generales de los centros/módulos.....	259
6.2.2. Características de los centros/módulos.....	267
6.2.3. Los recursos humanos de los centros/módulos.....	275
6.2.4. Los Programas de Tratamiento de los centros/módulos.....	278

6.2.5. Relaciones con la comunidad de los centros/módulos.....	282
6.3. Estudio socioeducativo de la muestra. Análisis descriptivo de las respuestas al cuestionario de mujeres.....	287
6.3.1. Proyecto migratorio de las mujeres de la muestra.....	287
6.3.2. Perfil escolar de las mujeres de la muestra.....	294
6.3.3. Perfil laboral de las mujeres de la muestra.....	300
6.3.4. Perfil criminológico de las mujeres de la muestra.....	304
6.3.5. Vida en prisión de las mujeres de la muestra.....	312
6.3.6. Consumo de drogas de las mujeres de la muestra.....	316
6.4. Análisis de diferencias en las respuestas de las mujeres de la muestra.....	318
CONCLUSIONES.....	347
BIBLIOGRAFÍA.....	361
ÍNDICE DE CUADROS, TABLAS, FIGURAS Y CUADROS.....	393
ANEXOS.....	401
ANEXO 1. Cuestionario sociobiográfico para las mujeres de la muestra.....	403
ANEXO 2. Ficha técnica de la entrevista a los subdirectores.....	425
ANEXO 3. Solicitud de permiso a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.....	431
ANEXO 4. Respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.....	435
ANEXO 5. Autorización de las internas.....	441





INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

El trabajo que se presenta para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Educación parte de la preocupación que supone el olvido que desde la investigación pedagógica se ha tenido de las mujeres delincuentes institucionalizadas. La marginalidad ante la que se ven expuestas las mujeres que están privadas de libertad y, especialmente las extranjeras, nos lleva a plantearnos cuál es el papel de la educación en este contexto.

Aunque la legislación española e internacional se sustenta en el principio de igualdad nos encontramos ante un sistema penitenciario pensado por y para hombres, por lo que ellas lo tienen, si cabe, más complicado. No podemos negar que la desigualdad de género está presente en las prisiones, hecho que aumenta la vulnerabilidad de estas mujeres, y aún más, cuando se une su condición de extranjeras.

La presencia de mujeres extranjeras en nuestra sociedad y, consecuentemente, en el contexto penitenciario es un fenómeno que cada vez tiene más peso, lo que ha llevado en muchas ocasiones a vincular delincuencia e inmigración, criminalizando a determinados grupos de inmigrantes. Las cárceles son un reflejo de la sociedad, por lo que el aumento de la población inmigrante en nuestro país tiene también una clara repercusión en el sistema penitenciario, como un elemento más del orden social.

Aunque cada vez es mayor la presencia de mujeres extranjeras en los centros penitenciarios, la delincuencia femenina es aún muy poco representativa, por lo que apenas se tiene en cuenta en las investigaciones que se llevan a cabo. Así, esta nueva realidad multicultural que penetra en los muros de nuestras cárceles demanda investigaciones sobre el perfil individual y social de estas mujeres y sobre la intervención socioeducativa necesaria para lograr su integración social.

La feminización de los flujos migratorios ha suscitado el interés de la investigación social hace relativamente poco, lo que explica que los pocos estudios y literatura científica sobre el tema se concentren en los últimos años. Esta realidad se maximiza al intentar analizar los estudios sobre mujeres extranjeras en centros penitenciarios, y, en muchos casos, lo que encontramos son aproximaciones parciales en buena medida carentes de rigor científico.

El alto porcentaje que representan los hombres en prisión ha traído como consecuencia que la mayor parte de los estudios científicos se hayan centrado en el análisis de la población masculina, ignorando, en muchas ocasiones, la femenina. De este modo, se produce la casi total ausencia de trabajos a nivel nacional e internacional, no sólo desde las Ciencias de la Educación sino también desde aquellas ligadas históricamente al estudio de la delincuencia.

A ello debemos unir la poca atención a la educación en este contexto a pesar de su importancia como medio para la reinserción social entendiendo que tal proceso debe iniciarse en el medio penitenciario pero que necesariamente debe culminar fuera de él. Sin embargo, la desprofesionalización de la pedagogía en estas instituciones dificulta los procedimientos de actuación.

Ante este planteamiento de partida, nos hemos propuesto analizar por un lado, la situación de las mujeres extranjeras internas en los Centros Penitenciarios de nuestro país, estudiando su perfil individual y social y su carrera delictiva, y por otro, examinar la gestión de la diversidad cultural en estos centros para poder diseñar, con criterio científico, los principios de una intervención pedagógica que atienda a su problemática y mejore sus posibilidades de reinserción.

Para lograr tamaño objetivo hemos realizado un estudio que hemos estructurado en dos partes interdependientes que recogen los seis capítulos de esta tesis.

En la primera de ellas, “Fundamentos teóricos para el análisis socioeducativo de la inmigración y la delincuencia”, construimos la base teórica para analizar, en clave educativa, la situación de las mujeres extranjeras que se encuentran en prisión en nuestro país; mientras que en la segunda, titulada “Las mujeres extranjeras en prisión: dimensión empírica del estudio”, planteamos el procedimiento que hemos seguido en la toma de contacto con la realidad penitenciaria y la presentación y análisis de datos recabados.

La primera de las partes se divide en cuatro capítulos. Bajo el título “Historia de la cárcel y del Tratamiento de la delincuencia. Una perspectiva de género”, analizamos la evolución de la prisión como institución total, y como se entiende en la actualidad. De esta forma, comenzamos con los cambios producidos a nivel europeo en cuanto a la prisión y la pena privativa de libertad para continuar con la

realidad de nuestro país, estudiando las bases del sistema penitenciario español en clave femenina para llegar hasta los diferentes dispositivos dependientes de Instituciones Penitenciarias que existen para las mujeres, sobre todo para atender su situación de madres con hijos menores de tres años. La concepción de la prisión y del tratamiento de los y las delincuentes ha ido evolucionando hacia parámetros más humanistas. Además, la mujer, al igual que en otros ámbitos sociales, privada de libertad, ha permanecido en un claro segundo plano, de forma que en este capítulo nos centraremos en analizar el tratamiento que se le ha dado a la mujer en el ámbito penitenciario.

Así, el capítulo segundo, “Delito y delincuencia: las teorías explicativas de la delincuencia femenina”, parte de la distinta consideración del delito y de la delincuencia de las mujeres. Se ha pretendido buscar respuesta al comportamiento delictivo femenino por medio de diferentes explicaciones teóricas, que, en muchos casos, se presentan como extrapolaciones del delito masculino, por lo que llevamos a cabo un análisis de los principales marcos teóricos que han intentado ofrecer una explicación continua del tema objeto de estudio. Estudiamos desde las teorías basadas en explicaciones individuales (de contenido biológico, psicoanalítico y psiquiátrico) hasta aquellas que tienen un carácter social (enfoques funcionalistas y enfoques críticos) pasando por las consideradas teorías intermedias.

Es en el tercer capítulo en donde analizamos la prisión como reflejo de la sociedad multicultural en la que vivimos. Para ello, partimos del fenómeno migratorio y, especialmente, de su feminización, para observar el papel que ha tomado la mujer en los flujos migratorios y cómo esto se proyecta en el marco penitenciario.

Además, estudiamos la invisibilidad de las mujeres que han cometido un delito, invisibilidad que se justifica por su baja presencia en las cifras oficiales y en la investigación, para analizar, posteriormente, la criminalización de la inmigración causada por la sobre representación de determinados colectivos en las prisiones. Terminamos estudiando la presencia de la mujer extranjera en nuestras cárceles, deteniéndonos en los rasgos que definen su perfil individual y social.

En el cuarto y último capítulo de esta primera parte cobra protagonismo la educación como eje del tratamiento penitenciario. Analizamos los diferentes modelos de tratamiento de la delincuencia que se han ido desarrollando y que no

hacen más que reflejar las distintas concepciones que la sociedad ha tenido del delito y del delincuente. De este modo, examinamos las bases del tratamiento teniendo en cuenta la perspectiva educativa, centrándonos en la eficacia de los programas de intervención y en la figura de los profesionales de la educación que desarrollan su trabajo en los centros penitenciarios. Justamente, uno de los programas que la investigación ha demostrado eficaz es el programa de competencia psicosocial, al que dedicaremos una parte de nuestro discurso. Este capítulo que cierra la parte teórica nos permite abordar con garantías el desarrollo de la segunda parte de nuestra investigación centrada en las mujeres extranjeras que cumplen condena en centros exclusivos para mujeres o en módulos femeninos de cárceles masculinas.

Así pues, este es nuestro objetivo en los capítulos quinto y sexto de la segunda parte. En el primero de ellos, justificamos la parte empírica de la investigación presentando el plan de trabajo que hemos seguido. Tras repasar las razones que sostienen este estudio, señalamos los objetivos que nos hemos planteado, concretando la metodología llevada a cabo. A ello le sigue la formulación del problema de investigación, las hipótesis, variables y el diseño para centrarnos en la población y la muestra con la que trabajamos, analizando sus características fundamentales. A partir de ahí, es momento de detenernos en los instrumentos que hemos diseñado y aplicado.

El segundo capítulo de esta parte, el número seis, contiene el análisis de los datos y la discusión de los resultados teniendo en cuenta a las mujeres de la muestra, mujeres extranjeras internas en los centros penitenciarios de Alcalá de Guadaíra, Brieva, Madrid I, Teixeiro, Pereiro de Aguiar, Bonxe y A Lama. Comenzamos por describir las prisiones y los módulos de mujeres desde la perspectiva de los subdirectores de tratamiento para conocer el contexto en el que se produce la intervención con estas mujeres, y después analizar e interpretar los resultados obtenidos en las distintas variables del estudio a partir del cuestionario aplicado y, realizar un análisis comparativo, estudiando la influencia que tienen determinadas variables (red de apoyo social, área geográfica, proceso migratorio y carrera delictiva) sobre las demás.

Tras este recorrido capitular, elaboramos las conclusiones que tenemos por más sustantivas del estudio realizado y que sentarán las bases de una propuesta de intervención pedagógica adaptada a la realidad analizada.

La escasa existencia de estudios, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, unido a circunstancias contextuales, son algunas de las razones que motivan nuestro interés por un ámbito tan complejo como es el penitenciario, y cuyos protagonistas son sujetos a los que es difícil acceder no solo por cuestiones administrativas sino también personales, que nos sitúan ante mujeres que desconfían de los extraños y con un bagaje vivencial duro a sus espaldas.

Para finalizar, cabe decir que, con este trabajo pretendemos contribuir, por medio de la investigación, al acercamiento a una realidad que se presenta olvidada. Corresponde pues, a la Pedagogía, constituirse como eje transformador del tratamiento penitenciario, a la vez que entendemos que las prácticas y la política penitenciaria deberían sustentarse en un modelo de tratamiento educativo-comunitario, con su epicentro situado no solo en la prisión sino también en el contexto comunitario.

Así, tratamos de contribuir, en la medida de lo posible, al desarrollo de la integración social de las mujeres extranjeras que han cometido un delito, apostando porque la educación cobre la relevancia que se merece en los diferentes contextos de la sociedad civil, donde la prisión no puede considerarse como un aparte sino como una institución de ayuda educativa.



PARTE I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO DE LA INMIGRACIÓN Y LA DELINCUENCIA



CAPÍTULO 1:

LA CÁRCEL Y EL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA. UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO



CAPÍTULO PRIMERO. LA CÁRCEL Y EL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA. UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

1.1. Introducción

Si analizamos la evolución histórica de la pena privativa de libertad podemos percatarnos del trato diferencial en función del género. Los primeros castigos impuestos a los hombres tenían fines utilitaristas, al cumplir los castigos sirviendo al Rey, mientras a las mujeres se les recluía en instituciones religiosas conforme a criterios de carácter humanitario (Martínez Galindo, 2002).

Antes de entender la pena privativa de libertad como tal, la prisión únicamente se utilizaba para custodiar a los reos hasta que se ejecutara la sentencia. Las penas tenían un carácter económico o corporal ya que la estancia en prisión no aportaba a la sociedad más que cuantiosos gastos. Son escasas las cárceles privadas en las que los condenados debían trabajar hasta saldar su deuda (Ramos, 2008).

Peña Mateos (1997) nos presenta la evolución de la pena privativa de libertad en Europa en cuatro períodos:

1. Anterior a la sanción privativa de libertad. El encierro constituye un medio para asegurar la asistencia al juicio.
2. Período de explotación. Se utiliza para realizar trabajos penosos.
3. Período correccionalista y moralizador. Encarnado en las instituciones del S. XVIII y principios del XIX, se ven mejorados los niveles de vida en los centros de reclusión.
4. Período de readaptación social o resocialización. La base es la individualización de la pena y el tratamiento penitenciario.

En este capítulo tratamos de analizar, desde una perspectiva de género, la evolución histórica de la prisión tal y como la entendemos en la actualidad. Comenzaremos, pues, por estudiar los cambios producidos en el viejo continente, para centrarnos, posteriormente, en la realidad de nuestro país. De este modo, estudiamos el sistema penitenciario español y la pena privativa de libertad en clave de género para

llegar hasta los diferentes dispositivos dependientes de Instituciones Penitenciarias que existen en la actualidad dirigidos a mujeres.

1.2. Evolución histórica de la prisión en Europa: el caso específico de las mujeres

Los antecedentes de los actuales sistemas penitenciarios son diversos. La cárcel ha cumplido funciones propias en las diferentes sociedades, funciones que responden a las prioridades de cada una de ellas.

La prisión como medida de privación de libertad difiere en función del contexto en el que la analicemos, de este modo, su evolución a nivel europeo nos permitirá entender la concepción actual en nuestra realidad más cercana. Así, en este punto, nos centramos en la transformación que se ha ido produciendo, a lo largo de la historia, en el concepto de prisión y el tratamiento del delincuente, para detenernos, especialmente, en el caso de las mujeres.

Comenzamos, pues, por presentar el panorama continental con una breve reseña a la edad antigua para llegar hasta la actualidad, donde las normas europeas cobran cada vez más importancia y donde se tiende a un sistema penitenciario unificado respetuoso y garantía, en todo caso, de los derechos humanos.

1.2.1. La prisión y la pena privativa de libertad en Europa. Breve reseña histórica

A lo largo de los años la concepción que se ha tenido de los lugares donde “retener o custodiar a personas culpables” ha ido evolucionando de forma pareja a la misma concepción del delito y del delincuente.

En la Edad Antigua, la prisión se concebía como un lugar de custodia y tormento (ver Peña Mateos, 1997). Así, en Grecia, nos encontramos con la llamada “prisión por deudas” donde se intentaba que los acusados pudiesen responder a sus acreedores y, una vez saldada, quedaban en libertad. Platón expuso la necesidad de tres tipos de cárceles, con penas diferentes aludiendo a la muerte, a la cárcel y al látigo (Alvarado, 2012):

- Una en la plaza del mercado (de custodia).

- El “sofonisterion” ubicada en la ciudad (casa de corrección).
- En un paraje sombrío y alejado de la provincia con el fin de amedrentar (casa de suplicio).

En Roma se consideraba el encierro como aseguramiento preventivo. Ya Ulpiano afirmaba “la cárcel no debe servir para el castigo de los hombres sino para su guarda” (Cervelló, 2001 p.19). De todos modos, podemos señalar excepciones como la prisión por deudas, los trabajos forzados o el *ergastulum*, donde los esclavos eran reclusos en la casa del dueño, funcionando éstas como cárceles privadas.

Durante la Edad Media, se mantiene el carácter asegurativo, para después convertirse los delincuentes en víctimas de la amputación de brazos, piernas u otras partes del cuerpo. Los penados esperaban en encierros subterráneos, calabozos o estancias de palacios y fortalezas, sin tener en cuenta su edad, sexo o delito cometido. En esta época, se imponía la cárcel en función del estamento al que pertenecía el preso, conmutándose, en algunos casos, por prestaciones. La pena de prisión estaba dirigida a los delincuentes que no habían cometido un delito con la suficiente gravedad como para ser condenados a muerte o a mutilaciones (Ramos, 2006).

Enrique II de Inglaterra ordenó construir una cárcel en Clarendon (1166), que es considerada, por diversos autores, como el más antiguo sistema de prisión para cumplimiento de pena privativa de libertad (Cuello, 1958). Además, se sitúa en esta fecha, el origen del juicio por jurados con el Decreto de Enrique II de 1166 (Decreto de Clarendon), que ordenó la reunión de los “doce hombres más leales de cada distrito condal y de los cuatro hombres más leales de cada aldea” para determinar la existencia de ladrones y asesinos en sus territorios. Esta medida se convirtió en garantía legal y los juicios con jurado comienzan a ser la norma en esta nueva prisión, denominada el Assize de Clarendon (Rojas, 1990).

Destacamos, además, las prisiones de estado y la prisión eclesiástica, dirigidas a retener a personas concretas que disfrutaban de ciertos privilegios. En las primeras, se recluía a los enemigos del poder real o señorial y adversarios políticos. En estas prisiones no se esperaba la muerte, era una detención dependiente del perdón real o señorial. Aquí sitúa García Valdés (1997) la

privación de libertad como pena autónoma. Aunque, siguiendo a Tellez (1998, p. 25), existen antecedentes de la privación de libertad como pena en el Derecho Indoeuropeo y en diferentes textos bíblicos. Las segundas (prisiones eclesiásticas) se dirigían a sacerdotes y religiosos. Recluían a los infractores para que orasen y así se corrigieran, realizaban trabajos manuales en sus celdas, considerándose, este trato, más humano que el del régimen secular.

A finales del S. XV y principios del XVI, la depresión económica provocó la emigración del campo a las ciudades, aumentando la delincuencia pero también creándose la necesidad de sustituir las crueles penas que se venían dando. En los últimos años del siglo XVI se creó la ley inglesa que autorizaba la deportación, trasladando a los presos en buques a Australia, y hasta que no se reunía un número considerable, los presos se custodiaban en los barcos con que también nacieron en este siglo las galeras, destinando a los prisioneros al servicio de galeras militares, dónde tenían que remar mientras recibían latigazos (Oliver, 2006).

Las casas de corrección (S. XVI y XVII), para albergar mendigos, prostitutas, vagos y jóvenes rebeldes, estaban dirigidas a que estos corrigieran su actitud sometiéndolos a tratamientos de reforma. Se crean en Inglaterra y Holanda y son consideradas la primera manifestación de la concepción moderna de pena privativa de libertad ya que con anterioridad se aplicaba de forma excepcional. A principios del siglo XVII su reorganización se basaba en tres principios:

- Multa de 5 libras al juez que no instalara una casa de corrección en su jurisdicción.
- Obligación de que contasen con telares, talleres y centros de manufacturas para que los internos trabajasen.
- El juez podía decidir quién sería enviado a estas casas.

En 1596 se crearon en Holanda, los Rasphuis para hombres (donde la ocupación de los internos era raspar maderas) y los Spinhuis para mujeres (su ocupación era la hilandería) y en 1603 se une una destinada a los jóvenes rebeldes que eran entregados por sus propios familiares para su reforma. Como señala García Valdés (1999) había un fondo ideológico detrás de estas instituciones. De este modo, se ocupaba a los reclusos en una actividad productiva, lo que pudo haber sido útil como un intento de reeducación, pero que tal como se planteó no

actuaba positivamente en la conformación psico-social del individuo. Este modelo se extendió rápidamente a otros países europeos.

A finales del S. XVII, el sacerdote Filippo Franci funda en Florencia el Hospicio de San Felipe Neri, basado en un régimen de aislamiento absoluto. Si los internos participaban en algún acto público llevaban la cabeza cubierta con un capuchón tratando de evitar todo tipo de contacto y de contagio criminógeno (Leganés, 2004).

Durante los siglos XVI y XVII la mayor parte de los países veían el encierro como una oportunidad para obtener mano de obra para trabajos forzosos. Sin embargo, no es este el caso de Suiza, que funda la “Schellenwerke”, cuyo principal objetivo es proporcionar a los presos un trabajo útil.

En el S. XVIII podemos hablar de la construcción del hospicio de San Michele en Roma (Italia) y la prisión de Gante (Bélgica), lugares contruidos específicamente para servir de prisión. El primero, erigido por Clemente XI para delincuentes jóvenes, fue diseñado de tal forma que fuera posible conciliar la separación nocturna de los presos y el trabajo en común diurno, como veremos más adelante, estas premisas se tomarán en consideración en el Sistema de Auburn. En Gante, Jean Jacques Philippe Vilain, burgomaestre de la ciudad, funda *La Maison de force*. En esta prisión, los pisos se encontraban rodeados de una hilera de celdas, dormitorios, comedores, salas, almacenes y talleres en los que los presos podían trabajar.

En esta época, siguiendo a Tamarit (2001) destacamos diferentes avances que influyen claramente en las penas privativas de libertad:

- Las nuevas ideas de la Ilustración presentan la libertad individual como el bien máspreciado del hombre.
- La prisión se concibe como sistema público.
- Comienza a adecuarse la proporcionalidad de la pena en relación al delito cometido.
- El sistema capitalista influye en el trabajo penitenciario, obteniendo beneficios gracias a la barata mano de obra.

- El arrepentimiento, que predica el cristianismo, se puede hacer efectivo gracias a las penas de privación de libertad.

Podemos referirnos en este momento a centros destacables como la Bastilla de París, cárcel para la nobleza en la revolución francesa; la Torre de Temple, también en París, como palacio de los templarios; o la Torre de Londres, que con anterioridad había servido como palacio y servirá para el encarcelamiento de grupos marginados a finales del S. XVI por medio de las *poor laws* isabelinas, origen de la *House of correction of Bridewell*. Almeda (2002) señala que estas casas de corrección se encontraban a medio camino entre el medio penitenciario y las actividades asistenciales o benéficas.

La obra de Cesare Beccaria, escrita en 1764, supone una gran influencia para el sistema penal ya que realiza el tratado fundacional del Derecho Penal. En su obra “De los delitos y de las penas” propone principios como racionalidad, legalidad, publicidad, igualdad y proporcionalidad de las sanciones y menor severidad (Beccaria, 1984), trataba de buscar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En 1766 Catalina II de Rusia lo contrata y elabora diferentes reformas penales, y, diez años después, María Teresa de Austria, influida por el jurista, procede a la abolición de la tortura.

John Howard, en su obra “The state of prisons in England and Wales” (1777), proponía mejorar la calidad de vida de las cárceles por medio de: aislamiento sólo nocturno, trabajo obligatorio para los condenados y voluntario para los preventivos, instrucción moral y religiosa, buena higiene, separación de los acusados de los penados y, separación de mujeres y hombres. Dividía a los reclusos en acusados (cárcel como lugar de seguridad), convictos (debían ser castigados), y deudores (simple reclusión por impago). Se le considera como la persona que más ha influido en el sistema penitenciario actual, así como en el progreso y humanización de las prisiones. Utilizó por primera vez la palabra “penitenciaría” entendida como establecimiento destinado a la reclusión de sujetos penados a un régimen expiatorio que, a la vez, trata de regenerarlos; creándose así, la corriente denominada “penitenciarismo” basada en el aislamiento, trabajo e instrucción en prisión y el cambio del castigo por la pena (Sánchez Sánchez, 2013).

Otra figura destacable en el sistema penitenciario europeo es Jeremy Bentham, autor del “Panóptico” donde explica cómo debe ser una cárcel en cuanto a su arquitectura, propone una planta semicircular donde los internos estarían expuestos a la mirada de los guardianes en un edificio de varios pisos y un vigilante en el centro que controlaba a todos los reclusos sin ser visto, además, también hace aportaciones a nivel económico y jurídico. Este modelo dará lugar al sistema celular o filadélfico (González Parra, 1997).

Por otro lado, las influencias americanas fueron notables en el sistema penitenciario europeo, por lo que, de cara a entender esta evolución, cabe destacar:

- El Sistema Filadélfico, Pensilvánico o Celular. Nace en 1776 en las colonias británicas de América del Norte y fue muy bien acogido en Europa. Este sistema evita el trabajo y las visitas, exceptuando el director, el maestro, el capellán y miembros de las sociedades filantrópicas. Siguiendo a Fernández García (2010), este sistema está considerado como el primer sistema celular de la historia penitenciaria moderna y sus características principales serían el aislamiento diurno y nocturno durante toda la condena, con la única interrupción permitida para dar un pequeño paseo al aire libre y en silencio; ociosidad casi total ya que se pensaba que el trabajo podía distraer a los reclusos, aunque progresivamente se fueron instaurando trabajos simples en la propia celda; higiene y alimentación adecuada; se permitía la biblia como única lectura, y el orden y la disciplina eran corregidos severamente.

- El Sistema de Auburn o mixto. Surge en Nueva York en 1823 y centra el día a día en prisión en el aislamiento celular nocturno y durante el día vida en común y trabajo, la obligatoriedad del silencio absoluto, ausencia de visitas, castigos corporales, y, enseñanzas de gramática y aritmética, mientras que la enseñanza profesional estaba prohibida para evitar la competencia a los trabajadores del exterior (Mir, 2012). Suponía una ruptura con la monotonía del sistema filadélfico pero eran constantes los castigos corporales.

- El Sistema Progresivo Inglés (1853). Supone la abolición de la deportación a Australia y es un sistema gradual en tres períodos (prisión celular rigurosa durante nueve meses, trabajo en común y libertad condicional). Este Sistema, con pequeñas modificaciones, se implanta en países como Irlanda, donde

el director de prisiones, Walter Crofton, introduce un período previo a la libertad condicional, influyendo en Italia, Noruega y Rumanía.

Obermayer experimentó dicho sistema en Alemania (1842) dividiendo la pena en 3 períodos: primero vida en común pero absoluto silencio; posteriormente en función de la primera etapa, se le incluía en un grupo; y la libertad anticipada gracias al trabajo y buena conducta.

Este Sistema se introduce en España por el Coronel Montesinos, centrándose en la persona y no en el delito e inspirándose en una ideología reformadora y humanista. Las penas se dividían en tres etapas; de hierros (trabajos sujetos a las cadenas), de trabajo (ocupación en función de sus capacidades) y libertad intermediaria.

- El Sistema Reformador. Nace en 1876 en Elmira (Norteamérica) y en Borstal (Inglaterra), dirigido a internos entre 16 y 30 años con una sentencia indeterminada y basada en la prevención especial. Su principal objetivo era reformar y corregir a los delincuentes jóvenes.

El de Elmira, dirigido por Brockway, destaca porque la pena dependía de la mayor o menor consecución de los objetivos de reforma del penado y los métodos de reforma se basaban en la cultura física, la formación profesional, la enseñanza religiosa, la instrucción cultural y la aplicación de severa disciplina para los infractores de las normas (Fernández Arévalo y Nistal, 2012).

Por su parte, el Sistema de Borstal, con características similares al de Elmira, constaba de cuatro grados en los que la libertad de la que disfruta el penado es proporcional a la consecución progresiva de estos períodos: el primero de ellos es el Grado Ordinario, orientado a la observación con trabajo en común diurno e instrucción nocturna; el segundo se corresponde con el Grado Intermedio, dividido en dos secciones, permitiéndose en la primera reuniones los sábados y prácticas de juego en espacios cerrados y en la segunda instrucción profesional y juegos a aire libre; el tercer Grado se denomina Probatorio y permite jugar en el interior y exterior del establecimiento, leer la prensa y recibir una carta cada quince días; y, por último, estaría el Grado Especial, en el que el trabajo se lleva a cabo sin vigilancia directa, y puede recibir una carta y una visita a la semana.

A principios del S. XIX, se creía en el delincuente nato. Lombroso, principal defensor de esta teoría, basándose en variables bioantropológicas, que explicaremos con detenimiento posteriormente, concluía que los delincuentes eran seres biológicamente anormales; peor es el caso de las mujeres, que se convirtieron en seres evolutivamente inferiores, de un lado, por su menor capacidad para delinquir y, de otro, por su mayor crueldad en la comisión de los delitos, relacionada con, en palabras de este autor en su obra “La donna delincuente” de 1903, un espíritu frío, rencoroso, malvado y primitivo, que solo se predicaba de la mujer (Alvarado, 2012). Estas teorías influirían en los Sistemas Penitenciarios de toda Europa. A este autor le siguen férreamente otros como Ferri y Garofalo, quienes marcan un tratamiento dirigido a la personalidad de delincuente y no a la gravedad del delito.

Con el ocaso del siglo XIX, empieza a verse la necesidad de centrarse con un mayor ahínco en temas penitenciarios, hecho que supone la celebración de los Congresos penitenciarios a nivel internacional dedicados a abordar el estudio de aquellos aspectos de la práctica penitenciaria necesitados de mayor atención. Aunque en Frankfurt y Bruselas ya se habían celebrado Congresos en este ámbito a mediados de siglo, comienzan a producirse, con carácter oficial y continuado los Congresos Internacionales Penitenciarios en 1872¹, y es a partir de 1930 cuando se celebran bajo una nueva denominación: Congresos Internacionales Penales y Penitenciarios². Además, desde 1955 se celebran, cada cinco años, Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrándose el primero en Ginebra.

Sin embargo, para comprender los sistemas penitenciarios en Europa y por tanto el español es necesario hacer referencia a toda la normativa internacional que a lo largo del siglo XX se ha ido promulgando. Así, cabe destacar a nivel europeo, la Recomendación (2006) del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, la Recomendación CM/Rec (2012) 5 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre el Código Deontológico

¹ Estocolmo (1878), Londres (1872 y 1925), Roma (1885), San Petersburgo (1890), París (1895), Bruselas (1890), Budapest (1905) y Washington (1910). (Shafir, 2014).

² Praga (1930), Berlín (1935) y La Haya (1950).

Europeo para el Personal Penitenciario; así como la amplia normativa de las Naciones Unidas (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

Normativa de Naciones Unidas sobre Delincuencia

Normas Básicas	<ul style="list-style-type: none"> - Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
Normas sobre el Tratamiento de los Reclusos	<ul style="list-style-type: none"> - Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) - Procedimientos para la aplicación efectiva de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (1984) - Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988) - Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990)
Normas sobre Menores	<ul style="list-style-type: none"> - Reglas Mínimas sobre administración de justicia a menores (1985) - Convención sobre los Derechos del Niño (1989) - Reglas para la protección de los menores privados de libertad (1990)
Normas sobre medidas alternativas a la prisión y justicia restaurativa	<ul style="list-style-type: none"> - Reglas mínimas sobre medidas no privativas de libertad o “Reglas de Tokio” (1990) - Declaración de Kadoma sobre el Servicio a la Comunidad (1997) - Principios Básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal (2002)
Normas sobre tortura y trato o penas crueles, inhumanas o degradantes	<ul style="list-style-type: none"> - Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o penas Cruels, Inhumanos o Degradantes (1975) - Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud (1982) - Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1987)
Normas sobre la pena de muerte	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución 2857 sobre la pena capital (1971) - resoluciones del Consejo Económico y Social salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte y su aplicación (1984) - Principios relativos a una eficaz prevención de investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (1989) - Resolución de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Pena Capital (2003)

Fuente: Elaboración propia

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por Naciones Unidas en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en 1957, son la base para el trabajo con las personas sometidas a penas privativas de libertad. En ellas se especifica que en caso de encontrarse en el mismo establecimiento hombres y mujeres, deberán disponer de locales completamente separados. Además, se recomienda la existencia de instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes; y, hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. En esta misma línea, si se permite a las madres reclusas conservar a su hijo, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal cualificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. Por otro lado, en los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, sin poder, ningún funcionario del sexo masculino penetrar en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal, encargándose, la funcionaria, de la vigilancia de las reclusas. Sin embargo, se matiza que esto no excluirá que funcionarios, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres.

Además, el Consejo de Europa representa un papel fundamental en nuestro contexto, ya que, en 1973 se adoptan las Reglas Mínimas Europeas para el Tratamiento de los Reclusos adaptadas a las de las Naciones Unidas, revisándose en 1987 y en 2006 con el objetivo de armonizar las políticas penitenciarias de los estados miembros y procurando la adopción de prácticas comunes.

Las normas penitenciarias europeas³ hacen referencia específica a las mujeres en una serie de aspectos. Así, la Norma 19.7 garantiza el acceso a productos de higiene femenina así como la previsión de que las que estén embarazadas o que amamenten a un hijo se puedan duchar más de dos veces por semana; la Norma 26.4 señala que las mujeres tengan acceso a todo tipo de ocupaciones y no se limiten a los trabajos tradicionalmente considerados como del

³ Rec (2006) del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre las Normas Penitenciarias Europeas (adoptada por la Comisión de Ministros de 11 de enero de 2006, durante la 952 Reunión de los Delegados de los Ministros).

ámbito femenino; además, la Norma 34, se ocupa del hecho de que las reclusas constituyen una minoría en el sistema penitenciario, lo que conlleva una fácil discriminación, no se limita a prohibir la discriminación negativa sino que también alerta a las autoridades ante el hecho de que es preciso que adopten medidas positivas a este respecto. Estas medidas positivas deben reconocer, por ejemplo, que debido a su número reducido, al estar relativamente aisladas, se pueden encontrar en una situación desfavorable y que, por lo tanto, es preciso diseñar estrategias para abordar este aislamiento. En la Norma 46 se recomienda que en la planificación de la asistencia especializada se debería prestar particular atención a las necesidades de los grupos vulnerables, constituidos especialmente por mujeres y reclusos en edad avanzada.

Con la Ley Sueca Penitenciaria de 1974, y después de la publicación un año antes de las Reglas Mínimas del Consejo de Europa para el tratamiento de reclusos, se produce una verdadera revolución en materia penitenciaria a nivel europeo. Esta Ley influye en países como Italia, que publica la ley penitenciaria de 1975, Alemania con la ley de Ejecución Penal en 1976, Portugal con su Real Decreto de 1979, y mismo España con la Constitución de 1978 (García Valdés, 1982).

En relación a las normas relativas a mujeres, no existen grandes diferencias entre otros países del continente europeo y España. Así, siguiendo a Cervelló (2006) podemos resaltar lo siguiente:

- En el caso de Alemania, en cuanto a la separación de establecimientos por sexos (art.140 Ley de ejecución de penas de 1976) se contemplan establecimientos especiales separados y, excepcionalmente, departamentos separados en establecimientos de hombres. En todo caso, coincidiendo con la citada autora, tras el inicial compromiso de centros específicos para mujeres, se preveía siempre la posibilidad de compartir los de los hombres con absoluta separación.

- En relación a la compañía de hijos menores, la edad hasta la que suelen estar los menores con sus madres es muy variada ya que mientras en Europa es baja (Francia dieciocho meses; Irlanda y Dinamarca un año; Grecia y Suiza dos años; España, Italia y Portugal tres años; en Inglaterra tres años en centros abiertos y 9 meses en centros cerrados) en países como Canadá pueden llegar hasta 5 años.

Aun no siendo este el mejor contexto educativo para un niño, bien es cierto que diferentes estudios nos muestran que el desarrollo físico y social de los niños que pasan sus primeros años en prisión no presenta diferencias significativas con otros que no viven en estos contextos (Giménez, 1989; Catan, 1988 y 1992; Palacios y Jiménez, 1998; Jiménez, 2004).

- En cuanto a la situación de las mujeres embarazadas o con niños pequeños, que tienen que cumplir penas de corta duración, diferentes países contemplan la posibilidad de ofrecer otras alternativas. Destacamos como ejemplo el caso de Italia, donde se recogen tres figuras diferentes para aplazar el ingreso de las madres en prisión:

a) El art. 146 del Código Penal de 1990, modificado por Ley de 8 de Marzo de 2001 establece la suspensión obligatoria de cualquier pena, menos pecuniaria, para las mujeres encinta y madres de niños menores de un año. Se trata de una medida de protección dirigida especialmente hacia el menor ya que no opera o se revoca si el embarazo se interrumpe, se retira la potestad de la madre sobre el hijo, el hijo muere, se abandona o se entrega a otras personas. Esta suspensión se concede por un tiempo determinado, por eso si no se adjudica una nueva concesión (prórroga) se ordena la ejecución, salvo que el juez ordene la liberación por los perjuicios que pueda provocar el encarcelamiento.

b) En el art. 147 del Código Penal se permite la suspensión facultativa de las penas restrictivas de libertad, a las madres con hijos menores de tres años. En su concesión el tribunal ha de valorar las posibilidades de medidas alternativas (por ejemplo la detención domiciliaria que parte de los mismos presupuestos) y la idoneidad para alcanzar los fines previstos en el Ordenamiento, ya que en supuestos de peligrosidad o probabilidad de delinquir no se debe conceder o se debe revocar. Además, también en este caso se recoge la posibilidad de revocación del supuesto anterior, lo que la convierte en figura residual para los casos en los que el niño sólo puede estar con la madre, pues si deja de estar con ella, no se concede o se revoca.

c) Por su parte, el art. 47 del Ordenamiento Penitenciario, modificado por la Ley 27 de Mayo de 1998, permite la detención domiciliaria, en lugar de penas de reclusión hasta cuatro años, aunque sea parte residual de mayor pena, de mujeres encinta o con hijos menores de diez años que convivan con ellas. Este precepto ha

sufrido varios recursos de legitimidad constitucional. Uno de ellos, en virtud de la sentencia de 13 abril 1990 de la Corte Constitucional, provocó su reforma para ampliarse a los padres cuando ejerzan la potestad de sus hijos menores de diez años que con él convivan, por absoluta imposibilidad de la madre de prestarla, en atención al principio constitucional de protección a la infancia que no permite sustraer el derecho del menor a estar con el padre cuando no sea posible hacerlo con la madre. La Ley de 8 de marzo de 2001 introdujo la detención domiciliaria especial en el art.47, como supuesto residual, cuando no se dan los requisitos del anterior, para madres con hijos menores de diez años que puedan restablecer la convivencia con sus hijos a través de este beneficio, después de cumplir un tercio de la pena o quince años de la cadena perpetua, siempre que no haya peligro de comisión de futuros delitos. Vemos así, que la legislación penal y penitenciaria italiana supone una prueba de protección a la infancia y al vínculo familiar.

Los establecimientos penitenciarios de los diferentes países de la Unión Europea comportan similitudes y diferencias con el Sistema español (Becerra, 2012).

Así, en Francia, la Dirección de la Administración Penitenciaria, dependiente del Ministerio de Justicia es la que se encarga de la gestión de las prisiones; estableciéndose cuatro tipos de centros específicos:

- a) Maison d'arrêt (MA) – Prisiones de Distrito. Preventivos y penados con condenas inferiores a dos años
- b) Establecimientos para penados
 - Centros penitenciarios
 - Centros de Detención. Internos con buenas perspectivas de reinserción
 - Maison centrale. Mayores medidas de seguridad
 - Centros autónomos en régimen de semilibertad
- c) Establecimientos para menores
- d) Establecimientos sanitarios

Por su parte, en Bélgica, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente también del Ministerio de Justicia, gestiona los diferentes dispositivos en esta materia y distingue entre cinco tipos de centros:

- a) Centros abiertos. Los internos aceptan unas normas de comportamiento voluntariamente
- b) Centros de semi-libertad. Se permite la salida durante el día para trabajar
- c) Centros cerrados
- d) Centros para menores
- e) Centros de defensa social. Destinado a internos en tratamiento psiquiátrico

Otro ejemplo es Holanda, en donde la Agencia Nacional de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, establece los siguientes centros:

- a) Centros Penitenciarios. Adultos condenados
- b) Centros de reclusión de menores. Entre los 12 y los 23 años
- c) Centros de psiquiatría forense. Internos con problemas psiquiátricos
- d) Centros de detención y deportación. Prisión preventiva y personas en situación irregular

1.3. El Sistema penitenciario español en clave femenina. De las galeras a las unidades de madres

Es el momento de centrarnos en el Sistema Penitenciario de nuestro país teniendo en cuenta el género. El colectivo femenino, como hemos visto en el marco europeo, conforma una realidad autónoma paralela al masculino.

La historia de las mujeres en las prisiones españolas se explica, en buena medida, por la propia historia de las mujeres en la sociedad del país. La mujer ha estado durante un largo período en un segundo plano y esto se refleja en el Sistema Penitenciario que se ha caracterizado por presentar un manifiesto olvido hacia este colectivo. Aunque la situación ha presentado mejoras, las mujeres reclusas, todavía hoy, en su mayoría, cumplen condena en centros pensados por y para hombres.

Concretamente, en este apartado vamos a analizar la evolución de la pena privativa de libertad en el caso de las mujeres, deteniéndonos en los distintos dispositivos con los que cuenta el sistema penitenciario español para las mujeres que son condenadas a penas privativas de libertad.

1.3.1. La pena privativa de libertad para las mujeres en España antes de la Ley Orgánica General Penitenciaria (1979)

Los primeros antecedentes de la prisión femenina en España fueron los llamados monasterios, las casas de arrepentidas o las cárceles públicas del común. Los monasterios o conventos estaban dirigidos a aquellas mujeres nobles que habían cometido algún “desliz”, sobre todo si estaba relacionado con la “moral sexual”. No tendrían la misma suerte las mujeres de mala vida, quienes solían recibir otro tipo de sanciones como la vergüenza pública, la pena de azotes o flagelación y pena de muerte en la horca o en la hoguera en función del delito cometido (Ramos y Blázquez, 2011).

De todos modos, en la Baja Edad Media, las mujeres se contemplaban en los ordenamientos jurídicos más como víctimas que como delincuentes, ya que los delitos “propios” de mujeres eran considerados como un “mal menor”. Esta orientación cambia a partir del Concilio de Trento, con la Contrarreforma católica como defensora de la moralidad como único camino para llegar a Cristo y con la persecución de delitos como la prostitución.

El fin utilitario y represivo que se imponía castigando a los hombres remando en las Galeras del Rey o a la realización de trabajos forzados en las minas donde eran recluidos no se extendió a las mujeres ya que, en palabras de Martínez Galindo (2002), se consideraba que eran incapaces de realizar tareas que suponían tal esfuerzo físico.

Las primeras casas de arrepentidas o casas de recogidas, primeramente apoyadas por la Compañía de Jesús (tanto en nuestro país como en el resto de Europa), albergaban a mujeres que quisieran apartarse de la mala vida de forma voluntaria. En España se crearon en prácticamente todas las grandes ciudades, pero la primera sería la Casa de Arrepentidas de Valladolid o Colegio Santa Isabel, fundada y dirigida por Sor Magdalena de San Jerónimo (García Valdés, 1999).

Si bien es cierto que ya se contaba con antecedentes históricos de la necesidad de creación de una cárcel de mujeres, es Sor Magdalena quien, inspirada en Pérez de

Herrera (médico militar y autor del plan general de amparo de pobres 1592-1595), diseña el proyecto y convence al Rey Felipe III, para crear la primera cárcel de mujeres en Madrid.

A principios del siglo XVII se crearon estos establecimientos llamados Galeras para Mujeres o Casas-Galeras (las dos primeras en Madrid y Valladolid en 1608) pensados exclusivamente para mujeres que, a diferencia de las de hombres, no tenían un fin utilitarista, sino que estaban destinadas a “corregir” sus comportamientos, influidas, en todo momento, por la religión. Al considerarse seres más débiles, no se les responsabilizaba plenamente de los delitos, de forma que tenían más posibilidades de “reeducación”. Sin embargo, Sor Magdalena, propone establecer un régimen penitenciario que iguale a la mujer con el hombre en la imposición del castigo y modo de cumplirlo, aunque seguirán manteniéndose caracteres diferenciadores (Barbeito, 1991).

Una vez creados estos establecimientos en las ciudades, era responsabilidad de la Justicia, según San Jerónimo, perseguir a estas mujeres tras dictar el siguiente pregón (Barbeito, 1991, p.83):

Que ninguna mujer se atreva a andar vagando, ni ociosa, ni estar sin amo; porque, la que así se topare será llevada a la galera y castigada conforme lo mereciese, y para que venga a noticia de todas y busquen amo a quien servir se les da término seis días.

Las Casas-Galeras de Madrid y Valladolid y luego las de Granada, Zaragoza, Salamanca y Valencia estaban dirigidas a mujeres “indóciles sujetas a la corrección por parte de los maridos o padres”; es decir, aquellas que infringían los cánones morales y religiosos establecidos (por delincuentes, prostitutas, vagabundas, etc.) (Serrano Tárraga, 2010, p. 484).

Es el 10 de febrero de 1623 cuando el nuevo monarca, Felipe IV, dicta el Decreto de Cierre de las mancebías, prohibiendo, a su vez, toda forma de prostitución, hecho que supone un gran impulso a la creación de estos establecimientos, aumentando exponencialmente el número de mujeres que debían ser destinadas a estas instituciones.

Tal como señala García Valdés (1999, p.37), el fin de la galera no es reformador sino duramente represivo; mitad presidio, mitad casa de corrección. Las mismas reglas

fundacionales no dejan lugar a la ambigüedad “están destinados para las mujeres que ahora andan vagando, y andan ya perdidas y es necesario el castigo y el vigor”.

El referido autor ensalza ya en el siglo XVIII la Casa de Corrección de San Fernando del Jarama de Madrid, creada por Olavide en 1766 para 300 hombres y 500 mujeres, destinada a la reforma de mendigos y pequeños delincuentes de ambos sexos pretendiendo tener una función de recuperación y utilidad para la sociedad mediante un régimen moderado, institución que Howard visitó en su periplo europeo y de la que hace un buen elogio. En ella se seguían los principios de separación interior por sexos, buena higiene y alimentación, asistencia religiosa y médica y trabajo penitenciario.

En el año 1776, el Ministro Manuel de Roda, bajo el reinado de Carlos III, encarga un informe al Consejo de Castilla sobre el estado de las prisiones, llegando éste a la conclusión de que la situación penitenciaria era muy grave y requería de una reforma (Bermejo, 1986). Sin embargo, no es hasta 1811 cuando en las Cortes de Cádiz se publica el primer Decreto de abolición de la tortura y los apremios en las cárceles.

Cabe señalar como acontecimiento importante en esta misma época, la proclamación de las Ordenanzas de la Casa Galera de Valladolid, que presentan un enfoque de corte claramente humanitario que se convierte en referencia para las Casas Galera existentes en todo el territorio nacional (Martínez Galindo, 2002). Contemplan la separación de las reclusas en función del delito cometido; de este modo, aquellas mujeres consideradas vagabundas, prostitutas o delincuentes menores, eran enviadas a Hospicios, Casas de Recogidas o Casas de Corrección, mientras que las que habían cometido un delito grave ingresaban en las Galeras. Así, en esta etapa, denominada por varios autores como “la judicial” (Yagüe, 2006a), comienza a primar ese carácter de justicia ante la religión o la moralidad, aunque la herramienta fundamental para sancionar continúe siendo la educación religiosa y moral.

La Galera de Madrid fue el principal objeto de la Real Asociación de Señoras, destinada a amparar a las presas pobres en las cárceles y que, con un carácter asistencial, se encargaban de enseñar las labores “propias de su sexo”. Esta Asociación crea, por un lado, las “salas de reservadas” para mujeres que no eran delincuentes habituales pero que se habían quedado embarazadas de forma deshonesto, con lo que las ocultaban para preservar su fama y protegían a los bebés; y, por otro lado, las “salas de corrección” dirigidas a jóvenes entre 10 y 16 años que estaban empezando a extraviarse. Tal éxito tuvo esta Asociación, que un año después de crearse en 1787, Carlos III la

financió con cuantiosas cifras de reales para asegurar su buen funcionamiento. Se crearon también Asociaciones de Señoras en Valencia y Zaragoza tratando de imitar a la madrileña pero en 1808, tras la entrada del gobierno napoleónico en Madrid, se suspenden todas las actividades (Salillas, 1918).

Es en estos tiempos, cuando se aprueba la Ordenanza de Presidios Arsenales de 20 de mayo de 1804, considerada la primera ley penitenciaria española pero dirigida, toda ella al colectivo masculino (Burgos, 1996).

En 1847, con el Real Decreto de 9 de junio, se publica el Reglamento para las Casas de Corrección de mujeres del Reino, en donde se perfila la jurisdicción de las mismas, ya que, con anterioridad, la Ordenanza General de Presidios del Reino de 14 de abril de 1834, no se pronunciaba con respecto a las Casas-Galeras. Este Reglamento centraliza las Casas de Corrección de toda España en la Dirección General de Presidios del Ministerio de la Gobernación, con el objeto de unificar el régimen, el gobierno y la administración de los establecimientos de reclusión tanto femeninos como masculinos (García Valdés, 1999).

Es importante señalar que la Sociedad Filantrópica, fundada en 1839 por Ramón de la Sagra para la mejora del sistema carcelario, correccional y penal de España (Ramos y Blázquez, 2011) logra la clasificación de los reos por sexos y por edades, inspirando el Reglamento de 1847 que hemos citado, imponiéndose también en la posterior Ley de Prisiones de 26 de julio de 1849. Este Reglamento supuso la construcción teórica de nuestro sistema carcelario ya que regulaba desde los empleados, edificios, alimentación y vestuario hasta el régimen interior, disciplinario y económico.

Cada Casa de Corrección tendría un Rector de la clase sacerdotal, quien se encargaría de la educación moral y de la seguridad y el orden; y una o dos inspectoras, en función del número de internas. También se contemplaba la figura de celadora y ayudante, quienes apoyarían a las inspectoras. Serían las propias internas las que escogerían a aquellas mujeres más aptas para desempeñar esta labor de las que reunieran una serie de requisitos, tales como llevar extinguida la mitad de su condena sin haber reincidido, haber presentado pruebas de arrepentimiento y tener disposición para desempeñar estos cargos (Rodríguez López y Bravo, 2010).

El Reglamento también establece la obligación de que se construyan Casas de Corrección en 13 puntos de España y, si fuese necesario, hasta 15.

Los artículos del 50 al 53 estructuraban las jornadas en un sistema de trabajo común durante el día y aislamiento en los dormitorios por la noche; la buena conducta, el aprendizaje y el trabajo conllevaban un régimen de premios o, en caso contrario, de castigos por medio de represiones, mayor número de horas de trabajo, etc...

Por otra parte, clasificaban a las penadas (art. 45) en tres clases, penadas con retención, incorregibles y aquellas que no estuviesen comprendidas en los dos anteriores grupos.

Este Reglamento continuaría vigente hasta la progresiva desaparición de estos centros al optarse por la centralización, a finales del siglo XIX, momento en el que ya se había puesto en funcionamiento el nuevo proyecto penitenciario: la penitenciaría de mujeres de Alcalá de Henares (1863) (Ramos y Blázquez, 2011).

La Instrucción de 21 de mayo de 1877 y el Real Decreto de 1 de septiembre de 1879 establecen una nueva clasificación de los centros penitenciarios, convirtiendo a Alcalá de Henares en la prisión central de mujeres destinada a aquellas que hubieran cometido delitos mayores.

No podemos dejar de referirnos, en estos momentos, a Concepción Arenal, principal representante del Correccionalismo como doctrina penal. Fue, entre los años 1863 y 1865, Visitadora General de las Prisiones de Mujeres del Reino y sus escritos han servido de base para la Reforma del Sistema Penitenciario de nuestro país, convirtiéndose, además, en parte activa de la comisión encargada de elaborar la reforma penitenciaria y el Código Penal de 1870, desde donde luchó nuevamente por la igualdad de género. Con sus palabras se define como firme defensora de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como podemos ver, por ejemplo, en la siguiente cita:

Lo que hemos dicho respecto al hombre penado nos parece aplicable a la mujer, teniendo por un error, en la prisión como fuera de ella, establecer entre el espíritu del hombre y el de la mujer diferencias esenciales, cuando las que existen (en los casos en que existen) son, no de calidad, sino de cantidad (Arenal, 1899, p. 207).

Entre las principales obras de Concepción Arenal en materia penitenciaria podemos destacar *Cartas a los delincuentes* en donde la autora plantea la necesidad de que las leyes sean conocidas por las personas a las que se le van a aplicar; señala que las leyes se promulgan para aquellos que las aplicarán sin que las conozcan aquellos a los

que han de ser aplicadas (Arenal, 1865). Por su parte, esta autora realiza una serie de propuestas para la “necesaria” reforma penitenciaria. De este modo, propone la reducción de la prisión preventiva, la construcción de prisiones celulares y que se aisle a los penados por la noche; también apunta que se cree un puesto facultativo de prisiones y desaparezcan los “hierros”, todo ello entre otras muchas cuestiones relacionadas con la humanización de estos centros (Arenal, 1877).

Con fecha de 28 de septiembre de 1880 se firmó el convenio para la instalación en la Penitenciaría de Mujeres de Alcalá de Henares, de las Hijas de la Caridad, materializándose su llegada a principios de 1881. Ellas se encargarían de la educación moral de las internas, la dirección de la escuela y la enfermería. Además, comenzaron a educar a los hijos de las reclusas que tenían entre 3 y 7 años en lugares apartados aunque dentro de la penitenciaría, habilitándose el “pabellón de párvulos” dentro del centro. Encargar la gestión de esta Penitenciaría a las Hijas de la Caridad se establece como una muestra más de la influencia religiosa que continúa presente en este contexto. De todos modos, además de la instrucción moral y religiosa, esta congregación abogaba por dotar a las reclusas de educación primaria y nociones científicas o artísticas relacionadas con el ejercicio de alguna profesión con la intención de mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad (Salillas, 1888).

No es hasta el 31 de enero de 1882 cuando se publica el nuevo Reglamento de Régimen Interior de esta penitenciaría, que seguiría vigente hasta 1933. Este Reglamento señala como objetivo de la penitenciaría la corrección y moralización de aquellas que por fallo de los Tribunales han sido condenadas a sufrir las penas que el código señala, desde la prisión correccional a la reclusión perpetua.

Se instala el sistema celular mixto o Sistema de Auburn, de trabajo común durante el día y separación individual durante la noche. En cuanto al tipo de trabajo que desempeñaban, se trataba de nuevo de labores “propias de mujeres”, como coser, cocinar o lavar la ropa.

En relación a los hijos, podían quedarse en el centro hasta los 7 años, siempre y cuando no tuvieran padre ni abuelos y careciesen de bienes a cargo de tutores.

Por Real Decreto de 3 de junio de 1903 se traslada la Prisión Correccional de mujeres a Madrid, hasta 1918, año en el que se terminó la construcción de la nueva prisión.

A principios de este siglo, las influencias del positivismo de César Lombroso eran claras, de modo que el rechazo legal y social era cada vez mayor hacia este colectivo. Frente a ello surgieron corrientes antipositivistas que dieron lugar a la reforma penal en la segunda mitad de siglo. En nuestro país se impulsaría la Escuela Correccionalista (Quisbert, 2008) con su origen en la filosofía krausista, que apoyaba que todo delincuente era corregible, de modo que este debería ser el principal objetivo de la pena.

En 1913 con el Real Decreto de Organización del Personal de Prisiones y Régimen de funcionamiento de 5 de mayo, se reconoce la nueva composición del cuerpo de prisiones, de carácter civil. En él se hace referencia expresa a la Prisión de mujeres de Alcalá de Henares, como única en su clase, así como a las prisiones correccionales destinadas a mujeres presas por delitos menores. De este modo, las penitenciarias de hombres y de mujeres comenzaron a compartir un mismo documento legal que fue considerado un verdadero código penitenciario.

Continuaba teniendo mucho peso la congregación de las Hijas de la Caridad, hecho que en la II República y con la llegada de Victoria Kent empezó a ser objeto de crítica.

No podemos continuar sin reconocer la importante labor realizada por Victoria Kent, que se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Directora General de Prisiones tratando de dar mayor importancia a la prevención especial de la rehabilitación que al castigo retributivo. El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1930, elaborado siendo ella Directora, trató, en última instancia, de humanizar la ejecución de la pena, llevando a cabo una serie de reformas tales como el reconocimiento de la libertad de conciencia de los reclusos, el derecho a recibir prensa del exterior, mejora de la alimentación o la desaparición de los grilletes, hierros y cadenas (García Valdés, 1985). Este material sería depositado en la Prisión Celular de Madrid para ser examinado por el Director del Museo Penitenciario para salvar las piezas que fuese posible y, con el resto, ordenó hacer un busto a Concepción Arenal (Telo, 1995). Todas estas reformas estaban dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los reclusos y reclusas, garantizar sus derechos básicos, y aumentar la formación de los responsables de prisión, abogando, en todo momento, por la igualdad de género, siguiendo los pasos de Concepción Arenal.

La labor de las Hijas de la Caridad fue sustituida por la Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones, como cuerpo civil especializado convocado por concurso público. A este concurso podrían presentarse mujeres de entre 27 y 45 años con ciertos conocimientos previos y, además deberían realizar un curso de especialización en la Escuela de Criminología. El primer concurso fue convocado por Orden de 26 de octubre de 1931 (Hernández Holgado, 2005).

Se crea el Instituto de Estudios Penales que se encarga de la formación del personal de las prisiones, incluidas las mujeres de la sección femenina, en él se trata de formar a los trabajadores de cara a una intervención centrada en la rehabilitación de los delincuentes. Además, ya se barajaba la posibilidad o, más bien, la necesidad, de la creación de un cuerpo de psicólogos, trabajadores sociales, médicos o pedagogos de cara a mejorar el tratamiento del delincuente, medida que no se llegó a concretar.

Uno de los proyectos que más esfuerzos ocupó a Victoria Kent, tras la supresión de la influencia religiosa en los presidios, fue la creación de la “cárcel modelo” de mujeres de Madrid, que destacó por albergar un moderno edificio en donde los espacios estaban dirigidos a que las reclusas cumpliesen su pena en unas condiciones dignas.

El proyecto de creación de esta cárcel comenzó en 1932, coincidiendo con la dimisión de Victoria Kent, pero continuando sus obras, que se culminaron, finalmente, el 31 de agosto de 1933. Este centro supuso un cambio radical en cuanto a lo que se venía practicando ya que se trataba de un edificio luminoso, habitaciones que permitían el contacto de las internas y la destacable importancia que se le daba a la formación. En 1936, con la Guerra Civil, pasó de albergar a 500 mujeres a 5000, en su mayoría presas políticas, superpoblación con la que no se podría continuar la experiencia anterior (Telo, 1995).

Sin lugar a dudas, Victoria Kent supuso una renovación determinante de las prisiones españolas a favor de la mejora de la calidad de vida, dejando su ideario progresista como legado que se tendrá en cuenta en posteriores momentos clave de las reformas penitenciarias.

Durante la dictadura franquista se produce un claro retroceso en cuanto a la igualdad jurídica de hombres y mujeres, creándose numerosas cárceles de mujeres en conventos rehabilitados que se encontraban en pésimas condiciones. A diferencia de los

hombres, aquellas mujeres que tenían hijos a su cargo eran encarceladas junto a ellos, de hecho, se llegaron a crear las llamadas cárceles para lactantes (Vinyes, 2002).

También se crearon cárceles para “mujeres caídas” o “mujeres de mala vida”, cuyo objetivo principal era separar a éstas de las presas políticas y centrarse en su rehabilitación, volviendo, en todo caso, por medio del nuevo cuerpo de sacerdotes de prisiones, a la educación religiosa, que, si bien no era obligatoria, suponía ciertos beneficios a la hora de cumplir condena. De la misma forma, las Hijas de la Caridad, recuperaron sus funciones y, se les sumaron las Hijas del Buen Pastor, la Orden de San Vicente de Paul, la Orden de las Cruzadas o las Madres Adoratrices.

El Reglamento de Servicios de Prisiones de 5 de marzo de 1948 surge de una revisión de la normativa penitenciaria, y en su artículo 20 se establecen seis categorías para los centros penales de mujeres⁴:

- 1) Central de Multirreincidentes, donde se destinarán las penadas a quienes les falta más de dos años y un día para extinguir su condena y reúnan alguna de las circunstancias de multirreincidencia, inadaptabilidad social, peligrosidad o vida depravada, reconocidas en la Sentencia del Tribunal, y las inadaptadas y rebeldes al régimen, además de aquellas otras de quienes se tuviera noticia de que por cómo vivía o por actos cometidos en reclusión y previo informe y propuesta razonada de las Juntas de Régimen y Administración y del Inspector regional, se estime, con fundamento, pueden convertirse en germen de corrupción para las otras internas o neutralizar la acción recuperadora de las mismas.
- 2) Reformatorios de mujeres. A los que serán destinadas todas las penadas a quienes les falte para cumplir más de dos años y un día de privación de libertad, no rebasando en ningún caso los veinticinco años de edad y no estén comprendidas en el punto anterior.
- 3) Central Común. Donde se destinarán las penadas de más de veinticinco años de edad procedentes de las Prisiones Provinciales y las que cumpliera dicha edad en el Reformatorio, siempre que a éstas les falten más de seis meses

⁴ https://www.acaip.es/media/reglamento_servicios_prisiones_1948/#/1/

para su libertad y a las primeras les quede por extinguir más de dos años y un día de privación de libertad.

- 4) Hospital Penitenciario de Mujeres. A él serán destinadas las penadas que precisen ser intervenidas en alguna operación quirúrgica de carácter grave, hasta su total restablecimiento, y las ancianas de más de sesenta años, las enfermas crónicas de carácter grave, que no puedan seguir la marcha regimental, las inútiles, ciegas y con mutilaciones fundamentales.
- 5) Clínica Psiquiátrica. A donde serán destinadas las internas en quienes concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el párrafo tercero del artículo diecisiete del Reglamento, artículo que hace referencia explícita a la enajenación, epilepsia, alcoholismo crónico y toxicomanía.
- 6) Sanatorio antituberculoso. Que es el que albergará a las penadas que sufran dicha enfermedad.

Tal Reglamento es clave para la eliminación de los reclusos detenidos por motivos políticos, que son, desde este momento, reconocidos como delincuentes comunes. Este hecho produce una progresiva disminución de la población carcelaria femenina.

Siguiendo a Lorenzo Rubio (2006), desde los años cincuenta se venía reivindicando, desde posiciones antifranquistas, la necesidad de un indulto para trabajar en aras de la reconciliación nacional. Tras la muerte del dictador se dictó el Decreto General de Indulto 2940/1975, de 25 de noviembre con motivo de la proclamación de su Majestad Don Juan Carlos de Borbón como Rey de España, con el que los reclusos pasan de 14.764 en 1974, año en el que se inaugura el Complejo Penitenciario Femenino de Madrid, a 8.440 en 1975.

Tras la dictadura nos encontramos con una nueva realidad democrática y la aprobación de la Constitución (1978) que establece, en su art. 25.2 que: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como el

acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”. De todos modos, la situación económica del país provoca un aumento de la marginación social que, junto con la masificación de las instituciones penitenciarias y los actos de protesta dentro de las mismas prisiones, generan la necesidad de observar normativas europeas. Pero no es hasta un año más tarde cuando se aprueba la Ley Orgánica General Penitenciaria.

1.3.2. Las bases del moderno sistema penitenciario español: la LOGP y sus Reglamentos

Para la redacción de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, General Penitenciaria (BOE 239, 5/10/1979) el legislador tuvo en cuenta documentos como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (1955) y del Consejo de Europa (1973), los pactos internacionales sobre derechos humanos, o las leyes penitenciarias de países como Suecia, Italia o Alemania, que estaban más avanzados en esta materia. Esta Ley permanecerá vigente hasta la actualidad con diferentes modificaciones que se han sucedido a lo largo de los años.

La Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) fue la primera norma de desarrollo constitucional promulgada en España y contó con el consenso de todos los grupos políticos (Rivera, 1999). Cabe decir que fue impulsada por el aquel entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, Carlos García Valdés.

Así, y siguiendo los preceptos de la Carta Magna, se establece que las instituciones penitenciarias “tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados” (art. 1).

Podríamos pensar que con la LOGP mejoraría claramente la situación de la mujer en los centros penitenciarios pero, por el contrario, la mujer pierde protagonismo en el Sistema Penitenciario Español, de forma que no se desarrollan políticas públicas específicas para este colectivo. Este olvido legislativo se ve reflejado en los escasos seis artículos que reparan en la cuestión femenina, centrados en la segregación regimental por sexo, la previsión de recursos materiales para el parto de las reclusas y la permanencia de sus hijos en los centros.

Únicamente son seis los artículos que hacen referencia al caso específico de las mujeres en la LOGP:

- Art. 8.3. Cuando no existan establecimientos de preventivos para mujeres y jóvenes, ocuparán en los de hombres, departamentos que constituyan unidades con absoluta separación y con organización y régimen propios.
- Art. 9.1. Los establecimientos de cumplimiento son centros destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad. Se organizarán separadamente para hombres y mujeres y serán de dos tipos: de régimen ordinario y abierto.
- Art. 16.a) Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo en los supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen.
- Art. 29.e) Las mujeres embarazadas durante las seis semanas anteriores a la fecha prevista para el parto, y las ocho posteriores al alumbramiento no tendrán la obligación de trabajar. Así mismo, este artículo ha sido actualizado en la Ley Orgánica 13/1995, 18 diciembre (BOE 19/12/1995), de modo que se amplía el período de descanso de las mujeres embarazadas.

Por su parte, el artículo 38, también se refiere a las mujeres gestantes o que son madres. Los establecimientos o departamentos para mujeres deberán tener una dependencia dotada del material de obstetricia necesario para el tratamiento de las internas embarazadas y de las que acaben de dar a luz y se encuentren convalecientes, así como para atender aquellos partos cuya urgencia no permita que se realicen en hospitales civiles (art. 38.1.). También se contempla, la posibilidad de que exista un local habilitado para guardería infantil y educación preescolar con el fin de que las internas puedan tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado la edad de escolaridad obligatoria (art. 38.2). Además, el establecimiento debe facilitarles los artículos necesarios de uso normal para la higiene íntima (art.38.3).

En este caso, los artículos 38.2, 38.3 y 38.4 fueron modificados en LO 13/1995, 18 diciembre. Señalamos de este modo, cómo se han establecido estos artículos con las modificaciones pertinentes:

- Art. 38.2. Las internas podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado los tres años de edad, siempre que acrediten debidamente su filiación. En aquellos centros donde se encuentren ingresadas internas con hijos existirá un local habilitado para guardería infantil.

La Administración penitenciaria celebrará los convenios precisos con entidades públicas y privadas con el fin de potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno-filial y de la formación de la personalidad del niño dentro de la especial circunstancia determinada por el cumplimiento de la madre de la pena privativa de libertad.

- Art. 38.3. Reglamentariamente se establecerá un régimen específico de visitas para los menores que no superen los diez años y no convivan con la madre en el centro penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad y su duración y horario se ajustará a la organización regimental de los establecimientos.
- Art. 38.4. En los establecimientos de mujeres se facilitará a las internas los artículos necesarios de uso normal para la higiene íntima.

Finalmente, también es necesario aludir cómo la Ley 13/1995 recoge que no se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo (art.43.3.).

La Administración Penitenciaria pone el acento en el aspecto maternal de las mujeres, dejando en un segundo plano las necesidades e intereses de la interna como mujer. Únicamente tiene en cuenta las especificidades de la mujer como propias de su sexo, y en relación a embarazo, parto y maternidad. Sin embargo, siguiendo a Serrano Tárraga (2010) la asistencia sanitaria femenina no puede limitarse única y exclusivamente a este estado de la mujer, pues como recogen las normas internacionales, los requerimientos sanitarios de las mujeres presentan especificidades propias, derivadas de su sexo, además de la atención específica a la maternidad; además, en cuanto a las relaciones con sus hijos, se insta a fomentar los lazos familiares de la mujer encarcelada, sin ocuparse de estos aspectos en relación al hombre. Esta consideración del género demuestra una imagen de la mujer basada en estereotipos, con características propias de su sexo, influenciada

por el prototipo de mujer del pasado, asignándose un rol social como madre y cuidadora de la familia y del hogar, modelo que en la actualidad se encuentra superado, y que no tiene en cuenta el papel que la mujer desempeña en la sociedad.

La minoría que siempre ha representado el grupo de mujeres en prisión ha podido justificar la falta de esfuerzos tanto económicos como políticos y la pasividad de las leyes al respecto. Como señalan Cruells e Igareda (2006), las políticas dirigidas a dar soporte a los procesos de reintegración social de las mujeres, no son efectivas en la práctica.

Sin embargo, cada vez es más notable la presencia de mujeres en prisión, lo que, coincidiendo con Naredo (1999, p.198), pone de manifiesto que “la selección del sistema es, aún más descarnada e injusta que con los hombres”.

Esta Ley apuesta por las prisiones específicas femeninas pero en la actualidad únicamente contamos con tres centros de estas características pertenecientes al Sistema Penitenciario español (Brieva, Madrid I y Alcalá de Guadaíra) aunque el art. 12 se refiere a la existencia de establecimientos suficientes para establecer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados, en el caso de las mujeres no siempre es posible, ya que muchas deben cumplir condena lejos de su entorno.

En todo caso, la Ley se desarrolló en el Real Decreto 1201/1981 de 8 de marzo (BOE 23/06/1981) por el que se establece el Reglamento Penitenciario, que fue modificado por diferentes Reales Decretos como el RD 787/1984 de 26 de marzo de modificación parcial del Reglamento Penitenciario (BOE 25/04/1984) o el Reglamento de 1996 de modificación del Reglamento penitenciario de desarrollo y ejecución de la LO 1/1979 (BOE 15/02/1996).

Por su parte, el Reglamento Penitenciario de 1981 nos presenta una organización minuciosa de cada tipo de establecimiento, y cuando diferencia entre hombres y mujeres lo hace en el momento en el que estas últimas son tratadas en calidad de madres. El Reglamento Penitenciario de 1984, incorpora a los educadores a los equipos técnicos, y posibilita la asistencia en instituciones extrapenitenciarias adecuadas de aquellos internos que se encuentren en tercer grado y sean toxicómanos, lo que supone un gran avance en materia tratamental.

Al mismo tiempo, como nos presenta Rivera (1999), tanto la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como la *Direcció General de Serveis Penienciaris i Rehabilitació* elaboraron programas de actuación dirigidos a la evaluación del clima social en la cárcel, educativos o de prevención y atención a toxicómanos, entre otros.

Es en estos años, cuando desde la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, se diseña el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios de 1991, un plan basado en la renovación de las estructuras carcelarias que trata de construir nuevos establecimientos. Se adapta la política penitenciaria a los requerimientos de la política de dispersión de presos de ETA iniciada en 1989 y se crea, un año más tarde, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) (Sierra Rodríguez, 2012).

Aparecieron las “cárceles de máxima seguridad” y las “macrocárceles”. Estas “macrocárceles” se conciben como centros modulares caracterizados por su polivalencia, desapareciendo la clásica división de centros. De este modo, el tratamiento, lejos de individualizarse se despersonaliza, dado el gran número de internos e internas que en él conviven (Landrove, 1998).

En 1995 se aprueba un nuevo Código Penal que afronta reformas reclamadas desde hacía ya años, como por ejemplo la elevación de la mayoría de edad penal o la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Al año siguiente se aprueba el nuevo Reglamento Penitenciario que debe adecuarse al Código Penal. Surge, así, el Reglamento de 1996 (Real Decreto 190/1996, de 9 febrero) que sigue teniendo en cuenta el caso específico de las mujeres, pero, una vez más, en calidad prácticamente exclusiva, de madres (art. 17.1). Una novedad que introduce la norma es que las internas con hijos en el exterior menores de tres años bajo su patria potestad podrán solicitar del Consejo de Dirección autorización para que éstos permanezcan en su compañía en el interior del centro penitenciario, que se concederá siempre que se acredite debidamente la filiación y que tal situación no entraña riesgo para los menores (art.17.2.). Cuando el menor sea admitido deberá ser reconocido por el Médico del establecimiento y, si éste no dispusiese otra cosa, pasará a ocupar con su madre la habitación que se le asigne dentro de la unidad de madres (art.17.3.). Cuando surjan conflictos entre los derechos del niño y los de la madre originados por el internamiento en un establecimiento

Penitenciario, deben primar los derechos de aquél⁵, que, en todo caso, deben quedar debidamente preservados en el modelo individualizado de intervención penitenciaria que se diseñe para la madre (art. 17.4.).

Por último, el art. 17.5. establece que la Administración Penitenciaria dispondrá para estos menores y sus madres de unidades de madres, que contarán con local habilitado para guardería infantil y estarán separadas arquitectónicamente del resto de los departamentos, a fin de facilitar las especificidades regimentales, médico-sanitarias y de salidas que la presencia de los menores en el centro hiciesen necesarias y se fomentará la colaboración y participación de las instituciones públicas y privadas de asistencia al menor en estas unidades o en las unidades dependientes creadas al efecto para internas clasificadas en tercer grado que tengan en su compañía hijos menores de tres años. A tal fin, celebrará los convenios precisos para potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno-filial y de la formación de la personalidad de los niños (art.17.6).

También se tiene en cuenta el género femenino cuando tratamos el Régimen Abierto, en donde se considera el trabajo doméstico en su propio domicilio como trabajo en el exterior. Es lo que se denomina Régimen abierto restringido (art. 82).

Así, en los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, o cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario, la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para ellos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas. Concretamente, con las mujeres, cuando se acredite que existe imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, pero conste, previo informe de los servicios sociales, que va a desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, se considerarán estas labores como trabajo en el exterior.

De igual forma, el capítulo 5 del Reglamento regula todas las cuestiones referidas al funcionamiento de las unidades de madres (arts. 178-181) y de los

⁵ Tal y como establece la convención sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 en su artículo 37.

departamentos mixtos que se crean para, por un lado, garantizar el principio constitucional de protección a la familia en el ámbito penitenciario, tratando de paliar su desestructuración y proporcionar asistencia a los menores de 3 años; y, por otro, para ejecutar programas específicos de tratamiento.

Se establece que la Junta de Tratamiento programará las actividades formativas y lúdicas, así como las salidas programadas al exterior de los menores y contarán con un Especialista de Educación Infantil que orientará la programación educativa y lúdica de las actividades de los menores. Además, los niños tendrán cubierta la asistencia médica por un especialista en Pediatría y serán garantizadas las horas de descanso y de juego dedicándose un espacio suficiente.

El régimen de visitas del menor sólo podrá restringirse de forma transitoria por razones de orden y de seguridad del Establecimiento y, en caso de no disponer de los medios suficientes, la Administración proveerá lo necesario para el cuidado infantil de los niños.

En cuanto al horario, las internas con hijos menores clasificadas en tercer grado podrán beneficiarse de un horario adecuado a sus necesidades familiares con el fin de fomentar el contacto con sus hijos en el ambiente familiar, pudiendo éstas pernoctar en el domicilio e ingresar en el Establecimiento durante las horas diurnas que se determinen e, incluso, podrán ser destinadas a Unidades Dependientes exteriores, donde éstos podrán integrarse plenamente en el ámbito laboral y escolar.

Por otro lado, si se detecta que un menor es objeto de malos tratos, físicos o psíquicos o es utilizado para introducir o extraer sustancias u objetos no autorizados, Dirección del Centro lo comunicará a la autoridad competente en materia de menores para que decida lo que estime procedente.

Continuando con este análisis, las mujeres contarán, según informa el Reglamento, con un ginecólogo además de un pediatra en caso de que convivan sus hijos en el mismo establecimiento.

En los departamentos de mujeres habrá una dependencia con instrumental de obstetricia para atender, excepcionalmente, a las mujeres en los supuestos de parto, disponiendo de habitaciones destinadas al aislamiento sanitario de los pacientes que lo precisen (art. 213).

Aunque exista una discriminación de las mujeres en prisión, cada vez es mayor la preocupación a nivel mundial en cuanto a los aspectos relativos a las mujeres en general, y a las mujeres en prisión en particular. Así, destacamos por ejemplo, las palabras de Kofi Annan (2000) sobre la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 que reflejan la importancia de la perspectiva de género en distintos ámbitos, incluido, el legislativo.

Los compromisos contraídos por los gobiernos en Beijing reflejan la comprensión de que la igualdad de la mujer debe ser un componente central de cualquier intento de resolver los problemas sociales, económicos y políticos del mundo. En consecuencia, si en el pasado las mujeres lucharon para que la igualdad entre los géneros formara parte del temario de la comunidad internacional, la igualdad entre los géneros es hoy uno de los principales factores que conforman ese temario.

Para atender la especificidad de las mujeres en el ámbito penitenciario en nuestro país se desarrolla el Programa de Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario (Ministerio del Interior, 2012). Sus objetivos se enmarcan en cuatro ámbitos fundamentales:

- Actuaciones a nivel organizativo: la creación de una estructura orgánica y funcional permanente que impulse, examine regularmente, y evalúe el impacto del programa de acciones para la igualdad; la implicación plena y corresponsabilidad institucional y de los agentes sociales en los planes de acción para la igualdad; la introducción de la perspectiva de género en la política penitenciaria; adaptar la política de personal a los Planes de igualdad y las leyes de conciliación familiar; incorporar la política de género al trabajo de los órganos directivos y planificar la formación específica de empleados en las distintas áreas para acometer una mayor sensibilización y conocimiento de las diferencias de las mujeres encarceladas; investigación y presencia en los foros nacionales/internacionales; y, propuestas de cambios legales que profundicen en la igualdad de género y compensen el coste familiar y el mayor sufrimiento de la mujer en su encarcelamiento.

- Observatorio permanente para la erradicación de factores de discriminación basados en el género: Elaboración e implantación de métodos de análisis de gestión que permitan evaluar periódicamente las condiciones en que se desarrolla la ejecución penitenciaria de las mujeres respecto a los hombres; incorporación del análisis de impacto de género en los informes y decisiones de carácter general; Plan integral de adecuación de

las estructuras arquitectónicas donde residen o serán destinadas a las mujeres; y Régimen Penitenciario.

- Atención integral a las necesidades de las mujeres encarceladas y excarceladas: diseñar para cada centro un protocolo de acogida inmediata para la atención a las problemáticas acuciantes que representan el ingreso en prisión; actuaciones de fortalecimiento o restauración del entorno familiar, o búsqueda de recursos sociales alternativos; potenciar redes de apoyo entre las compañeras de internamiento; fomento de la salud; estrategias de empoderamiento; crear y promover la participación en programas de fomento de la autonomía personal y plena participación en los derechos de ciudadanía; planes de integración escolar, formativa; planes de integración cultural, deportiva y de ocio; integración laboral, planes de empleo e inserción laboral; atención al desarrollo de la maternidad en prisión; atención especializada a las necesidades de colectivos específicos (jóvenes, mayores, toxicómanas o discapacitadas).

- Planes para favorecer la erradicación de la violencia de género y paliar sus consecuencias: disminuir la vulnerabilidad de la mujer reclusa, en general, a sufrir situaciones de violencia y/o dependencia; programas específicos para mujeres con un historial de violencia de género.

Además, existen otros programas específicos dirigidos a este colectivo, centrados en la violencia de género, el ámbito educativo, la drogodependencia y el trabajo remunerado, además de los destinados a las mujeres que son madres.

Por su parte, es 2003 un año clave desde el punto de vista penitenciario. Se han producido numerosas reformas legales dirigidas al endurecimiento del Régimen Penitenciario, especialmente para los internos extranjeros. Por ejemplo, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (BOE 30/09/2003), de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, aquellas personas extranjeras no residentes legalmente en España que cometan un hecho constitutivo de delito, que prevé, en su artículo 89, se pueda sustituir el cumplimiento de cualquier medida de seguridad o de las penas privativas de libertad inferiores a seis años por la expulsión del territorio así como la sustitución del cumplimiento del resto de la pena de prisión superior igual o superior a seis años por expulsión del territorio español, cuando se trate de extranjeros no residentes legalmente en España que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena o hayan sido clasificados en tercer grado. Esta ley afecta a las mujeres extranjeras, un colectivo especialmente representado en la población penitenciaria.

1.3.3. La Red de establecimientos Penitenciarios en España: Clasificación y características

Para analizar la red de establecimientos penitenciarios en nuestro país, es necesario explicar de forma concisa qué se entiende por clasificación.

Al hablar de clasificación, tenemos que referirnos a tres acepciones diferentes en este mismo contexto: la clasificación de establecimientos penitenciarios, la clasificación interior por la cual se separan los internos y, por último, la clasificación de los penados (González Cano, 1994).

En relación a la clasificación interior tenemos que aludir al artículo 16 de la LOGP, que establece una serie de criterios para llevar a cabo la separación en los centros penitenciarios, como son el sexo, la emotividad, la edad, los antecedentes, el estado físico y mental; y, respecto a los penados, las exigencias del tratamiento. Bien es cierto que en el Reglamento Penitenciario de 1996 se introducen excepciones a estos criterios, como es el caso de los departamentos mixtos en donde pueden convivir hombres y mujeres.

Así pues, los hombres y las mujeres deben estar separados, salvo en aquellos supuestos excepcionales que reglamentariamente se determinen; los detenidos y los presos separados de los condenados y los primarios de los reincidentes; los jóvenes (menores de 21 años y, excepcionalmente los que no hayan alcanzado los 25 años) separados de los adultos; los que presenten enfermedades físicas o mentales separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento; y, los detenidos y presos por delitos dolosos separados de los delitos de imprudencia. Esta separación no se aplica en el caso de las mujeres, puesto que, en la mayor parte de los casos, se encuentran en un mismo módulo, primarias con reincidentes, enfermas, delitos graves, etc... (ver Lorenzo Moledo, 1997).

Por otro lado, las penas privativas de libertad se ejecutan según el sistema de individualización científica separado en grados (art. 72.1 de la LOGP), el último de los cuales es el de libertad condicional, desapareciendo, además, los plazos mínimos de permanencia en cada grado (Fuentes, 2011). Este sistema permite la clasificación inicial del penado en cualquier grado, salvo el de libertad condicional, y la progresión o regresión individual según su evolución durante el

tiempo de condena. La clasificación en grados permite la individualización de su tratamiento y la asignación del régimen penitenciario más adecuado atendiendo al estudio de su personalidad e historial individual, familiar, social y delictivo así como la duración de la pena y medidas penales, el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso para desenvolver el adecuado tratamiento hacia una posible reinserción (art. 63 de la LOGP). El grado es, pues, un tipo y categoría penitenciaria que lleva aparejado un régimen de vida concreto, así como las condiciones o bases para ejecutar un programa de tratamiento individualizado conforme a éste (Armenta y Rodríguez Ramírez, 2001).

En nuestro sistema penitenciario contemplamos tres grados de clasificación:

a) El Primer Grado corresponde a un régimen en el que las medidas de control y seguridad son más restrictivas (régimen cerrado). La clasificación excepcional en primer grado se realiza a propuesta de la Junta de Tratamiento, que requiere de los informes razonados del Jefe de Servicio y del Equipo Técnico, y habrá de ser motivada. El acuerdo por la dirección del establecimiento, se pone en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria y el interno o interna tendrá derecho a recurrir dicho acuerdo.

Conforme al sistema de individualización científica, esta clasificación inicial y consiguiente destino a un establecimiento o módulo de régimen cerrado será consecuencia de una valoración negativa de los factores anteriormente señalados (personalidad, historial individual, familiar, social y delictivo, duración de la pena y medidas penales, medio al que volverá y recursos, facilidades y dificultades para el éxito del tratamiento) (Aranda, 2006a). Además, el art. 10 de la LOGP introduce la posibilidad de destinar al régimen cerrado a los penados y preventivos clasificados de peligrosidad extrema o aquellos que no se adapten a los regímenes ordinario y abierto.

La limitación de las actividades en común de los internos y la mayor vigilancia y control caracterizan este régimen y, la permanencia en él terminará en el momento en el que desaparezcan las razones que determinaron su clasificación en tal grado.

Las especiales características de este régimen obligan a una clara justificación de las motivaciones que llevan a su aplicación. Así, en la Instrucción 20/96 se explicitan los documentos que deben acompañar al informe de ingreso en Primer Grado: copia de los hechos probados, informe de conducta, informe Psicológico, modelo de Programa

Individualizado de Tratamiento, modelo de aplicación del Régimen cerrado, informe médico, informe del Jefe de Servicios, e historial penitenciario.

La finalidad de estos documentos es aportar la información necesaria a la Dirección del Centro para motivar la resolución. De todos modos, aunque el ingreso está suficientemente motivado, diferentes autores denuncian la falta de control y seguimiento judicial en cuanto a la continuidad en dicho grado (Aranda, 2006a; Fernández Arévalo, 1994).

b) El Segundo Grado se corresponde con el régimen ordinario. Son clasificados en este grado los penados en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad (art. 102.3 RP).

Este es el grado más habitual ya que más del 75% de los penados cumplen condena en segundo grado (ver Tabla 1), y se caracteriza por una mayor libertad y flexibilidad que en el régimen cerrado.

Tabla 1

Población reclusa penada por grado de tratamiento. Diciembre 2014

Grados	Hombres	Mujeres	Total
Primer Grado	871	72	943
Segundo Grado	33.286	2.452	35.738
Tercer Grado	6.093	776	6.869
Sin Clasificar ⁶	3.368	278	3.646
Totales	43.618	3.578	47.196

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Penitenciaria. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

⁶ Personas que han sido condenadas a pena privativa de libertad con sentencia firme pero que aun no se ha recibido en el centro el testimonio de sentencia (que abre un plazo de dos meses para proceder a la propuesta de clasificación inicial) o se ha recibido y no se ha formulado propuesta de clasificación inicial (nos encontramos dentro del plazo indicado) o, aquella persona que tenga decretada simultáneamente prisión preventiva por otra causa y no se clasifica por impedimentos legales (Armenta y Rodríguez Ramírez, 2006).

Siguiendo la Instrucción 12/2006, las actividades propuestas en este Segundo Grado serán clasificadas en áreas: educativa, formativa, laboral, terapéutica, cultural, deportiva y ocupacional y, la participación del penado en estas actividades, conformarán un claro indicador de la implicación del interno en el proceso de reinserción. Las valoraciones por parte de la Junta de Tratamiento juegan un papel muy importante en cuanto a los beneficios penitenciarios entre los que destaca el adelantamiento de la libertad condicional o el adelantamiento cualificado de la libertad condicional, que exige una participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación (art. 91.2 del Código Penal).

Además, este grado de clasificación, posibilita la concesión de otro tipo de figuras como los permisos ordinarios, las salidas programadas o las salidas especiales (Aranda, 2006a).

c) El Tercer Grado coincide con el régimen abierto, en cualquiera de sus modalidades. Se aplica a los internos o internas que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad (art. 9.1 y 72.2 de la LOGP).

En este caso, los penados cumplirán su condena en aquellos centros destinados para tal fin: los Centros de Inserción Social y las Secciones Abiertas. El cumplimiento del Tercer Grado supone la ausencia de controles tan rígidos como en los casos anteriores y se potencia, especialmente, la capacidad de inserción social.

Aunque no existe un límite temporal expreso de cumplimiento previo de condena para la clasificación en Tercer Grado, el art. 104 del RP hace referencia a que el interno debe cumplir, al menos, la cuarta parte de su condena transcurriendo, de este modo, un tiempo de estudio suficiente.

La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (BOE 01/07/2003) modificó sustancialmente los requisitos para la obtención del Régimen abierto. Se establece un período de seguridad, de forma que cuando la duración de la pena sea mayor de 5 años, el interno o interna debe cumplir la mitad de la pena para efectuar el

cambio, tema que se vuelve a abordar, con pequeñas modificaciones, en las Instrucciones 2/2004 y 2/2005.

Una vez explicadas estas dos acepciones de clasificación cabe centrarnos ahora en la tercera de ellas, referente a los establecimientos penitenciarios. En la actualidad podemos hablar de tres tipos de establecimientos penitenciarios de carácter general: de preventivos, de cumplimiento de penas y especiales, dividiéndose estos últimos en hospitalarios, psiquiátricos y de rehabilitación social. Por su parte, los centros de cumplimiento se dividen en cerrados, ordinarios y abiertos (art. 7 de la LOGP).

A principios de 2014, la Administración General del Estado cuenta con 68 Centros Penitenciarios de Régimen Ordinario, 2 Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, 32 Centros de Inserción Social, 3 Unidades de Madres y 14 Unidades Dependientes (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014a).

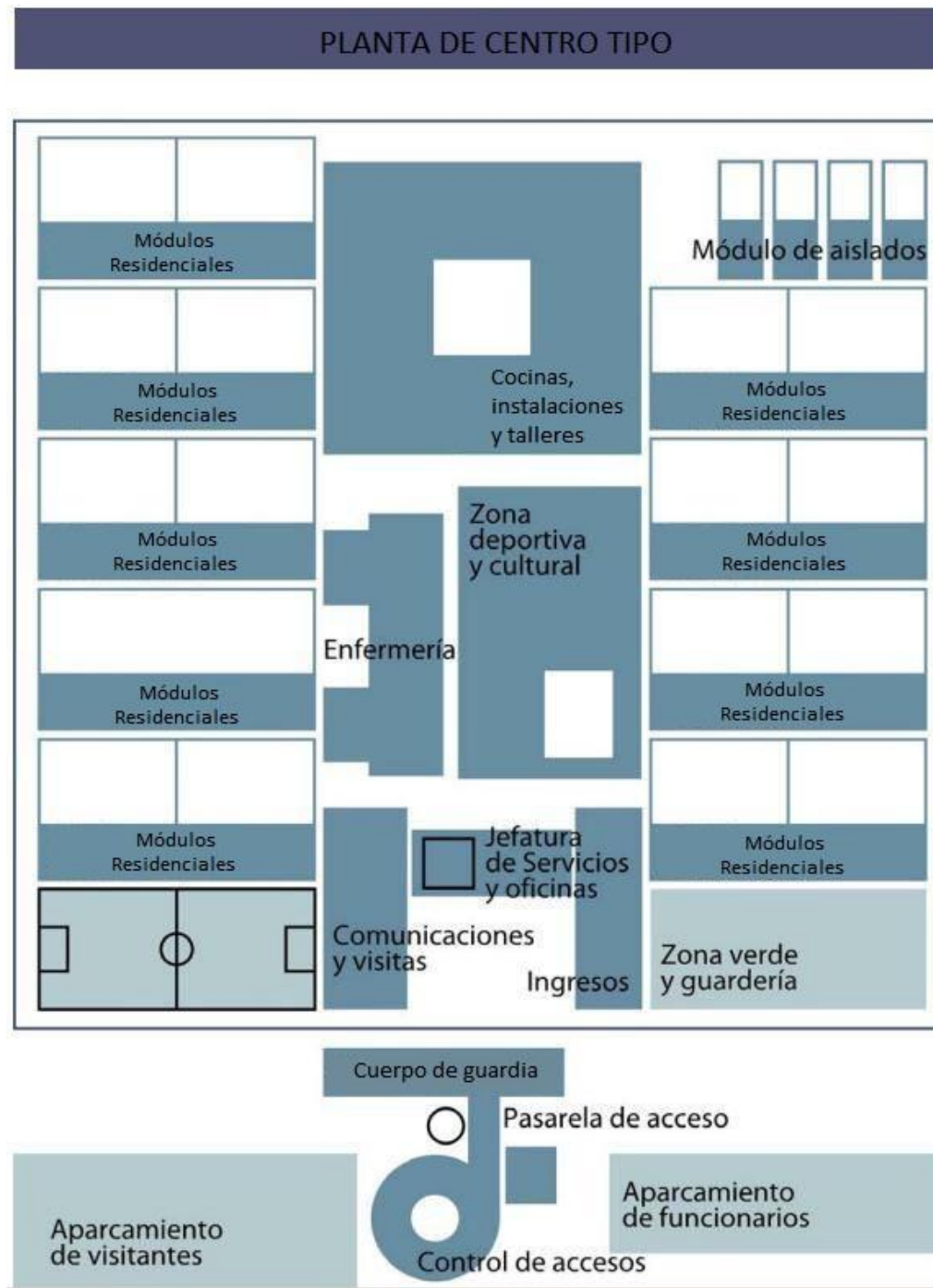
La mayor parte de los centros ordinarios (centros tipo) muestran una arquitectura de tipología modular (ver Figura 1) que, según Instituciones Penitenciarias, trata de posibilitar la creación de espacios que faciliten la vida diaria en la prisión y responden a la doble función de lugar de custodia y espacio favorecedor de la rehabilitación. Están configurados con una distribución geográfica que se ajusta a la demanda penitenciaria de cada territorio del Estado, lo que permite el cumplimiento de la condena en la instalación más próxima al lugar de origen del interno (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014a).

En lo relativo a las mujeres, es importante señalar que únicamente son tres los centros dependientes de la Administración General del Estado exclusivos para ellas, el de Brieva (Ávila), Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Madrid I (Madrid). Las demás dependencias son módulos ubicados dentro de los grandes centros penitenciarios en departamentos separados de los hombres y no disponen de espacios propios específicos. De cara a implantar políticas de reinserción social, es necesario tener en cuenta la estructura arquitectónica de los centros, así como la distribución de sus espacios. Su importancia radica en la necesidad de que la prisión se acerque lo más posible a un entorno social normalizado, ya que una vez cumplida la condena, los presos deben vivir de nuevo en sociedad (Pascual, 2014).

Esta cuestión sigue siendo uno de los principales problemas en el ámbito penitenciario en general, siendo, la realidad, aún más grave en el caso de las mujeres por la falta de medios que se destinan a favorecer las condiciones de vida de este colectivo (Almeda, 2002; Yagüe, 2007b).

Figura 1

Planta de Centro Tipo



Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014a, p. 23.

Además de los 68 Centros Penitenciarios de Régimen Ordinario para el cumplimiento de penas, medidas de seguridad y para prisión preventiva, también debemos señalar los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, que se dedican a la custodia y tratamiento de los internos que padecen trastornos graves de conducta y que han sido internados en ellos por decisión de los Tribunales de Justicia. Existen 2 de estos establecimientos en nuestro país, dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, uno en Alicante y otro en Sevilla. Las personas a las que los jueces ingresan en estos hospitales han sido consideradas inimputables por presentar cualquier anomalía o alteración psíquica, especialmente trastornos mentales graves de tipo psicótico, que les impide comprender la ilegalidad del hecho delictivo. Presentan un carácter más hospitalario que penitenciario ya que predomina la función asistencial y su principal objetivo será conseguir la estabilización psicopatológica de los pacientes y la reducción de su peligrosidad, todo ello, como paso previo a una posible sustitución de la medida de seguridad privativa de libertad por una medida de tratamiento ambulatorio en la comunidad. La permanencia de un paciente en el hospital psiquiátrico penitenciario no puede sobrepasar, en ningún caso, el tiempo máximo de pena fijado en la sentencia.

Continuando con la tipología indicada debemos mencionar los Centros de Inserción Social (CIS), destinados al cumplimiento de las penas privativas de libertad en Régimen Abierto (prisión atenuada, con posibilidad de trabajar en el exterior), para aquellos internos que se encuentran en un avanzado proceso de reinserción y, también, gestionan las alternativas que no exigen el ingreso en prisión, como los Trabajos en Beneficio de la Comunidad, la suspensión de la ejecución de la pena y la localización permanente. Por su parte, es el CIS el que lleva a cabo el seguimiento de la libertad condicional.

La actividad penitenciaria en los Centros de Inserción Social tendrá por objeto esencial potenciar las capacidades de inserción positiva que presenten las personas internadas mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento destinados a favorecer su incorporación al medio social y contrarrestando los efectos nocivos del internamiento y favoreciendo los vínculos sociales. Actualmente existen 13 Centros de Inserción Social con plena autonomía organizativa y funcional y 19 dependientes. No debemos confundir estos

establecimientos independientes con las Secciones Abiertas, que cumplen unas funciones similares pero se ubican en locales dentro de los centros penitenciarios.

Los CIS están ubicados próximos a entornos sociales que son familiares a los penados de cara a que les resulte más fácil su integración. El medio abierto requiere la aceptación voluntaria del interesado y está basado en el principio de confianza ya que los internos gozan de libertad para cumplir con sus compromisos laborales y tratamientos terapéuticos fuera del centro. En estos casos, la utilización de sistemas de vigilancia telemática acerca la posibilidad de tener un control a distancia de los internos y establecer restricciones de movimiento.

Para las mujeres con hijos, el sistema tiene tres Unidades Externas de Madres (Sevilla, Mallorca y Madrid), para que los niños que deben ser cuidados por sus madres que cumplen condena, vivan en las condiciones más favorables para su educación, en un ambiente diferente al que supone una prisión tradicional. Estas Unidades no deben confundirse con los Módulos con los que cuentan ciertos centros ordinarios dirigidos al mismo fin sino que han sido diseñados precisamente para paliar las carencias que estos presentan ya que, según el Ministerio del Interior (2010), carecen de espacios suficientes al aire libre, las habitaciones impiden una correcta libertad de movimientos y la normativa es marcadamente restrictiva. Por ello, comienzan a ofrecerse otro tipo de dispositivos penitenciarios más adaptados a las necesidades de los niños y sus madres.

La vida en estos centros se ajusta, en todo caso, a las necesidades de los niños contando, además, con una escuela infantil con un aula de psicomotricidad, aula escolar, comedor y zonas ajardinadas con el fin de normalizar la estancia de los menores. Con la creación de estas nuevas estructuras se pretende segregar definitivamente las unidades de madres que están dentro de los centros penitenciarios ordinarios, y dotarlas de completa autonomía penitenciaria para establecer un régimen de convivencia específico facilitando un desarrollo armonioso de los menores y una adecuada relación materno-filial (Ruiz, 2014).

Estos centros disponen de sistemas de seguridad basados en control de vigilancia electrónica por medio de cámaras, alarmas y detectores de presencia a lo largo del perímetro, de este modo, se constituye una vigilancia “no agresiva”.

Así mismo, en el centro penitenciario de Madrid VI, existe una Unidad Familiar para aquellos casos en que ambos miembros de la pareja se encuentren encarcelados. En este centro pueden convivir los padres con sus hijos menores de 3 años, si reúnen un mínimo perfil de seguridad y ofrecen garantía del buen cuidado de los menores (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014b). Según el art. 168 del Reglamento Penitenciario, se desarrollan con la finalidad de “ejecutar programas específicos de tratamiento o para evitar la desestructuración familiar”. De este modo, son valoradas ponderadamente todas las circunstancias personales y penitenciarias concurrentes de los internos e internas y, salvo razones explícitas, “se fomenta la plena convivencia de los cónyuges que se encuentren privados de libertad” (art. 172). Esta medida permite a los miembros de la pareja compartir la crianza de los menores cuando ambos se encuentran en prisión si se reúne un mínimo perfil de seguridad y existe garantía del bienestar de los niños y niñas. Se presenta como el único dispositivo en el que se permite a los menores convivir con su referente paterno hasta los tres años, medida que puede favorecer la normalización en su desarrollo; es decir, estos módulos constituyen una oportunidad única para la supervivencia de aquellas estructuras familiares que estén compuestas por ambos cónyuges que cumplen condena.

Las Unidades Dependientes están dirigidas al cumplimiento de la pena en medio abierto, atendiendo a las peculiaridades y circunstancias personales de algunos internos, especialmente a madres con niños menores de edad y mujeres y hombres sin vínculos familiares. Estas instalaciones se sitúan en núcleos urbanos y no presentan signos de distinción de cara a normalizar la situación y mayor integración (art. 165 del RP). En estas Unidades se pretende complementar el trabajo de reinserción iniciado en los centros penitenciarios y reforzar los vínculos familiares y los hábitos laborales, que en muchos casos se habían perdido. Cabe decir, además, que la gestión de estos centros se realiza por parte de asociaciones, entidades colaboradoras y ONGs con la supervisión de la Administración Penitenciaria, por medio de las cuales se llevan a cabo servicios de carácter formativo y laboral.

Su flexible ubicación hace que los internos e internas que puedan convivir en ellas necesiten estar clasificados en el tercer grado de tratamiento, es decir, “son internos e internas que, por sus situaciones personales y penitenciarias, se

considera que pueden tener un régimen de vida en semi-libertad” (Añaños, Fernández-Sánchez, y Llopis, 2013, p.16).

Sirva como ejemplo la descripción de la Unidad dependiente de Sevilla gestionada por la Asociación Nuevo Futuro y que actualmente no está ocupada, que se realizaba por parte del Defensor del Pueblo Andaluz (2006, p.191):

Se trata de una vivienda con capacidad para ocho mujeres con sus hijos, situada en el centro urbano de Sevilla. Consta de un patio central, tres plantas y una azotea; en la planta baja hay un despacho para la funcionaria de prisiones allí destinada, una sala de estar, un cuarto de juegos para niños, cocina, comedor y un aseo. En la segunda y tercera planta se encuentran los dormitorios y el resto de las dependencias.

Como vemos, se permite la convivencia de las reclusas en unas instalaciones más adaptadas a sus necesidades y demandas, con contacto con la comunidad y se lleva a cabo un tratamiento penitenciario individualizado con unas normas menos restrictivas.

También cabe resaltar las Unidades de Custodia Hospitalaria que son espacios reservados en centros hospitalarios de cara a albergar a internos que requieran un ingreso hospitalario; estas instalaciones están adaptadas para la atención especializada y cuentan con las medidas de seguridad necesarias. El sistema dispone de 43 UCH a lo largo de todo el territorio que se asignan a cada uno de los centros penitenciarios siguiendo criterios de proximidad.

Por último, destacamos los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que son las Unidades Administrativas que tienen encomendada la ejecución de las penas y medidas alternativas. Se cuenta con 55 Servicios que dependen orgánica y funcionalmente de un Establecimiento Penitenciario pero que se ubican en locales externos a los mismos. En el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio (BOE 18/06/2011) se establece que estos Servicios ofertarán al penado que la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se cumpla con su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares y se encargarán de su supervisión el tiempo que se estime oportuno.

Como vemos, la configuración de los centros penitenciarios y el tratamiento de la delincuencia han evolucionado notablemente a lo largo de los años. Sin embargo, la mujer siempre ha permanecido en un segundo plano en este contexto teniendo que formar parte de un sistema creado por y para hombres. Esta invisibilidad que caracteriza al colectivo de mujeres en prisión y el olvido, en numerosas ocasiones, por parte de las Administraciones competentes, trata de justificarse por la baja participación de las mujeres en actos delictivos, pero también refleja la distinta consideración del delito femenino frente al masculino (Lorenzo Moledo, 1997).





CAPÍTULO 2:

**DELITO Y DELINCUENCIA: LAS
TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA
DELINCUENCIA FEMENINA**



CAPÍTULO SEGUNDO. DELITO Y DELINCUENCIA: LAS TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA DELINCUENCIA FEMENINA

2.1. Introducción

Es sabido que los hombres, en términos de prevalencia, incidencia y variedad, cometen más delitos que las mujeres (Bartolomé, Montañés, Rechea, y Montañés, 2009; Fagan, Van Horn, Hawkins y Arthur, 2007; Rodríguez y Mirón, 2008). Esto explica, en buena medida, que la mayor parte de los estudios científicos se hayan centrado en el análisis de la población masculina, ignorando, en muchas ocasiones, la femenina. Se constata la casi total ausencia de estudios a nivel nacional e internacional, no sólo desde las Ciencias de la Educación sino también desde aquellas ligadas históricamente al estudio de la delincuencia. Sin embargo, debemos destacar la preocupación por parte de algunos investigadores a quienes les ha inquietado el papel del género en la criminalidad (ver Lorenzo Moledo, 1997; Moffit, Caspi, Rutter, y Silva, 2001; Farrington y Painter, 2004).

Y es más, muchas veces se ha interpretado la delincuencia femenina bajo parámetros poco adecuados. Así, Canteras (1990) sostiene que los escasos estudios realizados sobre la delincuencia femenina se hicieron utilizando los modelos explicativos de la delincuencia en general y en relación con la delincuencia masculina, lo que ha tenido como consecuencia que no exista una tipología teórica global sistematizada sobre la misma, de forma que se le ha dado un carácter sexual. Según el autor, estas investigaciones se han apoyado en la observación de la conducta individual y social de las mujeres, contrastándose con las del otro sexo y con el propio rol social femenino.

Daly y Chesney-Lind (1988) identifican dos problemáticas que han servido de pilares para la construcción teórica de cuestiones que relacionan género y crimen: el problema de la generalización y el problema de la proporcionalidad. Según estos investigadores, el primero nos lleva a plantear cuestiones tales como ¿las teorías de la criminalidad masculina se aplican también a las mujeres? o ¿puede ser modificada la lógica de estas teorías de manera que puedan ser aplicadas a las mujeres? mientras que el problema de la proporcionalidad, remite a preguntas como por ejemplo: ¿por qué las mujeres están menos implicadas en las actividades criminales que los hombres?, o, al

contrario, ¿por qué los hombres son más frecuentemente impulsados al crimen que las mujeres?, y ¿qué explica las diferencias existentes en las estadísticas referentes a la detención, así como al tipo de actividades entre hombres y mujeres?.

Pues bien, a lo largo de los años, se ha intentado buscar respuesta a estas cuestiones por medio de diferentes explicaciones teóricas que tratan de definir el comportamiento delictivo de las mujeres. De este modo, partiendo de la distinta consideración del delito y de la delincuencia de las mujeres, en este capítulo llevaremos a cabo un análisis de los principales marcos teóricos que han intentado ofrecer una explicación del tema objeto de estudio; desde las teorías basadas en explicaciones individuales a aquellas que tienen un carácter social. Este recorrido nos permitirá comprender la interpretación de la delincuencia femenina y, por lo tanto, las posibilidades de intervención pedagógica.

2.2. La distinta consideración del delito y la delincuencia de las mujeres

No podemos comenzar este epígrafe sin detenernos en el concepto de delito, aunque no exista una definición única y unívoca que lo delimite. El Derecho Penal define delito como aquel comportamiento que está tipificado como tal en el Código Penal; así, en su artículo 10 (BOE 24/10/1995) se establece que son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley, artículo modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 31/03/2015); por lo que a partir del 1 de julio de 2015, el artículo que equivale al anterior señala que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

Siguiendo a Garrido, Stangeland, y Redondo (2006), esta definición no aclara cual es el motivo de que determinado hecho sea considerado delito ni las razones que señalan que un delito es más grave que otro. Además, el Código Penal evoluciona estableciendo los límites entre lo que se considera o no delito en determinada sociedad.

Desde la Filosofía y la Ética se tiende a explicaciones relativas al orden moral. Autores clásicos como Beccaria (1984), han tratado de llegar a una definición sin tener en cuenta el código penal, considerando principalmente el

daño causado a la sociedad. Sin embargo, el daño presenta también un carácter impreciso.

La Ciencia Criminológica clasifica los comportamientos delictivos en tres categorías principales en función de la reacción social: en primer lugar los penalizados y castigados en (casi) cualquier sociedad moderna, se incluirán aquí los delitos graves contra las personas o contra la libertad sexual, entre otros; en segundo lugar, aquellos sobre los que la ley se aplica con escasa frecuencia, sería el caso de los “delitos sin víctimas”; y, en tercer lugar, los comportamientos en vía de penalización o despenalización, donde nos encontramos los delitos en los que existe cierta ambigüedad legislativa y una falta de consenso social sobre su carácter (Garrido et al., 2006).

Por su parte, Felson (2006, p.35) define el delito como “cualquier conducta identificable que un número apreciable de gobiernos ha prohibido específicamente y ha castigado formalmente”.

Cabe señalar, de este modo, la relatividad del concepto de delito pudiéndose definir, según García Pablos (2005), como un concepto formal desde las diferentes áreas de conocimiento; como el valor instrumental que presenta en cuanto a las funciones que desempeña en un contexto determinado; como problema social y comunitario; o como un hecho que produce cierta reacción social.

Para entender la dimensión del delito y de la delincuencia, debemos considerar diferentes fuentes de datos, desde las actuaciones policiales, las judiciales hasta las penadas. Garrido et al. (2006) presentan la delincuencia como un iceberg que, en su parte descubierta engloba la delincuencia oficial (prisión, condena, delito esclarecido, diligencia previa y denuncia criminal) y, en su parte encubierta se encontrarían las “cifras ocultas” o “cifras negras” (avisos a la policía, la víctima que no denuncia, la víctima que no lo define como un hecho delictivo o delitos que nadie detecta). Así, sobre el fondo del iceberg no se pueden aportar datos ya que conforma una tarea imposible.

Es más que evidente que las tasas de delitos cometidos por las mujeres son considerablemente menores que aquellas que representan los masculinos. Basta con repasar las cifras oficiales del Ministerio del Interior, del mes de noviembre de 2014. Las mujeres representaban el 7,79% del total de las personas que se encontraban en prisión. Además, las estadísticas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado señalan que en el año 2013 las detenciones realizadas a

mujeres representaron el 15,57% de la población total (Ministerio del Interior, 2015). Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, que hace referencia al número de diligencias previas que se han formado en sede de Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, que se refiere a los asuntos penales que han ingresado en las instancias judiciales cada año, no disgregan los datos en función del género (Consejo General del Poder Judicial, 2015).

Es un hecho que el delito femenino no ha sido explicado con las mismas premisas que el masculino y buena prueba de ello son las teorías que explican la delincuencia femenina. Otro aspecto que dificulta aun más la investigación en el ámbito.

Steffensmeier y Allan (1996) presentan una serie de constructos a considerar a la hora de elaborar explicaciones teóricas en función del género:

1) La organización del género. La organización del género, junto con las diferencias en las características físico-sexuales contribuye a potenciar la diferenciación entre ambos sexos aumentando la probabilidad de una respuesta prosocial por parte de las mujeres y una respuesta antisocial en los hombres. Se pone el énfasis en el hecho de que las mujeres cometen menos delitos porque sus contextos de socialización, que las controlan más, favorecen valores vinculados al cuidado y a la precaución, preocupándose por mantener relaciones interpersonales basadas en el afecto. En este punto se presentan cinco áreas que se ven como inhibidoras del crimen femenino a la vez que incitadoras del masculino:

- Las normas de género. Se señalan una serie de tabús que provienen de dos preocupaciones atribuidas a la mujer: por un lado, la obligación de una conducta enriquecedora y, por otro, la belleza femenina y la virtud sexual. En estas situaciones se da forma a las limitaciones y oportunidades de aquellas que realizan actividades ilícitas. Los estereotipos femeninos son incompatibles con la actividad criminal mientras que la línea divisoria entre lo masculino y lo criminal es, a menudo, más delgada. Además, aseguran que el miedo a ser víctimas de abusos sexuales desvía a las mujeres de zonas más proclives al delito y reduce sus oportunidades.

- Desarrollo moral. Las diferencias de género en el desarrollo moral predispone a las mujeres hacia una “ética de cautela” que las frena a la hora de

realizar una actividad delictiva; además de ser más sensibles a las necesidades de los demás, también temen en mayor medida la separación de sus seres queridos.

- Control social. Señalan que el comportamiento femenino es más estrictamente corregido a través de estereotipos y sanciones (Martínez Benlloch, 2008); la mayor supervisión hacia este colectivo reduce que éstas asuman riesgos.

- Resistencia física y agresión. Las mujeres pueden ser percibidas como carentes de potencial violento lo cual impide la comisión de cierto tipo de delitos.

- Sexualidad. Las diferencias reproductivas contribuyen, según Steffensmeier y Allan (1996), a la mayor infidelidad entre los hombres.

2) Las oportunidades para delinquir. Las mujeres tienen un acceso limitado a determinadas oportunidades delictivas como consecuencia de la estructura patriarcal y el sexismo que predomina en la sociedad, ya que ambos restringen la actuación de ellas en el mundo social.

Este enfoque sostiene que tienen un acceso diferencial a experiencias y ambientes delictivos por lo que van a contar con escasas oportunidades de aprender conductas antisociales. Igualmente, sus actividades cotidianas y las diferencias de género en el mercado laboral, contribuyen al poco contacto con oportunidades para delinquir.

3) La motivación para el delito. Argumentan que la motivación para delinquir es mucho menor en las mujeres, ya que su proceso de socialización diferencial favorece el desarrollo de un mayor nivel de auto-control. Ellas están menos predispuestas que los hombres a comprometerse y correr riesgos ya que la conducta delictiva tendrá más costes sociales y morales; lo cual genera una tendencia a la contención que hace muy poco probable que se decidan por la opción delictiva.

4) El contexto del infractor. Se refieren, en este caso, a las características particulares del hecho delictivo, es decir, tanto a sus circunstancias como a su naturaleza. Las diferencias entre géneros en cuanto al contexto y situación del delito, incluyen, por ejemplo, el hecho de que las mujeres utilicen en menor medida la violencia física, y menos armas, elijan víctimas cercanas que forman

parte de sus escenarios de relación, y pretendan obtener resultados o propósitos menos vinculados al dominio.

Históricamente, la consideración de la mujer delincuente como un ser apartado de su rol tradicional ha impregnado de una falta de objetividad científica los estudios que se han realizado (Lorenzo Moledo, 2002). Este hecho justifica que el sistema penitenciario esté diseñado y dirigido fundamentalmente hacia la población masculina.

Las teorías criminológicas manifiestan una serie de problemas sociales que se producen en un momento determinado, reflejando las consecuencias del contexto en el que son formuladas.

De este modo, las teorías de la delincuencia femenina mantienen una gran desventaja temporal con aquellas que tratan de explicar la masculina, lo cual explica que, teorías desechadas en el ámbito masculino, permanezcan vigentes en lo que respecta a las mujeres (De la Cuesta Aguado, 1992).

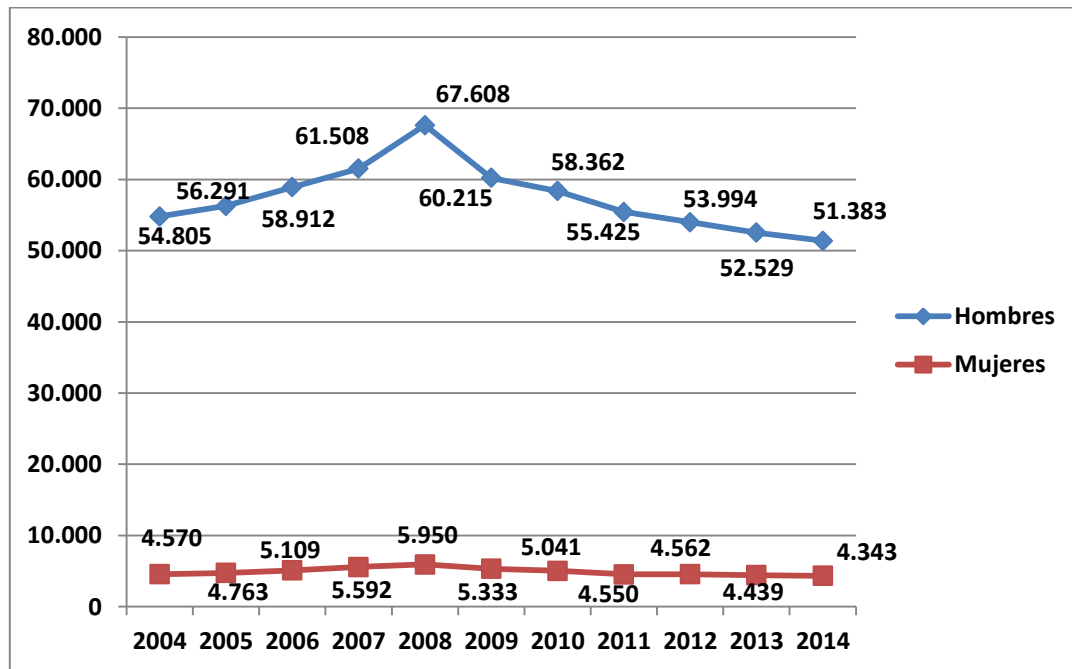
Compartimos con Rodríguez (2009) que la invisibilidad de la mujer dentro de la ciencia criminológica ha provocado la prevalencia de bases epistemológicas y metodologías fundamentalmente androcéntricas así como la presencia de investigaciones empíricas donde se hace mayor énfasis en los hombres. Además, el tratamiento de los datos sin distinción de género o los hallazgos e inferencias parciales, a partir de la realidad masculina que pretenden ser generalizables, desembocan en teorías y explicaciones de la delincuencia que se ven afectadas por todo lo anterior, ofreciendo respuestas etiológicas que se ajustan sobre todo a la situación de los hombres.

Autores como Belknap y Holsinger (2006), afirman que una de las grandes limitaciones existentes en los estudios criminológicos es la poca prioridad que se le ha dado al género en la etiología de la delincuencia.

Sin embargo, a nivel mundial, nos encontramos ante un panorama en el que se ha producido un aumento considerable de mujeres que se encuentran en establecimientos penitenciarios (Briseño, 2006; Corda, 2011; Fleetwood, 2011; Giacomelo, 2013).

Gráfica 1

Evolución de la población reclusa penada en la última década



Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Teniendo en cuenta las cifras de nuestro Sistema Penitenciario, en el año 1995 eran 2.618 las mujeres que se encontraban en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, mientras que en diciembre de 2014, la cifra asciende a 4.343, aunque debemos matizar que en los últimos años el número de mujeres penadas permanece estable (ver Gráfica 1).

En el año 2008, coincidiendo con el comienzo de la crisis económica de nuestro país, se produce un pico que comienza a descender en los años posteriores, este aumento se identifica de un modo más claro en el caso de los delitos cometidos por varones.

Tabla 2

Tipología delictiva de la población reclusa penada. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal. Noviembre 2014

	Hombres	Mujeres	Total
Homicidio y sus formas	2.925	235	3.160
Lesiones	2.186	152	2.338
Contra la Libertad	627	34	661
Contra la Libertad Sexual	2.579	47	2.626
Contra el Honor	0	0	0
Delitos y Faltas de Violencia de Género	3.514	4	3.518
Contra las Relaciones Familiares	206	13	219
Contra el Patrimonio y el orden socioeconómico	16.208	1.171	17.379
Contra la Salud Pública	10.220	1.544	11.764
Contra la Seguridad del Tráfico	1.145	25	1.170
Falsedades	687	70	757
Contra la Administración y Hacienda Pública	230	16	246
Contra la Administración de Justicia	604	89	693
Contra el Orden Público	1.940	132	2.072
Resto de Delitos	587	58	645
Por Faltas	55	15	70
No Consta Delito	49	3	52
Totales	43.762	3.608	47.370

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La Tabla 2, referida a los datos relativos a hombres y mujeres reclusos penados en el marco de la Administración General del Estado nos muestra que las diferencias cuantitativas entre ambos géneros son notables. Los delitos más representados son los que van en contra de la salud pública y contra el patrimonio y el orden socioeconómico, constituyendo en el caso de las mujeres el 75,24% del total y en el de los hombres el 60,4%. Los delitos contra la salud pública son los más comunes en las mujeres (42,79% frente al 23,35% de los hombres), los relacionados con el patrimonio y orden socioeconómico son más propios de los hombres (37,04% frente al 32,45% de las mujeres). Pero las mujeres también cometen delitos como el

homicidio y sus formas (6,51%), lesiones (4,21%) y contra el orden público (3,66%) y en cuanto a los hombres prevalecen delitos y faltas de violencia de género (8,02%), homicidio y sus formas (6,68%), contra la libertad sexual (5,89%) y lesiones (5%). Sin embargo, como podemos esperar, la mayor diferencia entre ambos grupos la encontramos en los delitos y faltas relacionados con la violencia de género.

Junto con Portugal, España es uno de los países europeos con la tasa más alta de mujeres presas, lo que no podemos explicar, como parecería obvio, por la mayor comisión de delitos en nuestro país, sino que son otras las causas que están en la base de esta realidad (De la Fuente y Martín, 2003; Cervelló, 2006; García-España, Becerra-Muñoz y Aguilar, 2012). Entre ellos, podemos destacar la ausencia de recursos sociales preventivos en el país, así como la escasa activación de medidas alternativas a la privación de libertad. Siguiendo a Wacquant (2000) son las políticas sociales y penales y su grado de desigualdad las que explican las diferencias internacionales entre índices de encarcelamiento.

Teniendo en cuenta los datos, creemos que se presenta necesario un análisis exhaustivo de la delincuencia femenina, de modo que se consideren sus especificidades, como pueden ser, entre muchas otras, la feminización de la pobreza, el contexto social o la maternidad.

A menudo se presentan cuestiones como ¿por qué los delitos de mayor gravedad son menos característicos en las mujeres? o ¿por qué son menos propensas a liderar grupos criminales?, cuestiones que no son respondidas en su totalidad por las teorías criminológicas.

Uno de los primeros aportes a nivel internacional de las explicaciones teóricas de la delincuencia femenina establece una relación entre los movimientos de liberación de la mujer y su conducta delictiva (Adler, 1975). Esta asociación nos presenta que la mujer, al ser más autónoma y participe en mayor medida en la vida pública, incrementa sus tasas delictivas. Sin embargo, la realidad demuestra que las tasas delictivas de hombres y mujeres siguen presentando diferencias significativas, por lo que estas teorías fueron progresivamente cuestionadas y rechazadas (ver Chesney-Lind y Pasko, 2004).

En este sentido, en los últimos años, se ha producido un número importante de estudios que han examinado los factores de riesgo/protección que estarían involucrados en la delincuencia y la conducta antisocial de uno y otro género (Moffitt et al., 2001; Storvoll y Wichstrom, 2002; Farrington y Painter, 2004; Belknap y Holsinger, 2006; Fagan et al., 2007; Lanctôt, Cernkovich, y Giordano, 2007; Booth, Farrell, y Varano, 2008).

Ciertas investigaciones sugieren una gran cantidad de coincidencias en cuanto a los delitos femeninos y masculinos de menor gravedad, sosteniendo que los modelos explicativos tradicionales podrán explicar las causas de ambos sexos, aunque únicamente en lo que se refiere a delitos menores (Moffitt et al., 2001); sin embargo, otros autores, como Belknap y Holsinger (2006) presentan que los factores de uno y otro género son totalmente diferentes y hacen alusión a los desiguales procesos de socialización.

Rutter, Giller, y Hagell (2000) afirman que la escasez de estudios sobre este tema no nos permite establecer conclusiones irrefutables acerca de la relación género-delincuencia; bien es cierto que estos mismos autores sostienen que, en función de la poca literatura al respecto, son mayores las evidencias de similitudes que de diferencias en función de esta variable.

Farrington y Painter (2004), por su parte, señalan que todavía nos encontramos ante una insuficiente evidencia con respecto a aquellos factores que puedan generar conducta antisocial en los hombres, por lo que tampoco podremos constatar si estos factores son semejantes o no a los que intervienen en la conducta femenina. Ambos investigadores hacen una aproximación a los factores de riesgo que pueden ser comunes en los dos grupos: bajos ingresos familiares, familias numerosas, criminalidad paterna, conflictividad escolar, conflicto parental, separación de los padres, disciplina parental excesivamente dura o errónea o escasa supervisión por parte de los padres, señalando, además, que estos factores pueden afectar en mayor medida a las mujeres que a los hombres. En este estudio, enmarcado en el *Cambridge Study in Delinquent Development*, se concluye que, mientras las características de los padres son más influyentes para los varones, los factores socioeconómicos y de crianza, influían más en las mujeres.

Cecil (2006) destaca una serie de problemas en los trabajos que tratan de determinar si las teorías criminológicas se podrían aplicar, en cualquier caso, a las

mujeres. De este modo, afirma que las mujeres que forman parte de estos estudios se añaden al análisis como seres sin género o como si fueran hombres, denominando este método como el del “género añadido”. Así, podremos observar cómo el género afecta a la delincuencia pero no podremos ver cómo los factores relacionados con la delincuencia afectan, de distinto modo, a los hombres y a las mujeres, hecho que limita los estudios en este campo y nos puede proporcionar una imagen distorsionada ya que se parte de que ambos sexos experimentan vidas similares.

Por ello, se presenta necesario un claro avance dentro de las diferentes perspectivas en las que se basan estas investigaciones, lo que, siguiendo a este autor (2006, pp.172-173), significa “considerar las diferencias de género y el modo en que estas diferencias de género modifican el impacto de los factores criminógenos”.

La distinta consideración del delito entre hombres y mujeres constituye un enfoque relativamente nuevo en este ámbito pero realmente necesario de cara a esclarecer vacíos que nos encontramos en el estudio de las teorías que tratan de explicarlo. Así, para Garrido et al. (2006, p.419), el género como factor estructural divide la vida social en dos maneras diferentes de afrontarla e interpretarla: la de las mujeres y la de los hombres:

“...en Criminología el género no puede seguir siendo considerado una variable más (del mismo nivel que la educación, la familia, la inteligencia, etc.) a la hora de estudiar la delincuencia (...) el género constituye un factor estructural, que divide la vida social en dos maneras distintas de afrontarla e interpretarla: la de las mujeres y la de los hombres”.

Tal y como expone Miralles (1983, p.123), “en la biología criminal la explicación de la delincuencia de la mujer ha incidido en las características propias que se han atribuido a la esencia de lo que es femenino para, a partir de ello, constatar la “rareza femenina” de la mujer delincuente”, de este modo, la ausencia de alguna característica propia del género femenino, sería la causa de un comportamiento delictivo. Además, Juliano (2009) apunta que el delito está pensado para el género masculino, considerado como autónomo y responsable de sus actos, mientras que las mujeres que delinquen tienden a verse como inducidas por otros y el delito es visto como testimonio de su debilidad que, en muchos casos, se relaciona con temas religiosos o moralistas del pecado, implicando, por lo tanto, una falta contra las leyes humanas y contra la naturaleza.

En definitiva, para Romero y Aguilera (2002) se pueden resumir en dos las tesis que predominan a la hora de explicar la delincuencia femenina: por un lado, la defensa de que las mujeres delinquen menos que los hombres, basándose en teorías de contenido principalmente biológico; y, por otro, la afirmación de que ellas delinquen en la misma medida que los hombres pero reciben un trato de “caballerosidad” en su procesamiento.

Esta tesis de la caballerosidad sostiene que el menor índice de mujeres encarceladas se debe a un trato benévolo por parte de las instituciones competentes para la persecución penal y la correspondiente discriminación en la sanción. Además, señala que las cifras de criminalidad femenina están aumentando, no porque la mujer cometa más delitos, sino porque los administradores de justicia, como policías y jueces, han dejado en sus actuaciones a un lado la caballerosidad en los casos relacionados con la mujer (Stenglein y Sánchez Bayon, 2012).

Continuando con estas premisas, tratamos a continuación de analizar las principales teorías que han intentado explicar la delincuencia femenina.

2.3. La explicación de la delincuencia femenina: las principales teorías

Aunque es complicado estructurar un esquema único que recoja los diferentes enfoques explicativos de la delincuencia de las mujeres, seguiremos el que predomina en la criminología científica que recoge una exposición que va desde lo individual a lo social (ver Clemente, 1987; Canteras, 1990; Lorenzo Moledo, 1997). El supuesto de partida de esta clasificación considera que cada teoría presenta cierta vinculación con factores biológicos, psicológicos y sociológicos. De todos modos, siguiendo a Garrido et al. (2006), las formulaciones teóricas más modernas interrelacionan diferentes elementos tanto biopsicológicos como sociales ya que existe un acuerdo mayoritario en que la conducta delictiva no podrá entenderse si no se atiende a diferentes factores tanto de la propia persona como del contexto social. Así, comenzaremos con aquellas teorías basadas en explicaciones individuales como son las de contenido biológico, que tratan de explicar la delincuencia a partir de variables bioantropológicas, endocrinológicas o genéticas; las de contenido psicoanalítico, y las que presentan explicaciones psiquiátricas. Seguimos con las teorías intermedias, que se centran en el individualismo con proyección social. Por

último, las teorías de carácter social, diferenciando entre un enfoque más funcionalista y un enfoque crítico.

2.3.1. Teorías basadas en explicaciones individuales

Entre las teorías que tratan de explicar la delincuencia femenina desde una perspectiva centrada en aspectos individuales destacamos, en primer lugar, aquellas que tienen un corte biológico; en segundo lugar, las que presentan un contenido psicoanalítico; y, en tercer lugar, las que han intentado dar respuestas por medio de la psiquiatría.

2.3.1.1. Explicaciones de contenido biológico

Podemos distinguir tres teorías que muestran un corte biológico: aquellas que tratan de explicar la delincuencia por medio de explicaciones bioantropológicas, las que definen la delincuencia como consecuencia de efectos endocrinos secundarios como el desarrollo sexual y la delincuencia catamenial y, por último, las que se basan en influencias genéticas. Tratamos, ahora, de explicar cada una de ellas.

a) Explicaciones basadas en anormalidades bioantropológicas

Los máximos exponentes de estas explicaciones son Lombroso y Ferrero que defienden la idea del delincuente nato que se caracteriza por la insensibilidad moral, la precocidad antisocial, la vanidad, la imprevisión y la incorregibilidad (Herrero, 1988). Sin embargo, aunque observan que el grado de evolución de la mujer es inferior al del hombre, no se encuentran criminales natos entre ellas. De este modo, llegan a la conclusión de que las mujeres delincuentes presentaban pocos signos de degeneración porque habían evolucionado menos que los hombres (Clemente, 1987).

Este bajo nivel de evolución incapacita a la mayor parte de las mujeres para delinquir, justificándose de este modo, la baja tasa a la que nos referimos.

Así, en su teoría del atavismo criminal, Lombroso hizo una clasificación de los tipos de delincuentes donde no se presentan diferencias entre hombres y mujeres aunque, siguiendo a Pollock (1977), algunos tipos se manifiestan de forma predominante en la mujer:

- El criminal nato: sus características se manifestarán en menor medida en el caso de las mujeres que en el de los hombres a causa de las diferencias biológicas y constitucionales.

- El criminal ocasional: posee pocos rasgos degenerativos o ninguno. Se defiende que, por lo general, la mujer delinque por sugerencia de un hombre.
- El criminal histérico: suelen presentar características esquizofrénicas, cambios de humor... aunque las mujeres comportan un porcentaje muy bajo, se incluirán aquí los crímenes pasionales.
- El criminal lunático: no tienen conciencia de sus actos, no son racionales y se manifiesta más en el caso de las mujeres.
- El criminal epiléptico: patología que no se da mucho entre los criminales.

Desde esta teoría se presentan tres características que definen a la mujer: la inmovilidad fisiológica y pasividad psicológica, una capacidad de adaptación superior al hombre y el hecho de constituirse como un ser amoral, frío y calculador.

Así, la criminalidad femenina resulta de un comportamiento masculinizado, aparece definida por una anormalidad tanto biológica como social. En este sentido, podemos destacar la frase de Lombroso y Ferrero: “por ser una doble excepción, la mujer criminal es un monstruo” (Canteras, 1990, p. 59).

Por su parte, Raffaele Garofalo y Enrico Ferri, quienes, junto a los anteriores, se consideran los máximos representantes de la Escuela positivista italiana, también reconocen la predisposición biológica del delito aunque aceptando factores de tipo social exógenos al delincuente (Herrero, 1988).

- b) Explicaciones basadas en efectos endocrinos secundarios: desarrollo sexual y delincuencia catamenial

Esta teoría analiza los efectos que causa la conformación hormonal sobre las emociones. Explica que la mayor agresividad del hombre se produce porque posee más hormonas andrógenas (Gray, 1970). Las hormonas femeninas segregan estrógenos y progesterona, que conlleva un comportamiento menos agresivo.

Para explicar la delincuencia de la mujer se ha mostrado especial atención a la psicopatología experimentada en la conducta durante las crisis biológicas propias de su sexo y a la conducta durante la crisis catamenial.

En cuanto a las crisis biológicas tales como la pubertad, la maternidad y el climaterio, los autores que defienden esta postura consideran que la debilidad en el

psiquismo femenino durante estos períodos puede incrementar la actividad delictiva (ver Gibbens y Prince, 1962; Heuyer, 1968).

También se ha estudiado la delincuencia femenina relacionada con el ciclo menstrual, considerando la crisis catamenial causa directa de la misma. En este sentido, el doctor Villalaín Blanco (1980; cit. por Canteras, 1990, p. 62) señalaba la frecuencia con que se producen suicidios entre las mujeres menstruantes así como la comisión de hurtos, robos e incendios, señalándolos como delitos típicos de esta crisis menstrual, además de la predisposición de éstas a la prostitución, debido a la exaltación de su lívido, unido al hipererotismo premenstrual y menstrual que experimentan algunas mujeres. Son muchos los autores defensores de esta teoría, entre ellos cabe destacar a Hentig (1946), Exner (1946) y Deutsch (1952) a quienes, siguiendo a Canteras (1990, p.61), se le atribuyen afirmaciones tales como “la menstruación lleva consigo desavenencias y estímulos que pueden conducir a actos fuera de cuyo estado la mujer nunca hubiera caído” o “es un hecho bien conocido que los impulsos agresivos se intensifican durante la menstruación, observándose muchas veces que la agresión intensificada puede volverse contra el propio individuo e inducirle al suicidio”.

Se ha llegado a señalar que durante la fase premenstrual, la mujer roba de una forma compulsiva, excitándose sexualmente al manipular los objetos robados (Gibbens y Prince, 1962).

c) Explicaciones basadas en influencias genéticas

La idea de que la genética es la responsable de los comportamientos criminales ha gozado de amplia popularidad a lo largo del tiempo. Ellis (2005) clasifica los estudios en este ámbito en cuatro categorías:

- Estudios de familias. Su objetivo es analizar si la delincuencia se transmite genéticamente. Se trata de observar si los hijos de padres delincuentes cuentan con mayor probabilidad para delinquir que los hijos de los que no lo son.

- Estudios con gemelos, de hermanos gemelos monocigóticos y dicigóticos. Trabajos como el de Rowe y Osgood (1989), en Estados Unidos, pretenden afirmar que el índice de delincuencia de los gemelos monocigóticos es más alto que en los dicigóticos. Investigaron a 61 parejas masculinas y a 107 femeninas gemelas monocigóticas, así como a 38 masculinas y 59 femeninas dicigóticas. Para estos autores hay tres factores responsables para el desarrollo de un comportamiento criminal:

- El componente genético corresponde a la variación en los tipos genéticos individuales, que determina la variación del comportamiento.

- El componente ambiental por definición incorpora todas las otras influencias que pueden operar para cada miembro familiar sea similar al otro.
- El componente ambiental especial por definición señala que las influencias unifican cada miembro familiar.

- Estudios cariotípicos. Estudios basados en las diferencias cromosómicas, defendiendo que parecen mostrar una mayor predisposición al delito aquellas personas que tienen más de 47 cromosomas y, el hombre, al poseer el cromosoma Y muestra una mayor agresividad.

- Estudios sobre adopción. En estas investigaciones se añade el control de las posibles influencias medioambientales que en los casos anteriores no se tienen en cuenta. Con estas consideraciones, Mednick, Gabrielli, y Hutchings (1984), encontraron sugerencias de la predisposición genética que puede existir en el delito pero llegaron a la conclusión de que es más fácil que se produzca en determinadas condiciones medioambientales.

Son numerosos los autores que desechan estas teorías como explicativas de la delincuencia, afirmando que carecen de respaldo científico y empírico. Parafraseando a García Pablos (2000, p. 341) cabe decir que “estadísticamente no cabe asociar significativamente tasas relevantes de comportamiento desviado a cualquier suerte de patología individual”. Además, las tasas masculinas y femeninas de delincuencia siguen parámetros de ascensos y descensos paralelos a lo largo de la historia, de forma que las teorías biológicas podrían descartarse al no presentar, las mujeres, cierta estabilidad delictiva.

2.3.1.2. Explicaciones de contenido psicoanalítico

La Teoría del Psicoanálisis de Freud defiende que la mujer delincuente es anormal porque, desde un punto de vista biológico, muestra una agresividad propia del varón y, desde un punto de vista psicológico, le falta el desarrollo total y equilibrado del ego; señalaba que “la mujer delincuente es un ser anormal tanto biológicamente; por el único hecho de practicar agresividad que solo es dable al varón, y de ser mujer y carecer de los atributos sexuales masculinos, lo cual parece ser que representa para ella un alto grado de frustración; como psicológicamente, por presentar cierta falta de desarrollo total y equilibrado de su “ego” (Yagüe, 2002). Este equilibrio únicamente lo conseguirá gracias a un ambiente armónico

en su papel de esposa y madre; es decir, debe asumir el rol que la sociedad le atribuye, de forma que, si no lo hace, la mujer padece una anormalidad biológica o psicológica que genera una virilización de la conducta impropia de su sexo, lo cual le propiciará una gran frustración.

El modelo psicoanalítico se caracteriza por tratarse de un modelo psicodinámico que responde al determinismo biológico, concediendo gran importancia al instinto sexual. Defiende que todos los conflictos están en el inconsciente o subconsciente del individuo como medio necesario para explicar el comportamiento. El delito no tiene un sentido en sí mismo, sino que sería una respuesta simbólica, sería el modo de exteriorizar determinados traumas o conflictos que permanecen a un nivel inconsciente. De este modo, el delito, no sería una conducta consentida.

Freud relaciona el complejo de Edipo y la neurosis. Para el pensamiento freudiano el complejo de Edipo es muy significativo para el componente criminológico, porque muestra el castigo como la forma de aliviar la culpa de la neurosis manifiesta (que es el resultado de una mala estructura mental).

Es decir, el destino de la mujer es el de ser una buena esposa y madre puesto que pertenece a un sexo imperfecto. Centra su teoría en la “falta de pene”; afirmando que la mujer asume esta pérdida como un castigo, hecho que le produce un trauma, provocando que vaya creciendo en ella la envidia y la venganza (llegando a defender que las mujeres quieren tener hijos para reemplazar el pene que les falta por un niño).

Tacha a las mujeres de exhibicionistas, narcisistas y masoquistas, afirmando que su placer sexual consiste en el dolor, poseyendo un rol sexual receptor. Estas mujeres serían las “normales o sanas” mientras que la mujer que se parece al hombre, rebelde y agresiva, tendrá una personalidad desviada y señala que estas cualidades la hacen volverse neurótica. Se considera que la naturaleza ha destinado a las mujeres a ser bellas, encantadoras y dulces, condiciones contrarias tanto al varón como a la mujer delincuente (Freud, 1934).

La mujer debe responder a su papel social, aquel que se le ha asignado, es decir, sumisa, inferior, estable, acrítica, familiar..., y en el momento que su forma de comportarse no coincide con este rol, es cuando ésta padece algún tipo anormalidad biológica o psicológica, generando una “virilización”, una intrusión de su actitud en el rol masculino. De ahí la consideración de la mujer delincuente

como un ser carente de sus más elementales principios femeninos y afectada socialmente de una patología criminal que la lleva a un comportamiento “masculinizado”.

Ferracuti y Newman (1977), por su parte, señalan que la mujer delincuente se considera como un ser carente de sus más elementales principios femeninos y afectada socialmente de una patología criminal que la lleva a un comportamiento masculinizado.

Siguiendo a Garrido et al. (2006, p.337), las asunciones básicas del psicoanálisis en relación a la delincuencia son:

- Cada persona se desarrolla en una serie de etapas fundamentales en el desarrollo sexual.
- En algunos casos se producen anomalías que crean un conflicto dentro del desarrollo de la personalidad, especialmente en la preadolescencia.
- Estos conflictos surgen de la interacción entre los impulsos derivados de los instintos y las imposiciones sociales.
- Los conflictos son dolorosos para la consciencia del individuo y empujados al inconsciente.
- Como consecuencia de los intentos para manejar estos conflictos se desarrollan mecanismos de defensa que pueden llevar a disfunciones de la personalidad entre los que puede estar la conducta delictiva.

En definitiva, la mujer delincuente es la que intenta ser un hombre; si a estas mujeres no se les trata terminarán siendo neuróticas. El tratamiento irá dirigido a que se ajusten al rol propio de su sexo. El énfasis, una vez más, se centra en cambiar a la mujer para que se adapte y se acomode a los deberes que la sociedad le atribuye como madre y mujer.

2.3.1.3. Explicaciones de contenido psiquiátrico

La psiquiatría también ha tratado de explicar la delincuencia femenina considerándola bajo parámetros de salud mental. Así, estas teorías analizan la criminalidad femenina desde una perspectiva individual y desde una perspectiva social.

Desde la perspectiva individual se afirma que las mujeres delincuentes padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental. Miralles (1983) nos señala cinco estudios basados en esta postura:

- El de Glover, realizado en 1957, referido a la psicopatología de la prostitución. En este trabajo se llega a la conclusión de que en estas mujeres existe una actitud de enfado con sus padres y de relación hostil hacia la madre, lo cual se asocia con la formación homosexual inconsciente que se presenta en la prostitución.

- Gibbens, en 1971, concluye que las mujeres delincuentes están más deprimidas que los hombres presentando síntomas determinados como son las fobias.

- Guze, en 1976, encontró entre las mujeres pertenecientes a la muestra de estudio, que un 65% presentaba sociopatías, el 11% ansiedad neurótica, el 1,5% esquizofrenia y el 26% drogadicción, entre otro tipo de características.

- Barack y Widen, en una investigación llevada a cabo en 1978, detectaron un alto porcentaje de mujeres que presentaban neurosis y psicosis tras el pase del cuestionario de personalidad de Eysenk a mujeres preventivas.

- Por último, en el estudio de Prins, de 1980, se afirma que la mujer, debido a su relación traumática con su padre, presenta elementos psicopatológicos más marcados que los hombres.

Por su parte, Eysenck y Eysenck (1987), en su Teoría de la condicionabilidad del delincuente, defiende que el comportamiento se adquiere por aprendizaje, con la intervención del sistema nervioso central, y por condicionamiento, dirigido por el sistema nervioso autónomo, de forma que una conducta delictiva es consecuencia de un mal aprendizaje de las normas sociales de forma condicionada (Echeburúa, 1991).

Sin embargo, desde la perspectiva social se explica la delincuencia femenina en base al trato diferencial de hombres y mujeres por parte de los sistemas de control, asociando este hecho con la enfermedad mental de las

mujeres, lo que hace que éstas ingresen en mayor medida, en hospitales psiquiátricos. Según esta perspectiva, las mujeres son tratadas de forma más estricta por parte de las instituciones de control tanto formales como informales, de modo que, al tener más complicado rebasar los límites de las instituciones informales tales como la familia o la escuela, se reducen las opciones de acceso a las instituciones formales como son los centros penitenciarios, lo cual explicaría su baja tasa de presencia en prisión (Canteras, 1990).

2.3.2. Teorías intermedias

Tras tratar explicar la delincuencia únicamente desde el punto de vista biológico, nos centraremos, a continuación, en las Teorías Intermedias, que están basadas en el individualismo con proyección social. Es decir, partiendo de lo individual han ido tendiendo hacia consideraciones sociales o, partiendo de éstas, han conservado su perspectiva individualista.

Destacamos, en este grupo, tres grandes teorías en las que nos centraremos a continuación:

- La teoría liberal-funcionalista de W.I. Thomas.
 - La teoría de Otto Pollack.
 - El retorno de la perspectiva biologicista de V. Cowie, E. Slater y J. Cowie.
- a) La teoría liberal-funcionalista de W.I. Thomas

Esta teoría parte de una perspectiva biologicista pero admite la influencia de factores psicosociales y socioestructurales. Sostiene que la mujer se encuentra en un nivel de evolución inferior al hombre pero busca las razones en la imperfecta canalización de la mujer para realizar sus peculiares instintos biológicos. Destacan la importancia del período de socialización familiar en el proceso de integración social. Desde este enfoque se ampara la idea de que la mujer puede curarse a través de un tratamiento individualizado.

W. I. Thomas rechaza gran parte de las tesis biologicistas, introduciendo la discusión sobre herencia-medio, además, trata de acentuar el papel socializador que posee la familia, ya que ésta, puede ser la culpable de la mala canalización por parte de la mujer de determinados instintos biológicos como son la ira, el miedo, el amor y el poder. Aunque señala elementos de carácter psicosocial, no deja a un lado los

fisiológicos, admitiendo que la mujer se encuentra en un estadio de evolución inferior al hombre (Clemente, 1987; Canteras, 1990; Lorenzo Moledo, 1997).

La mujer, ayudada por el proceso de maternidad, tendrá más posibilidades para materializar sus instintos amorosos, de ahí que tenga más capacidad para dar y recibir amor que el hombre, hecho que, según Thomas, explicará la prostitución, siendo ésta, consecuencia de una discordancia entre la conducta adoptada y los valores sociales dominantes, de forma que el hecho de dar y recibir amor se caracteriza por la falta de control. Sus afirmaciones conducen a pensar que la única forma de delincuencia por parte de la mujer es aquella relacionada con actos sexuales, lo cual se puede explicar por la generalizada mentalidad de su época, en donde priman los valores de pureza y moralidad (Canteras, 1990).

En cuanto al papel que representa la familia en este contexto, se trata de un rol socializador. Al perder la unidad familiar tradicional, la mujer se encuentra en una situación caracterizada, por un lado, por la pérdida del marco adecuado para controlar su instinto amoroso, y, por otro, por la desaparición del rigor sancionador de la familia ya que se ve inmersa en el desajuste de las instancias públicas de control. En su obra *The Unadjusted Girl* (1923), Thomas señala la importancia de la desestructuración del modelo de familia tradicional introduciendo, además, el deseo, cuya necesidad lleva a la mujer a cometer delitos y, concluye que la mejor forma de que las mujeres no cometan delitos es que asuman la situación que les ha tocado vivir como tales (Durán, 2008).

De este modo, al contrario que las teorías biologicistas, en este caso, la mujer podrá reconducirse si se canalizan sus instintos amorosos a través de algún sistema de control externo, que podrá ser, en el mejor de los casos, la familia.

Esta teoría fue severamente criticada por Smart (1976), quien señala que el hecho de establecer como factor criminógeno la pérdida de los valores femeninos y familiares podría derivar en sentencias más severas para las mujeres.

b) La teoría de Otto Pollack

En este caso también se parte de la inferioridad de la mujer ante el hombre, caracterizando a éstas como astutas, falsas y vengativas. Las desigualdades biológicas se manifiestan en ella durante las crisis relacionadas con su desarrollo sexual (pubertad, maternidad y climaterio). De este modo, las conductas delictivas por parte de la mujer durante el período premenstrual se deben a ese sentimiento de inferioridad que provoca

un deseo de venganza (Canteras, 1990). Aunque, al igual que en el caso anterior, Pollack tiene en cuenta también factores sociales.

Este autor sostiene que las mujeres no son seres desprotegidos, puros y dulces como aparentan, sino que actúan de ese modo, de forma que su comportamiento quedaría enmascarado bajo esa apariencia. Siguiendo este supuesto, la baja tasa de delincuencia femenina se explicaría por su favorable consideración social. Así, la mujer, recibe un trato más benévolo por parte de la policía, el poder judicial y las instituciones penitenciarias (Lorenzo Moledo, 1997).

También se la considera inductora de la criminalidad masculina. Su inferioridad le lleva a vengarse del otro sexo haciendo que el hombre ocupe el primer plano en la comisión de un delito. Además, la ofensa que puede producir el que un hombre sea victimizado por una mujer a nivel social provoca que éstas no sean denunciadas, hecho que, junto con el anterior, justificaría la baja tasa de delincuencia entre las mujeres.

Por otro lado, afirma que la mujer se caracteriza por la insidia y la falsedad derivadas de su pasividad sexual presentando una actitud diferente hacia la verdad (Clemente, 1987).

- c) El retorno de la perspectiva biologicista de V. Cowie , E. Slater y J. Cowie

Las teorías a las que nos referimos en este caso suponen un claro retroceso ya que sus principales representantes presentan a la mujer con una serie de anomalías físicas entre las que se encuentran ciertas afecciones del sistema nervioso central, tener un peso, o una altura superior a los que le corresponden o una mala salud física. Influyen también las condiciones precarias y la dificultad para acceder a los patrones de vida ideales representados por el modelo de vida de las clases medias. Defienden que el comportamiento criminal es un signo patológico, utilizando la llamada inteligencia defectuosa (Canteras, 1990).

De este modo, la conducta criminal constituirá una asociación entre las argumentaciones biológicas y sociales, lo que nos lleva a compararla con la Teoría Liberal Funcionalista de W. I. Thomas por las similitudes que llegan a presentar. Aunque el factor fundamental y desencadenante sea de carácter biológico, se examina desde una perspectiva funcional. Los problemas que se presentan en los hombres en función de su clase social no afectan en gran medida a las mujeres por

su carácter sino que esto se produce cuando ya existe una patología biológica en ellas.

Estos autores utilizaron las categorías de masculinidad, feminidad y cromosomas para explicar la razón por la cual la mujer delincuente es fisiológica y psicológicamente diferente a la “normal”, considerándolas más masculinas siendo ellas mismas las que rechazan su feminidad (Cowie, Cowie, y Slater, 1968). Sus investigaciones son criticadas ya que atribuyen al cromosoma Y el desarrollo de la virilidad (Smart, 1979). La masculinidad contiene una sensibilidad para recibir comportamientos divergentes, y, por tanto, la virilidad es necesaria para la delincuencia y la criminalidad. Así, se explica que la mujer delincuente tiene una estructura de cromosomas anormal.

Los investigadores, al no poder identificar la estructura de cromosomas de las mujeres y niñas criminales se remiten, para sostener su tesis, a los psicólogos que detectan en las mujeres delincuentes, repetidas veces, unos comportamientos masculinos.

Es decir, las mujeres solamente se vuelven delincuentes cuando, biológicamente, son anormales, o cuando una menor anormalidad se combina con factores ambientales, extremadamente estresantes (Smart, 1979).

2.3.3. Teorías de carácter social

Las teorías en las que nos centramos a continuación ponen su acento en el carácter social de la delincuencia, manteniendo enfoques funcionalistas, como la teoría del rol o la teoría de igualdad de oportunidades, y enfoques más críticos, como la teoría del control social o la teoría de la ley y de la dependencia económica. Siguiendo a Morant (2003), estos enfoques son los que han presentado mayores aportaciones en el análisis de la delincuencia femenina.

Rechazan el determinismo biológico centrándose en la diferente socialización de mujeres y hombres para explicar su conducta o en el control social por parte de las distintas instituciones formales.

Además, a partir de los años sesenta las diferentes teorías empiezan a verse influenciadas por los postulados del Movimiento de Liberación de la Mujer, investigándose la relación entre la delincuencia femenina y los cambios producidos en cuanto a los roles de género (Adler, 1975). Los cambios sociales que afectan a

la mujer como es su incorporación al mundo laboral y la actividad pública, dejando de limitarse exclusivamente al ámbito privado, hacen que surjan nuevos enfoques en este campo.

2.3.3.1. Enfoque funcionalista

a) Teoría del rol

Esta teoría se fija en la socialización diferencial entre hombres y mujeres a la hora de desempeñar sus roles y de explicar su conducta (Lorenzo Moledo, 1997). La mujer, por medio de la socialización, reproduce la imagen tradicional que se le ha atribuido, caracterizada por la pasividad y una actitud sumisa; por este motivo, los delitos cometidos conllevarán poca fuerza física. Podemos considerar que son los primeros intentos de situar este fenómeno fuera de explicaciones biológicas o psicológicas. Sostienen que el rol de la mujer como ama de casa y madre reduce sus posibilidades para poder cometer delitos. Su tiempo libre está muy reducido debido a las normas, las costumbres, la moral y la tradición, de forma que la actividad profesional en tanto que complementa el rol de ama de casa y madre, limita las ocasiones de delito.

Siguiendo a Weis (1982) podemos agruparlas en dos grandes corrientes:

- Teoría de la reversión del rol: Consideran que la mujer, como consecuencia de su ruptura con el rol social tradicional, se ha ido virilizando y se ha ido aproximando al rol del hombre. Estas teorías se sostienen reflejando la influencia del Movimiento de Liberación de la Mujer. El precursor de estas teorías, Hoffman-Bustamante (1973), sostiene que las mujeres cometen menos delitos al estar socializadas para ello por lo que, al separarse de sus roles habituales, mostrarán más conductas delictivas.
- Teoría de la convergencia de roles: Defienden que la aproximación entre ambos roles es la causa del acercamiento entre la criminalidad masculina y femenina. Estas teorías conforman un antes y un después en el análisis de la delincuencia femenina ya que a partir de éstas cambió la perspectiva de la investigación ya que son los primeros intentos de situar, científicamente, el fenómeno de la criminalidad fuera de las consideraciones biológicas o psicológicas, que habían sido predominantes durante décadas. Parten de la

base que los roles de género son diferentes abarcando aspectos como la socialización diferente de los sexos y la diversa expectación hacia los roles.

Por su parte, Balthazar y Cook (1984; cit. por Calhoun, Jurgens y Chen, 1993, p. 465) explican el aumento de delitos de las mujeres a través de tres argumentos: un mayor porcentaje de mujeres han comenzado a masculinizarse; el hecho de que algunas se encuentran entre un rol tradicional y un rol más activo; y otras, no son capaces de vivir acorde con sus expectativas de rol en la familia, escuela o grupo de pares.

Según estas teorías, las mujeres cometen pocos delitos porque han aprendido su rol femenino y se ven inmersas en un control muy estricto por parte de la sociedad educándose en una situación social protegida, de modo que no se les permiten comportamientos desviados. Es decir, los comportamientos criminales florecerán en el momento que la socialización no es asumida, o se asume de forma defectuosa, y ese control social fracasa.

Como vemos, estas teorías señalan que la mujer tiende a actuar como lo hace el varón por lo que existe controversia entre los autores que defienden las consecuencias en la criminalidad (Austin, 1981) y aquellos que niegan que exista dicho paralelismo, afirmando que no hay evidencias de que el abandono de las mujeres del rol estipulado para las mujeres esté ligado con una mayor y más violenta comisión de delitos (Crites, 1976; Smart, 1979).

Weis (1982) descarta las teorías de reversión del rol defendiendo las que se refieren a la convergencia. Para ello se basa en cuatro puntos: aunque cada vez exista un mayor número de delitos por parte de las mujeres, también se produce este aumento en los hombres, existiendo, en ambos sexos, una gran cantidad de delincuencia oculta; en segundo lugar, afirma que la gravedad de las acciones es mucho mayor en el caso de los varones; en tercer lugar, defiende que las mujeres no se ven envueltas en una gran cantidad de delitos, al contrario que los varones; y, por último, esta asociación entre delincuencia y conducta agresiva se observa en el caso del delito masculino y no en el femenino.

De todos modos, la tasa de criminalidad de mujeres y hombres, permanece estable a pesar de la mayor presencia social de las mujeres; por esta razón, Guerra y Lerma (1989), entre otros, le dan más importancia a factores educativos, de control social y de socialización.

b) Teoría de la igualdad de oportunidades

Los defensores de esta teoría señalaban que la mujer se encontraba en una situación de discriminación social, de forma que se producía una falta de oportunidades para delinquir en comparación al hombre. Esta falta de oportunidades viene dada por la escasa presencia femenina en las actividades sociales, económicas y laborales. Se insiste en la relación directa entre desarrollo económico, igualdad de oportunidades para la mujer y mayores tasas de criminalidad.

Esta teoría tiene su base en la “teoría de oportunidades diferenciales” desarrollada por Cloward y Ohlin, en donde se integran, la teoría mertoniana de la anomia, la teoría de la asociación o contactos diferenciales de Sutherland y Cressey y, por último, la teoría de la subcultura de Cohen (Canteras, 1990).

En cuanto a la Teoría Mertoniana de la Anomia, es necesario señalar que Durkheim es el primero en utilizar el término de la anomia para referirse al delito como “ausencia de normas” aunque no llega a desarrollar una teoría elaborada, siendo Robert Merton, quien sistematiza esta teoría. Merton define la anomia como la discrepancia que existe entre las metas del éxito y de prestigio social y los medios legítimos a disposición de los individuos para alcanzar esas metas, es decir, la anomia aparecerá cuando las metas de una cultura y la posibilidad de acceso de algunos grupos poblacionales a los medios necesarios para alcanzarlas se encuentran desligadas.

La necesidad de adaptación a esas metas se explica por el énfasis puesto en ellas por la cultura que, además, no propone metas alternativas que puedan ser satisfechas por las personas que se encuentren en situaciones de desventaja social. El propio Merton se marca como propósito fundamental descubrir cómo ciertas estructuras sociales ejercen presión sobre determinados colectivos para que sigan una conducta inconformista, centrando su hipótesis en que la conducta anómala puede considerarse como un síntoma de disociación entre las aspiraciones culturalmente prescritas y los caminos para llegar a ellas (Virgolini, 2004).

Villavicencio (1997) destaca tres postulados sobre los que se sostiene la teoría de la anomia:

- Las causas de la delincuencia no provienen de factores bioantropológicos ni es una situación patológica de la estructura social.
- La delincuencia es un fenómeno normal de toda estructura social.

- Únicamente cuando se hayan sobrepasado ciertos límites, este fenómeno debe tomarse como algo negativo para el desarrollo de la estructura social si está acompañado de un estado de desorganización en el que el sistema de reglas pierde valor.

La Teoría de la asociación o contactos diferenciales de Sutherland y Cressey (1924) se basa en que la conducta desviada se aprende y gran parte de los delitos se deben a la desorganización social. Siguiendo a García Pablos (1988), se resumen en nueve las ideas en las que se sustenta esta teoría:

1. La conducta criminal se aprende.
2. Se aprende en interacción con otros sujetos a través del proceso de comunicación.
3. La parte principal del proceso de aprendizaje se realiza en las relaciones más íntimas del delincuente.
4. Este aprendizaje incluye las técnicas de comisión del delito así como la orientación específica de móviles, impulsos, actitudes y racionalización de la conducta delictiva.
5. La dirección de los motivos se aprende a partir de las definiciones de los preceptos legales.
6. La persona llega a ser delincuente cuando las definiciones favorables a la violación de la ley superan a las desfavorables.
7. Las asociaciones diferenciales del individuo podrán ser distintas en función de la frecuencia, duración, prioridad e intensidad de las mismas.
8. El proceso de aprendizaje corresponde al de todos los mecanismos inherentes a cualquier proceso de aprendizaje.
9. Aunque el comportamiento delictivo se presente como una expresión de necesidades y valores, no puede explicarse como concreción de los mismos ya que también la conducta conforme a la ley responde a idénticas necesidades y valores.

La Teoría de las subculturas, por su parte, se centra en que la delincuencia es la solución de los jóvenes de clase social baja a una situación difícil en donde las oportunidades de mejora están cerradas. La subcultura es considerada como la cultura del grupo de clase social baja que presenta una serie de valores, normas y pautas contrapuestas a las de la sociedad general. Así, las características de la subcultura criminal serían (Solís, 1997):

- Oposición a los valores de la clase dominante.

- Maldad frente al sistema de valores de la sociedad.
- Variedad de conductas desviadas.
- Tendencia a la satisfacción inmediata de sus deseos.
- Formas de diversiones no provechosas según los valores dominantes.

Se dice que los medios ilegítimos no son igualmente accesibles para todos, destacando la importancia de la posición económica, el sexo, la raza, la edad o la personalidad para adquirir un rol conformista o no.

Cloward y Ohlin defienden que el hecho de adquirir un papel conformista o desviado no es algo fácil de conseguir sino que depende de una gran variedad de factores; de este modo, los recursos que están fuera de la ley no son accesibles de igual forma para todos (Curran y Renzetti, 1994). Así, la integración de la mujer en la esfera pública traerá consigo consecuentemente un aumento de su tasa criminal.

Figueira McDonough (1989) realiza una reformulación de esta teoría desde una perspectiva psicosocial, explicando que la integración de la mujer en la esfera pública implicará un incremento del nivel de sus aspiraciones, lo que será análogo a sus tasas de criminalidad ya que si una persona tiene altas aspiraciones pero no oportunidades para alcanzarlas será más propensa a la comisión de un delito. De este modo, las clases peor dotadas serán más proclives a delinquir (Serrano Tárraga y Vázquez González, 2006). Asimismo, este autor añade un nuevo aspecto a tener en cuenta, el grado de resistencia, por el cual, cada sujeto de forma individual, decide si se opone a mantener un comportamiento delictivo y defiende que este será un factor clave a la hora de tomar la decisión de cometer un delito.

Por otra parte, Adler (1975) explica el incremento de los delitos cometidos por las mujeres sosteniendo la tesis de la masculinidad, y afirma que ha surgido una mujer más dura, liberada, capaz de cometer crímenes violentos, que no son propios de su comportamiento (Del Olmo, 1998). Cuando las tasas de arrestos femeninos en los Estados Unidos ascendieron a valores que se empezaban a considerar alarmantes, Adler atribuyó los cambios en las tasas de arrestos de las mujeres a la tensión vivida por éstas en su lucha por la igualdad social y económica. Adler sostiene que de la misma forma que las mujeres demandan igualdad de oportunidades que los hombres en el campo del comportamiento ajustado al derecho, un similar número de mujeres está forjando su camino dentro del mundo delictivo. Otros autores, como Balkan y Berger, apoyan sus teorías llegando a la conclusión de que existe una clara convergencia entre 1960 y 1975

en las tasas de criminalidad de mujeres y hombres en cuanto a crímenes violentos de asesinato, homicidio sin premeditación o asalto agravado (Lorenzo Moledo, 1997).

También podemos señalar como defensores de estas teorías a Jensen y Rojec (1980), Austin (1981) o Gibbons y Krohn (1981). Austin (1993) realiza un estudio sobre la tendencia de la criminalidad femenina en dos grupos: entre 1965 y 1975 y entre 1975 y 1986, y se reafirma en sus conclusiones relativas a la convergencia de la tasa de criminalidad masculina y femenina. Además, señala que los análisis que rechazan esta convergencia contienen serios errores metodológicos.

Investigadores como McCord y Otten (1983) rechazan esa conexión entre el Movimiento de Liberación de la Mujer y la tasa de criminalidad. Tras realizar un estudio con alumnas de enseñanza secundaria y universitaria, concluyen que las que mantenían posturas profeministas no presentaban mayor propensión a tener actitudes agresivas que aquellas que se caracterizaban por tener ideas más tradicionales.

Autores como Simon (1975), Hoffman-Bustamante (1973), Weis (1982) o Smart (1979), entre otros, rechazan también la relación causal entre emancipación y conducta criminal. Así, Smart (1979) acepta un cierto incremento de la criminalidad femenina con respecto al varón pero no lo atribuye a esa relación sino que lo explicaría por medio de la percepción que los organismos de control tienen de la mujer y el incremento de sus oportunidades legítimas.

Por su parte, Canteras (1990) se basa en cuatro pilares para rechazar esta relación:

- Aunque la emancipación aumenta, la tasa relativa de criminalidad femenina, desciende.
- Desde el comienzo del Movimiento de Liberación de la Mujer, esa tasa de criminalidad relativa también ha descendido considerablemente.
- Entre 1975 y 1985, fechas en las que se han analizado estos datos, la tendencia es, también, descendiente.
- Teniendo en cuenta la coincidencia entre los períodos de crisis y el aumento de criminalidad por parte de las mujeres, se puede insinuar la incorporación de la mujer a la comisión de delitos en momentos económicos complicados.

2.3.3.2. Enfoques críticos

a) Teoría del control social

Este grupo de teorías explican la delincuencia femenina a través del control social ejercido sobre la mujer, es decir, la influencia que ejercen determinados elementos de la sociedad en la forma de comportamiento de sus miembros. Se habla de la expectativa que se tiene hacia la mujer por parte del Estado y de la Sociedad. De este modo, este control social ejerce un poder preventivo haciendo que la mujer no se involucre en delitos.

Debemos distinguir el control formal, que se refiere al ejercido por el Estado a través de las distintas estancias de control de la delincuencia (instancias policiales, judiciales, penitenciarias o clínicas), del control informal que sería la respuesta negativa que reciben algunos comportamientos que vulneran las normas sociales.

En España, destacamos a Miralles (1982; cit. por Canteras, 1990 p.78), para la que, tanto el control informal por parte de la familia, escuela, trabajo o sanidad, como el formal, conforman el rol que la sociedad asigna a la mujer.

Los sistemas de control irán siendo necesarios en función del fracaso del anterior, en caso de que el sistema informal llegue a frustrarse aparecerán los mecanismos formales para restringir cualquier ejemplo de conducta criminal. Si la familia y la escuela actúan como bases para asentar el rol de la mujer dentro de la esfera privada, no hará falta la actuación de estos sistemas formales. Este control reprime, impide, excluye y limita a las mujeres (Larrauri, 1994).

Así, se etiqueta la delincuencia femenina como cuantitativamente poca, debido a que los controles sociales introducen unos procesos de selección a favor de las delinquentes femeninas y fracasarían ante la criminalidad femenina oculta (Stenglein y Sánchez Bayon, 2012). Según esto, las estadísticas oficiales nos ofrecen un panorama de la delincuencia femenina totalmente distorsionado ya que únicamente representará a una parte de la misma. La ONU (1985) reconoce esta situación afirmando que las sanciones impuestas a las mujeres son de menor gravedad, existiendo, asimismo, un mayor número de suspensiones de condena, por ejemplo, a las mujeres embarazadas se les conmuta la pena capital, y constatan la existencia de diferencias en relación a la vida en prisión. Sin embargo, Miralles (1982), al contrario, defiende la hipótesis de que existe un montaje de control constante en todos sus ámbitos de actuación por lo que es

más complicado que llegue a las instituciones de control formal. Según esta teoría, una socialización no efectiva promueve la adhesión a grupos criminales.

Sutherland (1939), con su postura de la asociación diferencial, defiende que la posición social es una variable condicional para la criminalidad femenina. Este autor señala que la delincuencia es el resultado de un aprendizaje de ciertas conductas y valores criminales. De esta forma, a las mujeres se les enseña, en general, una visión positiva de las normas. Pero la posición, el lugar de residencia y la pertenencia a un grupo étnico pueden influir en esta visión. Al igual que los representantes de la teoría del *labelling approach* o teoría del etiquetado, postulan que las mujeres procedentes de clases más bajas y las que pertenecen a determinados grupos étnicos están sobre representadas en las estadísticas criminales, además de la sobre-representación de extranjeras. Atribuyen la causa de estas circunstancias al lugar de residencia y la falta de vigilancia por parte del ámbito social. Este es un argumento interesante teniendo en cuenta la realidad en los centros penitenciarios de nuestro país, en donde la cada vez mayor presencia de extranjeras es un hecho.

Una investigación llevada a cabo por Göppinger (1976), director del primer Instituto de Criminología en Alemania, concluye que de las más de mil bandas juveniles existentes en Chicago, solamente seis de ellas eran grupos de chicas y además, únicamente, uno de estos grupos demostró comportamientos criminales. Normalmente, las chicas se unen a bandas mixtas y su rol dentro de ellas es de subordinación. De este modo, no disponen de las mismas oportunidades que los chicos para aprender las técnicas criminales. Así se explica, en el seno de esta teoría, la causa de la menor delincuencia femenina con respecto a la masculina.

Teniendo en cuenta estas explicaciones, cabe decir que el origen del comportamiento criminal de las mujeres se basa en la socialización y en las posiciones sociales desiguales de las mujeres y de los hombres. Pero, también cabe deducir, que cuanto más se igualan las posiciones sociales, menor va a ser la diferencia entre ambos grupos en la tasa delictiva. Así, la emancipación de la mujer conllevaría una disminución del control social, posibilitando un mayor acceso a esas técnicas criminales.

Podemos hacer referencia a las teorías del control social informal, diferenciando entre las primeras formulaciones teóricas y la Teoría del Control Social o de los Vínculos Sociales de Hirschi (Garrido et al. 2006):

- Primeras formulaciones teóricas.

- Teoría de la contención de Reckless (1961): distingue entre dos tipos de factores que explican la delincuencia. De un lado, las presiones que incitan a los individuos a la conducta delictiva (presiones ambientales, incitadores ambientales e impulsos del propio individuo); y, por otro, los controles que los retraen de ella (internos de los individuos y externos de apoyo social). Según este autor, la probabilidad del comportamiento delictivo dependerá del equilibrio entre las presiones y los controles. Esta teoría explica factores que previenen la conducta delictiva pero no por qué unas personas los poseen y otras no.

Para que una persona delinca harán falta, de esta forma, una serie de elementos clave:

1. Los mecanismos de contención: mecanismos internos como la solidez de la personalidad, el grado de tolerancia a la frustración, o el hecho de contar con unas metas y proyectos definidos; y mecanismos externos, ejercidos por la sociedad.
2. Los mecanismos de presión criminógena: impulsos internos (inestabilidad, hostilidad...), presiones internas (pobreza, desigualdad...) e influencias externas (medios de comunicación, actitudes del grupo de iguales...)

Los mecanismos de contención están encargados de una labor de protección del sujeto frente a la potencial desviación de las normas y de la presión criminógena. Siguiendo a Agnew (2001), las personas son impulsadas a cometer actos delictivos a causa de estados emocionales negativos (ira, frustración o resentimiento), a lo que pueden responder adoptando diferentes soluciones comportamentales como la utilización de medios ilegítimos para lograr sus objetivos o evadirse de tal situación consumiendo drogas.

La probabilidad de que una persona mantenga un comportamiento delictivo va a depender del equilibrio entre las presiones internas y ambientales y los controles internos y externos contra el delito. Esta teoría señala los factores que previenen la conducta delictiva, sin embargo, no explica por qué unas personas poseen estos controles y otras no (Garrido et al., 2006).

- Teoría de la neutralización de Sykes y Matza: proponen que los jóvenes se hallan en un estado de deriva entre la vida convencional y la conducta delictiva. Según estos autores los valores convencionales aceptados por la mayoría de la población coexisten con otro tipo de valores que denominan “subterráneos” que

entran en conflicto con los convencionales como puede ser el amor al dinero, la búsqueda de aventura y peligro o la atracción por la agresividad. Defienden que las leyes son vulnerables en tanto que son susceptibles de neutralización, por medio de las que se refieren a frases que excusan o justifican el comportamiento contrario a la ley (Larrauri, 2000). Obtienen gran importancia las técnicas de neutralización, es decir, estrategias de justificación de determinada conducta. Estas técnicas se plantean que los delincuentes crean racionalizaciones mentales para neutralizar las normas sociales interiorizadas que entran en conflicto con su comportamiento antisocial. Así, distinguen cinco tipos:

1. Negación de responsabilidad: se refiere a la comisión de delitos por causas externas como el alcohol o las malas compañías. El delincuente rechaza su responsabilidad señalando que se encuentra empujado por las circunstancias.
2. Negación del daño: como puede ser el caso de la venta de drogas, en donde no existe una víctima concreta. El delincuente identifica sus acciones como prohibidas pero no como dañinas e inmorales.
3. Negación de la víctima: suele utilizarse en caso de venganza o violencia contra minorías étnicas, ya que la persona que comete el delito se siente también víctima de la situación.
4. Condena de los denunciantes: se rechaza todo tipo de autoridad desviando el foco de atención hacia los denunciantes.
5. Apelación a grandes lealtades: las presiones de los grupos a los que se pertenece pueden ser mayores que las de la propia sociedad.

Al contrario que en la Teoría de las Subculturas, en donde los valores sociales convencionales y los valores de la subcultura estaban separados, en este caso estarán interrelacionados ya que estos últimos forman parte de la cultura que predomina (Lanier y Henry, 1998).

Sykes y Matza se centran en comprender y describir las condiciones que hacen más probable que los jóvenes se encuentren en una situación en la que aparezcan diferentes factores que favorezcan la delincuencia (Vold, Bernard, y Snipes, 2002).

- Teoría del control social o de los vínculos sociales de Hirschi

Según Hirschi la existencia de vínculos afectivos con personas socialmente integradas constituye el principal elemento que retiene la implicación en actividades delictivas. Se trata de distinguir entre el control de fuentes externas al individuo (control social) y aquellas ejercidas por el propio individuo (autocontrol). Realza la importancia de los elementos de control informal que alejan al sujeto del delito, e identifica los contextos en los que se establecen tales vínculos sociales. Así, destaca como mecanismos de vinculación social o factores de protección ante el delito: el apego, el compromiso, la participación y las creencias (Lilly, Cullen, y Ball, 2010).

Los actos criminales se ven como un subconjunto de acciones en los que el actor ignora las consecuencias negativas a largo plazo que se derivan del acto en sí, desde el entorno social, familiar o del estado. Las acciones que comparten esta característica, incluidas las criminales, es probable que se lleven a cabo por parte de los individuos especialmente sensibles al placer inmediato e insensibles a las consecuencias a largo plazo. Además, la inmediatez de los beneficios del delito implica que no se requiera ninguna habilidad especial o aprendizaje y se explica por medio del autocontrol. Hirschi señala que la variación del autocontrol se establece en los primeros años de vida del individuo permaneciendo relativamente constantes en los años posteriores. También sugiere, en consonancia con la idea de autocontrol, que los individuos tienden a participar en (o evitar) una amplia variedad de comportamientos delictivos y análogos que no van a convertirse en comportamientos criminales más graves con el tiempo (Hirschi y Gottfredson, 1993).

El primero de los mecanismos de vinculación, el apego, nos mostrará el grado en el que una persona se siente comprendida y se muestra respetuosa; está muy ligado al concepto de la Asociación Diferencial de Sutherland. Se refiere a la sensibilidad de la persona hacia otros, y defiende que la aceptación de las normas sociales y el desarrollo de una conciencia social dependen del apego y del cuidado de los demás. De este modo, los padres y madres, así como los pares y la escuela son las instituciones sociales más importantes con las que se mantiene el apego; si no se mantiene en estos casos, será complicado mantener actitudes de respeto hacia otros que representen la autoridad.

El compromiso trata de asumir que el interés que tienen las personas se desestabilizará si se ven envueltas en actividades criminales ya que la organización de la sociedad es muy estable y puede peligrar la reputación o las expectativas que uno tiene.

Por su parte, con el concepto de participación, se afirma que muchos elegimos una vida conforme a la ley por no contar con oportunidades para hacerlo de otro modo; de esta forma, apartando a los colectivos más vulnerables del contexto en el que se encuentran e intentar que se mantengan ocupados, servirá de control social. Se parte de que si un sujeto está involucrado en actividades convencionales no tendrá tiempo para actividades ilegales.

Con el cuarto de los elementos, las creencias, Hirschi se refiere al sentimiento de que una serie de valores y normas cuentan con la aprobación social. Nuestras creencias necesitan el refuerzo social de forma constante sin que sean interiorizadas profundamente. De este modo, se presenta el supuesto de que no delinquimos porque sabemos que no está bien (Romero y Aguilera, 2002).

Hirschi (1969) sostiene que la ruptura de estos mecanismos pueden producirse principalmente en cuatro contextos de la vida de las personas: la falta de vinculación con los padres, con la escuela, con el grupo de iguales o con las pautas de acción convencionales. En la medida en que sean más fuertes los mecanismos que les unen a los contextos sociales, menor es la probabilidad de que lleven a cabo actividades delictivas. El mayor arraigo social conllevará una menor predisposición al comportamiento delictivo. Por lo tanto, si la mujer carece de estos factores como elementos clave para evitar el delito, será muy probable que se involucre en actividades fuera de la ley.

b) Teoría de la ley y de la dependencia económica

Este enfoque se centra en las diferencias entre las penas impuestas a hombres y mujeres por la comisión de un mismo delito. Dentro de esta teoría destacamos tres enfoques claramente diferenciados:

- A las mujeres les son aplicadas penas más benignas.
- A las mujeres se les imponen penas más duras.
- La justicia es imparcial en lo que se refiere al sexo.
- Se observa que existe una relación inversa entre el grado de dependencia económica de la mujer respecto a su esfera doméstica y el grado de dureza

de la pena impuesta en las sentencias dictadas a ellas (Heimer y Kruttschnitt, 2006).

Autores como Smaus (1990; cit. por Larrauri, 1992 p.195), señalan que el menor índice de mujeres encarceladas no obedece a que estas delincan menos sino a un trato más benévolo por parte de los jueces.

Kruttschnitt (1982) utilizó la técnica de la regresión múltiple para intentar determinar la disparidad de las sentencias pronunciadas en función de la dependencia económica de la mujer (a mayor dependencia económica mayor control social informal y menor control social formal y al revés). Sus resultados muestran que las mujeres dependientes reciben condenas menos duras que las que no lo son.

Por otra parte, Rottman y Simon (1975) señalaban que el trato favorable hacia las mujeres ha disminuido. Las desigualdades de género, dentro del comportamiento criminal, se reducen y la posición privilegiada de las mujeres se debilita. Este proceso es paralelo a la misma disminución de las desigualdades en otros sectores sociales, de forma que podemos interpretar este proceso como la reducción de prejuicios contra las mujeres y no como la disminución de privilegios femeninos. Sostienen que la criminalidad cometida por mujeres no ha ido aumentando sino que lo que ha aumentado es la persecución y la imposición de sanciones.

Sin embargo, ciertos autores consideran a la mujer más peligrosa que al varón porque no corresponde a su rol femenino; a las mujeres únicamente se les trata con caballerosidad si cumplen su rol femenino y se arrepienten de su comportamiento pero si se muestran reacias se las tratará con toda dureza (Visser, 1983).

La mujer puede recibir un mejor trato cuando el delito o situación personal responda a las expectativas de comportamiento femenino pero recibirá un trato más severo cuando este delito no sea considerado específicamente femenino o cuando ésta no se adecue a la imagen de mujer convencional. Además, en este trato, pueden influir variables legales no relacionadas con el género como puede ser el tipo de delito o la inexistencia de antecedentes penales (Larrauri, 1992).

La relación que se propone entre pena y dependencia económica nos lleva a relacionarla con el mayor o menor grado de control informal sufrido, de forma que

en donde el control social informal es menor, la acción de los Tribunales de Justicia viene a ejercer un mayor control formal suplementario al reforzar la dureza de la pena.

A modo de recapitulación, en el siguiente cuadro se presenta un resumen de las diferentes teorías que han tratado de explicar la delincuencia femenina.

Cuadro 2

Resumen de las Teorías explicativas de la Delincuencia Femenina

Teorías basadas en explicaciones individuales	Teorías de contenido biológico			
	Teorías de contenido psicoanalítico			
	Teorías de carácter social			
Teorías intermedias	Teoría Liberal funcionalista de W.I. Thomas			
	Teoría de Otto Pollack			
	Retorno de la perspectiva biologicista de V. Cowie, E. Slater y J. Cowie			
Teorías de carácter social	Enfoque funcionalista	Teoría del rol		
		Teoría de la igualdad de oportunidades		
	Enfoques críticos	Teoría del control social	Primeras formulaciones teóricas	Teoría de la contención de Reckless
				Teoría de la neutralización de Sykes y Matza
		Teoría del control social o de los vínculos sociales de Hirschi		
		Teoría de la ley y la dependencia económica		

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, cabe decir que las teorías que han tratado de explicar la delincuencia a lo largo de los años no han dado el mismo trato a la femenina que a la masculina, consecuencia, este hecho, de la desproporción estadística, lo cual no disminuye su valor como problema social y científico (Rodríguez, 2009). Además, la revisión bibliográfica llevada a cabo para la realización de este capítulo, nos muestra, desde diferentes perspectivas, la situación discriminatoria a la que se ha expuesto a la mujer que delinque.

Después de esta revisión de las principales corrientes teóricas que han intentado explicar la delincuencia femenina a lo largo de la historia cabe señalar que todavía queda mucho por recorrer. La búsqueda de una respuesta sistematizada que nos permita comprender este fenómeno sin partir de parámetros típicamente masculinos se presenta necesaria ya que, en muchas ocasiones, se trata de simples extrapolaciones a partir de modelos teóricos que han sido validados con muestras masculinas.





CAPÍTULO 3:

**MUJER, EXTRANJERA Y
DELINCUENTE. LA TRIPLE
DISCRIMINACIÓN**



CAPÍTULO TERCERO. MUJER, EXTRANJERA Y DELINCUENTE. LA TRIPLE DISCRIMINACIÓN

3.1. Introducción

En la última década del siglo pasado hemos sido testigos de cambios importantes en los flujos migratorios internacionales que se han recogido en informes elaborados por distintos organismos internacionales como EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities), OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), OIM (Organización Internacional para las Migraciones) o SOPEMI (Sistema de Observación Permanente de las Migraciones). En ellos se indica cómo la importancia que está adquiriendo este fenómeno no puede desligarse de las condiciones en las que se produce. La forma de entrada de los inmigrantes, la situación legal de llegada, las actitudes sociales y el discurso político predominante son factores que, junto a muchos otros, le confieren una mayor relevancia y, sobre todo, terminan por generar más tendencia a la exclusión que a la integración (Pajares, 2005).

El fenómeno de la inmigración ha sido una constante en la historia de la humanidad. No obstante, en la era de la globalización, se ha convertido en un asunto de especial trascendencia política, educativa, económica y social (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003a; Lorenzo Moledo y Lagares, 2009).

Los cambios en los procesos migratorios que se han venido sucediendo en estos años sitúan a la mujer en un lugar clave. Así, nos centraremos en analizar la feminización de los flujos migratorios en el contexto internacional. La nueva realidad ante la que nos encontramos, donde la mujer pasa a representar prácticamente el 50% de estos movimientos demográficos, hace necesario investigar sus características socioeducativas y sus proyectos migratorios para poder establecer pautas de intervención eficaces en aras a su integración en la sociedad.

Además, la invisibilidad de la delincuencia femenina por parte de la investigación educativa, se acentúa cuando tratamos de concretar los estudios de mujeres extranjeras que han cometido algún delito. El creciente aumento de la población inmigrante se está dando al mismo tiempo que el aumento de personas

extranjeras entre la población penitenciaria, lo cual, puede llevar a pensar en la relación entre ambas realidades. En este capítulo analizaremos cómo las cárceles son reflejo de la sociedad, por lo tanto, si España se está convirtiendo en un país multicultural, que se está proyectando en diferentes órdenes de su vida social, es comprensible que esto afecte también al ámbito penitenciario.

Por ello, nos centraremos en analizar el fenómeno migratorio en clave de género, realizando un breve recorrido por la evolución de las cifras de la inmigración femenina para, a continuación, analizar la presencia de la mujer extranjera en nuestras cárceles.

3.2. El papel de la mujer en los flujos migratorios

Es innegable que en los últimos años se ha producido y continúa produciéndose un cambio tanto cuantitativo como cualitativo cuando hablamos de los flujos migratorios femeninos. En el contexto mundial se han ido sucediendo una serie de transformaciones que han provocado la modificación de las características de las migraciones. Destaca, especialmente, cómo el peso de las migraciones femeninas es cada vez más representativo, de ahí que sea objeto de interés creciente (Lorenzo Moledo y Priegue, 2012). El mayor peso de las mujeres en los flujos migratorios se explica, en buena medida, por los cambios sociales ocurridos en las sociedades receptoras, sobre todo con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, provocando la transformación de las funciones de la familia tradicional, donde la mujer se centraba en el trabajo reproductivo.

Concretamente, en España se ha producido en los últimos años una importante transformación a propósito de nuestra participación en el sistema internacional de migraciones. Durante la mayor parte del siglo XX, nuestro país estuvo situado en la periferia política y económica del continente, por lo que predominaba precisamente la exportación de mano de obra a otros lugares con mayor desarrollo económico. El incremento de la población española y la puesta en marcha de intensos procesos de urbanización son los principales motores de los movimientos migratorios de esta etapa. Argentina, Brasil, Uruguay y Cuba fueron los destinos preferentes de los emigrantes españoles desde finales del Siglo XIX hasta mediados del XX (Peña Saavedra, 1991; Besalú, 2002; Lorenzo Moledo y Santos Rego, 2003).

La diversidad es la característica definitoria de la inmigración extranjera en nuestro país. Tengamos en cuenta que en España, buena parte de los inmigrantes proceden de países del Primer Mundo que, atraídos por el clima, se instalan en nuestras costas. Podemos hablar de concentración espacial en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y el archipiélago canario y balear, donde se encuentra el 80% de la población inmigrante. La población más envejecida es la que procede de Europa y América del Norte y la mayor proporción de niños viene de África y Asia (Colectivo IOÉ, 2000). Así, según datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2014, del total de 5.000.258 de extranjeros que se encontraban empadronados en nuestro país (10,7% de la población total), Cataluña contaba con el 21,71%, Andalucía con el 13,15%, la Comunidad Valenciana con el 14,65% y la Comunidad de Madrid con el 17,53%. En los municipios menores de 1.000 habitantes el 6,2% de la población es de nacionalidad extranjera; entre los municipios con más de 100.000 habitantes llega al 11,1% y el porcentaje más elevado (13,1%) se da en los municipios con entre 50.001 y 100.000 habitantes (INE, 2014).

La población más envejecida es la procedente de Europa, aquellas personas que vienen de Reino Unido tienen una media de edad de 52,5 años, seguidos de Alemania (48,8) y Francia (41,9). Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos marroquíes (28,6 años), pakistaníes (29,7) y chinos (29,8). Del total de extranjeros, el 58,4% tiene entre 16 y 44 años, el 15,9% tiene menos de 16 años y el 25,7% tiene 45 años o más (INE, 2014).

En este sentido, se distinguen distintos grupos de extranjeros atendiendo a una serie de criterios (Colectivo IOÉ, 2000):

- La mayor o menor distancia cultural: entrando en el terreno lingüístico diferenciaríamos entre los que tienen como lengua materna el castellano, los que utilizan lenguas de “prestigio”, como el inglés o el francés, y los que en origen hablan lenguas “desprestigiadas”.

- El tipo de vínculos históricos: el INE (2015) cifra en el 26,66% el porcentaje de inmigrantes que procede de países iberoamericanos.

- Criterios jurídico-administrativos: en función de su situación legal nos encontramos desde los nacionalizados hasta los que están en situación irregular,

pasando por los ciudadanos comunitarios o los no comunitarios con permiso de residencia y trabajo...

- Estructura y densidad de las redes sociales constituidas por los inmigrantes. El capital social, entendido en términos de redes de apoyo personal y social, es importante en la vida de los inmigrantes y ayuda a su integración social. Las redes son importantes porque generan vínculos de confianza entre personas de grupos minoritarios que tienden a confiar en sus comunidades y, de igual modo, compensan otras deficiencias.

- Criterios socioeconómicos: diferenciando entre los extranjeros que han acompañado a la inversión transnacional, los rentistas y jubilados del norte de Europa que viven en zonas turísticas, los trabajadores cualificados que deciden emigrar por las ventajas de ofrecerse en un mercado necesitado de esas cualificaciones, y, finalmente, los que vienen impulsados por el hambre o la persecución política, descualificados y que se emplean en trabajos precarizados. Este último colectivo es al que se le presta más atención desde las políticas públicas pero no es el único ni el más presente en nuestro país.

Los movimientos de la población que se vienen produciendo desde finales del S. XX expresan las diferencias entre Norte y Sur, incluyendo las violaciones de los derechos humanos que se producen en diferentes zonas geográficas (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2012).

En junio del año 2014, el número de mujeres que, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015), contaban con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en España alcanzaba la cifra de 2.317.263, es decir, casi el 50% del total de la inmigración registrada (4.634.526). Porcentaje que ha llegado a superarse, con creces, en algunos países como es Kenia, (82,09%), Nicaragua (78,75%), Guatemala (74,11%), Honduras (73,20%) o Paraguay (72,22%) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014). Sin embargo, según datos del INE (2015), los mayores registros femeninos son mujeres de nacionalidad rumana (397.735), marroquí (331.071) y ecuatoriana (105.860). Aun así, pese a la importancia numérica que éstas están tomando, continúan siendo poco consideradas tanto desde el plano de la investigación social, como también desde las políticas sociales. Las mujeres constituyen un sector especialmente sensible a las políticas que se desarrollan al respecto y su inclusión

obliga a variar los modelos de análisis usados y las estrategias diseñadas sobre el tema (Juliano, 2012).

De todos modos, siguiendo a Oso y Garson (2005), el énfasis puesto durante los últimos años por parte de diferentes investigaciones con el objetivo de visibilizar a las mujeres migrantes y reivindicar su rol autónomo hace que este fenómeno se pueda percibir como más acentuado de lo que realmente muestran los datos.

Aunque es obvio el cambio cuantitativo al que nos enfrentamos, en este apartado nos centraremos en los aspectos cualitativos que se derivan de la “feminización de las migraciones” ya que la mujer ha pasado de migrar como “dependiente familiar” por reagrupación a hacerlo de forma independiente. Estaríamos, pues, ante migraciones autónomas, es decir, fuera del contexto de las migraciones de reunificación familiar (Ribas, 2004; Lorenzo Moledo y Priegue, 2014).

Así, en el análisis de las causas de la emigración femenina deben ser introducidas nuevas perspectivas en las que se tenga en cuenta la autonomía de la mujer y su desvinculación del rol tradicional. Los cambios sociales que se están produciendo llevan a las mujeres a iniciar, por su cuenta, el proceso migratorio, buscando una mayor emancipación de sus roles tradicionales y tratando de lograr una mayor independencia y promoción social y profesional (Lorenzo Moledo y Priegue, 2012).

Para explicar este fenómeno es preciso destacar la influencia de los cambios demográficos y económicos que han tenido lugar en los países desarrollados, entre los que sobresalen el envejecimiento de la población y el gran número de personas mayores que viven solas, precisando ayuda doméstica; la mayor participación de la mujer en el mercado laboral; el crecimiento de hogares monoparentales que hacen imposible conciliar la vida laboral con la familiar; la tendencia a la dispersión geográfica de la familia; y la retracción del Estado de Bienestar en el marco de las corrientes neoliberales predominantes desde la década de los 80 (Adelantado y Moreno, 2005).

En este sentido, Parella (2005) remarca, como causa de esta feminización, la transferencia de las cargas reproductivas de las mujeres autóctonas más cualificadas que se incorporan al mercado laboral, necesitando a otras para que se ocupen del

trabajo doméstico. Se produce una transferencia de cargas reproductivas de las mujeres autóctonas que se han ido incorporando al mercado laboral en los últimos años y, en consecuencia, ceden el trabajo doméstico y familiar a las mujeres inmigrantes, en un sistema que, siguiendo a Flaquer (2005) no es capaz de responder a las nuevas necesidades y que carece de un diseño adecuado en cuanto a las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral y de servicios para las familias de carácter universal.

Este contexto da lugar a la “cadena mundial de cuidados”, como un sistema internacional de atención a las personas, estratificado en función de la clase social, e incluso del grupo étnico de pertenencia. Estas mujeres migrantes tienen, en buena parte de los casos, hijos o personas mayores que cuidar, pero esta responsabilidad deben transferirla a otras mujeres de la familia o incluso contratan a trabajadoras domésticas en el país de origen (Hochschild, 2000).

Todo ello ha dado paso a la demanda de mano de obra en el sector servicios y, más concretamente, en los servicios personales (trabajo doméstico, cuidado de niños y ancianos y trabajo sexual), quedando estancado el sector industrial donde el colectivo masculino, tradicionalmente, ha tenido mayor cabida.

Se trata de un mercado de trabajo más sometido y expuesto a los vaivenes de la economía sumergida que favorece que se contraten inmigrantes en situación irregular que se someten con más facilidad a condiciones de explotación, sobre todo, en el ámbito doméstico, donde, hasta hace bien poco⁷, la relación contractual se basaba en un acuerdo entre empleados y empleador. La mayoría de las mujeres que migran realizan trabajos “de mujeres” que cuentan con unas malas condiciones laborales como son el bajo salario, la falta de protección legal o el poco reconocimiento por parte de la sociedad a su labor. Por ello, la oferta de trabajo para las mujeres inmigrantes forma parte de un segmento laboral secundario que se caracteriza por la baja remuneración y la precariedad (Lorenzo Moledo, Godás, Priegue, y Santos Rego, 2009).

⁷ Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social (BOE 31/12/2012).

La regulación de los procesos de inmigración en España se ha ido realizando en los últimos años a través de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE 12/01/2000) y sus sucesivas reformas, que han ido endureciendo las condiciones de acceso al país a los extranjeros no comunitarios y, en particular, a las mujeres, al ser empleadas en sectores que las confinan a una particular marginación por no tener las condiciones laborales comunes, como es el caso del servicio doméstico o la prostitución. Es decir, el mercado de trabajo español ha integrado a las mujeres inmigrantes en sectores que no facilitan su regularización y les ofrece pocas posibilidades en los sectores económicos tradicionales (Mestre, 2001).

Por un lado, las relaciones de género en las áreas receptoras y de origen condicionan las migraciones: quién emigra y por qué o cómo se toman las decisiones, pero también afectan a las consecuencias sobre los propios inmigrantes así como el impacto en los países de origen y de acogida. Por otro lado, las migraciones también influyen sobre las relaciones de género, reforzando los roles tradicionales y las desigualdades o transformándolas hacia una mayor equidad (Pla, 2009).

Las motivaciones que llevan a las mujeres a emigrar son el reflejo de la transformación que a nivel global se está produciendo en nuestras sociedades. Su proyecto migratorio está unido al mayor acceso a la educación en los países de origen así como a la evolución de su participación laboral o el disfrute de derechos. No podemos olvidar que sus pautas o modelos migratorios están estrechamente vinculadas a su contexto de origen. Así, siguiendo a Parella (2003), las mujeres inmigrantes presentan una gran variedad de proyectos migratorios que rompen con aquellos estereotipos que las presentan como un colectivo homogéneo, pasivo y supeditado a las decisiones de sus maridos.

Las mujeres inmigrantes son un grupo heterogéneo tanto por procedencia, como por las características de las sociedades de origen, como por la carga axiológica con la que llegan a nuestro país. Esto, determina sus proyectos migratorios. Aun así, existen una serie de rasgos comunes que pueden relacionarse, a su vez, con problemas de acceso al mercado laboral, discriminación o dificultades para eliminar determinados prejuicios sociales ya establecidos (Izquierdo, 2000).

En este sentido, Juliano (2006) señala tres tipos de desplazamientos de residencia específicos de las mujeres, entre los que se apunta la emigración:

- En primer lugar, estaría el desplazamiento producido por la patrilocalidad, que obliga a las mujeres de la mayoría de las culturas a fijar su residencia de casadas en un ámbito diferente de su hogar de nacimiento.
- En segundo lugar, la migración económica a partir de la asignación social de tareas diferentes por sexo, buscando en las ciudades trabajo en el sector servicios y mejores condiciones de vida. Este modelo comenzó por las áreas rurales de montaña para llegar a convertirse en movimientos trasatlánticos.
- En tercer lugar, estarían las mujeres con estatus desvalorizado en el país de origen o con aspiraciones incompatibles con las normas tradicionales, a las que denomina “refugiadas por motivos de género” (fugadas de matrimonios indeseados, madres solteras, repudiadas, amenazadas y víctimas de agresiones sexuales).

Además de estas motivaciones específicas, también destacan las económicas, que son muy similares a las de los hombres, por reagrupamiento familiar y por promoción personal (a través de proyectos de estudio y de capacitación).

En la misma línea, Rodríguez Rodríguez (2008) destaca la tendencia propia que presentan los flujos migratorios femeninos, caracterizada por la progresiva equiparación en cuanto a la representación numérica, la diversificación de los países implicados, las características de sus empleos y la variedad de proyectos migratorios.

Coincidimos con Lorenzo Moledo y Priegue (2014) en que la relación entre las mujeres de diferentes procedencias y la existencia de estrategias compartidas entre ellas, bien sea por lazos de parentesco, amistad o vecindad, es estrecha. Además, estas mismas autoras, señalan la importancia de las mujeres para conservar los vínculos con los familiares que permanecen en los países de origen, especialmente con sus hijos.

Entre las muestras de participación activa de este colectivo en nuestro país localizamos una gran cantidad de experiencias de asociacionismo femenino, como por ejemplo, la asociación de “matronas latinoamericanas” (AMALA) quienes se unieron para conseguir el reconocimiento de sus titulaciones y capacitaciones y que,

actualmente, tienen más de 80 socias en todo el país. Este es un ejemplo, entre muchos otros, del cambio que se está produciendo en cuanto al rol femenino en la emigración.

Por su parte, Oso (1998) se refiere a la importancia del desarrollo de los llamados “hogares transnacionales” a raíz de este impulso de las corrientes migratorias femeninas. Identifica varios tipos: por un lado está la migración de mujeres solas con familiares dependientes en el país de origen, entre las que se englobarán las mujeres casadas que mantienen el hogar transnacional, las solteras con personas a su cargo y las jefas de los hogares monoparentales; y, por otro lado, la migración familiar, en donde incluiríamos las pioneras de la migración, la migración conjunta de la pareja y aquellas que son reagrupadas.

En el caso de las mujeres procedentes de Latinoamérica, diferentes estudios muestran que se trata de un proceso migratorio laboral independiente, aspecto que diferencia a este colectivo de otros como el procedente del Norte de África o de Asia, donde la migración es predominantemente masculina y la mujer acostumbra a vincularse a procesos de reagrupamiento familiar (Escrivá, 2000; Martínez Veiga, 2004).

La “feminización de las migraciones” trae consigo una serie de consecuencias entre las que podemos señalar, como hemos dicho, el efecto llamada a sus conciudadanas, lo que refuerza la reproducción de este fenómeno; y, por otro, ellas mismas son una pieza clave en lo que respecta al contacto con sus familias en el país de origen, especialmente con los hijos. Podemos considerar que estas “madres transoceánicas” obtienen el rol de protagonistas dentro de las estructuras patriarcales que están ya consolidadas (Santos Rego, 2006; Lorenzo Moledo y Priegue, 2014).

La existencia de estrategias compartidas entre mujeres con algún tipo de vínculo es uno de los factores que más ha influido en el aumento de la migración femenina. De hecho, uno de los rasgos más definitorios de esta inmigración es el mantenimiento de relaciones más duraderas con los familiares del país de origen (Lorenzo Moledo et al., 2009).

Como la reagrupación familiar es una de las escasas vías de entrada legal, muchas mujeres optan por ello, lo que, hasta las últimas modificaciones de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social, las situaba en una posición de inmigrante jurídica y económicamente dependiente de los reagrupantes, por lo que durante algunos años no se consideraban residentes de propio derecho. Esta dependencia favorece que la vida de muchas transcurra en el ámbito privado, al tiempo que se rompe la igualdad de los cónyuges ante la ley, y se formalizan jerarquías y ámbitos de poder delimitados en las familias (Lorenzo Moledo et al., 2009; Lozano, 2009). Sin embargo, la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE 12/12/2009), de reforma de la anterior, establece que el cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

Consciente de esta situación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014) señala los principales derechos de las mujeres inmigrantes que son víctimas de violencia de género:

- Situación de residencia en España. Existen dos tipos de autorizaciones de residencia y trabajo para las víctimas:
 - Autorización de residencia y trabajo independiente de las reagrupadas con su cónyuge o pareja. Una vez dictada una orden de protección o cuando exista un informe del Ministerio Fiscal que indique que se presentan indicios, se obtendrá la autorización por 5 años cuya tramitación tendrá un carácter preferente. Además, sus hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean capaces de proveer sus propias necesidades, siendo titulares de una autorización de residencia por reagrupación familiar, dependerán del miembro de su familia con quien convivan.
 - Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres en situación irregular. En el momento en el que se dicta una orden de protección o un informe por parte del Ministerio Fiscal se podrá solicitar la autorización que también tendrá una duración de 5 años pudiéndose solicitar la autorización de larga duración y su tramitación contará con carácter preferente; al igual que en el caso anterior, sus hijos e hijas menores o con discapacidad obtendrán una autorización de

residencia así como de residencia y trabajo a aquellos que tengan más de 16 años.

- Protección de las mujeres en situación irregular:
 - o No se incoará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse en situación irregular si todavía no se había puesto de manifiesto y se suspenderá el que ya hubiese comenzado con anterioridad a la denuncia.
 - o Una vez concluido el procedimiento penal con una sentencia condenatoria se concederá la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, de sus hijos e hijas. Si la sentencia no es condenatoria se denegará la autorización, perdiendo eficacia la autorización provisional continuando el procedimiento administrativo por estancia irregular.
- Derecho a la información. Existe un teléfono de información y asesoramiento con carácter gratuito que ofrece el servicio veinticuatro horas al día y, además de en las lenguas oficiales de nuestro país, atienden en inglés, francés, alemán, árabe, búlgaro, chino, portugués, rumano y ruso, aunque en horario de oficina atenderá, también, en otros 42 idiomas.
- Derecho de asilo. Si se reconoce la situación de refugiada no serán expulsadas, obtendrán la autorización de residencia y trabajo permanente y se reconocerán derechos como acceso a la asistencia sanitaria, asistencia social y servicios sociales.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE 29/12/2004), en su artículo 17, garantiza los derechos de todas las mujeres víctimas de violencia con independencia del origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. Es por ello que se elabora el “Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante (2009-2012)” (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). Este Plan se estructura sobre cinco ejes principales: Información, Formación, Sensibilización, Atención adaptada a las circunstancias de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y Medidas estructurales, con los que se

pretende consolidar una actuación integral en materia de atención y prevención de la violencia de género dirigido en las mujeres extranjeras en el marco de esta Ley y de los Planes aprobados para su implementación.

Por otro lado, la situación de reagrupación sitúa a estas mujeres ante una serie de prejuicios sociales sostenidos por la afirmación de que “la mujer reagrupada no viene a trabajar sino a favorecer la integración laboral y social del hombre, reproduciendo así la exclusión a la que históricamente se sometió a las mujeres, cuyo rol fue el de asegurar, realizando el trabajo doméstico, que el hombre pueda hacer el trabajo público” (Pajares, 2005, p. 198).

Sipi (2002) destaca, además, la feminización de la pobreza como el principal motivo que lleva a las mujeres a emigrar; a ello le seguirá la reagrupación familiar, el mantenimiento de la cadena económica en el país de origen, las persecuciones por motivos políticos, religiosos o étnicos, la homologación y especialización de estudios, la huida de la presión social y la dependencia del grupo de pertenencia y, por último, los deseos de prosperidad.

Nuestro país, al igual que sucede en el plano internacional, no escapa a la feminización de la pobreza. Prácticamente la mitad de las mujeres son pobres (22,1%) o llegarían a serlo (26,3%) si no contaran con los ingresos de otros miembros de su hogar. Estas últimas no se encuentran en situación efectiva de pobreza, pero sus decisiones y horizontes vitales dependen, en términos de bienestar material, del mantenimiento de la institución familiar a la cual están ligadas (Valls y Belzunegui, 2014).

En esta misma línea, el U.S. Census Bureau (Dalaker, 2005) señala la presencia constante de mujeres entre los pobres calculados en Estados Unidos, con un 13,8% de las mujeres y un 11,1% de los hombres. Otros estudios han mostrado que en 2005 la tasa de pobreza de familias con únicamente padre fue de un 17,6%, mientras que la de las familias con sólo madre fue de un 36,9% (Thibos, Lavin-Loucks y Martin, 2007).

El Índice de Desarrollo relacionado con el Género (Malik, 2014) analiza la esperanza de vida al nacer, el analfabetismo y la escolarización y los ingresos personales. Así, los países más desarrollados en estos términos son, Noruega, Australia, Suiza y Países Bajos y, los menos desarrollados, la República

Democrática del Congo, Nigeria, República Centroafricana, el Chad y Sierra Leona.

Por su parte, el Índice de Desfase de Género Global (Hausmann, Tyson, y Zahidi, 2008), se construye a partir de aspectos como el empoderamiento político, participación económica, logros educativos y salud. Este índice sitúa a Yemen, el Chad, Arabia Saudita, Pakistán, Benín, Marruecos, Egipto, Turquía, Etiopía y Bahrein, en la peor situación.

Podemos decir que el empobrecimiento de las mujeres es “una ortodoxia global que ya nadie pone en cuestión” (Davids y Van Driel, 2005, p.5). Así, el aumento de la emigración femenina está estrechamente vinculado con los cambios demográficos y económicos que han tenido lugar en los últimos años a escala global.

Aunque es necesario tener en cuenta que es un colectivo muy heterogéneo, son mujeres que emigran solas, vienen a España por motivos económicos (65% población activa), son independientes económicamente (50,4% recibe sus ingresos del trabajo) y envían dinero a su familia. Se puede decir, de este modo, que son mujeres que emigran para mantener a personas afectivamente próximas, son cabezas de familia, sustentadoras de la economía familiar y de las de sus países (Quintáns, 2005). A las remesas económicas debemos añadir las “remesas sociales” dadas en forma de nuevas ideas, conocimientos o actitudes que también pueden estimular el desarrollo económico y promover la igualdad entre hombres y mujeres en las sociedades de origen.

La experiencia migratoria favorece que sus protagonistas adopten un rol diferente al que venían desempeñando en las sociedades de las que provienen. Así, muchos de los estereotipos que se les atribuyen a las mujeres inmigrantes disminuyen cuando se enfrentan con la nueva situación en el país de acogida. Suárez–Orozco y Suárez–Orozco (2003) sostienen que, a largo plazo, muchas llegan a experimentar la inmigración como un paso liberador, al proporcionarles unas relaciones de género más equitativas, libertad social y reconocimiento.

Al respecto, el proyecto migratorio no afecta de igual modo a todas las mujeres. Por ello, basándonos en el rol asumido por la mujer en la sociedad de acogida, deberíamos considerar tres grupos (Lorenzo Moledo et al., 2009):

- las que experimentan una emancipación de sus roles tradicionales, ganando en independencia o, al menos, experimentando una cierta relajación en el control social ejercido sobre ellas. Para muchas la experiencia de la migración es tan positiva que dudan en regresar a su lugar de origen por temor a tener que resignarse a perder la autonomía adquirida;

- las que van a vivir una reproducción de las relaciones familiares y de los roles sociales del país de origen;

- las que van a experimentar, en un intento de preservar la identidad cultural, un mayor control social que en la sociedad de origen y que, básicamente, coinciden con el perfil de las reagrupadas. Este tipo de aislamiento cultural ocurrirá en aquellas familias o comunidades que se consideran marginadas y que piensan que su identidad cultural está amenazada por la presión de la sociedad anfitriona.

En definitiva, las causas y las consecuencias de los movimientos migratorios femeninos tienen identidad propia. La mujer se ha convertido en la principal protagonista de los cambios de las sociedades del siglo XXI. Y si a lo largo de estas páginas hemos constatado la invisibilidad de la mujer inmigrante y su discriminación social y laboral, esta realidad es mucho más severa cuando a este perfil de mujer e inmigrante sumamos el de delincuente.

3.3. Evolución de la delincuencia en España: la invisibilidad de las mujeres

Las mujeres cuentan con una baja representación en relación a los hombres cuando hablamos de delincuencia, hecho que ha tratado de justificar la invisibilidad que caracteriza a este colectivo ya que, como veremos a continuación, determinados organismos no disgregan los datos en función del género. Además, el poco interés que suscita la delincuencia femenina ha provocado que la investigación que aborda esta temática haya quedado en un segundo plano, es por ello que hemos tratado de recoger los estudios más relevantes en relación a este colectivo.

3.3.1. Las mujeres delincuentes en las estadísticas oficiales: mujeres detenidas y presas

Como hemos venido señalando, la presencia de mujeres en el Sistema Penitenciario español es una realidad que pasa desapercibida dentro del ya propiamente desconocido contexto penitenciario, aunque, las cifras también nos muestran que, la presencia de mujeres en las cárceles es significativamente alta si se compara con las de otros países de nuestro entorno (Yagüe y Cabello, 2005). Sin embargo, siguiendo a Igareda (2007) las consecuencias sociales del paso por la prisión de las mujeres son suficientemente relevantes como para atender al impacto diferencial de la política penitenciaria sobre este colectivo.

Las estadísticas de la Unión Europea sobre delincuencia y justicia penal nos muestran la diversidad entre los sistemas jurídicos y policiales de los diferentes Estados miembros. Eurostat (2012) señala que los datos pueden verse afectados por factores como los distintos niveles de tipificación penal, la eficiencia de los sistemas o las prácticas de archivo policial, partiendo, además, de la hipótesis de que el sistema de registro de un propio país se mantenga estable a lo largo del tiempo, hecho que, por ejemplo, en España, no se produce, ya que los datos de Instituciones Penitenciarias no nos presentan, hasta 2010, los de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con competencias en materia penitenciaria.

Además, debemos tener presente las diferencias entre los sistemas legales y de justicia penal, la proporción de delitos denunciados a la policía y registrados, las diferencias en las normas de contabilización de las infracciones múltiples o en la lista de infracciones incluidas en las cifras de delincuencia globales, el número de asuntos tramitados por los órganos jurisdiccionales, el porcentaje de delincuentes que reciben penas de privación de libertad, la duración de las penas impuestas o el tamaño de la población en prisión preventiva (Eurostat, 2012).

Por todo ello, la Comisión Europea en la Comunicación “Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal: Plan de acción de la UE 2006-2010” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2006) pretende desarrollar una metodología que siga la misma línea en la que basar la recopilación de las estadísticas de la UE para permitir las comparaciones de la estructura y tendencias de los Estados miembros. Plan derogado en 2012 por la creación de un grupo de expertos sobre las necesidades

políticas en materia de datos relativos a delincuencia (Diario Oficial Unión Europea n° C 042 de 15/02/2012, pp. 2-10).

Distintos criminólogos señalan que las estadísticas deberían ser una combinación entre los datos oficiales y aquellos basados en encuestas de victimización y delincuencia auto-revelada (Alvazzi, 2010).

En España, determinar el índice de criminalidad resulta realmente complicado puesto que únicamente podemos conocer aquellos delitos de los que el Estado tiene conocimiento porque las instancias de control social los hayan detectado o porque los ciudadanos los hayan denunciado (Rechea, Benítez, y Fernández Molina, 2008). Para analizar el índice de criminalidad de nuestro país debemos hacer referencia, además de Instituciones Penitenciarias, a las diferentes instancias que configuran nuestro sistema de control penal: por un lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes recogen el número de delitos de los que han tenido conocimiento; por otro, la Fiscalía General del Estado, desde donde se hace referencia al número de diligencias previas que se han formado en sede de Fiscalía; y, por último, el Consejo General del Poder Judicial, que se centra en los asuntos penales que han ingresado en las instancias judiciales cada año.

Únicamente las estadísticas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disgregan los datos en función del sexo ya que tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo General del Poder Judicial se refieren a hombres y mujeres en general. Así, contabilizamos un total de 71.169 detenciones a mujeres en el año 2013. Esta cifra representa el 17,03% de la población (417.700) por lo que la proporción de detenidas sobre el total es mayor que la proporción de reclusas, como veremos (Ministerio del Interior, 2014). Además, con respecto al año anterior, el porcentaje de mujeres sube más de un punto porcentual ya que en 2012 representaban el 15,83%. En la Tabla 3 mostramos los datos de las mujeres detenidas e imputadas en función de la edad y el delito o la falta por causa de infracción penal en los años 2012 y 2013.

Tabla 3

Detenciones e Imputaciones por Causa de Infracción Penal de mujeres

Delitos		De 14 a 17 años		De 18 a 30 años		De 31 a 40 años		De 41 a 64 años		Mayores de 64 años		Total	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
	Contra las personas	328	361	1.624	1.681	1.577	1.687	1.240	1.417	56	70	4.825	5.216
	Contra la libertad	140	165	629	661	664	671	665	729	47	59	2.145	2.285
	Contra la libertad sexual	10	37	90	93	110	99	150	123	6	5	346	357
	Relaciones familiares	3	2	154	138	195	159	103	92	0	1	455	392
	Contra el patrimonio	1.287	1.194	7.975	8.289	4.811	5.247	3.724	3.990	145	209	17.942	18.929
	Seguridad colectiva	136	122	2.994	3.021	2.204	2.102	1.768	1.833	85	73	7.187	7.151
	Falsedades	35	44	903	1.264	700	1.110	423	1.051	12	216	2.073	3.685
	Administración Pública	0	0	1	9	9	12	21	35	0	4	31	60
	Administración de Justicia	67	66	913	976	737	759	842	917	78	90	2.637	2.808
	Orden Público	82	94	1.085	1.061	891	933	875	843	17	29	2.950	2.960
	Legislación especial	0	0	8	9	9	10	11	16	0	0	28	35
	Otros delitos	5	15	191	219	222	253	236	262	11	20	665	769
Faltas	Contra las personas	534	459	2.590	2.427	2.175	2.119	2.450	2.266	268	282	8.017	7.553
	Patrimonio	1.149	1.077	7.546	8.501	4.014	4.528	3.514	4.156	244	319	16.467	18.581
	Orden Público	8	11	83	112	86	87	112	106	6	9	295	325
	Intereses generales	2	2	10	20	8	15	15	20	0	6	35	63
Total		3.786	3.649	26.796	28.481	18.412	19.791	16.129	17.856	975	1.392	66.098	71.169

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (2014).

Como podemos observar, el mayor número de detenciones lo representa el colectivo de mujeres entre los 18 y los 30 años, llegando a suponer el 40% del total (2013), seguido por aquellas que tienen entre 31 y 40 años. El grupo menos representado es el que cuenta con más de 64 años.

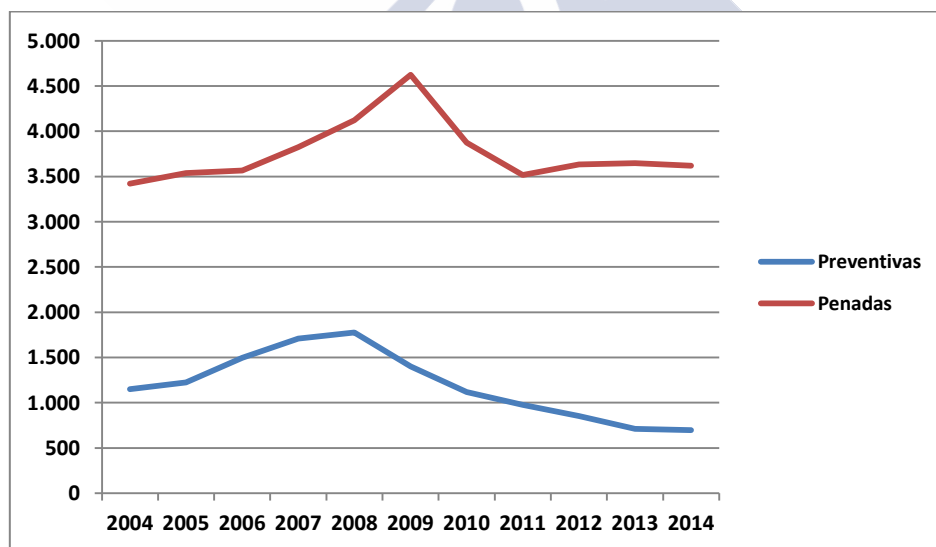
En cuanto a la tipología delictiva, sobresalen aquellos delitos y faltas contra el patrimonio (52,7% del total), en los que se incluyen hurtos, robos con fuerza en vehículos, domicilios y establecimientos, robos con violencia e intimidación en vía pública, domicilios y establecimientos, sustracción de vehículos, estafas, daños, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, bloqueo de capitales y otros delitos contra el patrimonio.

Por su parte, las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2015) revelan que el número de mujeres internas en noviembre de 2014 en los establecimientos penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado llega a 4.374. En función de la situación procesal-penal cabe destacar que 699 son preventivas, 3.620 ya están penadas, a 20 se le aplica otro tipo de medidas de seguridad y 35 se encuentran penadas con medidas preventivas. Como vemos, más del 80% del total de las mujeres que han cometido un delito lo hacen en situación de penadas.

Al respecto debemos apuntar que en los últimos años estamos asistiendo a una leve tendencia a la baja de la población penitenciaria. Aunque el porcentaje en relación con los varones continúa estable (8%), desde 2008 y 2009, en los que se produce un repunte importante, las mujeres sí que han protagonizado un significativo descenso, especialmente las que se encuentran en situación preventiva (ver Gráfica 2).

Gráfica 2

Evolución de las mujeres en el sistema penitenciario español (2004-2014)

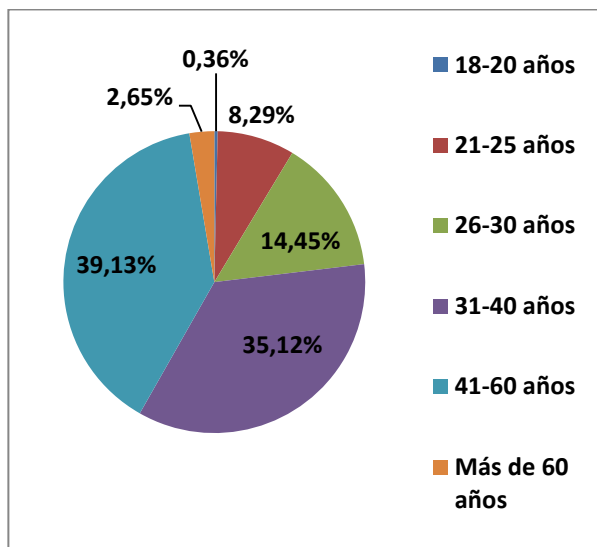


Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La edad de la mayor parte de las mujeres encarceladas oscila entre 41 y 60 años (ver Gráficas 3 y 4). Parece que la edad de las penadas aumenta en los últimos años, ya que hasta el año 2013 el intervalo se situaba entre los 31 y los 40. Sin embargo, como vemos en la Gráfica 4, las que están en situación preventiva son más jóvenes (31-40 años). En todo caso, las diferencias son muy pequeñas.

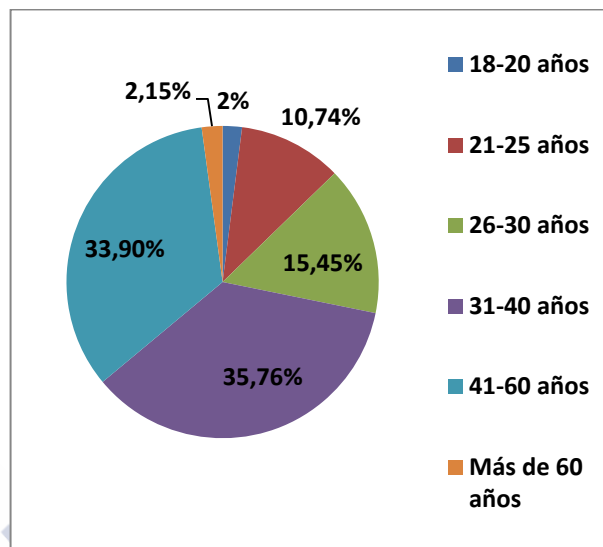
Gráfica 3

Penadas por grupos de edad. Noviembre 2014



Gráfica 4

Preventivas por grupos de edad. Noviembre 2014



Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Informe General que realiza esta misma Secretaría, cuya última edición recoge los datos del año 2013, señala que la media mensual de ingresos en ese mismo año es de 13 mujeres entre 18 y 20 años, 48 entre 21 y 25, 62 entre 26 y 30, 129 en el caso de las mujeres entre 31 y 40 años, 114 entre 41 y 60, y 8 mayores de 60; es decir, la tendencia continúa acentuando la entrada en prisión de mujeres de mayor edad (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014a).

La mayor parte del colectivo femenino cumple condena en segundo grado, representando este, prácticamente el 70%, como podemos ver en la tabla que sigue. Las mujeres en primer grado representan un porcentaje muy reducido (2%).

Tabla 4

Mujeres en prisión en función del grado. Diciembre 2014

Grados	Número de mujeres
Primer Grado	72
Segundo Grado	2.452
Tercer Grado	776
Sin Clasificar	278
Total	3.578

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Si tenemos en cuenta la distribución geográfica, la mayor parte de las mujeres que se encuentran en prisión están en Andalucía (22,87%), seguida por la Comunidad de Madrid (19,36%) y la catalana (12,87%). Como vemos, más del 50% de las mujeres reclusas cumplen condena en tres de las Comunidades Autónomas, dato que podemos explicar cuando tenemos en cuenta que en las tres existe un centro específico femenino. Además, de la cárcel de Brieva, el resto cumple condena o está en situación de preventivas en módulos de mujeres. Concretamente en Galicia, en diciembre de 2014 se registra un total de 226 mujeres en los centros penitenciarios radicados en la Comunidad, representando un 4,54% del total (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014a).

Los delitos contra la salud pública ocupan el primer lugar en la tipología delictiva de las mujeres que se encuentran en prisión (42,79%) como ya señalábamos en el anterior capítulo. Los delitos contra el Patrimonio y el Orden socioeconómico representan el 32,45% del total. Por consiguiente, 7 de cada 10 mujeres se encuentra en prisión por ambos delitos (ver Tabla 2). Es decir, la mayoría comete algún tipo de delito relacionado, directa o indirectamente, con las drogas ya que, los delitos contra la propiedad están, muy a menudo, relacionados con el consumo de drogas.

Además, el 99,5% de las mujeres reclusas se encuentran en aplicación de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, frente al 0,5% que están en prisión por un delito referido en el Código Penal Derogado (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014a).

La mayor parte de las penas son de tres a ocho años, seguidas por aquellas que van entre tres meses y tres años (ver Tabla 5).

Tabla 5

Distribución de las mujeres reclusas según condena. Diciembre de 2013

	De 3 meses a 3 años	De 3 a 8 años	De 8 a 15 años	De 15 a 20 años	Más de 20 años	No consta	Total
C.P.D. ⁸	0	0	2	2	11	2	17
LO 10/1995	903	2.060	468	103	67	28	3.629

Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2014a).

⁸ Código Penal Derogado.

No podemos dejar de tener en cuenta a aquellas mujeres que son madres y tienen a sus hijos, menores de tres años, en prisión. La media de niños que en el año 2013 vivían con sus madres en algún tipo de dispositivo penitenciario fue de 168 (ver Tabla 6).

Como sabemos, la Ley 13/95 que modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, establece el límite de edad de permanencia de los hijos en prisión en los tres años de edad. Esta medida se justifica debido al aumento de la población penitenciaria femenina y, consecuentemente, del número de menores en prisión. En esta línea, el Real Decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario hace constar la posibilidad de que permanezcan en los centros penitenciarios los menores de tres años que acompañen a sus madres en el momento del internamiento además de que ingresen aquellos que las internas tuviesen bajo su patria potestad.

Vemos en la Tabla 6 los dispositivos en los que los hijos de las internas viven. En muchos casos, las madres cumplirán condena a muchos kilómetros de su lugar habitual de residencia. A modo de ejemplo, en Galicia no contamos con unidades de madres en ninguno de los centros penitenciarios desde el cierre, en 2011, de la que estaba ubicada en el centro de Teixeiro (A Coruña). Así, aquellas mujeres que deseen convivir con sus hijos en sus primeros años de vida deberán renunciar a la proximidad familiar e ir a uno de los dispositivos que conforme a su perfil sean adecuados.

En la mayoría de los casos, las mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios son madres entre los 16 y los 20 años y el 95% ya era madre a los 25 (Yagüe y Cabello, 2005). Esta maternidad, en ocasiones no planificada, provoca un abandono prematuro del hogar, hecho que puede facilitar la conducta delictiva (Almeda, 2005a; Igareda, 2007; Francés y Serrano, 2011).

Esta compleja situación supone un conflicto entre derechos y principios jurídicos de primera magnitud (Naredo, 2007). Por una parte, resulta *conditio sine qua non* garantizar los derechos consagrados de los niños y las niñas establecidos principalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 tales como supervivencia, desarrollo, conocer y ser cuidados por sus padres (art. 6 y 9); y, por otra parte, dichos derechos se ven comprometidos ante la pérdida de contacto con

los progenitores como consecuencia del encarcelamiento así como si se opta por la reclusión del infante con estos.

Además, muchas de estas madres son extranjeras. En esta línea, debemos considerar que estas mujeres extranjeras se consolidan como piezas clave en lo que respecta al contacto con sus familias en el país de origen, especialmente con los hijos.

Podemos señalar, siguiendo a Santos Rego (2006) y Lorenzo Moledo y Priegue (2014), que estas madres obtienen el rol de protagonistas dentro de las estructuras patriarcales consolidadas. Por ello, es importante tener en cuenta la situación de las mismas así como de sus hijos, tanto aquellos que se encuentran en el país de origen, como los que están en España, prestando especial atención a los que conviven con las reclusas en los dispositivos destinados a tal fin.

Tabla 6

Madres e hijos en prisión. Media del año 2013

Ubicación			Media niños	Media niños escuela infantil	Media madres
Unidades de madres	Internas	Alcalá de Guadaíra	21	5	21
		Madrid VI	34	9	31
		Valencia Prev.	25	9	23
	Externas	CIS Mallorca	5	3	4
		CIS Madrid	22	17	22
		CIS Sevilla	21	12	19
	Mixta	Madrid VI	20	9	16
Total UM		147	64	138	
Unidades dependientes	Madrid V		6	4	6
	Madrid VI		10	8	10
	Valencia CIS		3	1	2
Total UD		18	13	18	
Depto. Mujeres	Pamplona		1		1
	Tenerife		2		2
Total DM		3		3	
Total		168	77	159	

Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2014a).

Por su parte, fueron 3.299 las Sentencias de Trabajo en Beneficio de la Comunidad que en el año 2013 estaban siendo cumplidas por mujeres o en fase de

tramitación (8,23% del total). Además, 395 mujeres, en ese mismo año, fueron protagonistas de suspensiones y sustituciones de condena en cumplimiento y en fase de tramitación del cumplimiento (3,41%). En cuanto a los hombres, 36.784 cumplieron en el mismo año Sentencias de Trabajo en Beneficio de la Comunidad y 11.169 estuvieron en situación de suspensión y sustitución de condena. Según datos del Ministerio del Interior (2014), en relación al año anterior se produce un aumento de 10 puntos porcentuales en lo que respecta a estas medidas.

3.3.2. La investigación sobre mujer y delincuencia

En los últimos años nos encontramos con un claro avance en materia de investigación sobre mujer y delincuencia, lo cual no indica que se considere un éxito sino que todavía queda mucho trabajo por delante. Como venimos diciendo, en los planteamientos científicos, el papel de la mujer ha sido objeto de poco interés, ocultándose o ignorándose su especificidad. De todos modos, la carencia de estudios relacionados con la problemática de la mujer delincuente hace que su investigación no resulte sencilla.

La investigación sitúa a la mujer como víctima, especialmente de violencia por parte de sus maridos en los delitos contra la libertad sexual. En este caso, sí nos encontramos con una amplia variedad de estudios donde la mujer es protagonista, pero no es así cuando es la mujer la que comete el delito.

No existe una única causa que explique la falta de estudios centrados en esta temática; siguiendo a Garrido (1997), cabe destacar entre las principales razones, el hecho de que los planes de estudio universitarios en carreras como pedagogía o psicología no se hayan ocupado del fenómeno de la delincuencia más que de forma secundaria; por otra parte, únicamente desde la llegada de la democracia se han creado puestos de trabajo en un número considerable que supusieran contacto directo con delincuentes en niveles de mayor o menor capacidad preventiva, es decir, desde acciones en barrios hasta prisiones; además, este autor señala que la política criminal no se tiene en cuenta dentro de las políticas sociales en nuestro país.

En nuestro país, debemos destacar una serie de estudios centrados en la mujer delincuente. Aunque no existe un número importante de referencias científicas sobre este campo, tratamos ahora de recoger las más importantes. Como veremos a

continuación, únicamente cuatro de estos estudios hacen referencia explícita a la particularidad de las mujeres extranjeras; sin embargo, todos ellos se refieren a mujeres institucionalizadas. Además, únicamente tres de los trabajos que resaltamos tienen en cuenta explícitamente la perspectiva educativa aunque bien es cierto que en aquellos que se centran en la intervención, la educación ocupa un lugar importante.



Cuadro 3
Investigación sobre Mujer y Delincuencia en España

Autores	Estudio
Moguel González, M.C.	Mujeres, Cárcel y Educación: Un Estudio sobre las Estructuras Formativas en dos Centros Penitenciarios de la Provincia de Cádiz (Puerto II y Botafuegos), 2014
Alvarado Sánchez, R.	Perspectiva Histórica y Problemas Actuales de la Institución Penitenciaria en España. Las Mujeres Encarceladas toman la palabra, 2012
De Miguel, E.	Relaciones Amorosas de Pareja en las Trayectorias Vitales de las Mujeres Encarceladas, 2012
Viedma Rojas, A. y del Val Cid, C. (eds.)	Condenadas a la desigualdad. Sistema de indicadores de discriminación penitenciaria, 2012
García de Cortázar, M.L. (dir.)	Discriminación en el Ámbito Penitenciario: Extranjeras en las Prisiones Españolas, 2012
Ramos Vázquez, I. y Blázquez Vilaplana, B.	La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas penitenciarias en España, 2011
Castillo Algarra, J. y Ruíz García, M.	Mujeres extranjeras en prisiones españolas. El caso andaluz, 2010
Añaños Berdiñana, Fanny (coord.)	Las mujeres en las prisiones. La educación social en contextos de riesgo y conflicto, 2011
Yagüe Olmos, C.	Madres en prisión. Historia de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal, 2007
Yagüe Olmos, C.	Mujeres en prisión. Intervención basada en sus características, necesidades y demandas, 2007
Cruells, M. e Igareda, N.	Mujeres, Integración y Prisión. Análisis de los procesos de integración sociolaboral de las mujeres presas en Europa, 2006
Cervelló Donderis, V.	Las prisiones de mujeres desde una perspectiva de género, 2006
Defensor del Pueblo Andaluz	Mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de Andalucía, 2006
Miranda López, M.J.; Martín Palomo, M.T. y Vega Solís, C.	Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión, 2005
Yagüe Olmos, C. y Cabello Vázquez, M.I.	Mujeres Jóvenes en Prisión, 2005
Almeda Samarach, E.	Mujeres encarceladas, 2003
Yagüe Olmos, C.	Mujer, delito y prisión. Un enfoque diferencial de la delincuencia femenina, 2002
Flaquer, L., Ribas Mateos, N., Almeda, E., Bodelon, E. y Martínez, A.	Rastreando lo invisible. Mujeres extranjeras en las cárceles, 2001
Almeda Samarach, E.	Passat i present de les presons de dones. Un estudi de cas al centre penitenciari de Brians, 1999
Pollino Piedras, F.A. y Vela Ferrero M.P.	Delincuencia, mujer y prisión en Valladolid: análisis social y posibles alternativas de tratamiento, 1999
Lorenzo Moledo, M.	Delincuencia femenina e intervención pedagógica: un estudio sobre la cuestión en Galicia, 1996
Canteras Murillo, A.	La delincuencia femenina en España: un análisis sociológico, 1990
Clemente Díaz, M.	Delincuencia femenina. Un enfoque psicosocial, 1987

Lo primero que debemos destacar es que en la mayor parte de los estudios realizados en los últimos años destacan las perspectivas sociológica, histórica, psicológica y criminológica, dejándose, en muchas ocasiones, a un lado, la pedagógica (Lorenzo Moledo, 1997). En los trabajos destaca la metodología cualitativa y descriptiva al señalar predominantemente la utilización en los diferentes estudios de entrevistas no estructuradas e historias de vida de las mujeres.

En el estudio “Mujeres, Cárcel y Educación: Un Estudio sobre las Estructuras Formativas en dos Centros Penitenciarios de la Provincia de Cádiz (Puerto II y Botafuegos)”, se trata de conocer el papel que juega la formación dentro de los centros penitenciarios en la futura vida en libertad de las reclusas de las prisiones gaditanas del Puerto de Santa María y Algeciras (Moguel, 2014).

Alvarado (2012) en “Perspectiva Histórica y Problemas Actuales de la Institución Penitenciaria en España. Las Mujeres Encarceladas toman la palabra” se centra en las necesidades específicas del colectivo femenino, analizando cual es la situación a la que se enfrentan y las diferencias de trato con respecto a los hombres.

La tesis llevada a cabo por De Miguel (2012) “Relaciones Amorosas de Pareja en las Trayectorias Vitales de las Mujeres Encarceladas” analiza las experiencias amorosas de pareja de mujeres presas, con el doble objetivo de visibilizarlas en el ámbito de las ciencias sociales y de introducir sus especificidades en los debates sociológicos y feministas acerca del amor.

Por su parte, “Condenadas a la desigualdad. Sistema de indicadores de discriminación penitenciaria” trata de analizar las desigualdades que se producen en las prisiones pensadas por y para hombres y que provocan una situación de vulnerabilidad para las mujeres. En este estudio, se tienen en cuenta aspectos como la salud, la accesibilidad al mundo laboral o la organización de la vida diaria (Viedma y Del Val, 2012).

Desde una perspectiva histórica, el estudio “La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas penitenciarias en España” se encarga de analizar cómo la mujer ha sido tratada en las cárceles en diferentes épocas, estudiando, finalmente, las

políticas públicas que se han puesto en marcha en cuanto a la institucionalización (Ramos y Blázquez, 2011).

El trabajo “Las mujeres en las prisiones. La educación social en contextos de riesgo y conflicto” se centra en las nuevas perspectivas en Educación social con mujeres en contextos penitenciarios para analizar, a continuación, las realidades y actuaciones nacionales e internacionales con este colectivo (Añaños, 2011).

El colectivo que representan las madres que cumplen condena ha supuesto que diferentes investigadores se centrasen en una problemática tan compleja como es, por un lado, ser madre y estar privada de libertad, y, por otro, la situación de los niños y niñas que se encuentran con ellas dentro de los establecimientos penitenciarios. En este sentido, “Madres en prisión. Historia de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal” muestra cómo ha ido evolucionando este escenario y analiza la realidad de las mujeres que se encuentran en esta situación (Yagüe, 2007a).

Continuando con las desigualdades a las que se ven sometidas las mujeres que cumplen condena, “Mujeres en prisión. Intervención basada en sus características, necesidades y demandas” toca temas como la precariedad de los espacios, la lejanía del entorno familiar o la convivencia de diferentes perfiles criminológicos para lo cual, desde el Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se diseña un programa de intervención basado en la autosuficiencia que tiene en cuenta sus características y trata de responder a sus necesidades (Yagüe, 2007b).

Destaca también el Proyecto MIP “Mujeres, Integración y Prisión. Análisis de los procesos de integración sociolaboral de las mujeres presas en Europa” en el que han participado instituciones y ONGs de seis países europeos, recayendo, en España, el mayor peso. En este estudio, se hace una comparación de la realidad europea de las mujeres en prisión y de las políticas sociales y penitenciarias que en estos países se desarrollan. Además, tratan de identificar los factores que inciden en su situación sociolaboral de cara a proponer intervenciones que favorezcan la inserción (Cruells e Igareda, 2006).

Por su parte, Vicenta Cervelló (2006) con su estudio “Las prisiones de mujeres desde una perspectiva de género” analiza las características de la

población penitenciaria femenina y se centra en las alternativas a la prisión basando la intervención en las peculiaridades que, generalmente, presentan las que cometen un delito.

Como ya comentamos, Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con el mayor número de población femenina, hecho que ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz (2006) a realizar un informe basado en esta realidad, donde se analizan sus necesidades y el grado de atención que reciben.

Son muchas las mujeres menores de 30 años que cumplen condena en nuestro sistema penitenciario. Así, en “Mujeres Jóvenes en Prisión” se estudia su perfil, las causas que les llevaron a cometer el delito y su comportamiento dentro de los centros. Se exponen las líneas que deberían seguir las intervenciones con este colectivo para conseguir, en último caso, su reinserción en la sociedad (Yagüe y Cabello, 2005).

En “Mujeres encarceladas” se realiza un análisis documental de la bibliografía nacional e internacional de la criminalidad femenina, basándose en el estricto régimen que se aplica teniendo en cuenta la peligrosidad real existente o la ausencia de separación según su perfil penitenciario, entre otras. Se expone el perfil de las mujeres y las razones de su conducta delictiva, desde la realidad de la prisión de Brians (Barcelona). Esta investigación presenta, además, una serie de historias de vida que intentan reflejar cómo viven y cómo se sienten dentro de la prisión (Almeda, 2003).

En esta misma prisión se centra el trabajo “Passat i present de les presons de dones. Un estudi de cas al centre penitenciari de Brians” que analiza los centros penitenciarios femeninos de nuestro país a través de la realidad de este centro en el que se estudia el perfil sociológico y penitenciario de las mujeres (Almeda, 1999).

La directora del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra en el año 2002 realiza un estudio titulado “Mujer, delito y prisión. Un enfoque diferencial de la delincuencia femenina” para centrarse en la tipología delictiva de las mujeres y su perfil criminológico. Además, tiene en cuenta la maternidad de las reclusas comparando nuestra normativa con la de otros países de la Unión Europea, para terminar con el análisis de la situación y de las actividades socioeducativas que llevan a cabo estas mujeres dentro de los centros (Yagüe, 2002).

Por otro lado, en el Centro Penitenciario de Villanubla (Valladolid) se enmarca el estudio “Delincuencia, mujer y prisión en Valladolid: análisis social y posibles alternativas de tratamiento” que, tras estudiar la realidad de las mujeres que en él cumplen condena, trata de ofrecer alternativas al tratamiento que se está llevando a cabo (Pollino y Vela, 1999).

El estudio realizado en nuestra Comunidad Autónoma de la profesora Lorenzo Moledo “Delincuencia femenina e intervención pedagógica: un estudio sobre la cuestión en Galicia” analiza las tres prisiones del ámbito territorial de Galicia que en ese momento contaban con módulos de mujeres, A Coruña, Bonxelo y Pereiro de Aguiar-Ourense, desde una perspectiva de género. Se lleva a cabo un estudio sistemático de la naturaleza de la delincuencia femenina en nuestro país a nivel teórico y empírico. Reflexiona sobre la intervención pedagógica, centrándose, específicamente, en el Programa de Competencia Psicosocial (Ross y Fabiano, 1985), que implementó y evaluó (diseño cuasi-experimental) con una muestra de mujeres reclusas en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, comprobando la efectividad de este programa al dotar a las internas de las habilidades cognitivas y sociales necesarias para vivir de forma prosocial (Lorenzo Moledo, 1997).

Canteras (1990) con su estudio “La delincuencia femenina en España: un análisis sociológico” inicia el estudio, desde la sociología, de las características de la población penitenciaria femenina partiendo de los datos de mujeres penadas en Madrid, Valencia y Barcelona. Cabe resaltar que este es uno de los primeros trabajos llevados a cabo en el contexto español, junto con el de Clemente (1987), que desde una perspectiva psicológica, analiza la criminalidad femenina teniendo en cuenta los programas de tratamiento llevados a cabo a la vez que estudia aquellos factores que pueden influir en la delincuencia de las mujeres, proponiendo, finalmente, un programa de intervención.

Nos centramos ahora en aquellas investigaciones que tienen como protagonistas a las mujeres extranjeras en el ámbito penitenciario que, como veremos, son aún muy escasos en el discurso científico.

Con el trabajo sobre “Discriminación en el Ámbito Penitenciario: Extranjeras en las Prisiones Españolas” se trata de analizar la situación de este colectivo por medio de un estudio de corte cualitativo identificando los factores de

discriminación de las extranjeras en prisión, en particular, y de las mujeres en general. Se abordan historias de vida personal y profesional de las reclusas y aspectos de la vida en prisión como las condiciones de vida, los derechos fundamentales (trabajo, educación, salud o comunicación) o la igualdad de oportunidades (acceso y adecuación de programas y actividades). Además, estas entrevistas se completan con los datos cuantitativos ofrecidos por la institución penitenciaria referidos a las distintas actividades que cotidianamente se programan en prisión como el trabajo o la educación y con los informes de la observación directa realizada por los componentes del equipo de investigación en los centros penitenciarios visitados (García de Cortázar, 2012).

En el informe “Mujeres extranjeras en prisiones españolas. El caso andaluz” se presenta esta realidad en los módulos de mujeres de las prisiones de Córdoba, Huelva, Algeciras y Alhaurín de la Torre empleando la entrevista en profundidad como técnica principal de investigación. Se analizan aspectos como el origen, la edad, el nivel de estudios, la situación familiar, administrativa y laboral, la trayectoria y proceso migratorio y su perfil delictivo (Castillo y Ruiz, 2010).

En la misma línea, “Rastreando lo invisible. Mujeres extranjeras en las cárceles” se centra en las distintas políticas migratorias, antidroga, penitenciarias y de bienestar que marcan la realidad de las mujeres extranjeras que han cometido un delito en España (Flaquer, Ribas, Almeda, Bodelón, y Martínez, 2001).

Miranda, Martín y Vega (2005) analizan en “Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión” la problemática específica de las extranjeras que se encuentran en cárceles españolas, considerando los efectos de cumplir condena lejos de sus países de origen, y centrándose en las intervenciones que llevan a cabo diferentes asociaciones.

Todos estos trabajos ponen de manifiesto la necesidad de transformar y adecuar el espacio penitenciario a la realidad femenina, coincidiendo en que la discriminación que sufren las mujeres encarceladas tiene su origen en las desigualdades que produce el encarcelamiento.

En definitiva, son pocos los estudios que se centran en la delincuencia de las mujeres, especialmente si se trata de extranjeras. Aunque existen trabajos desde otras ciencias, la investigación ha dejado, a lo largo de la historia, en un segundo

plano a la pedagogía, tratándose en todo caso de trabajos descriptivos que, en su mayoría se centran en estudios de caso en centros penitenciarios concretos.

3.4. La asociación entre inmigración y delincuencia: la criminalización de la inmigración

El creciente aumento de la población inmigrante se está dando al mismo tiempo que el aumento de la población penitenciaria, lo cual, puede llevar a pensar en la relación entre ambas realidades. Las cárceles son un reflejo de la sociedad, por lo que el aumento de la población inmigrante en nuestro país tendrá también una repercusión en estos centros. Por lo tanto, ¿es cierto el supuesto de que delinquen más los inmigrantes en nuestro país que la población autóctona, o se trata de una percepción social? A la hora de incurrir en actos delictivos, son muchos los factores que influyen, sin que podamos incluir entre esa multicausalidad la procedencia o nacionalidad del sujeto que delinque (Lorenzo Moledo et al., 2009).

El crecimiento de los extranjeros residentes en España constituye una de las transformaciones sociales más importantes de los últimos años. Sin embargo, durante 2013 España registró un saldo migratorio negativo de 256.849 personas. Este saldo, un 80,2% mayor que en 2012, estuvo provocado por un descenso del 4,3% de la inmigración y un aumento del 22,7% de la emigración (INE, 2014).

En cuanto a las características principales de las personas que emigran a España, cabe resaltar que se trata, tanto de hombres (50,81%) como de mujeres (49,19%), procedentes de la Unión Europea, África y Sudamérica (ver Tabla 7). En cuanto a la edad, el padrón continuo señala que el 44,10% de los extranjeros tienen entre 20 y 39 años, seguidos en representación por aquellas personas que tienen entre 40 y 59 (27,15%); los menores de 19 años constituyen el 19,88% del total y la población más envejecida, aquellos que tienen 60 o más únicamente suman 8,87%.

Tabla 7*Extranjeros residentes en España según procedencia. Julio 2014*

	Hombres	Mujeres	Total
Unión Europea	1.021.934	964.211	1.986.145
Resto de Europa	95.793	130.739	226.532
África	557.071	393.467	950.538
América del Norte	23.575	29.440	53.015
Centroamérica y Caribe	71.156	114.219	185.375
Sudamérica	356.742	448.197	804.939
Asia	177.813	150.363	328.176
Oceanía	1.675	1.424	3.099
Apátridas	497	187	684
Total	2.306.256	2.232.247	4.538.503

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2014).

La última encuesta del CIS (2012) en relación a la actitud que los autóctonos tienen con respecto a los inmigrantes nos muestra resultados bastante clarificadores. El 38,6% de las personas entrevistadas creen que el número de inmigrantes que había en ese momento en España era excesivo, seguido por el 32,5% que afirma que es elevado y el 23% que dice ser aceptable y, únicamente el 1% opina que es una cantidad insuficiente.

Además, a la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a España, el aspecto que más importancia tiene para los sujetos entrevistados es que esté dispuesto a adoptar el modo de vida de nuestro país, lo que reflejaría una tendencia al modelo asimilacionista en nuestra sociedad (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2012); y, el segundo seleccionado es que tenga una cualificación laboral de las que España necesita. Otro dato interesante que debemos destacar es que el 17,4% de la muestra del CIS cree que los extranjeros que están en situación irregular deben ser expulsados a su país de origen; pensando, el 35,7% que las leyes que regulan la entrada y presencia de extranjeros son demasiado tolerantes.

Según el 34,9% de los que responden a esta encuesta, los españoles tratan a los extranjeros con desconfianza ya que, como aspecto negativo de la inmigración, destacan (22,3%), más problemas de delincuencia e inseguridad. Asimismo, en el momento en el que los encuestados tienen antipatía por algún colectivo de extranjeros en concreto, el

20,4% asegura que es consecuencia de su vinculación con la delincuencia ya que “vienen a robar”, son malas personas (9,8%), no son legales ni confiables, no se integran (9,6%), forman guetos y, son violentos, agresivos, conflictivos y problemáticos (8,4%).

Por su parte, el 36,2% señala que las agresiones de inmigrantes a españoles suponen un problema importante sin que se consideren hechos aislados y, el 13,7% justifica en estos casos las reacciones racistas, seguidos por el 22% que cree que depende del caso. Los medios de comunicación muestran una imagen más bien negativa de la inmigración (36,3%).

Como vemos en los datos, el elemento que provoca mayor rechazo de los españoles hacia la inmigración es su presunta vinculación con la delincuencia, lo que produce inseguridad. Justamente, en las páginas que siguen ahondaremos en esta hipótesis de partida.

Según datos del Ministerio del Interior (2014), en el año 2013 fueron 124.394 las personas procedentes del extranjero detenidas e imputadas por causas de infracción penal (29,78% del total). Así, en cuanto a las nacionalidades de los extranjeros que han sido detenidos o imputados, cabe destacar que el 27,59% eran de un país africano, sobre todo de nacionalidad marroquí (el 67,24% de los africanos detenidos son marroquíes). El 28,31% proceden de América, con una presencia destacada de ecuatorianos (25,59%). Sin embargo, los procedentes de Asia y Oceanía no alcanzan el 4%. Europa es el continente más representado (40,34%), sobre todo con rumanos puesto que el 56,14% de los europeos detenidos e imputados en España en el año 2013 eran de este país.

En enero de 2014, de las 56.826 personas que estaban recluidas en alguno de los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, 16.593 eran extranjeras. Es decir, los extranjeros representan el 29,20% de la población reclusa total. En España, según el INE (2014), la población asciende a 46.725.164 personas y el número de extranjeros es 5.000.258, lo que representa el 10,70% del total. Lo que observamos es una sobrerrepresentación de extranjeros en las prisiones (ver Tabla 8). Las mujeres pasan de representar el 10,27% del total de la población en el país, al 31,32% dentro de las prisiones, mientras que los hombres pasarán de 11,15% al 29,02%, lo que nos indica que la sobrerrepresentación es mucho más notable en el caso de las mujeres.

En cuanto a las nacionalidades, los extranjeros que se encuentran en prisión son de Marruecos (27,34%), Rumanía (10,77%) y Colombia (10,69%) (Ministerio del Interior, 2014).

Tabla 8

Representación de extranjeros en España y en prisión. Enero de 2014

	Población total	Población extranjera	%	Población total en prisión	Extranjeros en prisión	%
Hombres	22.965.052	2.559.954	11,15%	52.413	15.211	29,02%
Mujeres	23.760.112	2.440.304	10,27%	4.413	1.382	31,32%
Total	46.725.164	5.000.258	10,70%	56.826	16.593	29,20%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2014) y Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2014a).

Avilés (2003) presenta una serie de factores que pueden ayudarnos a entender esta sobrerrepresentación:

- La estructura por sexo y por edad. La mayoría de los delitos son cometidos por varones jóvenes, coincidiendo con el perfil de las personas que deciden emigrar de su país de origen.
- La delincuencia organizada transnacional. Cuando la actividad delictiva se expande más allá de las fronteras aumentan las posibilidades de involucración.
- La privación relativa. En este caso se sostiene la propensión a la delincuencia a causa de la frustración que genera el contraste entre las condiciones de vida y las aspiraciones.
- El control social. Una persona está tanto menos expuesta a caer en la delincuencia cuanto más integrada se encuentra en su entorno; las tasas de delincuencia pueden ser más elevadas en la medida en la que un inmigrante se encuentra menos identificado con los valores del país de acogida.
- La cultura delictiva del país de origen. El nivel de violencia de cada país es diferente, así como las sanciones para los distintos delitos por lo que la percepción por parte de las personas que los cometen tampoco es la misma.

Por otro lado, creemos que la visibilidad social del extranjero, en algunos casos, puede exponerlo a un mayor número de denuncias y a un mayor control policial que provoque, en última instancia, la prisión preventiva y, dadas las circunstancias, acceden con más dificultades a medidas alternativas y beneficios penitenciarios (Gordaliza, 2005).

La responsabilidad que se la ha atribuido a la inmigración en cuestiones de inseguridad ciudadana en España ha provocado, entre otras cuestiones, una importante modificación en la legislación. El Código Penal de 1995 introdujo la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad inferior a seis años impuesta a un extranjero no residente legalmente en nuestro país por su expulsión, a decisión de los jueces y tribunales; medida que se modifica en el año 2003 con la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre. Esta nueva reforma se caracteriza por un claro endurecimiento. Entre las medidas más significativas destaca la supresión del trámite de audiencia al penado; la elevación, con carácter fijo a los 10 años del plazo de expulsión independientemente de la pena impuesta; y que el regreso a España conllevará su devolución comenzando el cómputo de los 10 años (Laurenzo, 2004).

Las explicaciones criminológicas sobre la delincuencia de los inmigrantes se han centrado en planteamientos teóricos diferentes en EEUU y en Europa. En Europa, destaca la discriminación institucional dentro del marco de la perspectiva del etiquetamiento a la hora de explicar la mayor presencia de los inmigrantes en prisión; sin embargo, en Estados Unidos, los estudios apuntan a tres perspectivas teóricas distintas: cultural, estructura de la oportunidad y desorganización social (García España, 2014) Además, algunos autores sostienen que la frecuencia con que determinadas minorías se desenvuelven en contextos sociales marginales explica mejor que el hecho de pertenecer a una etnia determinada los altos índices de delincuencia (Killias, 2011).

Por su parte, destacamos tres perspectivas teóricas que han tratado de explicar el vínculo entre inmigración y delincuencia en el continente americano que se podrán extrapolar, en ciertos casos, a nuestro contexto más cercano (Banckston, 1998): la estructura de las oportunidades vitales, los enfoques culturales y la desorganización social.

- Estructura de oportunidades vitales. El acceso a las oportunidades legítimas para obtener riqueza y determinado estatus social no son iguales para todos los grupos sociales por lo que algunas personas intentarán obtener esa riqueza por medio de oportunidades ilegítimas.
- Enfoques culturales. Los códigos culturales son diferentes entre los grupos de una sociedad. En el momento en el que los códigos culturales de un grupo dominante y los de un grupo subordinado entren en conflicto, se etiquetará como desviada la conducta de los miembros de las clases subordinadas por lo que los índices de criminalidad de los extranjeros serán mayores que los de los autóctonos.
- Desorganización social. En el momento en el que los controles sociales de una comunidad se debilitan, la delincuencia sale a la luz. Cuando se produce un cambio social importante, como es el caso de la inmigración, se pueden debilitar las instituciones sociales y se dificultan los acuerdos sobre lo que constituyen valores comunes.

García España (2001) destaca que las diferencias étnico-culturales, la discriminación por parte del sistema de justicia penal y los factores socioeconómicos constituyen las principales causas de que los inmigrantes se enmarquen entre los grupos más representados en las instancias penales. Así, señala tres explicaciones que tratan de responder a esta realidad:

- Relaciones intergrupales. Discriminación institucional. El racismo, a juicio de Gatti, Malfatti, y Verde (1997), como causa de fondo es una cuestión muy concurrida a la hora de hablar de las tasas de delincuencia de las minorías étnicas. La discriminación o el racismo que se aprecia en la propia legislación en materia de inmigración, en las actuaciones policiales, en las decisiones judiciales y en la discriminación penitenciaria explicaría las altas tasas de delincuencia entre estos colectivos. Sin embargo, la base racial no se sostiene al entender que la noción de racismo se concibe dentro de un entramado de relaciones históricas, económicas y sociales y no con connotaciones biológicas por lo que determinados grupos de extranjeros tienen una baja representación en el sistema penal.

- Diferencias etnoculturales. Los autores que defienden esta postura, señalan que, la cultura, más que la pobreza, constituye la primera causa de las

diferencias raciales en las tasas de delincuencia. De este modo, los estudios que se presentan al respecto harían referencia a segundas y terceras generaciones de inmigrantes.

- Perspectivas socioestructural y psicológica. Los factores socioeconómicos, geográficos y demográficos cobran importancia en este enfoque, la frecuencia con la que determinadas minorías se desenvuelven en contextos sociales marginales explicará, en mayor medida que la etnicidad, los altos índices de delincuencia. De esta forma, la clase social o los cambios en la estabilidad familiar se establecen como posibles causas de la delincuencia de los extranjeros.

Así, siguiendo a Smith (1997), cabe resaltar que la clase social es un factor que puede predisponer a la comisión de delitos en mayor medida que el factor racial como tal. Además, en esta perspectiva encajan aquellas explicaciones de la delincuencia de los extranjeros como consecuencia de la desestabilidad familiar.

Además, si ya la población inmigrante constituye uno de los sectores más marginados de la sociedad, la mujer, por el mero hecho de serlo, se encuentra ante una situación clara de marginación y exclusión que ya muchas de ellas sufrían en su país de origen (Lorenzo Moledo et al., 2009).

Diferentes investigaciones llevadas a cabo en los últimos años señalan que los extranjeros que están bien asentados no cometen más delitos que los residentes autóctonos, e incluso presentan tasas menores de delincuencia (Martínez y Lee, 2004; Bell y Machin, 2011).

Pues bien, como vemos, la estructura de la población inmigrante o sus variables socioeducativas las sitúa ante un mayor riesgo delictivo. La marginalidad, la pobreza o la ausencia de vinculación familiar son más intensos cuando se trata de extranjeros. Por otro lado, la libertad condicional y las alternativas a la privación de libertad están prácticamente ausentes cuando hablamos de este colectivo y, a todo ello, se suma la larga duración de condena asociada a los delitos de tráfico de drogas, mayoritariamente cometidos por este grupo (Díaz, 2007).

Es decir, el hecho de ser inmigrante coloca al sujeto en una situación de desventaja social que lo puede llevar a cometer actos delictivos. Pero esto, no justifica la asociación entre inmigración y delincuencia, puesto que cualquier

persona en condiciones similares tendería a la misma conducta. Por lo tanto, la investigación demuestra que se trata más de una percepción social ligada al impacto del fuerte y rápido crecimiento de los flujos migratorios y del refuerzo de esta percepción por parte de los medios de comunicación social (García España, 2014).

3.5. La presencia de extranjeras en las prisiones españolas: su perfil individual y social

El número de mujeres nacionales reclusas ha experimentado un crecimiento en los últimos años, acentuándose considerablemente en el caso de las mujeres extranjeras. Las inmigrantes son personas que valoran sus oportunidades, gestionan sus circunstancias y toman decisiones entre las que se incluye, en ocasiones, involucrarse en actividades delictivas en las que el cálculo del riesgo y la valoración de los beneficios para ellas mismas y sus familiares, están presentes (Ribas, 2004).

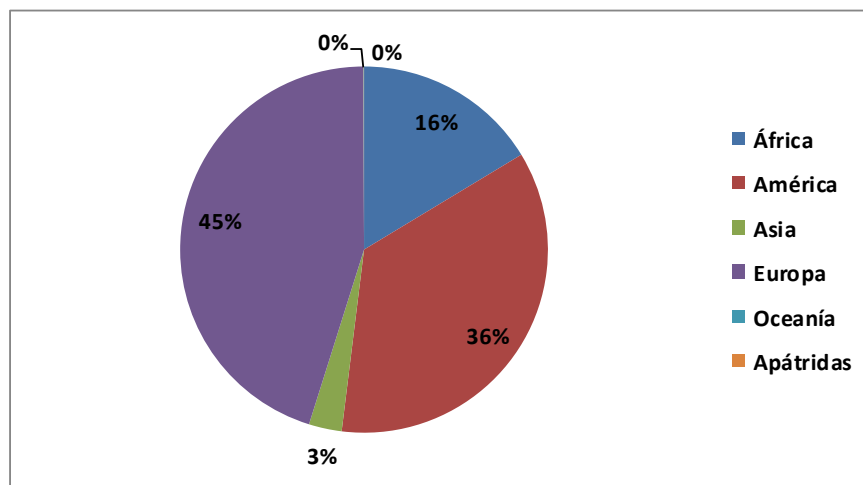
Así, los datos oficiales nos muestran que las mujeres extranjeras fueron detenidas, en 2013, por 13.861 delitos que, sumados a las faltas, hacen un total de 20.584 detenciones e imputaciones. Teniendo en cuenta la tipología delictiva, cabe destacar que el 19,21% de los delitos cometidos en nuestro país por mujeres extranjeras fueron por hurtos, tráfico de drogas (7,31% de las detenciones); delitos por falsedades (9,05%); y los relacionados con el orden público (8,51%) (Ministerio del Interior, 2014).

Estas detenciones se concentraron en la Comunidad Autónoma de Madrid (25,96%), Andalucía (16,84%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Como vemos en la Gráfica 5, el mayor porcentaje de mujeres extranjeras detenidas en nuestro país proceden de Europa; le seguiría el continente americano, sobresaliendo Colombia y Ecuador (42,42%); y África, con Marruecos a la cabeza (66,7%); las asiáticas únicamente representan el 3%, de las cuales, el 66% vienen de China; por su parte las mujeres de Oceanía y las consideradas Apátridas suponen el 0,07% del total.

Gráfica 5

Mujeres extranjeras detenidas e imputadas según procedencia. Año 2013

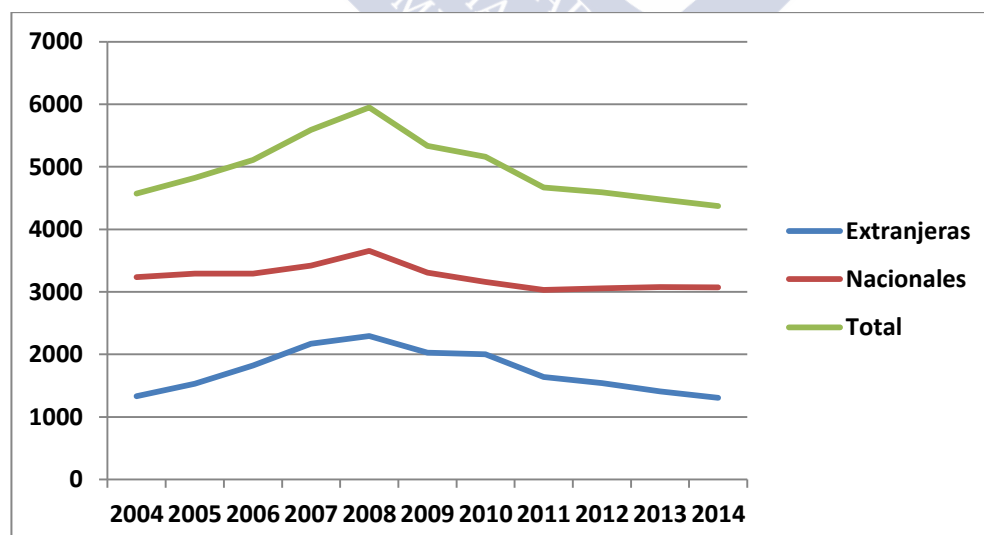


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior (2014).

En cuanto a la presencia de mujeres extranjeras en prisión vemos que las tendencias coinciden cuando se trata de autóctonas y de extranjeras; aunque, bien es cierto, que en el caso de las españolas, la tendencia a partir de 2011, se muestra más estable que la que define a las que no lo son (ver Gráfica 6).

Gráfica 6

Evolución de la presencia de mujeres extranjeras y nacionales en prisión 2004-2014



Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2015.

Los porcentajes varían considerablemente si comparamos las nacionalidades de aquellas mujeres detenidas e imputadas con aquellas que se encuentran en prisión; por

ejemplo, las mujeres marroquíes pasan de representar el 11,02% de las mujeres detenidas, al 8,67% de las que están en prisión, disminuyendo casi 2 puntos porcentuales; mayores diferencias encontramos en las que vienen de Rumanía, pasando del 27,28% de representación en las detenciones al 10,69% dentro de prisión. Sin embargo, las mujeres procedentes de Colombia, que representaban el 7,87% de detenidas aumentan en prisión al 18,45%,

Cabe señalar, en este sentido, que el desproporcionado aumento que se produjo en años anteriores podemos atribuirlo a la reforma del código penal de 1995 que endureció las sanciones penales en conductas “contra la salud pública” y suprimió las redenciones de condena por trabajo (Bodelón, 2007). Como comentábamos en el epígrafe anterior, las condenas dirigidas a extranjeros se ven influidas porque el acceso a la libertad provisional cuando están a la espera de un juicio es más difícil por la falta de arraigo, lo que eleva el número de preventivas, al igual que las medidas alternativas a la prisión propuestas; de todos modos los datos oficiales en cuanto al número de extranjeras preventivas en nuestro país no están desagregados en función de la nacionalidad.

Wacquant (2000) señala que esta tendencia puede enmarcarse en la tendencia general europea hacia el encarcelamiento de colectivos desfavorecidos, encontrándonos en un contexto de, según este autor, criminalización de la miseria.

La feminización de la pobreza se da a escala mundial y ha generado una notable feminización de la población inmigrante que recibe España cada año. Este proceso conlleva que lleguen mujeres involucradas en redes de narcotráfico, hecho que ha contribuido al aumento de las mujeres en prisión.

Así mismo, podemos diferenciar entre las mujeres inmigrantes que vivían en el país antes de ser encarceladas y aquellas que no residían antes de tener contacto con el sistema policial, penal y penitenciario. En el segundo caso, se caracterizan por cometer delitos contra la salud pública y ser detenidas en el mismo momento de llegar al país (Miranda y Martín Palomo, 2007).

Muchos de los factores de diversidad poblacional, nos permiten ver que en las instituciones penitenciarias existen diferentes realidades, como reflejo de la realidad social. Este es el caso de las mujeres extranjeras que no cuentan con el apoyo emocional y económico de sus familias, por la distancia que les separa de su entorno de origen, e

incluso, en algunos casos, no tienen conocimiento del castellano para poder comunicarse y defenderse.

La experiencia de prisión generalmente provoca cambios en la identidad de las presas al ponerse en contacto con otras formas de vida y de discursos. La reclusión en prisión implica cambios esenciales para sobrevivir en un entorno con unos códigos distintos, que les permiten adaptarse al medio durante el periodo de tiempo que transcurre su condena, pero una vez fuera son desadaptativos tanto con respecto a su integración en la sociedad española como, en su caso, de vuelta al país de procedencia. Para las penadas extranjeras, a la pena de prisión superior a seis años se añade la de la expulsión, produciéndose así una doble condena. A esta vulnerabilidad debemos añadir el refuerzo de las diferencias de género, clase, etnia y país de origen; además de la propia carga social que conlleva el haber estado en prisión. La pena privativa de libertad produce una reducción del estatus social de la persona, lo cual, se ve reflejado a la hora de su posterior inserción socio-laboral. (Miranda, Martín, y Vega, 2003).

Teniendo en cuenta los diferentes estudios que se han realizado en los últimos años y que hemos mencionado en el epígrafe referido a las investigaciones en torno a las mujeres en prisión, es momento de señalar las características más significativas del colectivo de extranjeras.

Así, siguiendo a Ribas y Martínez (2003) diferenciamos entre aquellas que son inmigrantes, que tienen un proyecto migratorio, o las que están de paso sin residir en España. Estas últimas tienen la intención de regresar a su país de origen en un corto período de tiempo. Continuando con el proyecto migratorio distinguimos también entre las que han emigrado de forma autónoma o siguiendo a su marido. Los hijos se quedan a cargo de la familia materna, es decir, en su país de origen, especialmente con sus abuelas. En su caso, la comisión del delito se justifica por una urgencia económica.

Un rasgo definitorio del colectivo de mujeres en prisión es el abandono de los estudios por un embarazo a edades muy jóvenes; sin embargo, son las que están más formadas, las que más formación complementaria demandan (García de Cortázar, 2012).

Tras analizar los diferentes estudios podemos señalar que se trata de un colectivo de mujeres jóvenes con niveles educativos medios e incluso universitarios. Además, a pesar de su edad suelen haber tenido hijos antes de entrar en prisión y el consumo de

drogas es más inusual que en el caso de las españolas. Son el sustento principal de sus familias por lo que el trastorno provocado por la entrada en prisión es importante. Por otro lado, la mayor parte de estas mujeres proceden de Sudamérica y, especialmente, se encuentran condenadas por delitos contra la salud pública (García de Cortázar, 2012; Flaquer et al., 2001; Miranda, Martín, y Vega, 2005).

Siguiendo a Ribas y Martínez (2003) podemos explicar el alto porcentaje de mujeres provenientes de Latinoamérica en relación a las marroquíes, por ejemplo, ya que para estas últimas las penas son menores al estar asociadas con delitos relacionados con el tráfico de hachís, considerada una “droga blanda” mientras que los delitos de las sudamericanas se relacionan con la cocaína, considerada como “droga dura” y con más años de condena.

Por su parte, la investigación llevada a cabo por Castillo y Ruiz (2010) pone de manifiesto que los perfiles delictivos de las mujeres extranjeras no difieren mucho de los de las españolas; aunque sí que señalan que se van definiendo perfiles más novedosos, como es el caso de los delitos de tráfico de personas, extorsión o estafa, ligados a nacionalidades más recientemente incorporadas a la inmigración y con un peso cada vez mayor en el conjunto de la población inmigrante en España.

Entre las conclusiones principales de su investigación destacamos las siguientes (Castillo y Ruiz, 2010):

- Se apunta una tendencia hacia el incremento de reclusas de los países de Europa del Este, principalmente de nacionalidad rumana, así como a una diversificación de las nacionalidades. Como hemos visto, el 10,69% de las mujeres extranjeras que se encuentran en prisión en la actualidad son de procedencia rumana.
- En cuanto a los perfiles delictivos, las mujeres reclusas tanto nacionales como extranjeras, no suelen cometer delitos violentos. La causa de ingreso en prisión más común es el delito contra la salud pública.
- Se muestra relación entre delito y nacionalidad, especialmente en delitos contra la salud pública y las nacionalidades latinoamericanas, sobretudo la colombiana y, otros delitos como la estafa y explotación de personas, con la nacionalidad rumana.

- No se consideran a sí mismas como criminales. Defienden la comisión del delito como algo ocasional, y lo justifican como un comportamiento derivado de su situación de exclusión social.
- Tienen un nivel educacional y de habilidades sociales mayor que las mujeres autóctonas; además, presentan un mejor estado físico y psicológico y no consumen drogas.
- Permanecen más tiempo en prisión que las nacionales porque sufren en mayor medida la prisión preventiva y porque tienen más dificultades para conseguir la libertad condicional.
- Tienen una percepción positiva de las prisiones de nuestro país aunque no opinan lo mismo cuando se trata de la comida, el cuidado de la salud y la escasez de actividades dirigidas específicamente a las mujeres.

La mayor parte de los países registran unas tasas globales de delincuencia femenina inferiores al 15% del total para todos los delitos, con un promedio de aproximadamente el 12%. En cambio, según datos del “Informe mundial sobre la trata de personas”, la proporción de mujeres entre los procesados y condenados por trata de personas es del 30%. Las mujeres implicadas en la trata de personas suelen ocupar puestos de baja categoría en las redes de trata y llevar a cabo tareas que las exponen a un mayor riesgo de ser detenidas y procesadas que a los hombres involucrados en esas redes. Son notables las diferencias regionales y subregionales en lo que respecta a la participación de mujeres en la trata de personas. En Europa oriental y Asia central, más de las tres cuartas partes del total de condenados por delitos de trata de personas son mujeres (UNODC, 2011).

Yagüe y Cabello (2005) señalan también una serie de peculiaridades de las mujeres jóvenes extranjeras. Las internas procedentes de América, y norte de Europa, centran su actividad delictiva casi exclusivamente en el tráfico de estupefacientes, para el que son captadas en sus países de origen por organizaciones poderosas que detectan a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones económicas precarias, y bajo la promesa de recibir una cantidad económica importante para su nivel de recursos, las utilizan para el transporte de significativas cantidades de droga a nuestro país. Es decir, se convierten en simples eslabones que son fácilmente prescindibles dentro de las grandes organizaciones. Por otro lado, en lo que atañe a su involucración delictiva,

declaran haber sido detenidas en la primera ocasión en que realizaban el encargo, señalando que la pena impuesta es desproporcionada. Además, coinciden en que son mujeres bastante preparadas, que buscan sobre todo en la prisión la posibilidad de mantener una ocupación remunerada con la que hacer frente a las perentorias necesidades económicas de las familias que dejaron en su país de origen. En cuanto a las mujeres procedentes de los países de la Europa del Este, se caracterizan bien por una pobreza extrema, como el caso de aquéllas procedentes de los territorios de la antigua Yugoslavia, mujeres de etnia gitana que sobreviven en nuestro país ejerciendo la mendicidad, o bien aquellas que están integradas en bandas organizadas que se dedican al robo, la prostitución, la falsificación y la extorsión.

El papel que ha desempeñado la mujer en los flujos migratorios en los últimos años la convierte en merecedora de un creciente interés por parte de la investigación al respecto; además, la consecuente asociación que se produce entre el aumento de población extranjera y el paralelo crecimiento de la delincuencia, provoca una criminalización de este colectivo que influye en su marginalización.

Como vemos, la presencia de mujeres extranjeras en las Instituciones Penitenciarias de nuestro país representa una realidad ciertamente diferente a la de las autóctonas, mostrando perfiles contrapuestos, por lo que, en el siguiente capítulo nos centraremos en la importancia que la educación tiene en este contexto.



CAPÍTULO 4:

**EL TRATAMIENTO
PENITENCIARIO. EL PAPEL DE
LA EDUCACIÓN EN LA
REINSERCIÓN SOCIAL**



CAPÍTULO CUARTO. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA REINSERCIÓN SOCIAL

4.1. Introducción

La cárcel es el lugar donde llegan personas que han cometido un delito tipificado como tal por el código penal y que, en su mayoría, han tenido un proceso educativo deficiente, y no han accedido al mercado laboral, o lo han hecho en precarias condiciones (Subirats, 2005). Es decir, son personas con un bajo nivel socio-educativo, aunque, como hemos visto, esta característica no es común entre las extranjeras (Martínez Lanz, Carabanza, y Hernández, 2008).

El internamiento en prisión supone la restricción de determinados derechos para los internos e internas, derivados del mismo derecho al que se le priva, que es la libertad. Pero en ningún caso puede llevar consigo una privación adicional de los derechos civiles. Entre ellos, más si cabe en este contexto, el derecho a la educación y la formación (Peláez y Bernal, 1999).

La educación en instituciones penitenciarias es un tema complejo y poco estudiado en nuestro país. La particularidad de su alumnado, reclusos y reclusas, y el difícil contexto de las cárceles con un régimen muy concreto, enmarcan una situación definida por diversos aspectos que implican diferentes formas de actuación (UNESCO, 1995). Además, el tratamiento de los internos demanda una atención cercana y especializada que requiere un trabajo multidisciplinar en el que los docentes están inmersos y son actores centrales (Rangel, 2008).

La educación es un derecho fundamental del ser humano reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los que no pueden disfrutar de este derecho pierden oportunidades para participar activamente en la sociedad. Razón por la que los Estados deben garantizarlo plenamente (Nikken, 1994).

Por ello, cabe presentar la importancia que tiene la educación como medio para la reinserción de las personas privadas de libertad en general, y de las internas extranjeras en particular. Una concepción de la educación en la que la comunidad tiene un papel fundamental, ya que se convierte en la vía para abrir nuevas posibilidades para que el Sistema Penal pueda tener en cuenta otro tipo de medidas alternativas a la pena

privativa de libertad, siempre que esto sea posible, como pueden ser los trabajos en beneficio de la comunidad, ampliamente extendidos en la legislación española referida a menores (González Tascón, 2014).

Justamente, la perspectiva comunitaria aparece como uno de los rasgos distintivos de los programas que han demostrado ser eficaces (UNODC, 2011). Pero esto no siempre ha sido así, ya que debemos considerar los diferentes modelos de tratamiento de la delincuencia que no siempre han tenido en cuenta el rol de la educación y el importante papel que fue tomando la comunidad en la intervención.

4.2. El tratamiento penitenciario en la legislación española: el eje de la Educación

La educación en los centros penitenciarios, según Scarfó (2003), tiene tres objetivos principales que reflejan las distintas opiniones sobre la finalidad del sistema de justicia penal: mantener a los internos ocupados provechosamente; mejorar la calidad de vida en la cárcel; y, conseguir un resultado útil que perdure más allá de ese contexto y permita el acceso al empleo o a una capacitación superior.

En todo caso, las tres opciones son complementarias, desde nuestro punto de vista, toda vez que la intervención socioeducativa en un centro penitenciario debe incluir todas aquellas actividades realizadas en la institución, orientadas a la reeducación y reinserción social del penado (Lorenzo Moledo, 1997).

Además, es imposible separar el proceso educativo del contexto en el que tiene lugar. El entorno restrictivo de la cárcel la convierte en un marco especialmente difícil para la educación, cuya finalidad, entre otras, es permitir a las personas tomar decisiones y, como consecuencia, asumir cierto control sobre sus propias vidas, logrando, de este modo, la reinserción social (Scarfó, 2003).

El Reglamento Penitenciario expone, en su artículo 2, que la actividad penitenciaria tiene como fin primordial reeducar y reinsertar en la sociedad a los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como retener y custodiar a los detenidos, presos y penados y proveer de asistencia social a los internos, a los liberados y a sus familiares. Desde esta perspectiva, la prisión es una institución con una función educativa y una función represora (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 1996; Lorenzo Moledo, Aroca, y Alba, 2013). Siguiendo a Matthews (2003), en los centros

penitenciarios se encuentra la paradoja de pretender ser un espacio de castigo por la reclusión en el momento presente del interno y, además, un espacio de reeducación en su futuro.

Para cumplir con su cometido, la actividad penitenciaria se plasma en dos áreas de actuación: el régimen y el tratamiento. El régimen incluye aquellas funciones relacionadas con la seguridad y la vigilancia. Según el artículo 73 del Reglamento Penitenciario tiene como objetivo prioritario conseguir una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos y sus funciones no podrán significar un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos. Además, tanto las actividades de tratamiento como las de régimen, aunque regidas por un principio de especialización, deben estar adecuadamente coordinadas. Por su parte, el área de tratamiento se basa en la reinserción y reeducación de los internos e internas; siendo el medio para alcanzar la reeducación (art. 59 de la LOGP). La reinserción del penado en la sociedad es el objetivo, por imperativo legal, que justifica la existencia del área de tratamiento en los centros penitenciarios.

El principal fin del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento; en consecuencia, las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas (art.71 de la LOGP). Como vemos, el tratamiento adquiere una sustantividad propia y autónoma en nuestro país, situación que la diferencia de otras legislaciones, incluso las más avanzadas, que lo desarrollan dentro del régimen penitenciario o incluso llegan a confundirlo (Zaragoza y Gorjón, 2006).

En el Reglamento Penitenciario se opta por una concepción amplia del tratamiento que no sólo incluye actividades terapéuticas y asistenciales, sino también otras como las actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, concibiendo la reinserción como un proceso de formación integral de la personalidad del interno o interna, para lo cual debe dotarle de instrumentos eficientes para su emancipación (Lorenzo Moledo y Santos Rego, 1997).

Sin embargo, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, el tratamiento se define como el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados pretendiendo hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible,

desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general. Es por ello por lo que Mappelli (1989) señala que la LOGP no presenta la visión integradora del Reglamento, ya que parece dejar claro que no toda actividad penitenciaria dirigida a dichas metas forma parte de este, de forma que ni el trabajo ni la formación son tratamiento, elementos auxiliares que hoy se han convertido en uno de sus pilares fundamentales.

En la misma línea, Aranda (2006b) afirma que el concepto de tratamiento penitenciario se encuentra vinculado a los conceptos de reeducación y reinserción social, hecho que puede llevar a equívocos en cuanto a considerar que actividades como las culturales, la cualificación laboral o incluso las salidas programadas, son también tratamiento, puesto que tales actividades van a influir en gran medida en la reeducación y reinserción social del recluso.

Para algunos autores, la educación en el medio penitenciario se entiende como una terapia técnicamente especializada de tratamiento de trastornos comportamentales (Ward, 2002; Soria y Sáiz, 2006; Serrano Maíllo, 2006; Cerezo y García España, 2007; Redondo, 2008), mientras para otros, es un mero entretenimiento o distracción (Mappelli, 2006).

En todo caso, en el Reglamento Penitenciario (art.110) se señala que para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, la Administración Penitenciaria:

- Diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias.
- Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior.
- Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior contando, siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción.

Por su parte, el artículo 62 de la LOGP, se explicitan los principios en los que se inspirará el tratamiento:

a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno.

b) Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que serán emitidos tomando como base una consideración ponderada del enjuiciamiento global al que se refiere el punto anterior, así como el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales, del sujeto.

c) Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno.

d) En general será complejo, exigiendo la integración de varios de los métodos citados en una dirección de conjunto y en el marco del régimen adecuado.

e) Será programado, fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos integrantes del mismo entre los diversos especialistas y educadores.

f) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena.

Además, en el artículo 70 se contempla que para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, existirá una Central Penitenciaria de Observación, donde actuará un Equipo Técnico de especialistas que se encargará de completar la labor de los Equipos de Observación y de Tratamiento en sus tareas específicas, resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el centro directivo, realizar una labor de investigación criminológica y participar en las tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios (desaparecida en el año 1992).

Estas tareas de observación, clasificación y tratamiento penitenciario se realizan desde las Juntas de Tratamiento cuyas decisiones se ejecutan por medio de los Equipos Técnicos, que estarán dirigidos por el Subdirector de Tratamiento y podrán estar compuestos por Jurista, Psicólogo, Pedagogo, Sociólogo, Médico, Ayudante Técnico

Sanitario, Maestro o encargado de taller, Educador, Trabajador Social, Monitor Sociocultural o Deportivo y Encargado de Departamento.

La Junta de Tratamiento, presidida por el Director del Centro, la componen el Subdirector de Tratamiento, el Subdirector Médico, los Técnicos (Juristas, Psicólogos, Pedagogos y Sociólogos que hayan intervenido en los Equipos Técnicos), Trabajadores Sociales, Educadores, un Jefe de Servicios y, como Secretario, un funcionario del centro escogido por el Subdirector de Tratamiento que tendrá voz pero sin voto. Siguiendo el artículo 273 del Reglamento Penitenciario, serán funciones de esta Junta de Tratamiento las siguientes:

a) Establecer los programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecución penitenciarios para cada interno del Centro, definiendo las actividades a realizar en función de las peculiaridades de su personalidad y del tiempo aproximado de duración de su condena o condenas.

b) Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el Equipo Técnico, distribuyéndolas, según su naturaleza, entre los miembros del Equipo, que las ejecutarán de acuerdo con las técnicas propias de su especialidad y bajo el control inmediato del Jefe del Equipo.

c) Proponer al Centro Directivo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10⁹ de la Ley Orgánica General Penitenciaria a los penados y preventivos en quienes concurren las circunstancias previstas en este Reglamento, previos informes preceptivos del Jefe de Servicios y del Equipo Técnico.

d) Formular, en función del estudio científico de la personalidad de los penados y de los datos e informaciones de que se dispongan, las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y de destino al Establecimiento que corresponda, que se cursarán al Centro Directivo en el plazo de diez días.

e) Proponer al Centro Directivo, en informe razonado, la progresión o regresión de grado y, con carácter excepcional, el traslado a otro Centro penitenciario. También se podrá proponer razonadamente el traslado cuando existan razones de tratamiento que así lo aconsejen.

⁹ Artículo referido a los Establecimientos Penitenciarios de Régimen Cerrado y Departamentos Especiales.

f) Adoptar los acuerdos que estime pertinentes sobre las peticiones y quejas que formulen los internos a los Equipos Técnicos sobre su clasificación, tratamiento o programa de intervención.

g) Conceder los permisos penitenciarios de salida, previo informe del Equipo Técnico, solicitando la autorización del Juez de Vigilancia o del Centro Directivo, según corresponda.

h) Elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y a la libertad condicional, les estén atribuidas.

i) Organizar la ejecución de las prestaciones de carácter asistencial que precisen los internos o sus familiares, fomentar las actividades laborales de los internos, cuidando que las mismas se desarrollen con arreglo a las normas vigentes, así como organizar, por unidades de separación interior, los procedimientos de designación de aquellos internos que hayan de participar en actividades o responsabilidades de orden educativo, formativo, laboral, sociocultural, recreativo, deportivo o religioso.

j) Facilitar a la Unidad Docente las valoraciones de las aptitudes de los internos que realicen cursos de formación, así como aquellas otras informaciones contenidas en el protocolo que puedan serle útiles en la programación y ejecución de las tareas formativas o educativas.

k) Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del Establecimiento.

l) Sugerir a la Comisión Disciplinaria la reducción, aplazamiento de la ejecución o suspensión de la efectividad de las sanciones disciplinarias, que puedan perturbar el tratamiento o el estudio de la personalidad del sancionado, así como la reducción de los plazos de cancelación cuando existan fundados motivos para esperar que esta medida pueda influir favorablemente en el tratamiento.

m) Remitir los informes a que hace referencia el artículo 39 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

n) Formar y custodiar el protocolo correspondiente a cada interno, Incorporando al mismo las informaciones y documentos a que se refieren los diferentes apartados de este artículo.

o) Ejercer todas las demás competencias que le atribuye este Reglamento o sus normas de desarrollo y, en general, las relativas a la observación, clasificación y tratamiento de los internos que no estén atribuidas a otros órganos.

Sin embargo, Martín (2006) considera que, en muchas ocasiones, estas funciones se reducen a una monótona correlación de clasificaciones y concesiones o denegaciones de permisos, olvidándose de las demás tareas. La burocracia puede dejar de lado el trabajo formativo, educativo, laboral y orientador de los internos avanzando únicamente en cuestiones de “papeleo”.

Por su parte, las funciones que deberán desenvolver los Equipos Técnicos (art. 275 del RP) son las siguientes:

a) Ejecutar los programas de tratamiento o los modelos individualizados de intervención penitenciarios que se establezcan para cada interno por la Junta de Tratamiento.

b) El conocimiento directo de los problemas y de las demandas que formulen los internos.

c) Proponer a la Junta de Tratamiento la adopción de las medidas necesarias para superar las carencias que presenten los internos.

d) Atender las peticiones y quejas que le formulen los internos respecto su clasificación, tratamiento o programa de intervención.

e) Evaluar los objetivos alcanzados en la ejecución de los programas de tratamiento o de los modelos de intervención penitenciarios e informar de los resultados de la evaluación a la Junta de Tratamiento.

f) Ejecutar cuantas acciones concretas les encomiende la Junta de Tratamiento o el Director del Centro.

g) Cuando existan en el centro penitenciario talleres o escuelas de formación profesional, realizar las tareas de orientación y selección profesional, el asesoramiento pedagógico o psicológico de la formación profesional, así como procurar, mediante las técnicas adecuadas, la integración personal y colectiva de los internos en el trabajo y en la orientación laboral.

h) Ejercer las demás competencias que le atribuye este Reglamento y sus normas de desarrollo.

Cabe presentar, en este sentido, que se produce una incoherencia cuando la figura del pedagogo está ausente en la mayoría de los centros mientras que entre las funciones del Equipo Técnico se contempla el asesoramiento pedagógico así como en los principios inspiradores destacados en la LOGP en donde se dice expresamente que el tratamiento debe ser individualizado y se utilizarán medios pedagógicos en relación a la personalidad del interno.

En cada centro existirán, además, maestros responsables de las actividades educativas, que impartirán las enseñanzas que se determinen y serán responsables de la educación que se programe en los diferentes niveles educativos. Además, los educadores serán los colaboradores directos e inmediatos de los equipos de observación y de tratamiento, realizando tareas complementarias (art. 296 RP).

Todos los internos tienen derecho a participar en los programas de tratamiento de la Administración Penitenciaria para la promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de cada persona condenada. Es obligación de la Administración diseñar un programa individualizado para cada uno de ellos, incentivándoles de forma que intervengan en la planificación y ejecución del mismo.

El Reglamento Penitenciario de 1996 profundiza en el principio de individualización científica en la ejecución del tratamiento penitenciario para lo que se aplican modelos individualizados de intervención para todos los presos, incluidos los preventivos, cuando sea compatible con el principio constitucional de presunción de inocencia. En el artículo 3 del Reglamento Penitenciario se especifica, en cuanto al tratamiento penitenciario, que, en cuanto sea compatible con su situación procesal, los presos preventivos podrán también acceder a las actividades educativas, formativas, deportivas y culturales que se celebren en el centro penitenciario, en las mismas condiciones que los penados. Con esta medida se evita que la estancia en prisión de una parte importante de la población reclusa sólo tenga fines custodiales, al tiempo que se amplía la oferta de actividades educativas, formativas, socioculturales, deportivas y medios de ayuda que se programen para propiciar que su estancia en prisión sirva para paliar, en lo posible, las carencias detectadas.

Estos Programas de Tratamiento Individualizado (PIT) se configuran, según informa la Instrucción 12/2006, a partir de dos niveles: por una parte, las actividades

prioritarias, que son aquellas que tratan de subsanar las carencias más importantes del sujeto y en las que, o bien se interviene sobre los factores directamente relacionados con su actividad delictiva o bien sobre sus carencias formativas básicas; y, por otra, las actividades complementarias, que no están relacionadas tan directamente con la etiología delictiva del sujeto, ni con sus carencias formativas básicas, pero que complementan a las prioritarias, dando al interno una mejor calidad de vida y más amplias perspectivas profesionales, educativas o culturales.

De este modo, la labor prioritaria pasa, por un lado, por la asignación, con criterios técnicos, en los programas individualizados de intervención o de tratamiento, de las actividades prioritarias y complementarias, de acuerdo al estudio de carencias, necesidades e intereses del interno; y, por otro, por la adaptación del catálogo de actividades del centro a las necesidades que presenten los internos, potenciando unas u otras áreas de actividad mediante las propias disponibilidades presupuestarias del Centro Penitenciario y/o a través de la firma de acuerdos o convenios de colaboración con organismos e instituciones extrapenitenciarias (Instrucción 12/2006).

En esta línea, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Ginebra, ya señalan que en el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle útiles. Deberán hacerse, asimismo, gestiones a fin de proteger, en cuanto ello sea compatible con la ley y la pena que se imponga, los derechos relativos a los intereses civiles, los beneficios de los derechos de la seguridad social y otras ventajas sociales de los reclusos.

La naturaleza educativa que venimos observando al revisar la legislación nos hace pensar en el papel fundamental de la figura del pedagogo en instituciones penitenciarias. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que es escasa la presencia de estos profesionales en el Sistema Penitenciario de nuestro país. Aunque esta figura está reconocida en el cuerpo que conforma los equipos técnicos no es una práctica habitual

encontrar este profesional desempeñando su labor en la cárcel, de hecho, hace más de una década que no se convocan oposiciones en esta especialidad (García Sancho, 2006).

La situación del Pedagogo en Instituciones Penitenciarias se debe, siguiendo a Gil Cantero (2010) al referirse a la figura del educador social, a que, la educación, reeducación o resocialización no se consideran aun, a efectos penitenciarios, acciones susceptibles de profesionalización en su diagnóstico, ejecución y evaluación. En palabras de Del Pozo y Gil Cantero (2014), se prima el entretenimiento y el tratamiento psicológico, frente a la educación, y se sobrevalora el silencio y la prisionalización comportamental de las personas privadas de libertad.

4.3. Modelos de intervención con delincuentes

A lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes modelos de tratamiento de la delincuencia que han ido reflejando las concepciones que la sociedad ha tenido del delito y del delincuente en cada momento. Podemos destacar, tres modelos principales: el modelo de justicia, el modelo médico de rehabilitación o de enfermedad mental y el modelo de tratamiento educativo-comunitario o de reintegración (Lorenzo Moledo, 1997).

4.3.1. El modelo de justicia

Este modelo niega que los delincuentes puedan ser rehabilitados mediante la reeducación social. Entiende que el castigo y la disciplina son la mejor solución, desestimando los programas comunitarios. Además, centra su atención en los delitos comunes sin tener en cuenta los de cuello blanco o los de gobierno (Lorenzo Moledo, 1997).

Siguiendo a Garrido y Gómez Piñana (1996a), este modelo reivindica la vuelta al retribucionismo de forma que critica la ineficacia del tratamiento correccional argumentando que éste únicamente sirve para “vaciar” el sentido de la pena.

Alcanza su punto álgido cuando Martinson en 1974 publicó el artículo *“What Works? Questions and answers about prison reform”* que provocaría un claro interés en la investigación en torno a la eficacia del tratamiento ya que se cuestionaba, tras una revisión de los estudios llevados a cabo, que en los centros se fuese más allá del mero cumplimiento de la pena. Este autor afirmó que los programas dirigidos a personas que habían cometido algún delito, como los de entrenamiento vocacional, modificación de

conducta, psicoterapia o educación eran un fracaso (ver Ross, 1992). En todo caso, el propio Martinson rectificaría cinco años más tarde su posición, alegando que lo ineficaz eran las condiciones en las que los programas se habían llevado a cabo y no los programas en sí, reconociendo, además, que existe una clara evidencia de que algunos programas funcionan bien (Cullen y Gendreau, 2006).

De todos modos, su obra tuvo un gran impacto sobre la justicia criminal, provocando un claro escepticismo hacia la rehabilitación, lo que derivó en una corriente denominada “Muerte de la Rehabilitación”, que provoca que, los programas adoptasen una línea conservadora dando un paso para atrás en cuanto al tratamiento de los delincuentes (Ross, 1992; Gómez Piñana, 1993).

El único fin de la privación de libertad es el control, presentándose, el tratamiento, como una fuente de riesgos innecesarios para su ejercicio. De este modo, el fracaso que presenta Martinson de las estrategias rehabilitadoras justificará el castigo como meta principal de estas instituciones; además, el efecto intimidatorio conseguirá la protección pública ejerciendo la prevención de la reincidencia (Garrido y Gómez Piñana, 1996b).

Martinson proponía la diferenciación entre tres tipos de delincuentes: los “suspendidos”, que serían los que han cometido un delito por primera vez y estarían en libertad sin tratamiento ni ningún tipo de supervisión, siendo elegibles para realizar trabajos voluntarios; los “controlados” que se corresponden con aquellos suspendidos que vuelven a cometer un delito y serían vigilados estrechamente por parte de la policía; y, por último, los “aislados” donde encajarían aquellos reincidentes de los grupos anteriores o los que hayan cometido un delito violento. Estos últimos cumplirían la pena sin ningún fin resocializador (Segura, 1985).

Este modelo, siguiendo a Cullen y Gendreau (2006), señaló como objetivo de la condena la imposición de una pena merecida, de forma que sus defensores dejaron de lado cualquier preocupación por el control de la criminalidad, señalando que únicamente la equidad y la justicia debían ser las funciones del sistema penal.

Garrido (1985) afirma que este modelo se basa en dos supuestos:

- Se entiende que el castigo y la disciplina son la mejor forma para evitar la delincuencia. En todo caso, el castigo debe ser proporcional al daño provocado con el delito y al grado de culpabilidad del que lo ha cometido.

- Las prisiones son el contexto más adecuado para reducir el crimen, desestimando los programas comunitarios. De este modo, se conseguirá el aislamiento y castigo de los delincuentes y un efecto ejemplificador.

Como vemos, la idea de castigo se complementa con la necesidad de hacerlo en instituciones seguras, sin que se plantee la posibilidad de hacerlo en la comunidad. Este modelo se inspira en los principios de la Escuela Clásica que representan Beccaria y Bentham quienes concebían el delito como un “ente jurídico” que resulta del hecho de identificar determinada acción con la ley que con anterioridad lo había prohibido.

4.3.2. El modelo médico de rehabilitación o de enfermedad mental

Si bien el modelo de justicia se identificaba con la Escuela Clásica, este modelo se identificará con la Escuela Positivista de Lombroso y Ferri.

El modelo médico de rehabilitación o de enfermedad mental sustituye el castigo por la rehabilitación. Desde esta postura se parte de que el delincuente es un enfermo psíquico, estando el problema dentro del propio individuo. La conducta inadaptada se considera patológica y se clasifica a partir de una serie de síntomas. El tratamiento, por lo tanto, consiste en una terapia psiquiátrica dentro de la institución. Sus defensores entienden que el delito es causado por un factor o factores que pueden ser identificados, aislados, tratados o eliminados; de ahí que los delincuentes sean considerados como enfermos necesitados de tratamiento que debe recaer en expertos. El castigo únicamente empeorará el problema ya que se piensa que el delincuente se ve arrastrado a realizar conductas ilegales por problemas emocionales (Garrido, 1987).

Este modelo infravalora los aspectos sociales, educativos o familiares, ignorando el papel de las instituciones y estructuras sociales como posibles fuentes de inadaptación. En definitiva, considera que el problema está, únicamente, en el individuo.

Por su parte, siguiendo a Blanco García (1990), al definir a los delincuentes como enfermos, los partidarios de este modelo tienen como objetivo principal eliminar las causas que han producido la enfermedad, tarea encomendada a especialistas que deberían participar del poder judicial para que la sentencia se adecúe a las necesidades del sujeto. Además, el tratamiento se debe centrar en la utilización de la psicoterapia

dinámica basada en explicaciones psicoanalíticas, donde lo fundamental será descubrir las raíces inconscientes del problema.

Robert Balch (1975), uno de los autores que más ha estudiado este modelo, nos presenta las implicaciones prácticas que lo definen:

- “Hospitaliza” a los delincuentes, lo cual se presenta como fracaso ya que se aparta de su entorno más cercano para adscribir al delincuente en una institución cerrada.

- Los profesionales se “glorifican” puesto que son los que pueden “curar”.

- Los efectos de la Psicoterapia son extremadamente variables, pudiendo ir desde una gran mejoría a un severo deterioro; además, la delincuencia y el efecto estigmatizador del tratamiento remite, en muchos casos, espontáneamente.

- Este modelo ensombrece el papel de las instituciones sociales ubicando el problema exclusivamente en el individuo.

Como vemos, es un modelo de intervención que parte de que el delincuente padece una enfermedad mental, que habrá que tratar de curar para que no se repita la conducta. La rehabilitación será la base del tratamiento.

En la actualidad, la enfermedad mental se presenta como un problema que afecta directamente a las instituciones penitenciarias ya que su prevalencia es alta. Además, es frecuente que el primer abordaje de la enfermedad se haga después del ingreso en un centro penitenciario (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2009).

Según datos de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial el 11 de diciembre de 2006 (Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, 2007), el 25,6% de los internos en centros penitenciarios tiene recogido algún diagnóstico psiquiátrico sin incluir el abuso o dependencia de drogas y, el 49,6% tiene uno o varios diagnósticos psiquiátricos incluyendo el abuso o dependencia de drogas.

Diferentes estudios realizados concluyen que las personas encarceladas tienen entre cuatro y seis veces más de probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general y prácticamente diez veces más de un trastorno antisocial de la personalidad (PRECA, 2011).

Así, en muchos casos, la enfermedad mental se halla en el origen del delito que estos internos han cometido, utilizándose, la prisión, como un recurso de carácter asistencial (Gallizo, 2007). Sin embargo, en otras ocasiones, la enfermedad mental se desarrolla dentro del propio centro penitenciario, a causa de la realidad a la que los internos e internas se exponen.

Esta situación ha llevado a Instituciones Penitenciarias a determinar la necesidad de desarrollar objetivos terapéuticos y de reinserción a través de una serie de actividades para lograrlos. Para ello, se desarrolla el Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (PAIEM) (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2009).

4.3.3. El modelo de tratamiento educativo-comunitario o de reintegración

El modelo de tratamiento educativo-comunitario o de reintegración supone el nacimiento de la no institucionalización centrándose en la situación del individuo. El tratamiento tiene lugar donde es necesario y donde reside el sujeto, es decir, en la comunidad. Se reserva la institucionalización a casos de peligrosidad para la sociedad. La estrategia comunitaria se centra en la prevención primaria y secundaria, en una perspectiva poblacional y promueve el cambio institucional. Pretende que la conducta delictiva sea tratada mediante programas comunitarios atribuyendo ésta a un problema educativo. El apoyo social es esencial en este modelo poniéndose el acento en las estrategias preventivas tratando de evitar que surjan las actitudes y conductas delictivas o, por lo menos, que se consoliden como pautas de comportamiento cuando esto sea posible (Lorenzo Moledo, 1997).

Se parte de la perspectiva de que el individuo y la comunidad son un complejo interactivo e interdependiente, por lo que la intervención se centraría por una parte, en la persona y por otra, en el sistema social, con el fin de maximizar su adaptación, actuando, así, sobre las causas de la inadaptación que se encuentran en la misma sociedad. Los profesionales especializados en procesos reeducativos tienen un papel fundamental en este modelo. Trabajarán con aquellas personas importantes en el ambiente del individuo para que puedan apoyarle en las actitudes y conductas prosociales. Por lo tanto, no estamos ante una propuesta estática sino que las

actuaciones deberán adaptarse a las necesidades específicas del individuo y su comunidad (Maya, 2004).

Como nos muestra Lorenzo Moledo (1997), podemos establecer las siguientes diferencias entre el modelo tradicional de tratamiento y el educativo-comunitario:

1. Nivel de prevención. Mientras que el modelo tradicional se basa en la prevención terciaria, el de reintegración lo hace en la primaria y en la secundaria.

2. Concepto de delincuente. El modelo educativo comunitario se centra en aquellas variables que inciden con mayor fuerza en la carrera delictiva del sujeto mientras que el tradicional se basa en la personalidad criminal.

3. Enfoque. Pasamos de un enfoque clínico a un enfoque psicoeducacional. Siguiendo a Martín, Vila y De Oña (2013) de acuerdo con este nuevo enfoque los procesos educativos y políticos se tornarán básicos y los conflictos se visualizarán como parte de un devenir humano.

4. Métodos de cambio. El segundo modelo se centra en las técnicas de modificación de conducta, especialmente en el desarrollo de habilidades sociales, mientras que el tradicional lo hace en las modalidades de psicoterapia dinámica, individual o de grupo.

5. Papel de las instituciones. La prisión se plantea en el modelo de reintegración como un primer paso para las estrategias comunitarias, dejando atrás el planteamiento de que los especialistas que se encuentran en los centros penitenciarios son suficientes para, trabajando en este contexto, “curar” a las personas que hayan cometido un delito. En cierta medida, este es el espíritu que debería orientar a los CIS o a las Secciones Abiertas. Así, el tratamiento penitenciario por sí solo no podrá disminuir de forma significativa la tasa de reincidencia pero sí podrá servir para aumentar las oportunidades de conducta prosocial (Garrido, 1992).

La teoría del aprendizaje social será la que sustente este modelo, identificando que la conducta está influida por las experiencias vividas necesitando, según Blanco García (1990), una serie de alternativas para relacionarse mejor con los demás, habilidades educativas, laborales e interpersonales.

La teoría del aprendizaje social (Akers, 1997; cit. en Garrido et al., 2006, p. 374) incluye los siguientes constructos:

1. Asociación diferencial. Proceso mediante el cual uno es expuesto a definiciones normativas favorables o desfavorables a la conducta ilegal. De este modo, tendrán más influencia sobre las personas aquellas asociaciones diferenciales que poseen mayor frecuencia, duración, prioridad e intensidad.

2. Definiciones. Serán los significados que una persona vincula a una conducta determinada. Cuanto mayor sea el número de definiciones contrarias a ciertos actos menor será la probabilidad de realizarlos.

3. Reforzamiento diferencial. Se refiere al balance entre los refuerzos y los castigos anticipados o reales que siguen o son consecuencias de la conducta. A mayor refuerzo como resultado de una conducta delictiva, mayor probabilidad de delinquir.

4. Imitación. Involucrarse en una conducta tras la observación en otros de una conducta semejante. De forma habitual adquirimos conductas a partir de modelos observados reproduciéndolos cuando se producen las consecuencias que consideramos apropiadas.

De este modo, a juicio de Garrido (1992) este modelo se caracteriza por:

- Criticar el tratamiento como meta final de las instituciones. El tratamiento institucional se plantea como el primer paso para una reintegración total.
- Diferenciar entre enfermo y delincuente, generalmente el interno no comete un delito a causa de problemas emocionales.
- Rechazar el planteamiento médico en cuanto a la necesidad de una terapia, sino la necesidad psicoeducativa, mereciendo mayor atención el entrenamiento en la solución de problemas interpersonales.
- Adoptar una perspectiva básicamente preventiva.
- Las tareas de reeducación recaen especialmente en aquellas personas significativas en el ambiente del delincuente, además de en los especialistas.

Sykes (1958; cit. en Garrido 1992, p. 201) señalaba, en cuanto al modelo de tratamiento, que:

1. La prisión puede ser transformada pero no eliminada por lo que los programas penales han de basarse en la realidad y no en la utopía.

2. Ninguna dosis de buena conducta puede transformar una prisión autoritaria en algo distinto. La naturaleza de la represión no ha de ser cruel, pero sí firme y eficiente.

3. Poco podemos esperar de aquellos programas de rehabilitación que pretenden “curar”. La reforma de todos o la mayoría de los delincuentes es tarea imposible.

4. Cualquiera que sea influencia de la encarcelación, siempre será un producto de los patrones de interacción social en los que el interno participa cada día.

Por su parte, los estudios de Antonowicz y Ross (1994; cit. en Garrido y Martínez, 1998, p. 68) no confirman la idea de que la comunidad sea el lugar más propicio para el éxito en el tratamiento de los delincuentes y defienden que la naturaleza del lugar o el ambiente construido puede ser más importante que la propia ubicación del tratamiento. Garrido y Martínez (1998) afirman que los programas en la prisión pueden ser efectivos si consiguen crear un ambiente propicio dentro de ella de modo que se construya una “comunidad alternativa”.

Como vemos, este modelo centra su base operativa en la educación, de modo que los espacios penitenciarios conforman el primer paso del tratamiento para poder alcanzar la reinserción que necesariamente deberá continuar, en la propia comunidad (Lorenzo Moledo et al., 2013; Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003c).

Cabe señalar, como ejemplo, el modelo de intervención del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que parte de las características y peculiaridades de las mujeres que conviven en sus instalaciones. Su modelo de intervención se define como un proceso a largo plazo de logros consolidables, es decir, que avanza desde un cierto grado de dependencia hasta la plena autonomía personal. Lo que tratan es de combinar programas de formación, de intervención personal y de servicios sociales que permitan a las mujeres una mejora en sus capacidades personales, y les ayuden a ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía (Yagüe, 2007b).

En la intervención socioeducativa dentro del medio penitenciario debemos partir, pues, de este modelo comunitario o de reintegración, que considera que el

centro penitenciario es el primer paso para el trabajo educativo que necesariamente debe continuarse con programas comunitarios.

4.4. La prisión como institución de ayuda educativa

La dificultad del tratamiento aumenta cuando se trata de intervenir en un módulo de mujeres en el que comparten espacios una gran variedad de perfiles criminológicos. El conjunto de programas específicos de tratamiento, de formación y/o trabajo o las actividades culturales y recreativas que se ofrecen en los módulos femeninos es comparativamente menor, menos variado y de peor calidad que el que se realiza en los módulos de hombres (Almeda, 2005a).

Independientemente, desde la Pedagogía, y basándonos en el modelo comunitario, tenemos que defender un modelo de intervención que conceptualice la prisión como una institución de ayuda educativa (Garrido, 1988) o como un proyecto de educación (Gil Cantero, 2010).

4.4.1. Los programas institucionales de intervención psico-socio-educativa

La Circular 12/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con el fin de responder a las necesidades en cuanto a la programación, evaluación e incentivación de actividades y programas de tratamiento en los centros penitenciarios, plantea un protocolo de actuación en el que se traspasan las competencias referidas a la programación y seguimiento del conjunto de actividades educativas, deportivas, ocupacionales y culturales a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria (con anterioridad correspondían al Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias) así como la creación en la citada Subdirección, de un nuevo Área de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Programas Específicos de Tratamiento, suponiendo esto, una nueva reorganización en el enfoque y gestión del conjunto de las actividades y programas de intervención tanto en los Servicios Centrales como en los Centros Penitenciarios.

De este modo, este área tiene como objetivo principal potenciar la implantación de los programas de tratamiento considerados prioritarios (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2014a) y sus actuaciones se centran en los siguientes puntos:

- El diseño de programas, mejorando las herramientas de intervención.
- La formación de los profesionales para la implantación de estos programas con equipos de trabajo que tienen un carácter multidisciplinar y que reciben el mismo tipo de formación.
- El posterior seguimiento del desarrollo de los programas, de forma que las acciones no se pierdan o se desista de ellas, llevando a cabo una intervención muy directa, con contactos regulares y visitas a los centros.
- La evaluación de dichos programas, contando con la colaboración de instituciones y profesores universitarios que colaboran también en la formación de los profesionales.

Se plantea que el desarrollo de los programas y de las actividades debe ser global y contemplar todas las áreas de intervención para la eliminación de carencias profesionales, sociales, culturales, de desarrollo personal, físico, familiar, etc. Además, se muestra la necesidad de desarrollar programas específicos de tratamiento (como veremos más adelante) que permitan dar respuesta a situaciones determinadas que requieren de técnicas especiales y de profesionales cualificados.

Por lo tanto, la detección de las carencias que limitan el desarrollo integral de las personas privadas de libertad es la primera tarea a la que habrán de enfrentarse todos los profesionales penitenciarios. La labor prioritaria, por tanto, a la que se enfrentan los profesionales de los centros debe contemplarse desde una doble perspectiva (Instrucción 12/2006):

- Asignación, con criterios técnicos, en los programas individualizados de intervención o de tratamiento, de las actividades prioritarias y complementarias, de acuerdo al estudio de carencias, necesidades e intereses del interno.
- Adaptación de las actividades del centro a las necesidades que presenten los internos, potenciando unas u otras áreas de actividad según las propias disponibilidades presupuestarias del Centro Penitenciario y/o a través de la firma de acuerdos o convenios de colaboración con organismos e instituciones extrapenitenciarias. En la línea de la colaboración con organizaciones externas, debe subrayarse la importancia de la integración en los equipos multidisciplinarios de los profesionales ajenos a la institución penitenciaria a través de las evaluaciones del trabajo que realizan con los internos.

En esta línea podemos destacar la labor de Fundaciones como la Fundación Pedro Barrié de la Maza o la Obra Social la Caixa, que tienen un peso importante en cuanto a la reeducación y reinserción social en los centros penitenciarios, colaborando con proyectos que van desde la formación en nuevas tecnologías hasta la financiación de los Módulos de Respeto. Estas dos entidades, junto con otras, llevan a cabo numerosas iniciativas en el ámbito penitenciario destinadas a actividades tanto formativas como sociales que propician la reinserción del interno y mejoran las condiciones de vida en los centros penitenciarios.

La participación de entidades externas redundará en una mayor eficacia de la intervención en la prisión, así como en la preparación progresiva del interno para su integración en la comunidad, disponiendo de mayores recursos personales y sociales.

Existe una clara discusión entre aquellos que defienden que los problemas deberían estar dirigidos hacia la reducción de los factores de riesgo o, aquellos que creen que deberían centrarse en los factores de protección, es decir, en las fortalezas de la persona (Del Pozo y Añaños, 2013). Como veremos a continuación, los programas en los centros penitenciarios tratan de englobar ambos aspectos.

Los Programas de Intervención en el medio penitenciario, de acuerdo con Garrido y Gómez Piñana (1995), se deben llevar a cabo en función de los modelos científico-tecnológicos desde los que enfrentarse a cuestiones pedagógico-sociales. Sin embargo, diferentes autores del ámbito educativo critican este tipo de intervención (ver Del Pozo y Añaños, 2013) al señalar que no se tienen en cuenta variables contextuales o socioculturales.

De este modo, en el contexto penitenciario, podemos diferenciar entre programas generales y programas específicos en función de las necesidades que se presenten. A continuación hacemos referencia a cada uno de ellos de forma breve (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2015).

A) Programas generales.

- Módulo de Respeto.

En estos Módulos se pretende crear espacios apropiados para que los internos desarrollen sus capacidades como ciudadanos responsables y respetuosos con la ley. Se trata de una unidad de separación interior de un centro penitenciario en donde la inclusión del interno es voluntaria y lleva implícita la aceptación de las normas del

módulo, que regulan el área personal referente a higiene, aspecto, vestuario y cuidado de celda; el área de cuidado del entorno relativa a la utilización y mantenimiento de los espacios comunes; el área de relaciones interpersonales que incluye las interacciones del sujeto con otros internos, funcionarios, terapeutas y personal del exterior; y, el área de actividades que regula la programación de actividades para cada interno, independiente de las tareas del módulo (Cendón, Belinchón, y García Casado, 2011).

Se trata de un programa de educación en valores positivos en torno a la idea de respeto que obliga a los internos a ponerlos en práctica. El ingreso en estos módulos supone aceptar un nuevo estilo de vida basado en la confianza y la solidaridad y en la solución pacífica de los conflictos.

Existen tres estructuras de participación, una reunión diaria o asamblea general, la asamblea de responsables y la comisión de acogida y comisión de convivencia.

En definitiva, sus objetivos generales son la creación de un clima social normalizado que sirva de marco a los programas de tratamiento específicos; la ruptura de la dinámica carcelaria a través de la modificación de las relaciones de grupo; y el desarrollo de programas de tratamiento en hábitos, valores y actitudes.

- Módulos Terapéuticos.

Son módulos independientes que albergan a internos en programas integrales de drogodependencias fomentando cambios en los hábitos, actitudes y valores de los internos e internas y la intervención está en la línea de su normalización y reincorporación social.

Existen diferentes modalidades dentro de estos módulos según la composición del Equipo multidisciplinar, las características de la población del módulo y la metodología de la intervención: Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), Comunidad Terapéutica, Módulo Terapéutico y Módulo mixto.

La Unidad Terapéutica y Educativa se convierte en un modelo alternativo a la prisión tradicional y se basa en un modelo de cogestión entre los profesionales y los internos centrándose en el grupo terapéutico como eje de la intervención.

Los principales instrumentos de la intervención son (UTE Villavona, 2005):

- a) El contrato terapéutico. Es el documento escrito que vincula a los internos con la UTE en cuanto a compromiso, el ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes establecidos.
- b) El grupo terapéutico. Grupos de autoayuda de no más de 15 internos integrados por aquellos que acceden a la UTE independientemente de su problemática.
- c) La escuela. Espacio que se convierte en un medio estimulante que va a ayudar fundamentalmente a conseguir el nivel de concienciación y normalización.
- d) Actividades formativo-ocupacionales. Tanto los talleres autogestionados, como los talleres con profesionales voluntarios y los de formación profesional ocupacional para desempleados se configuran como una pieza básica del tratamiento en cuanto a que favorecen la adquisición de determinados hábitos y conductas y la generalización y mantenimiento de las habilidades que se estimen necesarias.
- e) Cursos formativos en el exterior. Cursos extrapenitenciarios de formación profesional ocupacional.
- f) Actividades culturales, deportivas de ocio y tiempo libre. Se proponen como complemento en la dinámica de la Unidad dándosele un contenido terapéutico.
- g) Asistencia sanitaria y psiquiátrica. Orientada tanto a la prevención como a la curación y rehabilitación.
- h) Salidas terapéuticas y campos de trabajo. Será una actuación intermedia entre la actividad desarrollada en el interior y los permisos de salida y serán gestionadas por las diferentes organizaciones colaboradoras.
- i) Permisos de salida. Es el momento de poner en juego el trabajo que viene realizando en cuanto a responsabilidad e implicación personal.

- Enseñanza reglada.

Podemos diferenciar entre la enseñanza reglada no universitaria y la universitaria. En la primera, nos encontramos los programas de alfabetización para adultos, de consolidación de conocimientos, de educación secundaria para adultos,

de alfabetización y castellano para extranjeros, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior y la Escuela Oficial de Idiomas. A partir de la publicación del Real Decreto 1203/1999 de integración de los Profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Maestros, las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas prestan, en su ámbito territorial, el servicio educativo en todos los niveles y modalidades de Educación Permanente de Adultos, de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de cada establecimiento penitenciario (Castillo y Ruiz, 2007).

Aunque el colectivo destinatario es la totalidad de internos, tendrán prioridad los internos e internas analfabetos, los jóvenes, las personas extranjeras y los que presentan problemas específicos para acceder a la educación.

Por su parte, en cuanto a la Enseñanza Universitaria, existe un convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), recayendo, en esta universidad, la enseñanza superior a distancia desde hace tres décadas, de forma que implica a alumnado, tutores, profesores y responsables de formación de las prisiones (Vázquez Cano, 2013).

El procedimiento administrativo y académico de estos estudios le corresponde a la Universidad, de forma que desarrollen las actuaciones necesarias para garantizar que los estudiantes puedan alcanzar los conocimientos y las competencias académicas y profesionales programadas de forma que incorporen, siguiendo el artículo 5 del RD 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE 31/12/2010), a sus objetivos formativos la formación personal y en valores; por su parte, las instituciones penitenciarias deben sentar las bases de su desarrollo en los centros teniendo en cuenta las normas de funcionamiento impuestas por encima de cualquier consideración académica (Lorenzo Moledo y Santos Rego, 1997).

El Programa de Estudios en Centros Penitenciarios (PECP) se ha ido afianzando en el sistema penitenciario después de que a finales de los años setenta se desarrollase una experiencia en la prisión de Carabanchel (Viedma, 2013). Así, en la actualidad, la acción de la UNED se concreta ofreciendo un sistema de orientación, información y matriculación para los alumnos, material didáctico básico, tutorías semanales en los centros penitenciarios prioritarios de algunas asignaturas del curso de acceso y de las que se determinen en las principales carreras, apoyo del centro

asociado de la UNED más próximo para los alumnos en régimen abierto y en libertad condicional y un programa radiofónico general (UNED, 2015).

En este sentido, siguiendo a Lorenzo Moledo (2014) nadie puede dudar de que los estudios universitarios suponen un punto importante en el proceso de reinserción social y profesional tanto, como parte esencial del tratamiento, como por la consideración del interno como sujeto de derecho que no está excluido de la sociedad.

- Formación para el empleo.

La formación para el empleo y la actividad laboral de los internos en las prisiones está encomendada a la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo que anteriormente se constituía como organismo autónomo (OATPFE), dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y regulado por el R.D. 868/2005 de 15 de julio, modificado por última vez por el R.D. 122/2015, de 27 de febrero.

Este organismo tiene como principal objetivo lograr la inserción laboral de los penados mediante la formación y el trabajo, proporcionándoles conocimientos y hábitos laborales para que, una vez alcanzada la libertad, puedan competir en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos (OATPFE, 2015).

Sus principales funciones son las siguientes:

- La organización del trabajo productivo penitenciario y la oportuna retribución.
- La conservación, instalación, transformación, ampliación y mejora de las instalaciones necesarias para los fines del organismo.
- La realización de actividades industriales, comerciales o análogas y, en general, cuantas operaciones se relacionen con el trabajo penitenciario.
- La formación para el empleo de los internos en centros penitenciarios.
- La organización de acciones de orientación y/o acompañamiento para la inserción laboral a la salida de la prisión, organizándolas directamente o mediante relaciones con instituciones y organizaciones sociales.

Podemos diferenciar entre Cursos de Formación (se pueden realizar en el interior y en el exterior de los centros y abarcan un buen número de familias profesionales, priorizándose, en su programación, aquellas que ofrecen mayores expectativas de inserción), Ciclos formativos (se realizan en el interior de los centros penitenciarios, a través de convenios con diferentes Comunidades Autónomas, obteniendo el título profesional correspondiente) y Becas de formación en el exterior (mediante concierto con entidades externas, se posibilita que los internos e internas beneficiarios, según su perfil y evolución, adquieran su cualificación profesional fuera de los centros de régimen cerrado, siendo destinados para ello a Centros de Inserción Social).

- Otras enseñanzas y programas formativos.

Además de las enseñanzas regladas se ofrecen itinerarios formativos a los internos e internas de cara a su inserción en la sociedad. De este modo, podemos destacar:

1. Programa de aula mentor. Es un centro de recursos equipado con ordenadores, conexión a Internet o con modem que lo suple, programas informáticos, materiales y asesoramiento de un administrador, para internos/as matriculados en un curso.
2. Enseñanza de idiomas. Cursos no reglados de idiomas tanto extranjeros como de las lenguas cooficiales, que se imparten dentro de las actividades programada por el Equipo Educativo.
3. Enseñanza abierta y de preacceso. Los cursos de Aula Abierta son estudios de actualización de conocimientos impartidos por la UNED. El curso de Preacceso se imparte en algunos centros para preparar la prueba de Preacceso que se realiza en junio a todos aquellos internos que no reuniendo los requisitos académicos para acceder directamente al Curso de Acceso Directo para mayores de 25 (tener el Graduado Escolar de Secundaria o equivalente) desean realizarlo.
4. Programa de cualificación profesional inicial. Se trata de que los estudiantes alcancen competencias profesionales de nivel I de cualificación profesional y amplíen sus competencias básicas para seguir con sus estudios y enlazar con la formación reglada.

5. Universalización de la Educación Vial. El objetivo es generalizar la sensibilización así como la educación vial además de facilitar el acceso al permiso de conducir o reconducir posibles conductas infractoras. Por otro lado, se pretende favorecer la capacitación laboral de las personas internadas en centros penitenciarios, por ser el permiso de conducir un requisito, cada vez más necesario, para acceder a un puesto de trabajo.

- Plan Marco de Intervención Educativa con Internos Extranjeros

Por su parte, en relación a la nueva realidad multicultural a la que se enfrenta el contexto penitenciario, en el año 2006 se presenta el “Plan Marco de Intervención Educativa con Internos Extranjeros”, que sigue el principio general de igualdad y no discriminación recogido en el artículo 3 de la LOGP “La actividad penitenciaria se ejercerá sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza”. Este Plan centra sus bases en la Recomendación del Consejo de Europa de 1984 (Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2006a) que recomienda basarse en los principios siguientes:

a) Medidas tendentes a reducir el aislamiento y a facilitar la rehabilitación social.

– Para atenuar el sentimiento de aislamiento de un recluso extranjero, habría que proporcionarle más posibilidades de comunicarse con otras personas de la misma nacionalidad, lengua, religión o cultura.

– Medidas necesarias para que puedan acceder a publicaciones en su lengua. A tal fin, los establecimientos penitenciarios podrían solicitar la ayuda de los servicios consulares y de organizaciones privadas apropiadas.

– Los reclusos extranjeros deberían tener las mismas posibilidades de acceso a la educación y a la formación que los nacionales.

– Deberían aplicarse a los reclusos extranjeros los mismos criterios que a los nacionales en lo relativo a concesión de permisos de salida. La evaluación del riesgo de sustraerse al cumplimiento de la condena debería realizarse siempre considerando cada caso individual.

b) Medidas tendentes a reducir los obstáculos lingüísticos.

- Información al ingreso en prisión en una lengua que entiendan: condena, recursos, derechos y deberes, normas, actividades, etc.

- Facilitar el aprendizaje del idioma.

c) Medidas tendentes a responder a necesidades especiales.

- Deberían respetarse las prácticas y los preceptos religiosos de los reclusos extranjeros.

- Habría que prestar atención a los problemas que puedan surgir como consecuencia de las diferencias de cultura.

d) Medidas sobre formación y empleo del personal penitenciario.

- En los programas de formación del personal debería incorporarse la formación que pueda ayudarles en su trabajo con los reclusos extranjeros. El objetivo de dicha formación debería ser incrementar la comprensión de sus dificultades y del medio cultural.

- Sería conveniente prever que determinadas categorías de personal realizaran un trabajo más intensivo con estos reclusos impartiendo una formación más especializada o centrada, por ejemplo en el aprendizaje de una lengua o en dificultades específicas que surgen con determinados grupos.

e) Ayuda de las autoridades consulares.

- Los reclusos extranjeros deben ser informados de su derecho a establecer contacto con las autoridades consulares.

- Lo antes posible, las autoridades consulares deberían ayudar a los reclusos que sean nacionales de su país, en particular visitándolos con regularidad.

- Las autoridades consulares deberían esforzarse por facilitar libros y otras lecturas para ayudarlos a seguir en contacto con su país de origen. Asimismo, deberían examinar la posibilidad de editar folletos informativos destinados a los reclusos de su país, mencionando la ayuda que puede prestarle su consulado, informaciones sobre su defensa, suministro de libros y otras publicaciones e información sobre las posibilidades de repatriación en virtud de los acuerdos internacionales aplicables.

Parece que la intervención multicultural sólo afecta a los extranjeros, en contra de lo que se afirma en la investigación sobre la educación multicultural. Siguiendo a Santos Rego (2009) cabe señalar que el objeto de la pedagogía intercultural no es enseñar las culturas sino devolverle a la enseñanza su dimensión cultural; no debe reducirse a la adquisición de saberes sino comprometerse, desde una perspectiva interdisciplinar, con sus contenidos, metodologías y destinatarios. Además, se dirige a todos los grupos humanos y no exclusivamente a los minoritarios, al margen de la singularidad étnica de cada lugar. Su eje de interés debe centrarse en promover las condiciones educativas deseables para que personas de diversas culturas se encuentren, convivan, y tejan entre ellas lazos de verdadera comunicación; de una comunicación interpersonal en donde primen actitudes de respeto, empatía, deferencia, solidaridad, valoración, y responsabilidad recíproca.

A partir de estas recomendaciones y de la normativa penitenciaria de nuestro país, que se enfoca en el mismo camino, se considera necesario intensificar la intervención educativa con este colectivo en una doble dirección. Por un lado, se trata de procurar que los internos extranjeros participen en los programas educativos generales que se llevan a cabo en las prisiones; y, por otro, se presentan tres programas específicos que tratan de contribuir a su desarrollo personal y a su integración en la sociedad (Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2006a):

- Programa de Idioma y Educación Primaria.

Cabe señalar que desde el propio Plan se plantea que “es esencial contar con una figura que desarrolle las funciones de coordinación entre el colectivo docente y el Centro penitenciario, que podría ser el Pedagogo del Equipo Técnico o, en su defecto, un Educador con formación en mediación intercultural”.

Este programa pretende desarrollar estrategias de incorporación de los internos extranjeros a las clases de Español para Extranjeros en el área de la educación formal, tanto a nivel de alfabetización, como en niveles superiores. Se trata de eliminar la barrera idiomática, de forma que se constituye como un paso previo a la realización de otro tipo de actividades ya que, en muchas ocasiones el desconocimiento del idioma impide el acceso en igualdad de condiciones de los internos extranjeros a determinados programas suponiendo un obstáculo a la hora de adaptarse al medio.

Sus destinatarios serán los extranjeros que no cuenten con ningún conocimiento de la lengua española o éste sea deficiente. Además, se incluye a aquellos que, aun comprendiendo el idioma, sean analfabetos o se encuentren en los primeros niveles de enseñanza primaria.

- Programa de Formación Multicultural.

Se basa en actuaciones dirigidas hacia la aceptación del pluralismo cultural y se desarrolla a través de tres áreas: información jurídica y valores democráticos, centrada en los derechos humanos, valores constitucionales y derechos de los extranjeros en España; Grupos de Intervención Cultural, que trabajan en la adaptación a la vida en prisión en un país nuevo, los roles de las mujeres y los hombres en España, la religión, las costumbres y estilos de vida, la adaptación en la distancia o la participación y relaciones sociales; y Actividades Interculturales abiertas, a través de conferencias, mesas redondas, cineforum, teatro, música y otras expresiones culturales de diferentes países.

Con este programa se trata de promover la integración social de los internos extranjeros, aprender a convivir en tolerancia, igualdad y solidaridad, difundir la opción intercultural educativa y, conocer y valorar el concepto y proceso de exclusión social del colectivo de extranjeros.

Aunque podrán participar todos los internos que se presenten interesados, los extranjeros con conocimiento del idioma español que deseen participar serán destinatarios preferentes.

- Educación en Valores y Habilidades Cognitivas.

Esta tercera parte del Plan Marco de Intervención Educativa para Internos Extranjeros se constituye como la tercera fase del proceso puesto que se debe garantizar un mínimo nivel de comprensión del idioma y entender la realidad del contexto multicultural, de esta manera se podrán trabajar los conflictos más fácilmente.

Así, los contenidos se abordan a partir de los siguientes bloques: dinámicas grupales, discusión y argumentación, entrenamiento de habilidades cognitivas diversas clarificación de valores, análisis de textos para la educación en valores, y, discusión de dilemas morales.

Los destinatarios deben contar con un mínimo dominio del español y preferiblemente deben haber participado en los bloques I y II del Plan de Intervención, aunque el grupo ha de estar abierto a cualquier posible participante interesado; además, el grupo ha de ser mixto, con internos de varias nacionalidades (incluidos españoles). La participación es voluntaria y debe valorarse su motivación mediante entrevista individual. El último requisito que deberán cumplir los participantes será que cuenten con una permanencia previsible en el centro de 6 meses.

Debemos tener en cuenta, por último, que los nuevos retos que se plantean en cuanto a la educación en estos centros -como es la diversidad étnico-cultural-, deben ser asumidos por profesionales que, teniendo en cuenta las características específicas de este contexto, sepan relacionar esa nueva realidad con la construcción de proyectos de integración y cohesión social. Educación que, según apunta Santos Rego (2014), se debe presentar ligada a procesos de comunicación, a destrezas dialógicas articuladas según proyectos en los cuales la interacción cooperativa sea una constante procedimental y axiológica.

- Programa de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario

En cuanto a este programa, al cual ya nos hemos referido en el capítulo primero, pretende incidir en aquellas situaciones y circunstancias que perpetúan un trato discriminatorio de las mujeres en la ejecución penitenciaria además de contribuir a romper las barreras sociales y personales que pudieren dificultar una adecuada inserción social y el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

Las líneas generales de este programa se configuran de la siguiente manera (Ministerio del Interior, 2012):

a) Aplicación de medidas capaces de acortar la duración del encarcelamiento efectivo, y su temprana reincorporación a sus responsabilidades familiares y laborales como fórmulas eficaces para los perfiles de menor peligrosidad, y con mayor capacidad de integración social. Se pretende impulsar cambios legales con medidas de atenuación, suspensión o sustitución de las penas de prisión para mujeres embarazadas y las que tengan a su cargo hijos no emancipados o personas mayores o dependientes.

b) Enfocar la actividad penitenciaria de las mujeres hacia la comunidad, impulsando la corresponsabilidad de las instituciones, servicios públicos, asociaciones y empresas que intervienen en el proceso de cumplimiento e integración.

c) Se propone acometer un programa de guía y tutela personal, mediante su implicación en un proceso continuo de logros consolidables desde el grado de dependencia que presentan hacia la autonomía personal, a través de una combinación de programas de servicios sociales, formativos, y de intervención personal:

- En el área social, diseñar para un protocolo de acogida inmediata para la atención a la problemática que representa el ingreso en prisión, y el fortalecimiento o restauración del entorno familiar, o búsqueda de recursos sociales alternativos.

- En cuanto a la intervención educativa, se trata de cubrir todas las áreas, desde el entrenamiento y adquisición de habilidades básicas personales, a los distintos niveles escolares, de formación profesional, instrucción laboral... sin olvidar la promoción cultural y deportiva y utilización creativa del ocio.

- En la intervención personal, se prioriza el fomento de la autonomía personal y de prevención de la violencia y/o la explotación económica y sexual con la exposición de modelos conductuales que promueven la independencia en la vida afectiva, sexual y económica.

- Este esfuerzo debe llegar a todos los perfiles de diversidad: integración de las internas extranjeras, programas de jóvenes, de personas mayores y discapacitadas.

- La maternidad en prisión requiere un abordaje específico que se realiza con la creación de Unidades para madres con hijos ubicadas fuera de los establecimientos penitenciarios ordinarios.

Este programa, como ya señalábamos, conlleva actuaciones a nivel organizativo, la creación de un Observatorio permanente para la erradicación de factores de discriminación basados en el género, la Atención integral a las

necesidades de las mujeres encarceladas y excarceladas y una serie de planes para favorecer la erradicación de la violencia de género y paliar sus consecuencias.

B) Programas específicos

Por otra parte, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también se plantean otros programas que se consideran de gran relevancia a nivel específico.

Los Programas Específicos de Tratamiento parten de una evaluación global del recluso/a teniendo en cuenta sus carencias, necesidades e intereses, así como su personalidad y el tipo de delito cometido. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se proponen distintas actuaciones para llevar a cabo con determinados colectivos, de forma que estas puedan servir como complemento a los Programas de Tratamiento dirigidos a todos los internos e internas.

Entre los colectivos específicos se tiene en cuenta a las mujeres como un grupo homogéneo, al igual a los extranjeros, como grupos con características propias. Sin embargo, aunque puedan contemplar una serie de rasgos comunes, sus carencias, necesidades e intereses se presentan muy dispares.

- Agresores en el ámbito familiar.

Destinado a aquellos internos que han cometido delitos de violencia de género. Se trata de un programa que se realiza en grupo y se prolonga durante un año. En este caso, se produce una intervención de tipo cognitivo-conductual a través de cuatro bloques: el primero de ellos se denomina “Asunción de la responsabilidad” que tiene como fin lograr la empatía con la víctima; el segundo, “Control de emociones” se centra en la ansiedad, los celos, la ira y el resentimiento; el tercero incluye técnicas en habilidades sociales y solución de problemas además de educación sexual; y, en el cuarto y último bloque, se enfatiza en la prevención de las recaídas, afianzando los contenidos anteriores y promoviendo un estilo de vida positivo (Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2005).

- Control de la agresión sexual.

Este programa está dirigido a internos que han cometido delitos de tipo sexual contra mujeres o menores y la intervención dura dos años. Se diferencian dos fases: la evaluación pormenorizada de cada uno de los sujetos que van a participar

voluntariamente en el programa y la intervención psicosocial en un programa de acción. Este programa de intervención pretende incrementar la conciencia del interno y aumentar el alcance de las elecciones que realiza en relación a su conducta, desarrollando una serie de habilidades de enfrentamiento y capacidades de autocontrol que fomentarán una sensación general de dominio o control sobre su propia vida (Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2006b).

- Prevención de suicidios.

La Instrucción 5/2014, en la que se modifica el Programa Marco de prevención de suicidios propuesto por la Instrucción 14/2005, contiene un protocolo para que los profesionales penitenciarios detecten situaciones personales o sociales que puedan suponer un alto riesgo de suicidio y apliquen las medidas más adecuadas encaminadas a evitar una conducta autolesiva. Las medidas que se tomarán seguirán tres vías: medidas preventivas que consistirán en que los funcionarios tengan la suficiente información sobre el recluso, contando éste, con un interno de apoyo y permaneciendo en una celda compartida para evitar el aislamiento; medidas provisionales urgentes, en los casos en los que sea necesario se acudirá al hospital o se dispensarán los medicamentos oportunos asignándole, asimismo, un interno de apoyo; y, medidas programadas, control por parte de los servicios médicos, intervención desde los servicios de tratamiento (consulta psicológica programada, seguimiento directo por el educador, valoración por el trabajador social y contacto y asesoramiento familiar), control especial de las unidades de vigilancia y un régimen de vida basado en el acompañamiento continuo.

- Personas con discapacidad física, sensorial, psíquica o intelectual.

Se trabajan aspectos como la detección temprana del caso, la asignación a departamentos o centros sin limitaciones arquitectónicas y la tramitación de certificados oficiales. En el caso de los internos con déficit intelectual la intervención está orientada al entrenamiento en habilidades básicas para conseguir su autonomía. Con este programa se trata de compensar las áreas carenciales y necesidades detectadas, así como prevenir situaciones potenciales de riesgo en la intervención de trastornos de conducta o de tipo emocional que pudieran estar asociados (Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 2006c).

- Terapia asistida con animales (TACA).

Dirigida a internos con una personalidad inestable, caracterizada por la impulsividad, escasa autoestima, baja capacidad de empatía y por un déficit en conducta de autocuidado. Sus principales objetivos son potenciar las habilidades de comunicación y de relación personal, mejorar la autoestima y la autonomía, mejorar las relaciones sociales, reducir los estados de ansiedad y depresión, fomentar el sentido de la responsabilidad y adquirir y/o consolidar la adherencia al tratamiento psiquiátrico.

- Resolución dialogada de conflictos.

Pretende que los internos que presentan un determinado problema de convivencia lo resuelvan de manera pacífica, contando con el apoyo de un mediador. Este programa consiste en la instauración de un servicio permanente que actúa cuando se tiene conocimiento de la existencia de un conflicto entre algún interno. Su objetivo principal es introducir y promover la cultura de la mediación como forma alternativa de afrontar los conflictos interpersonales. Además, se trata de disminuir y transformar las dinámicas relacionales conflictivas hacia mecanismos de resolución pacífica de conflictos a través del aprendizaje de habilidades sociales así como prevenir actitudes y acciones violentas dentro de los centros y generar y desarrollar actitudes de comprensión, tolerancia y respeto hacia la diversidad. Se distinguen tres fases en el proceso: explicación y ofrecimiento de la mediación que se realiza por separado con cada interno; encuentro dialogado y búsqueda de acuerdos; y, de aceptación de compromisos.

- Programa de prevención de violencia de género para las mujeres.

Denominado “Ser Mujer.es” tiene como objetivo general disminuir la vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad ante situaciones de violencia y/o dependencia, e intervenir sobre aquellas que han vivido o que están viviendo esta problemática. La población destinataria son las mujeres que han vivido y/o están viviendo situaciones de violencia de género o aquellas que, sin haber sufrido violencia de género, estén interesadas por este programa y sería para ellas una herramienta de carácter preventivo. Además, se desarrollará por medio de sesiones grupales que serán complementadas con sesiones de carácter individual en los casos

en los que se estime necesario (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2010).

- Programa de intervención con drogodependientes.

La problemática que supone el consumo de drogas hace que este sea un área de intervención prioritaria en los centros penitenciarios. Así, se plantean como objetivos prevenir el inicio en el consumo de drogas y las conductas de riesgo, prevenir y reducir los riesgos y los daños asociados al consumo, conseguir periodos de abstinencia y optimizar la incorporación social.

Dentro de esta área podemos diferenciar distintos subprogramas (Pérez Loza y Arenas, 2006):

a) Prevención y educación para la salud. Se trata de promocionar hábitos y un estilo de vida saludable. Bajo el nombre “Mediación en Salud” se procede a la mejora de la información y sensibilización de los funcionarios/as de los centros penitenciarios en materia de prevención de drogodependencias y otras cuestiones de salud pública, especialmente en relación con el VIH y la hepatitis C para que éstos formen a los internos y sean ellos mismos quienes lleven a cabo las funciones como Agentes de Salud en su entorno.

b) Programas orientados a la abstinencia. Se denominan Programas Libres de Droga y tienen por objetivo conseguir y mantener la abstinencia en el consumo de drogas. Están dirigidos a aquellos internos que presentan buenas perspectivas de cambio y recursos personales suficientes como para afrontar el objetivo.

c) Programas de reducción de daños y riesgos. Son aquellas medidas socio-sanitarias, individuales o colectivas, que pretenden disminuir los efectos negativos (físicos, psíquicos y sociales) asociados al consumo de drogas. Destacan los programas de mantenimiento con metadona (sustitución del opiáceo objeto de dependencia por metadona además de apoyo psicosocial) y los programas de intercambio de jeringuillas (evitar el uso compartido de jeringuillas).

- Atención integral a enfermos mentales (PAIEM).

Como ya hemos señalado anteriormente, en este programa se plantean pautas de atención especializada, que hacen especial hincapié en la práctica de actividades

terapéuticas y ocupacionales. El programa marco incluye actuaciones dirigidas a la detección del caso, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2009). Este Programa se divide en tres subprogramas: atención clínica (detección de internos con enfermedad mental, diagnóstico y tratamiento médico y derivación al programa de rehabilitación), rehabilitación (evaluación de habilidades y discapacidades, elaboración del plan individualizado de rehabilitación y ejecución y seguimiento) y su reincorporación social.

- Programa de preparación de permisos de salida.

Los permisos de salida se rigen por la Instrucción 22/1996 y, de cara a preparar a los internos para sus primeras salidas al exterior, se llevan a cabo una serie de actuaciones con las que se pretende ofrecer herramientas, estrategias y pautas de comportamiento que pueden optimizar el disfrute de permisos y reducir los riesgos referidos a empeorar el tratamiento o aquellos que tienen que ver con la reincidencia. Los objetivos se centran en preparar al interno para el contacto con el exterior de forma gradual, establecer objetivos individuales a alcanzar durante estos permisos, planificar la consecución de estos objetivos de acuerdo con el tiempo disponible y el proyecto personal, prever los aspectos que pueden provocar incidencias negativas y dotarlos de medidas de control, realizar un seguimiento de la práctica en el exterior de las habilidades o los aprendizajes adquiridos, informar sobre la red de recursos comunitarios disponibles y susceptibles de ser utilizados durante los permisos, indicar las consecuencias personales y legales sobre el mal uso de los permisos y, por último, abordar, de forma individual, cada caso.

- Tabaquismo.

La Instrucción 4/2011 marca una serie de pautas referidas a las medidas de protección del tabaquismo en los centros penitenciarios. Además, este programa de intervención tiene un enfoque educativo, psicosocial y conductual. Trata de ayudar a reducir los problemas de salud asociados al consumo de tabaco así como promover hábitos saludables que mejoren el bienestar general de los internos participantes y contribuir a un cambio de cultura respecto a la inocuidad del tabaco y la permisividad hacia el fumador en espacios penitenciarios. Por su parte, también se centra en contribuir a un mayor conocimiento de los efectos nocivos del tabaco

sobre el organismo y en fortalecer la voluntad, la autonomía y la autoestima de los interesados.

- Programa de deshabituación al alcohol.

Los contenidos del programa incluyen un proceso previo de información y motivación y un posterior entrenamiento en habilidades para afrontar la adicción, manejo del ansia y prevención de recaídas. Sus contenidos básicos se aglutinan en tres bloques. En el primero se informa sobre la adicción al alcohol, con el fin de dar a conocer los efectos en el organismo y los problemas asociados en la salud a corto y largo plazo; en el segundo se pretende motivar para el cambio utilizando estrategias orientadas a aumentar el compromiso con el tratamiento y cesar en el consumo; y en el tercero, se entrena en habilidades de afrontamiento con el objetivo de aumentar y reforzar las habilidades para afrontar situaciones de alto riesgo en relación al consumo del alcohol.

- Juego patológico.

Con este programa se pretende, desde Instituciones Penitenciarias, romper la conducta activa de juego mediante la exposición a situaciones y control de respuesta además de conseguir el mantenimiento de la abstinencia con la adquisición de habilidades de afrontamiento y de autocontrol con el fin de superar en el futuro cualquier dificultad que pueda presentarse al sujeto evitando así su recaída. Los contenidos se centran en la información sobre el juego, la identificación de situaciones de alto riesgo, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento y en relajación, reestructuración de creencias irracionales y estados emocionales negativos, el afrontamiento de conflictos personales e interpersonales así como de la presión social, práctica de actividades alternativas al juego y abuso de alcohol.

- Programa de Pensamiento Prosocial.

Este programa, siguiendo a Garrido y Gómez Piñana (1996b), se compone de una serie de técnicas que se centran en la conducta cognitiva. Se entiende que el adecuado entrenamiento de funciones cognitivas directamente relacionadas con el ajuste social supone un elemento fundamental en el tratamiento del delincuente. Por su parte, las técnicas de intervención se presentan en base a nueve módulos: solución de problemas, habilidades sociales, habilidades de negociación, pensamiento creativo, desarrollo de valores, control emocional, razonamiento crítico, ejercicios

cognitivos y revisión de habilidades. Partimos de que la mayoría de los delincuentes presentan ciertos déficits en algunas habilidades cognitivas imprescindibles para lograr el ajuste psicosocial.

Los objetivos de este programa se basan en producir un desarrollo de la cognición interpersonal, aumentar la capacidad de comprender el punto de vista y los sentimientos de los otros, aprender a pensar de forma crítica, resolver con estrategias más eficaces los problemas sociales o interpersonales, explorar los propios valores y la comprensión del mundo y, desarrollar interpretaciones alternativas sobre las normas y obligaciones sociales (Medina, 2013).

Tal y como apuntan Alba et al. (2006) desde sus inicios en Canadá, el programa ha sido modificado y refinado sustancialmente hasta desembocar en un programa psicoeducativo, multifacético y altamente estructurado que ha sido aplicado a nivel internacional a una amplia variedad de delincuentes tanto adolescentes como adultos ofreciendo resultados destacables en términos de reducción de reincidencia.

Este programa surge a finales de los años 60 en la Universidad de Waterloo con el objetivo de investigar la situación de las mujeres adolescentes recluidas y tratarlas; a partir de esta necesidad se diseña por parte de Ross y Fabiano el programa R&R (Razonamiento y Rehabilitación: un modelo detallado para la prevención y el tratamiento de la delincuencia) para reducir el comportamiento antisocial, dando lugar al programa de competencia prosocial.

Este programa consta de entre 35 y 40 sesiones de dos horas de duración dependiendo de la realidad en donde se lleve a cabo aunque actualmente cabe destacar que se ha planteado la versión corta que consiste en 13 sesiones de una hora (Garrido y Gómez Piñana, 1996a).

Estas sesiones se dividen en nueve módulos que concretamos a continuación (Lorenzo Moledo, 1997):

1. Solución de problemas. Este bloque no se reduce a proporcionar soluciones a problemas concretos sino que se pretende enseñar habilidades cognitivas y conductuales para capacitarlos para desarrollar una aproximación general a estos problemas. Este módulo se concretará en nueve sesiones que están centradas en el reconocimiento y la

identificación de los problemas, la recopilación de información mediante la observación, la conceptualización, la comunicación verbal y no verbal, la búsqueda de posibles soluciones mediante el pensamiento alternativo y consecuente y, la comunicación asertiva.

2. Habilidades sociales. Algunos delincuentes carecen de ciertas habilidades básicas que, según Sanchís (1990) son necesarias para optar de forma prosocial a determinadas recompensas sociales. Las habilidades destacadas serán el pedir ayuda, responder a los sentimientos de los demás, formular una queja o responder al fracaso, entre otras. Para entrenar estas habilidades se siguen técnicas de pre-entrenamiento, modelado, role-playing, feed-back, transferencia e integración.
3. Habilidades de negociación. Ante un conflicto muchos delincuentes actúan de forma antisocial, retroactiva o conformista por lo que se busca una respuesta alternativa: la negociación. Este módulo se dirige, siguiendo a Ross, Fabiano, Garrido y Gómez Piñana (1996), a enseñar a los delincuentes cómo identificar y aclarar una situación problemática, cómo identificar las opciones disponibles entre las diferentes respuestas, cómo identificar las consecuencias de varias opciones y la simulación de las opciones para obtener las consecuencias deseadas.
4. Pensamiento creativo. La rigidez cognitiva supone aferrarse a unas ideas sin importar que puedan no ser ciertas así como la utilización de antiguos puntos de vista ante nuevas situaciones (Garrido, 1993); es por ello por lo que este bloque se centra en enseñar nuevas ideas a través de técnicas que les permitan analizar el pensamiento de los demás. Estas técnicas se concretan en 10 y son: PMI (considerar lo positivo, lo negativo y lo interesante), CAF (considerar todos los factores), REGLAS (pensar en las reglas), C& L (considerar las consecuencias a corto y a largo plazo), METAS (considerar aspiraciones, metas y objetivos), PLANIFICAR (aprender a planificarse), MIP (determinar las prioridades más importantes), APE (considerar alternativas, posibilidades y elecciones), DECISIONES (aprender a tomar decisiones) y OPV (considerar otros puntos de vista).

5. Control emocional. El principal objetivo en este caso será el control de una emoción difícil de controlar como puede ser la ira, la ansiedad, el miedo o la sobreexcitación. Siguiendo a Ross et al. (1990) esto implica identificar las claves contra la ira, poner en práctica las habilidades cognitivas necesarias para reducir la probabilidad de que ciertas situaciones provoquen ira y reconocer los indicios fisiológicos y psicológicos de la activación emocional.
6. Desarrollo de valores. En este caso cobra importancia la reflexión sobre el razonamiento para resolver dilemas morales. Primeramente se presenta el dilema moral y se hace reflexionar a los participantes, se discute en grupos reducidos examinando el dilema y se estimula la reflexión sobre su postura personal
7. Razonamiento crítico. Se trata de potenciar el pensamiento racional de forma que se promueve la curiosidad intelectual, la objetividad, la flexibilidad, el juicio prudente, la mente abierta, la relevancia, la persistencia, la capacidad de decisión y el respeto por el punto de vista de los demás. El objetivo es ejercitar habilidades en las siguientes áreas: propaganda y persuasión (capacidad para valorar y evaluar ideas de los demás evitando ser manipulados o engañados), anuncios y propuestas (detectar errores de pensamiento en uno mismo y en los demás), conceptos básicos de razonamiento crítico (comprobar los conceptos básicos que hay detrás de lo que uno piensa, dice y hace) y aprender a tener la mente despierta (no llegar a una conclusión de forma precipitada hasta considerar otras opiniones).
8. Revisión de habilidades. Este módulo está dirigido a la revisión de las técnicas aprendidas de forma integral, servirá al entrenador para evaluar si los participantes han adquirido las técnicas que se han trabajado en las anteriores sesiones.
9. Ejercicios cognitivos. Este módulo se desarrollará a lo largo de las diferentes sesiones a modo de complemento y estimulan a los participantes a pensar y practicar algunas de las diferentes habilidades cognitivas.

Además de los que hemos repasado, existen programas con carácter puntual, desarrollados por iniciativa de las diferentes entidades que colaboran diariamente en el ámbito penitenciario. La mayor parte de ellos muestran una vertiente socioeducativa que se plantea como prioritaria aunque bien es cierto que en muchos casos se asocia la educación de forma exclusiva al ámbito escolar. Además, la Pedagogía, en este contexto, se encuentra en un segundo plano ya que, como bien señala Del Pozo (2008), todavía no se utilizan sus fundamentos, metodologías y acciones propias.

Es cierto que no entendemos la prisión como el medio idóneo para la resocialización, pero más que nos pese, es la realidad ante la que se encuentran las mujeres y hombres que cometen un delito en nuestro país y son condenados a penas privativas de libertad, por lo que la investigación en cuanto a la eficacia de la intervención se presenta absolutamente necesaria. En todo caso, la prisión existe y va a continuar existiendo, pero podemos reducir el número de personas que cumplen condena enalteciendo las medidas alternativas a la privación de libertad que, en el caso de nuestro país, no tienen todavía un peso destacable. En esta línea, ya Hernández y Moreno (1989) señalaba que la prisión ni es, ni puede ser, un instrumento pedagógico idóneo, pero sí que es un entorno, un marco, en el que pueden y deben actuar la pedagogía y la psicología, y, más concretamente la pedagogía y psicología sociales y del aprendizaje.

4.4.2. La eficacia en la intervención educativa con delincuentes

En definitiva, aunque durante largo tiempo la prisión ha cumplido con una función punitiva y correctiva, relegando la visión socioeducativa a un segundo plano (Garrido y Martínez, 1998; Del Pozo y Añaños, 2013), poco a poco ha ido adquiriendo una mayor visibilidad el modelo socioeducativo o educativo-comunitario basado en una concepción humanista de la intervención y donde la individualización se presenta como su eje fundamental.

En contra de lo que muchos autores manifiestan, de que no se puede intervenir con eficacia pedagógica en centros penitenciarios (Lorenzo Moledo et al., 2013), la literatura científica nos muestra evidencias de que existen programas que sí funcionan. Sin embargo, es importante, llegados a este punto, partir de que no toda la intervención en el medio penitenciario es eficaz.

Como señalan Lorenzo Moledo et al. (2013), la intervención en las prisiones debe estar basada en las evidencias científicas que determinen las técnicas y programas de tratamiento pedagógico-educativo y psicológico más efectivos dirigidos a la no reincidencia y reinserción social.

Garrido y Martínez (1998) nos presentan los principales aspectos que debemos considerar a la hora de estudiar un programa correccional:

1. La comunidad en la que se incluye el programa y las condiciones de la institución que lo desarrolla. Se presentan condicionantes de tipo socioestructural y político-económico que pueden limitar su desarrollo.

2. Las características de los sujetos con los que trabajar. Incluyendo factores de riesgo, necesidades y el principio de “responsividad”. Los factores de riesgo serían aquellas circunstancias en el sujeto o su medio que se relacionan con mayor probabilidad de cometer un hecho delictivo; con respecto a las necesidades nos referimos a las variables que, de no modificarse, son elementos de riesgo para la implicación o reincidencia en un delito; y, por último, el principio de “responsividad” se refiere a las competencias, intereses o estilos de aprendizaje específicos que un sujeto debe poseer para aprovechar la participación en determinado tipo de programas.

3. Las características de los profesionales que desarrollan el programa. Nos referimos a sus habilidades sociales y a las habilidades de “entrenamiento directas”. Al respecto, Gil Cantero (2010) plantea la necesidad de que las acciones pedagógicas sean desarrolladas por profesionales cualificados, aunque estos participen por medio de Organizaciones no Gubernamentales. Es sabido que esto no siempre es así, ya que en muchos casos los voluntarios de las ONG no están formados para ello. La base científica de los programas de intervención requiere que participen profesionales especializados teniendo en cuenta tanto su diseño, como su implementación y evaluación.

4. Las características del propio programa.

5. El proceso y el contenido de los programas de intervención.

6. Las metas de tratamiento intermedias. Teniendo en cuenta que los programas de éxito son aquellos que reducen las necesidades relevantes del sujeto que se asocian con una disminución de la delincuencia.

7. Interacción entre conjuntos de variables.

Los mismos autores también se cuestionan cuáles son aquellos programas que son eficaces en el contexto penitenciario. Señalan la importancia del meta-análisis para llegar a identificar los rasgos de los programas eficaces.

En este ámbito podemos citar el trabajo de Garret (1985; cit. en Redondo, Martínez, y Andrés, 2011, p. 56) que revisó 111 estudios realizados entre 1960 y 1983 sobre delincuentes juveniles que se encontraban en prisión, concluyendo que, en este caso, el tratamiento funciona. Las técnicas de intervención más utilizadas fueron las del aprendizaje por contingencias, las técnicas grupales y las técnicas cognitivo-conductuales.

Posteriormente, Gendreau y Ross (1987; cit. en Lorenzo Moledo, 1997, p. 194) realizaron una revisión de diferentes trabajos desarrollados entre 1973 y 1978 y, entre 1980 y 1985, en la que observaron reducciones de la reincidencia entre el 35% y el 74%, comprobando, además, mejoras en la conducta en el hogar, en el rendimiento académico, en la estabilidad laboral y una mejora del ajuste marital.

Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau, y Cullen (1990) llevaron a cabo un meta-análisis en el que revisaron 154 programas de tratamiento con delincuentes en Estados Unidos y sus resultados esclarecieron que existía una mejora del 10% en aquellos grupos que habían recibido el tratamiento frente a los que no lo habían recibido.

Por su parte, Lösel (1995) llevó a cabo una revisión de trece meta-análisis de programas desarrollados en la última década, obteniendo resultados que iban entre el 5% y el 18% de mejora en los delincuentes que habían participado.

Más recientemente, Dünkel (2005) concluye que el tratamiento de mujeres en centros penitenciarios muestra resultados muy favorables, especialmente cuando se dirigen al autocontrol, a los comportamientos antisociales y problemas en la resolución de conflictos interpersonales.

También en nuestro país se estudiaron los efectos de los programas de tratamiento. Así, Garrido, Redondo, y Sánchez-Meca (1999) analizaron 57 programas, de los que 6 presentaron efectos contraproducentes mientras que los 51 restantes demostraron un 15% de mejora en cuanto a los grupos de intervención y un 12% para los de no reincidencia.

En base a la efectividad del tratamiento, muchos autores comparten la necesidad de dirigir la intervención hacia la competencia social. Es decir, el trabajo educativo globalizado en aspectos cognitivos, conductuales, emocionales y sociales con personas en desventaja socio-educativa y económica (Santibáñez, 1998; Garrido et al., 1999).

Tal y como se presenta en la investigación al respecto, la conducta delictiva no puede explicarse a partir de un único factor sino desde una perspectiva multifactorial, de forma que se contemplen los factores personales, familiares, sociales y comunitarios (Alba, 2008; Walsh y Ellis, 2007).

En esta línea, muchos de los programas de tratamiento han dirigido sus objetivos a modificar estos factores de riesgo que inciden en la conducta delictiva. Estos programas han demostrado su eficacia en la reducción de la reincidencia, de forma que cumplen ciertos principios de intervención eficaz (Garrido y Alba, 2005).

En esta línea, Aroca (2010, p. 327) establece los principios de intervención de aquellos programas que han presentado mayor efectividad cuando se trata de problemas graves de conducta delictiva (Garrido y Gómez Piñana, 1996a; Redondo, 2008):

- Utilización de técnicas educativas cognitivo-conductuales que logren cambiar tanto la forma de comportarse como la manera de pensar.
- Intervención dirigida a la adquisición de nuevas conductas adaptativas o prosociales, a la reducción de futuras conductas violentas y a compensar los déficits del delincuente.
- Valoración e intervención orientada a disminuir factores de riesgo que provocan y mantienen las conductas de violencia.
- Programas diseñados para que las intervenciones estén claramente dirigidas y estructuradas.
- Formación apropiada de los profesionales: entrenamiento en técnicas para implementarlas correctamente y conocimiento tanto de los sujetos con los que van a intervenir como de las conductas que tendrán que tratar.
- Introducción de la perspectiva familiar en la intervención para que el sujeto reciba apoyo una vez salga del centro.

Siguiendo a Garrido (1992), el tratamiento debe establecer metas individuales de modo que se identifiquen aquellos factores que inhiben o facilitan la delincuencia que

podemos eliminar o promocionar. Señala, además, que debemos sustituir la concepción clínica y dar paso a la educativa. Es necesario crear un clima social apropiado, aunque esto se presente difícil teniendo en cuenta el contexto hostil en el que trabajamos.

Por ello, apostamos por la educación como base del tratamiento para la reinserción de las personas de origen extranjero en consonancia con el mandato constitucional que en su art. 25.2 dispone que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En este sentido, se concibe el tratamiento penitenciario como el conjunto de actuaciones directamente dirigidas a la consecución de este fin. Además, la prisión, como espacio multicultural que es, se encuentra en el deber de reajustar el enfoque educativo inspirado por las nuevas necesidades en las que se ve inmersa.

De este modo, aunque debamos tener en cuenta las necesidades de cada sujeto para llevar a cabo la intervención, tenemos que partir de los principios de intervención eficaz que son los principios que deben tener presentes todos aquellos técnicos educativos que se acercan al sistema de justicia con la intención de reducir de manera eficaz la reincidencia de la conducta delictiva (Alba, 2008).

De todos modos, son numerosas las dificultades que se nos pueden cruzar en el camino cuando tratamos de intervenir en el medio penitenciario. La masificación presenta problemas de organización a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de intervención. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ya presentaban la conveniencia de evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. Además, en muchos casos, el bajo nivel educativo de los internos puede complicar el trabajo, pero también la insuficiente capacitación técnica del personal penitenciario es un hándicap a la hora de pensar en determinados programas de tratamiento. Además, en el caso de las mujeres, esto todavía se presenta más complicado ya que en la mayor parte de los casos, se encuentran en módulos específicos en donde la separación en función de su perfil no existe.

Bien es cierto que comienzan a surgir visiones más amplias que se centran en la educación como base del tratamiento (Gil Cantero, 2010; Lorenzo Moledo, 1997). Este es el caso de Tom Ward (2002), quien investiga sobre un nuevo modelo de reinserción denominado *Good lives Model Comprehensive*. Este autor critica las limitaciones que presentan los programas de corte cognitivo-conductual proponiendo un acercamiento

basado, además de en la reducción de los factores de riesgo, en equipar a los delincuentes con los recursos para vivir mejores estilos de vida. Este modelo trata de conformarse como un marco general para orientar el tratamiento, sin pretender sustituir terapias y técnicas más específicas (Ward y Gannon, 2006). De todos modos, el modelo todavía está solidificándose por lo que no contamos con evaluaciones eficaces que demuestren su éxito.

Así, la utilización de programas de intervención basados en modelos cognitivo-conductuales y destinados a modificar el pensamiento de los delincuentes (Garrido et al. 2006), junto con una metodología fundamentada empíricamente en el modelo social-interaccional (Burguess, 1979; Parke y Collmer, 1975; Wolfe, 1987) demuestran aportar avances importantes en la reducción de la delincuencia y la reincidencia.

Por su parte, Echeburúa y De Corral (1992) presentan los objetivos que deberán perseguir los programas conductuales en las prisiones para ser eficaces:

- Eliminación de conductas antisociales o antirreglamentarias dentro de la prisión.
- Modificación de conductas adictivas.
- Desarrollo de programas educativos para elevar el nivel formativo de los internos en relación al área escolar, cultural y profesional.
- Adquisición de hábitos de higiene y autocuidado siempre que sea necesario.
- Entrenamiento en solución de conflictos y toma de decisiones.
- Enseñanza de habilidades sociales y comportamientos asertivos.

Los estudios meta-analíticos sobre la efectividad del tratamiento muestran que un programa eficaz es el “Programa del Pensamiento Prosocial” (Alba et al., 2005). Concretamente, en España, se han llevado a cabo evidencias rigurosas de este programa (Garrido y López-Latorre, 2005) en el Centro de Preventivos de Hombres de Valencia, en el Centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) con mujeres delincuentes, dentro del programa *Horizon Penitenciario* y de “Educación Integral” en Canarias, o en el Centro de Menores de L’ Alzina (Barcelona) con jóvenes de entre 16 y 19 años.

En definitiva, la intervención educativa eficaz en este medio es posible. Existen evidencias más que suficientes para desmentir el “nada funciona” que planteaba Martinson hace cuarenta años. Todavía queda mucho por hacer pero los avances nos

muestran un futuro esperanzador que sigue la línea de una intervención educativa con delincuentes (Giles y Le, 2010).

4.4.3. Los profesionales de la educación en los Centros Penitenciarios

Se viene produciendo una desprofesionalización de la educación y la pedagogía penitenciaria que puede ser debida, en gran medida, a la incorporación de educadores que no presentan estas titulaciones específicas sino que se trata de funcionarios de vigilancia que han promocionado internamente o que, con otras titulaciones han podido acceder al no especificarse en los procesos de oposición una titulación determinada (Del Pozo y Gil Cantero, 2012).

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señala, en relación a los pedagogos que realizan las investigaciones y estudios desde el punto de vista del historial escolar, grado cultural y nivel de instrucción de los internos. Además, son los encargados de poner en marcha programas pedagógicos y participar en las reuniones de los Equipos de Tratamiento.

Concretamente, a este profesional le corresponden las funciones siguientes, según el Reglamento Penitenciario de 1981 (Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo):

1. Estudiar al interno desde el punto de vista de su historial escolar, grado cultural y nivel de instrucción, enjuiciando el alcance de sus conocimientos, especialmente los instrumentales, actividades expresivas y aficiones, aportando la información correspondiente al estudio de su personalidad.
2. Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza pedagógica.
3. Asistir como Vocal a las reuniones de los Equipos de Tratamiento, participando en sus acuerdos y actuaciones.
4. Procurar la coordinación adecuada de las tareas escolares, culturales y deportivas con los métodos de tratamiento programados.
5. Cumplir cuantas tareas le encomiende el Director concernientes a su cometido.

Otra de las figuras relevantes en este medio es la del Educador, que se encarga de conocer, asesorar e informar tanto de temas penitenciarios como extra penitenciarios

a cada uno de los internos que tienen asignados. Observan su conducta y emiten los correspondientes informes que quedan reflejados en la carpeta de seguimiento. Además, desarrollan los programas de intervención terapéutica y las actividades culturales y deportivas que afectan a sus internos.

Los Educadores, según dicta el Reglamento Penitenciario (art. 296), serán los colaboradores directos e inmediatos de los Equipos de Observación y de Tratamiento, realizando las siguientes tareas:

1. Atender al grupo o subgrupo de internos que se les asigne, a quienes deberán conocer lo mejor posible, intentando mantener con ellos una buena relación personal, y a los que ayudarán en sus problemas y dificultades durante su vida de reclusión, intercediendo, presentando e informando ante la Dirección del Establecimiento sus solicitudes o pretensiones.

2. Constituir progresivamente la carpeta de información personal sobre cada interno del grupo o subgrupo que tenga atribuido que se iniciará a partir de una copia del protocolo del mismo, que se les entregará en el primer momento, y que completarán posteriormente día a día con todo tipo de datos que obtenga.

3. Practicar la observación directa del comportamiento de los mismos, con arreglo a las técnicas que se determinen, emitiendo los correspondientes informes al Equipo y en cuantas ocasiones se les soliciten.

4. Colaborar con los especialistas miembros del Equipo, cumpliendo las indicaciones y sugerencias de los mismos en orden al acopio de datos de interés para cada uno de ellos y realizando las tareas auxiliares que se les indiquen con respecto a la ejecución de los métodos de tratamiento.

5. Asistir a las reuniones periódicas cuyo programa fijará el Subdirector-Jefe del Equipo, y despachar con éste y con los especialistas cuantas veces se les requiera.

6. Organizar y controlar la ejecución de las actividades deportivas y recreativas de los internos.

7. Cumplir cuantas tareas se les encomiende por sus superiores referentes a su cometido.

Por otro lado, también se contemplan figuras como la de los Trabajadores Sociales, Monitores Deportivos y Monitores Ocupacionales, de los cuales no se

especifican sus funciones de forma concreta pero prestarán apoyo en cuanto a conseguir el fin último de la pena.

En el tratamiento penitenciario no debemos olvidarnos del personal de las Escuelas (maestros de primaria y profesores de secundaria), que dependen administrativamente de las Comunidades Autónomas.

El artículo 55 de la LOGP establece que en los centros existirá una escuela con la finalidad de desarrollar la instrucción de los internos, especialmente de los analfabetos y jóvenes. Anteriormente, en estas escuelas ejercían funcionarios del antiguo cuerpo de docentes de EGB de Instituciones Penitenciarias hasta que el RD 1203/1999 (BOE 21/07/1999) instaura la integración de estos funcionarios en el cuerpo de maestros. Desde entonces el profesorado de primaria y secundaria puede acceder a ejercer su profesión en los centros penitenciarios mediante el concurso de traslados específico de adultos al igual que si accede a cualquier otro centro, siendo necesario ser funcionario de carrera. Por ejemplo, en Galicia, Comunidad a la que pertenecen cuatro de los centros de la muestra, resaltamos que en el año 2007 fue creada la red de centros (Decreto 116/2007 de 31 de maio¹⁰) por el que se crearon centros públicos de educación y promoción de adultos con sede en los centros penitenciarios de Galicia, de forma que los trabajadores de estos centros pertenecen a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Los funcionarios penitenciarios, antes de iniciar su actividad, deben recibir formación específica teórica y práctica, en el centro oficial adecuado que reglamentariamente se determine. Para ello se aprobó la Norma de Organización y Funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios el 10 de febrero de 2000, para realizar funciones de selección en los cursos de formación inicial que tengan carácter selectivo y podrá organizar actividades complementarias que contribuyan a mejorar la formación y la investigación en materia penitenciaria, tales como seminarios, congresos, jornadas, conferencias y estudios de investigación. Sin embargo, aunque en el año 1992, desapareció la Escuela de Estudios Penitenciarios todavía no se ha puesto en marcha el Centro de Estudios Penitenciarios (fijémonos que la Resolución es de hace ya 14 años), y la formación es gestionada por el área de formación de la Subdirección General de Recursos Humanos, que trabajan:

¹⁰ Decreto 116/2007 de 31 de maio. DOG núm. 115, de 15 de xuño de 2007.

- La elaboración y gestión de los planes de formación continua de la administración.
- La organización de acciones de formación masivas, como los cursos descentralizados o a distancia, la formación en idiomas, la organización de cursos de capacitación para todos aquellos acceden a puestos de responsabilidad intermedia.
- La gestión de la impartición de cursos selectivos presenciales dirigidos al cuerpo de ayudantes, cuerpo superior de técnicos, etc.
- La formación de asistentes sociales, monitores deportivos y monitores ocupacionales.

En todo caso, el número de profesionales de la educación en centros penitenciarios es escaso, a lo que se suma, en muchos casos, su baja formación para trabajar en este campo. Pero la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos años ya que, en las modificaciones que contiene el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre en la Ley 39/1970, de 22 de diciembre sobre la reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, no se da más peso a los profesionales de la educación.

En definitiva, se produce una clara desprofesionalización de la pedagogía dentro de las instituciones penitenciarias que parece relegar a un segundo plano el que se presenta como fin último de la pena privativa de libertad según nuestra Carta Magna, la reeducación y reinserción social.



PARTE II

LAS MUJERES EXTRANJERAS EN PRISIÓN: DIMENSIÓN EMPÍRICA DEL ESTUDIO





CAPÍTULO 5:

PLANTEAMIENTO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN



CAPÍTULO QUINTO. PLANTEAMIENTO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. Introducción

Si bien en la primera parte de esta tesis doctoral se han planteado los aspectos teóricos que fundamentan este estudio, en la segunda parte, nuestro propósito fundamental es trazar la parte empírica de la investigación. Para ello, en primer lugar presentaremos las razones que lo sostienen. A continuación, señalaremos los objetivos generales y específicos que nos planteamos, concretando la metodología que hemos llevado a cabo a lo largo de todo el proceso.

Con posterioridad, formularemos el problema de investigación presentando, consecuentemente, las hipótesis, variables y diseño de la investigación para proceder con el siguiente punto, centrado en la población y la muestra con la que trabajamos. Tras exponer cómo ha sido el proceso de selección de la muestra, analizaremos sus características.

Seguidamente, nos detendremos en los instrumentos que hemos diseñado y aplicado. Concretamente, un cuestionario sociobiográfico dirigido a las mujeres extranjeras presas y una entrevista semiestructurada para los subdirectores de tratamiento de los centros penitenciarios incluidos en el estudio. Tras explicar cómo ha sido su diseño, los describiremos y explicaremos el proceso de aplicación.

5.1.1. Oportunidad del estudio

No es un único *“leitmotiv”* el que ha influido en la decisión de seguir este camino. Coincidimos con Fox (1981) en señalar los posibles tipos de motivaciones que han orientado la investigación. Nos encontramos ante un problema cuyos resultados potenciales han despertado nuestro interés y, además, creemos que su ejecución nos permite ahondar en el conocimiento del proceso de investigación.

Entendemos que estamos abordando un tema de total actualidad. Como venimos exponiendo en capítulos anteriores, los centros penitenciarios son un claro reflejo de nuestra sociedad, lo que explica, por ejemplo, que el aumento de la inmigración en nuestro país se manifieste en las cifras de internos extranjeros en estas instituciones.

En los últimos años, como venimos diciendo, se ha producido un notable aumento de la inmigración en donde la feminización se configura como una de sus principales características, produciendo un impacto sobre el modo típico de representar la diversidad humana.

Este aumento generalizado se ve reflejado en las instituciones penitenciarias que se encuentran inmersas en una sobrerrepresentación de personas extranjeras. Los extranjeros que se encuentran en prisión tienen características particulares, constituyéndose un colectivo con perfiles muy heterogéneos.

A ello debemos añadir la ausencia de estudios que se han llevado a cabo en el ámbito penitenciario en general, y de personas no nacionales en prisión, en particular, máxime si nos referimos a mujeres. En este sentido creemos que podemos abrir nuevas vías de indagación.

Se trata de una nueva realidad que convierte a las prisiones en espacios multiculturales. Realidad que, en el caso de las mujeres, se ve ampliamente condicionada por diferentes variables (García España, 2001).

Los rápidos y profundos cambios que se producen en nuestra sociedad nos obligan a plantearnos el interés contextual del estudio. Los importantes movimientos migratorios sitúan a España en un país receptor de personas extranjeras, lo que implica la necesaria actuación por parte de la sociedad civil (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2007). También nos vemos en este contexto con posibilidades de ofrecer propuestas de intervención eficaces y realistas apoyándonos en la investigación pedagógica.

En este sentido, es patente el olvido por parte de la Pedagogía como Ciencia de la Educación del estudio de la delincuencia, máxime de la institucionalizada (Lorenzo Moledo et al., 2013). Basta revisar los planes de estudios a nivel nacional del Grado en Pedagogía o de la anterior licenciatura, en donde la materia de Pedagogía Penitenciaria está prácticamente ausente, o incluso las tesis doctorales que se presentan a lo largo de la historia en materia de educación. Sin embargo, el campo pedagógico cobra una gran importancia cuando sostenemos la dificultad de conseguir los fines de las prisiones si no partimos de un modelo de intervención educativo-comunitario. La función reeducadora presenta, necesariamente, una naturaleza educativa ya que entendemos, siguiendo a Gil Cantero (2010), que el ámbito penitenciario es un proyecto de educación. Históricamente, han primado las aproximaciones a este terreno en el campo de la

Criminología o de la Sociología, campos, por su parte, esenciales para llegar a entender la delincuencia y al delincuente.

Los intereses personales también son un importante soporte para la elección del argumento de la tesis doctoral, elección que hemos tenido más clara una vez presentado el Trabajo de Investigación Tutelado para la obtención del DEA, con el título “Mujeres Inmigrantes en los Centros Penitenciarios: un análisis de su realidad socioeducativa”. Son muchas las inquietudes que nos fueron surgiendo en ese proceso de iniciación a la investigación ya que, al basarse en un análisis documental, nos sirvió como impulso para prolongarlo y para que se haya convertido en el tema principal de estudio de esta tesis.

5.1.2. Objetivos de la investigación

Sautu (2005, p. 36), considera que los objetivos constituyen “una construcción del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado”. Justamente, la invisibilidad de las mujeres en el Sistema Penitenciario español, junto a la nueva realidad de la presencia de extranjeras, será nuestro principal tema de estudio, ya que entendemos que en la mujer delincuente extranjera se da una triple discriminación: por ser delincuente, por ser mujer y por ser extranjera.

La realidad multicultural de los centros penitenciarios demanda investigaciones sobre el perfil individual y social de las mujeres extranjeras para, a partir de esta radiografía diagnóstica, establecer los principios de la intervención socioeducativa eficaz para su integración social.

Así, nos hemos planteado analizar el perfil individual y social y la carrera delictiva de las mujeres extranjeras internas en los Centros Penitenciarios de nuestro país para poder diseñar, con criterio científico, los principios de una intervención pedagógica que atienda a su problemática y mejore sus posibilidades de reinserción. Este objetivo general será concretado en los objetivos generales y específicos de la investigación.

Los objetivos específicos que perseguimos con esta investigación son los siguientes:

- 1) Analizar la evolución de la diversidad étnico-cultural en las cárceles y módulos de mujeres en España en el siglo XXI.
- 2) Estudiar el perfil individual y social de las mujeres extranjeras internas en centros penitenciarios españoles.
- 3) Examinar si estas mujeres tienen una carrera delictiva y, en su caso, identificar las variables socioeducativas que influyen en su origen y desarrollo.
- 4) Identificar y describir la red de apoyo social con la que cuentan estas mujeres para su inserción social.
- 5) Reconocer las bases de la gestión del multiculturalismo en las instituciones penitenciarias, con especial atención a las cuestiones de género.

Necesitamos analizar cómo la política penitenciaria está respondiendo ante la nueva realidad de la multiculturalidad, qué modelo se está siguiendo, las características de los programas socioeducativos que se están desarrollando, la participación de las mujeres extranjeras en esos programas, la convivencia en los módulos...

Esto nos dará las claves para proponer vías pedagógicas para la gestión socioeducativa de la diversidad étnico-cultural en los centros penitenciarios, identificando los principios básicos para una actuación eficaz.

De lo que se trata es de analizar aquellas actuaciones que puedan ser definidas como buenas prácticas para que puedan ser transferidas a otros contextos, estudiar los principios que deben orientar la gestión socioeducativa de la diversidad en el medio penitenciario y, a partir de estos principios, desarrollar una propuesta de intervención adecuada. Además, uno de los pilares del tratamiento penitenciario lo constituye el personal de los centros por ello, en este contexto es preciso formar a los/as profesionales en este ámbito.

5.2. El problema de investigación

5.2.1. Formulación del problema

Este proceso en el que nos encontramos se inicia alrededor de un área problemática de la que extraemos el problema de investigación. Así, se plantea un interrogante sobre la realidad, que supone clarificar qué es lo que se pretende analizar, aquellas razones que han motivado la elección de este problema y la

justificación de dicha elección (Cea D`Ancona, 1996). Podemos definirlo como la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población (Arias, 2006). En todo caso, la correcta formulación del problema es de vital importancia para asegurar el éxito de una investigación.

Siguiendo a Kerlinger (1985) cabe señalar que el problema debe formularse con precisión, en una o varias preguntas concretas donde se relacionen las variables que están implicadas, constituyéndose así una guía de cara a la posterior formulación de las hipótesis. Por su parte, Tamayo y Tamayo (1994) definen una serie de factores que debe presentar el problema planteado. Estos factores responden a la precisión y claridad del tema; a la extensión, debiendo abarcar un aspecto limitado; a la originalidad del aspecto a estudiar; la relevancia desde un punto de vista práctico y teórico; a la factibilidad en función de los recursos disponibles; al tiempo de realización; a su utilidad, es decir, que se pueda proyectar a otros trabajos; a la disposición de las fuentes de información; y, por último, a la capacidad de desarrollo del tema al que nos estamos refiriendo.

Después de analizar de manera sistemática el marco teórico sobre la delincuencia femenina y de identificar las necesidades de las mujeres internas en general y de las extranjeras en particular, estamos en condiciones de plantear nuestro problema de investigación. Nos encontramos en una sociedad caracterizada por la diversidad cultural y los centros penitenciarios no son ajenos a esta realidad, lo que exige de la administración penitenciaria una atención específica a esta nueva situación. En este sentido, y en función de lo expuesto, planteamos como problema de investigación el siguiente:

¿En qué medida el perfil socioeducativo y la carrera delictiva de las mujeres internas en centros penitenciarios difieren según el país de origen y su proyecto migratorio?

Por su parte, y directamente ligado a ello, nos preguntamos ¿La delincuencia de las mujeres extranjeras está asociada, o al menos relacionada, con ciertos déficits en el ámbito socioeducativo, que dificultan y/o condicionan su reinserción y reeducación social?, ¿Tienen estas mujeres una carrera delictiva? Asimismo, teniendo en cuenta la intervención realizada en los centros cabe cuestionarse lo siguiente, ¿Los modelos de intervención adoptados en los módulos o prisiones de mujeres se ajustan a las líneas que la investigación propone como

más idóneas en la intervención penitenciaria, a las necesidades y particularidades de las internas extranjeras y a los planteamientos de la educación intercultural?

5.2.2. Metodología de la investigación

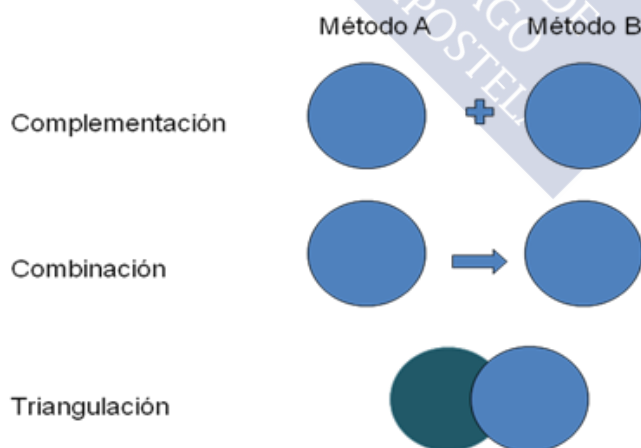
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos así como el problema trazado, la investigación debe plantearse bajo parámetros metodológicos diversos. Necesitamos usar técnicas cuantitativas y cualitativas en la recogida y posterior análisis de los datos, proceso que explicaremos en los siguientes apartados.

Concretamente, nuestra investigación sigue la lógica de la convivencia entre metodologías, sosteniendo que técnicas aparentemente antagónicas pueden ofrecer descubrimientos complementarios e igualmente válidos (Bisquerra, 2004, p. 43).

De acuerdo con Bericat (1998), diferenciamos tres estrategias básicas a la hora de abordar esta integración: complementación, combinación y triangulación (ver Figura 2). Nosotros hemos optado por la complementación, que se produce cuando en el marco de una misma investigación se trabaja con los dos métodos, tanto cuantitativo como cualitativo. Esta doble visión nos permite contemplar dos orientaciones diferentes.

Figura 2

Estrategias de integración de métodos



Fuente: Tomado de Bericat (1998, p.37)

Teniendo en cuenta la metodología, debemos señalar, en primer lugar, que en este estudio predomina la metodología cuantitativa, y, más concretamente, la no experimental descriptiva. Esta metodología es entendida por Hernández Sampieri,

Fernández Collado, y Baptista (1998, p.189) como la observación sin posibilidades de influencia del investigador sobre la situación considerada.

La Investigación no experimental trata de determinar las relaciones entre las variables sin ningún tipo de intervención sobre las mismas para ver qué efectos producen. La relación entre estas variables ya se ha producido con anterioridad por lo que el investigador, como es nuestro caso, registra sus medidas y estudia esa relación (Bernardo y Calderero, 2000).

Los fenómenos sociales en general, y el que nos atañe, en particular, son complejos, por lo que para el investigador no siempre es viable seleccionar, controlar y manipular todos los factores necesarios que se requieren en la investigación experimental o cuasi-experimental.

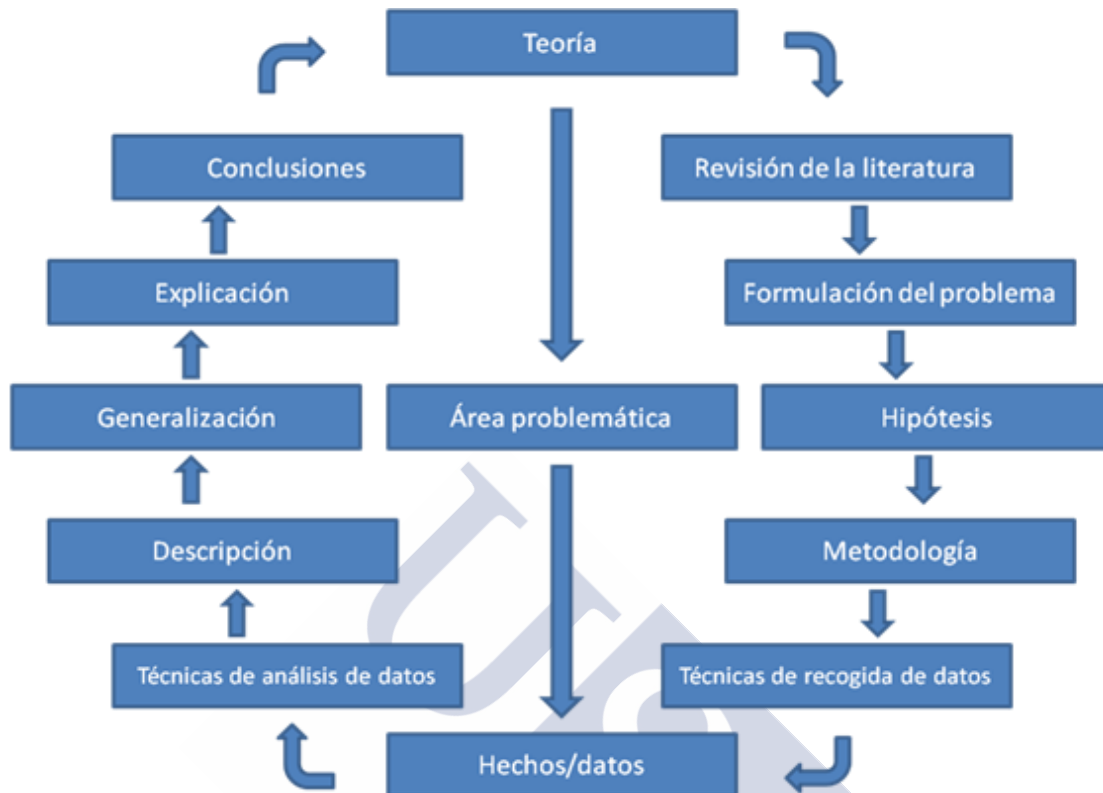
En este caso, llevaremos a cabo un estudio descriptivo (ver Echeverría, 1983) de la realidad socioeducativa de las mujeres extranjeras que se encuentran en prisión, para, posteriormente, y en función de sus características, realizar una propuesta de intervención socioeducativa. Arias (2004, p.48) define este enfoque como la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Por su parte, Tamayo y Tamayo (1994, p.75) concuerdan en que se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, así como señalar sus características y propiedades y que, combinada con ciertos criterios de clasificación, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.

En cuanto al esquema de la investigación cabe decir que no se trata de un proceso lineal puesto que en todos los pasos podemos redefinir el problema, reformular las hipótesis y revisar el diseño (Bisquerra, 1989, p.19). De todas maneras, coincidimos con Arnal, Del Rincón y Latorre (1994, p. 51) en establecer nuestra secuencia de trabajo en una serie de tareas.

Como vemos en la Figura 3, tras una exhaustiva revisión de la literatura relacionada con el objeto de estudio, es el momento de formular el problema, marcar los objetivos y establecer las hipótesis de investigación; implantando, de este modo, la metodología más conveniente en función de las características del estudio para, por medio de los instrumentos diseñados, recoger una serie de datos que respondan a nuestros objetivos y que serán analizados para extrapolar a la población y sacar conclusiones.

Figura 3

Secuencia de fases de la investigación



Fuente: Elaboración propia a partir de Arnal et al. (1994, p. 51).

Así, dividimos nuestro plan de trabajo en dos fases estructuradas e interrelacionadas:

Primera fase. Obtención de datos: En esta fase llevaremos a cabo las siguientes tareas:

- Búsqueda, recogida y análisis de la bibliografía más importante en el plano nacional e internacional: informes, publicaciones, artículos, etc. Esta tarea se desarrollará de forma continua a lo largo de toda la investigación.

- Información de las prisiones exclusivas de mujeres que existen en España y aquellas que cuentan con módulo de mujeres en el ámbito territorial de Galicia, así como la identificación del número de extranjeras internas.

- Comunicación, por escrito, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del plan de trabajo, con la petición de los permisos necesarios para realizarlo, así como a los centros de la muestra para explicar los objetivos de la investigación y tomar un primer contacto con la realidad del estudio.

- Explotación de los datos secundarios de Instituciones Penitenciarias para realizar un estudio de la diversidad étnico-cultural de las mujeres internas en las cárceles españolas. También nos servirá para situar a la población objeto de estudio. Esta primera explotación irá renovándose con la aparición de los datos anuales.

- Diseño del cuestionario sociobiográfico para las mujeres de la muestra y de la entrevista semiestructurada para los/as subdirectores/as de tratamiento de los centros.

- Formación de un grupo de expertos en metodología de investigación socio-educativa para analizar el contenido de los instrumentos, su adecuación a los objetivos del estudio, la metodología de pase, principales problemas en su administración...

- Pase de los Cuestionarios a las mujeres de la muestra, una vez obtenidos los permisos, no sin antes explicarles los objetivos de la investigación y su papel en la misma solicitando su colaboración.

- Realización de las entrevistas semiestructuradas a los/as Subdirectores/as de Tratamiento de los centros de la muestra.

- Recogida y análisis de contenido de la documentación de programas para identificar buenas prácticas de intervención educativa en los Centros Penitenciarios.

Segunda fase. Análisis de datos y propuesta de intervención: Las tareas previstas en esta etapa se orientan a cubrir lo siguiente:

- Codificación y análisis estadístico de los datos de los cuestionarios y de las entrevistas.

- Análisis documental de informes y estadísticas centrado en el estudio de información importante sobre la vida de las mujeres en prisión.

- Propuesta de intervención socioeducativa.

5.2.3. Definición de las hipótesis de trabajo

Las hipótesis son definidas como aquellas soluciones probables, previamente seleccionadas, al problema formulado, que el científico propone para

ver a través de todo el proceso de investigación si son confirmadas por los hechos (Sierra Bravo, 1995). Es decir, serían aquellas respuestas provisionales que se le dan a priori al problema formulado y que, una vez analizados los datos, podrán ser confirmadas o rechazadas.

Nuestras hipótesis principales de trabajo, son las siguientes:

1. El perfil socioeducativo y la carrera delictiva de las mujeres extranjeras internas en centros penitenciarios difiere según el país de origen y su proyecto migratorio.
2. Las circunstancias del proceso migratorio se relacionan con el origen y mantenimiento de la conducta delictiva en las mujeres extranjeras internas en centros penitenciarios.
3. Las mujeres extranjeras internas en centros penitenciarios carecen de una red de apoyo social que contribuya al proceso de inserción social.
4. Se producen diferencias entre los centros penitenciarios y los módulos de mujeres en cuanto a la gestión socioeducativa de la diversidad étnico-cultural.

5.2.4. Definición de las variables

A partir de las hipótesis formuladas en el apartado anterior, cabe ahora centrarnos en las variables de estudio. Por su parte, comenzaremos por definir los constructos que, siendo éstos entidades abstractas bien delimitadas pero no estrictamente observables, sirven para explicar determinados fenómenos y podemos concretarlos en las diferentes variables. Las variables pueden adquirir una serie de valores o expresarse en categorías. Podemos definirlas como fenómenos susceptibles de ser observados, medidos y expresados en datos, debiendo ser exactas y precisas (García Roldán, 1995). De este modo, las variables son indicadores del constructo.

Concretamente, en esta investigación trabajaremos con las siguientes variables:

- 1) Variables referidas a las internas: Características biográficas y socioeducativas de las mujeres extranjeras en prisión, que englobaremos en

diferentes constructos de estudio: perfil individual, proyecto migratorio, perfil escolar, perfil laboral, consumo de drogas, carrera delictiva y vida en prisión (Cuadro 4). Así, las variables en las que nos vamos centrar para analizar su influencia son las siguientes: la edad, el país de origen, el nivel de estudios, el estado civil, el hecho de vivir o no en España antes de entrar en prisión, su principal motivo para venir a España, la edad en la que empezó a trabajar fuera de casa, el consumo de drogas y el tipo de delito por el que está en prisión.

Cuadro 4

Variables de investigación referidas a las internas

Constructo	Código	Variable
Perfil individual	I1	País de nacimiento
	I2	Área Geopolítica
	I3	Edad
	I4	Estado Civil
	I5	En caso de tener pareja, ¿está en prisión?
	I6	Tiene hijos
	I7	Número de hijos
	I8	Edades de los hijos
	I9	Relación con sus hijos
	I10	Tiene hermanos
	I11	Nº hermanos
	I12	Con quién vivía antes de entrar en prisión
	I13	A qué solía dedicar su tiempo de ocio
Proyecto migratorio	M1	Vivía en España antes de entrar en prisión
	M2	Principal motivo para venir a España
	M3	Año en el que vino a España por primera vez
	M4	Años viviendo en España
	M5	Última ciudad en la que vivió antes de entrar
	M6	Tenía familiares o amigos antes de su llegada
	M7	Qué familiares eran
	M8	Cómo llego a España por primera vez
	M9	Con qué apoyo contó para venir a España
	M10	Sus hijos están en España o en su país de origen
Perfil escolar	E1	Ha ido a la escuela
	E2	A qué edad comenzó a ir
	E3	Asistía a la escuela con regularidad
	E4	Motivo principal para no acudir
	E5	Tipo de escuela
	E6	Nivel de estudios
	E7	Nivel de estudios madre
	E8	Nivel de estudios padre
	E9	Estudiaba en el momento de ser detenida
	E10	Está estudiando en la actualidad
	E11	Conocimiento de diferentes idiomas
	L1	Ha trabajado fuera de casa alguna vez

Constructo	Código	Variable
Perfil laboral	L2	A qué edad empezó a trabajar fuera de casa
	L3	Sectores en los que trabajó
	L4	Situación en el momento de ser detenida
	L5	En qué trabajaba al ser detenida
	L6	Ingresos mensuales percibidos
	L7	Condiciones de su trabajo
	L8	Trabajo en prisión
	L9	Envía dinero a su familia
	L10	Formación laboral en prisión
	L11	Tipo de cursos de formación laboral
Consumo de drogas	D1	Consumía drogas antes de entrar en prisión
	D2	Tipo de drogas que consumía
	D3	Frecuencia consumo sustancias
	D4	Edad comienzo consumo
	D5	Motivo comienzo consumo
	D6	Tratamiento para desintoxicación en la calle
	D7	Tratamiento para desintoxicación en prisión
Carrera delictiva	C1	Situación procesal-penal
	C2	Tiempo de condena
	C3	Grado en el que está clasificada
	C4	Tipo de delito
	C5	Motivo que le llevó a cometer el delito
	C6	Forma de comisión del delito
	C7	Tiempo que lleva en prisión
	C8	Otras condenas pendientes
	C9	Veces que ha estado en prisión
	C10	Edad del primer ingreso
	C11	Motivo del primer ingreso
	C12	País del primer ingreso
	C13	Ha sido trasladada desde que está en prisión
	C14	Ha estado internada en un centro de menores
Vida en prisión	V1	Le visitan familiares o amigos
	V2	Relación con los funcionarios de la prisión
	V3	Relación con sus compañeras dentro del módulo
	V4	Actividades en las que está participando
	V5	Qué le gustaría hacer o aprender mientras esté en prisión
	V6	Condiciones de la celda
	V7	Qué cambiaría dentro de la prisión
	V8	Proyectos cuando salga

2) Variables referidas a los centros: Características de los centros penitenciarios de mujeres así como de aquellos que cuentan con módulos de mujeres y que están ubicados en Galicia (Cuadro 5).

Cuadro 5*Variables de los centros*

Dimensión	Código	Variable
Datos generales del centro	S1	Localización
	S2	Organigrama
	S3	Fecha de entrada en funcionamiento
Características del centro/módulo	S4	Tipo de centro/módulo
	S5	Tipo de construcción
	S6	Capacidad de internas del centro/módulo
	S7	Ocupación real del centro/módulo
	S8	Número de celdas del centro/módulo
	S9	Servicios generales de los que dispone el centro
	S10	Servicios a los que pueden asistir las internas
Recursos Humanos	S11	Existencia de módulos específicos
	S12	Personal con el que cuenta el centro/módulo
	S13	Personal educativo del centro/módulo
Programas de tratamiento	S14	Programas de tratamiento existentes en el centro/módulo y características
Relaciones con la comunidad	S15	Convenios con Ayuntamiento
	S16	Convenios con la diputación
	S17	Convenios con la Administración Autonómica
	S18	Convenios con la Administración Central
	S19	Convenios con ONGs
	S20	Convenios con otras instituciones
	S21	Actividades del centro/módulo en el exterior
	S22	Otras

5.2.5. Diseño de la investigación

Una vez definidas las hipótesis a la vez que especificados los objetivos y el problema de investigación, nos encontramos en el punto de definir el diseño de la investigación. El plan de trabajo al que nos hemos referido con anterioridad guiará el proceso de investigación.

El diseño se define como la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de la hipótesis (Tamayo, 2005). Según Sierra Bravo (1995, p. 124) entendemos el diseño como “la concepción de la forma de realizar la prueba que supone toda investigación científica y social, tanto en la disposición y enlace de los

elementos que intervienen en ella como en el plan a seguir en la obtención y tratamiento de los datos necesarios para verificarla”.

En nuestra investigación, nos encontramos ante una metodología cuantitativa no experimental con un enfoque descriptivo utilizando dos instrumentos, la entrevista semiestructurada y el cuestionario. Optamos por este método porque es el que mejor se ajusta a los objetivos formulados.

La investigación contempla dos partes:

a) En una primera parte, con un carácter fundamentalmente descriptivo, analizaremos el perfil que define a las mujeres extranjeras en prisión, así como las variables explicativas del inicio y mantenimiento de su conducta delictiva. Llevaremos a cabo un estudio de encuesta, que presenta dos características básicas: la recogida de datos se basa en la formulación de preguntas a personas que poseen la información y son capaces de comunicarla; y se hacen estimaciones de las conclusiones para la población a partir de los resultados obtenidos en una muestra (Bernardo y Calderero, 2000).

El Cuestionario sociobiográfico para las internas extranjeras, instrumento principal, será aplicado con nuestra ayuda por si surge cualquier duda o problema al cumplimentarlo así como la entrevista semiestructurada a los Subdirectores de Tratamiento que también contará con nuestra presencia.

Además, realizaremos un análisis documental (informes, estadísticas,...) centrado en el estudio de información importante sobre la vida de las mujeres en prisión.

b) En una segunda parte, indagaremos sobre la gestión socioeducativa de la diversidad étnico-cultural en los centros penitenciarios.

De este modo realizaremos entrevistas semiestructuradas a los/as subdirectores/as de tratamiento de los centros de la muestra con el objeto de analizar los retos, las posibilidades y los límites de la multiculturalidad en los centros penitenciarios así como para realizar un examen de cómo se está afrontando la diversidad étnico-cultural en los centros/módulos de mujeres. Optamos por este tipo de entrevista, pues se trata de una técnica no directiva, es decir, abierta, flexible y dinámica en su propósito interrogativo.

Asimismo, realizaremos un análisis de contenido de la documentación oficial de planes y programas en los centros de la muestra para estudiar la perspectiva de género y el enfoque educativo e identificar buenas prácticas.

5.3. Población y muestra

5.3.1. Selección de la muestra de estudio

Trataremos en este punto de delimitar el ámbito de trabajo. Gaviría (2000) define la población objetivo como el grupo de sujetos, o en general unidades de análisis, a los que la información obtenida por la evaluación va a hacer referencia. De este modo, el universo o población de nuestro estudio sería el colectivo de mujeres extranjeras que se encuentran en los centros penitenciarios del territorio español.

En la investigación social recurrimos a una muestra de la población objeto ante la imposibilidad de trabajar con la población. Por muestra entendemos el conjunto de casos extraídos de una población, seleccionados por algún tipo de muestreo. Es decir, “una parte de un conjunto debidamente elegida, que se somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos también para el universo total investigado” (Sierra Bravo, 1995, p. 174).

Para la selección de la muestra fue preciso partir de la explotación de los datos secundarios de Instituciones Penitenciarias, lo que, además, nos posibilitará el análisis del desarrollo de la diversidad étnico-cultural de las mujeres internas en las cárceles españolas desde el año 2000, con el objetivo de analizar la presencia de mujeres extranjeras por centros.

El método de muestreo que utilizaremos es bietápico: el primero, para elegir los centros que formarán parte de la muestra, siguiendo un muestreo no probabilístico intencional (centros de mujeres del territorio español y módulos de mujeres del ámbito gallego) y el otro nivel para seleccionar a las mujeres extranjeras que formarán parte de la muestra, siguiendo un muestreo no probabilístico accidental (ver Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003).

En relación a la selección de los centros cabe decir que al ser únicamente 3 los centros exclusivos de mujeres dependientes de la Administración General del Estado, creímos necesario que todos ellos participasen en la investigación; en lo que atañe a los módulos de mujeres de las prisiones, nos interesa centrarnos en el ámbito territorial de nuestra Comunidad, por ello hemos optado por seguir principalmente el criterio de proximidad con nuestro centro de trabajo (Universidad de Santiago de Compostela) ya que, además de los 3 centros exclusivos de mujeres que se encuentran en el territorio

peninsular, del total de centros penitenciarios (68), existen 48 que cuentan con al menos un módulo destinado a este colectivo, de los cuales, 4, se encuentran en Galicia (ver Figura 4).

Figura 4

Centros de la muestra



Así, para el cálculo de nuestra población, nos basamos en la estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que en marzo del año 2012 reflejaba que el número de mujeres extranjeras en las prisiones españolas era de 1608¹¹. Cabe decir que la población penitenciaria varía cada mes de forma considerable por lo que para la elección de la población hemos decidido tener en cuenta los datos relativos al mes en el que comenzamos a pasar los cuestionarios en los distintos centros.

Para el cálculo de la muestra debemos tener en cuenta, en todo momento, las complicadas características del medio en el que vamos a trabajar y las dificultades con las que nos podemos encontrar.

¹¹ Consultado en <http://www.institucionpenitenciaria.es> el 26 de octubre de 2013.

Así, en los centros seleccionados, todas las mujeres extranjeras a las que hemos tenido oportunidad de acceder por sus circunstancias penitenciarias, tanto preventivas como penadas, han formado parte de la muestra invitada (262), aunque, las que han aceptado son 159, dato que se corresponde con la muestra productora de datos (ver Tabla 9).

Es necesario decir que la muestra aceptante, en muchas ocasiones, disminuye por circunstancias externas, puesto que pueden darse casos de cambios de centro, juicios, circunstancias especiales dentro del propio centro, etc... que condicionan el que una persona pueda o no contestar al cuestionario.

De este modo, finalmente, contamos con una muestra productora de datos que se reduce a poco más de la mitad (159 sujetos), debido, sobre todo, a la dificultad del medio en el que trabajamos y por el hecho de que la cifra de internas en los centros penitenciarios es muy fluctuante, lo que nos ha impedido el acceso a un número mayor de mujeres. A la hora de valorar la representatividad de la muestra debemos tener en cuenta que la mortandad en este contexto es muy elevada, aspecto con el que ya se contaba desde el primer momento.

Tabla 9

Muestra

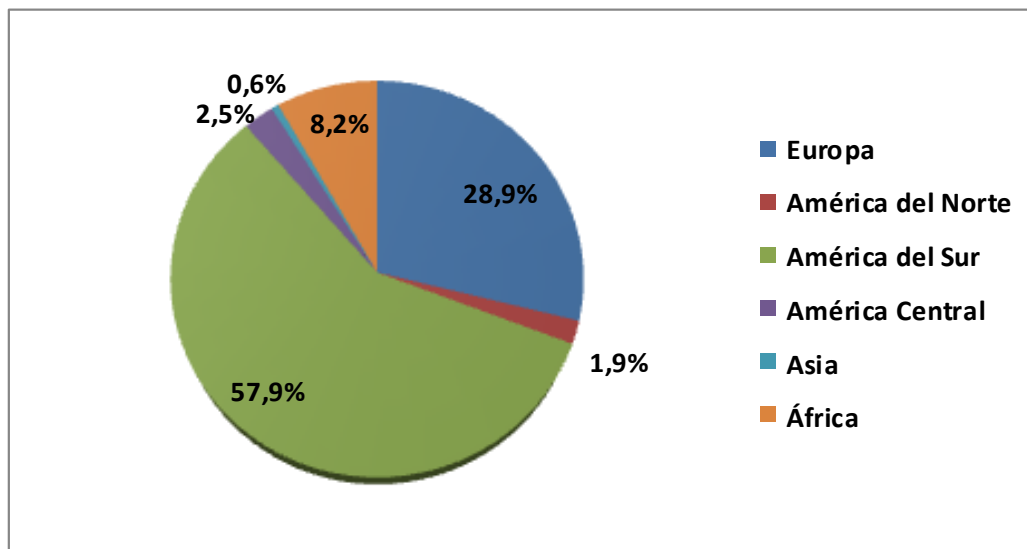
Centro	Muestra invitada	Muestra aceptante	Muestra productora de datos
Alcalá de Guadaira (Sevilla)	28	25	25
Madrid I Mujeres	138	96	96
Brieva (Ávila)	66	14	14
Teixeiro (A Coruña)	11	9	9
Bonxe (Lugo)	6	5	5
A Lama (Pontevedra)	12	10	10
Pereiro de Aguiar (Ourense)	1	0	0
Total	262	159	159

5.3.2. Características de la muestra

Abordamos en este punto las características más relevantes que definen a las mujeres que conforman la muestra, concretamente. En la Gráfica 7, podemos ver las áreas geográficas que determinan la procedencia de estas mujeres.

Gráfica 7

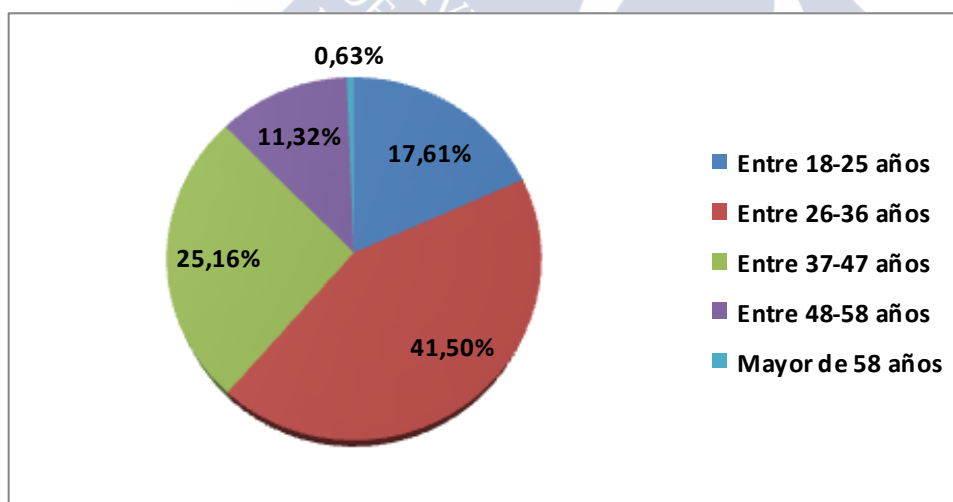
Áreas geográficas de procedencia



La mayor parte de las mujeres que hemos entrevistado son de América del Sur (57,9%), seguidas por aquellas que proceden de países europeos (28,9%) y África (8,2%). Son los colectivos de América del Norte (1,9%), América Central (2,5%) y Asia (0,6%), los menos representados entre las extranjeras presas.

Gráfica 8

Edad

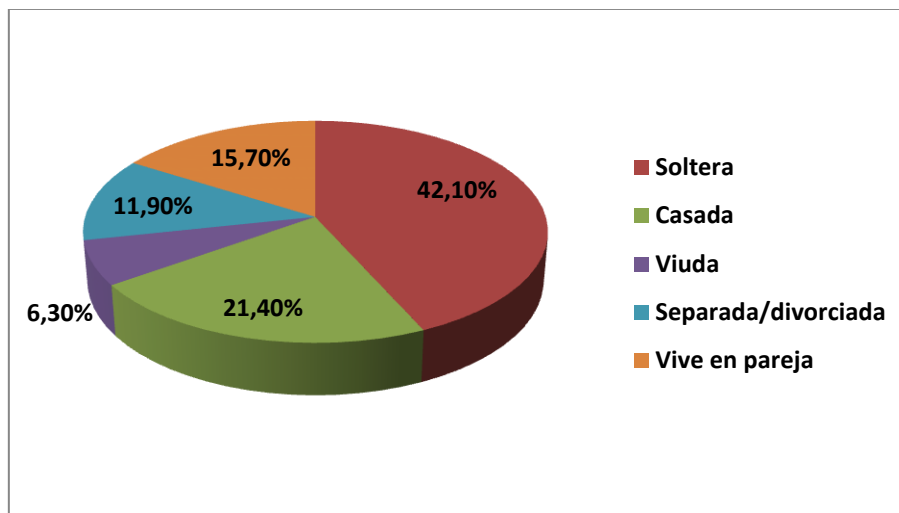


Predominan las mujeres que tienen entre 26 y 36 años (41,5%), y ya a una distancia importante (25,16%) las que se sitúan en el intervalo 37-47 años (25,16%) y las menores de 26 (17,61%). De este modo, las que tienen 48 o más años, representan el 11,95% del total. Se trata, pues, de una población joven y en edad reproductiva (ver Gráfica 8). Como ha sido documentando reiteradamente, la relación entre edad y delincuencia tiene forma de campana. La prevalencia delictiva tiende a aumentar desde

finales de la infancia, incrementándose en la adolescencia (entre los 15 y los 19), disminuyendo con el inicio de la década de los 20 años. Este patrón en forma de campana se conoce como la curva de edad del delito, y es bastante universal en las poblaciones occidentales (Farrington, 1986; Piquero, Farrington, y Blumstein, 2007). Por otro lado, algunos estudios también muestran que la curva de la edad del delito asciende antes en las mujeres que en los varones (Farrington, 1986; Elliott, Pampel, y Huizinga, 2004; Loeber, Farrington, y Redondo, 2011).

Gráfica 9

Estado Civil

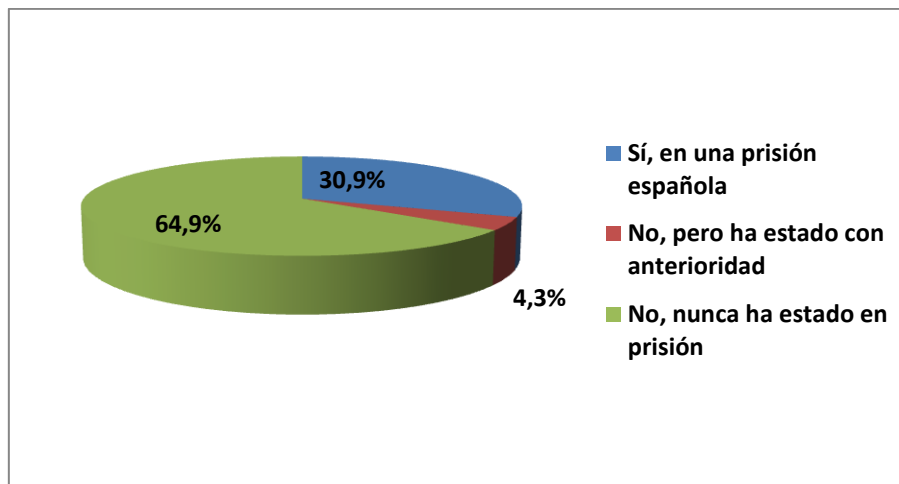


Observamos en la Gráfica 9 que buena parte de ellas (42,1%) se encuentran en el momento de ser entrevistadas, solteras. Por su parte, el 21,4% están casadas mientras que el 15,7% vive en pareja y el 6,3% es viuda. El porcentaje de mujeres que están separadas o divorciadas es 11,9%. Nos resulta interesante comparar estos perfiles con los que se señalan en el estudio titulado “Situación Penitenciaria de las Mujeres Presas en la Cárcel de Saturraran durante la Guerra Civil Española y la Primera Posguerra”; en este estudio, realizado con los expedientes de 602 mujeres que estuvieron en este centro durante los años 1937-1944 se afirma que casi la mitad de las presas (47%) eran mujeres casadas, un 30% estaban solteras, y alrededor de 20% eran viudas (De la Cuesta, Etxeberria, y Pérez, 2012); bien es cierto que solamente cinco de ellas eran extranjeras, pero podemos observar, con estos datos, los cambios culturales que se producen a lo largo de los años. Por su parte, nuestros resultados resultan equiparables a los expresados en la tesis doctoral de Fernández Galán (2011), en donde el 23,3% estaban solteras, el 49,9% separadas y/o divorciadas, el 23,3% casadas y el 3,4% viudas.

También preguntamos a las mujeres de la muestra que tienen pareja, si ha estado alguna vez en prisión (Gráfica 10).

Gráfica 10

Pareja en prisión

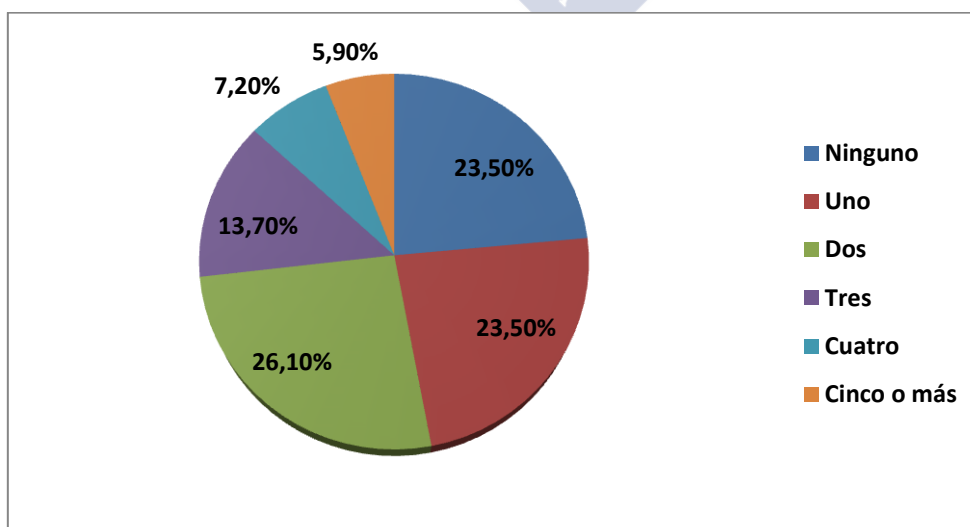


En este sentido, vemos que un 64,9% de las parejas de estas mujeres nunca ha estado en prisión, mientras que el 30,9% se encuentra en una prisión de nuestro país y el 4,3% ha estado en prisión en algún momento de su vida pero no lo hace en la actualidad. El elevado porcentaje de los que se encuentran en prisión puede explicarse por el número de ellas que inician relaciones sentimentales con personas también presas.

El siguiente de los aspectos a estudiar concierne al hecho de tener hijos/as, sus edades y la relación con ellos (ver Gráficas 11, 12 y 13).

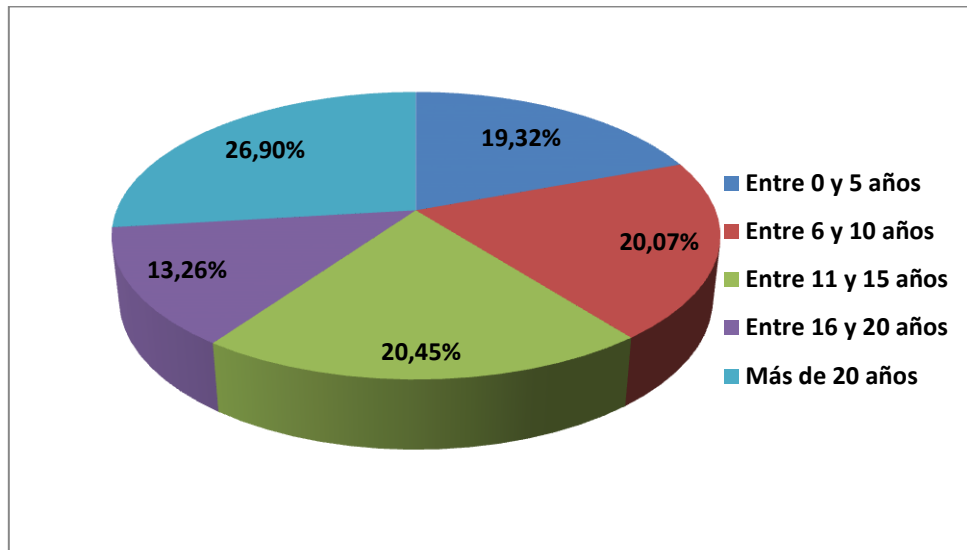
Gráfica 11

Número de hijos



Gráfica 12

Edades de los hijos



La gran mayoría de las mujeres (76,8%) tienen hijos, frente a un 23,2% que no los tiene, situándose, la media, en 1,69, muy por encima de la media de hijos por mujer en España.

El 26,9% de las internas tienen hijos con más de 20 años, hecho que, unido a la edad de estas mujeres, confirma la premisa de que han sido madres muy jóvenes. El 59,84% tienen hijos menores de 16 años y, concretamente el 19,32% tienen hijos menores de 5 años. En la mayoría de los casos las mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios son madres entre los 16 y 20 años; el 95% de ellas ya era madre a los 25 años (Yagüe y Cabello, 2005). Esta maternidad, en ocasiones no planificada, provoca un abandono prematuro del hogar, hecho que puede facilitar la conducta delictiva (Almeda, 2005b; Igareda, 2009; Francés y Serrano, 2011).

Diferentes estudios nos muestran que, generalmente, las mujeres que se encuentran en prisión son madres jóvenes y, más de la mitad cuenta, al menos, con un hijo (Yagüe y Cabello, 2005; Manzanos y Balmaseda, 2003).

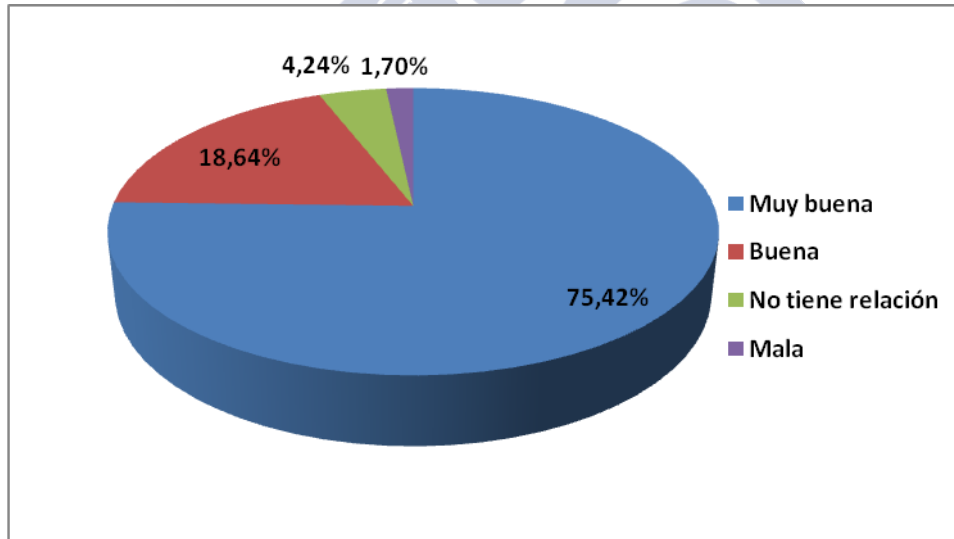
Teniendo en cuenta que el número medio de hijos por mujer en el año 2012 en España es de 1,32 según el Instituto Nacional de Estadística y el de extranjeras de 1,54 en ese mismo año, los datos concuerdan bastante, superándose vagamente. Vemos, por su parte, que las extranjeras están ligeramente por encima de las autóctonas, hecho que conlleva que el descenso de la natalidad disminuya en menor medida con respecto a años anteriores. Son muchas las causas que producen

este descenso de nacimientos; entre ellos está la reducción de mujeres en edad fértil y la edad media de maternidad, que en las mujeres españolas estará en 32,1 años y de las mujeres extranjeras en 28,9. También podemos señalar, en este caso, que de los nacimientos que han tenido lugar en nuestro país en 2012, los hijos de mujeres extranjeras representan el 19,2% del total¹². Estudios como el de Fernández Galán (2011), sitúan la media en 1,87, dato prácticamente coincidente con nuestra muestra.

Resalta el porcentaje de mujeres que asegura tener una relación muy buena con sus hijos (75,42%), dato que, unido a aquellas que concuerdan en que su relación es buena (18,64%), representa la práctica totalidad de las mujeres que han participado en este estudio (94,06%). Esto apunta a que realmente las mujeres están idealizando una situación familiar determinada. Son muy pocas las que no tienen relación con ellos, dato que resulta bastante bajo teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la comunicación en el medio penitenciario. Por su parte, el 1,7% mantiene que la relación con sus hijos es mala.

Gráfica 13

Relación con sus hijos



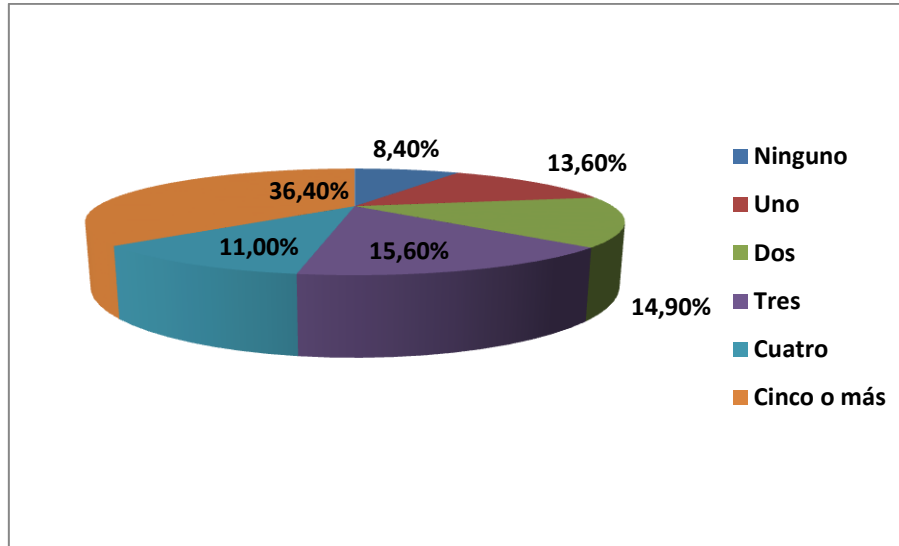
El 91,6% de las mujeres de la muestra tiene hermanos, frente a un 8,4% que son hijas únicas y el número nos indica que proceden de familias numerosas (ver Gráfica 14). Aunque en la actualidad la tendencia en América Latina es de reducción del tamaño de las familias, en países como Colombia, Costa Rica, Honduras, México o Perú,

¹²<http://www.ine.es/prensa/np784.pdf>

llegaron a tener tasas globales de fecundidad superiores a 6,7 hijos por mujer en 1955 (Sunkel, 2006).

Gráfica 14

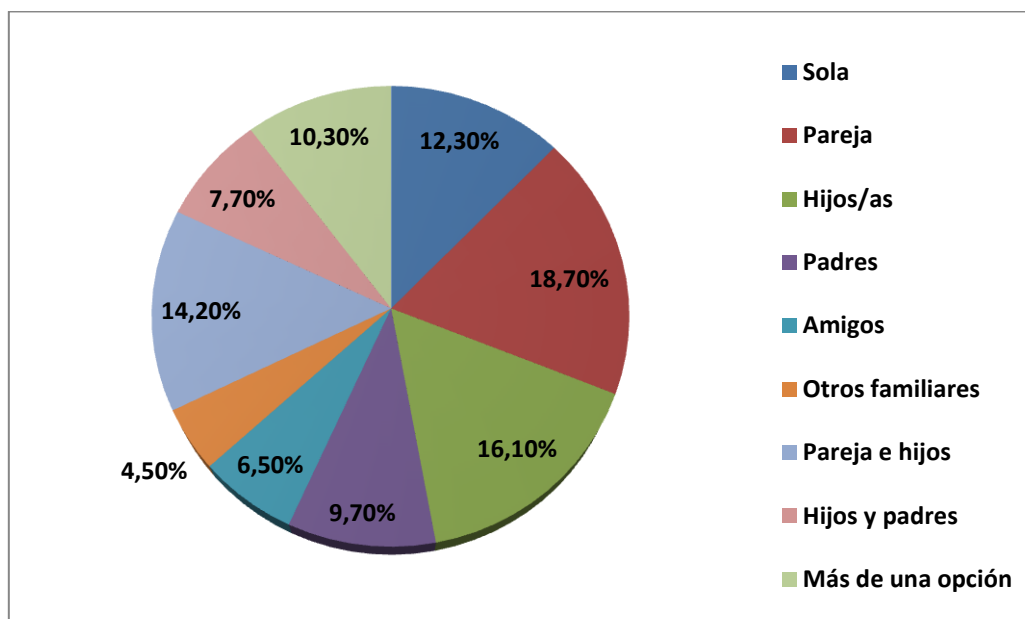
Número de hermanos



Antes de entrar en prisión, el 18,7% de las mujeres vivía con su pareja, mientras que el 16,1% únicamente con sus hijos. El porcentaje de mujeres que vivía con su pareja y sus hijos es del 14,2% y el 12,3% lo hacía sola (ver Gráfica 15). También existe un porcentaje considerable de mujeres que vivían con sus padres (9,7%) o con sus padres y sus hijos (7,7%). A diferencia de lo que sucedía décadas atrás en nuestro país, donde los hogares monoparentales se consideraban posteriores a la descomposición de la familia nuclear, como consecuencia del divorcio o de la viudedad (Requena y Diez, 1993), en la actualidad el número de familias monoparentales sigue creciendo con la llegada de mujeres inmigrantes con hijos a su cargo, que provienen fundamentalmente del centro y el sur de América. Este modelo familiar es considerado una forma de convivencia peculiar alejada de la composición que suele ser habitual en una familia. Se considera familia monoparental a aquella formada por un padre o una madre que viven solos con sus hijos pequeños (Flaquer, 1998). Siguiendo a Vela (2005), los caracteres esenciales que definen a estas familias son los siguientes: la responsabilidad unipersonal de la familia, la dependencia de los hijos e hijas y la existencia de mayores necesidades económicas que, en última instancia, tienden a la exclusión social, y, consecuentemente, a seguir diferentes vías de delincuencia.

Gráfica 15

Convivencia antes de entrar en prisión



En base a los resultados de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 que realiza el INE, las mujeres cuentan con menos actividades en su tiempo de ocio que los hombres, aumentándose estas diferencias cuando discriminamos por grupos sociales (INE, 2011). Estas actividades generales en las que se emplea el tiempo diario se codifican según una lista de actividades armonizada de Eurostat, que considera 10 grandes grupos: cuidados personales, trabajo remunerado, estudios, hogar y familia, trabajo voluntario y reuniones, vida social y diversión, deportes y actividades al aire libre, aficiones e informática, medios de comunicación, trayectos y empleo del tiempo no especificado (EUROSTAT, 2009). Nuestro objeto de análisis es el tiempo de ocio por lo que nos centramos en la vida social, deportes y actividades al aire libre, aficiones e informática y medios de comunicación antes de entrar en prisión (Tabla 10).

Las estadísticas recogidas en la Encuesta de Empleo del Tiempo señalan que el 67,4% de las mujeres dedican al día tiempo para la vida social y diversión, dentro de este grupo, la mayor parte de las mujeres se centran en el ocio pasivo. Por su parte, el 38,1% ocupan algún momento para deportes y actividades al aire libre; el 13% hacen un hueco destinado a aficiones y juegos; y, un 86% a medios de comunicación, entre los que se encuentra la lectura (20%) y la televisión (82,3%), datos que no se corresponden en casi ningún caso con la muestra (ver Tabla 10). De todos modos, los datos del Instituto Nacional de Estadística, se

ajustan a la baja cuando se trata de extranjeros; a nivel general, el tiempo de ocio disminuye, por un lado, al ser mujer, y, por otro, al ser extranjera. Los ciudadanos extranjeros emplean tres cuartos de hora más en el trabajo remunerado que los españoles; esta diferencia se recupera fundamentalmente en las actividades de tiempo libre (media hora) y en cuidados personales (15 minutos) (INE, 2011).

El que la actividad más frecuente sea el estar con su pareja puede responderse con el hecho de que el perfil de las mujeres internas se caracteriza por una dependencia psicológica de la figura masculina y una falta de autonomía personal que se supedita a la pareja actual, sin la cual puede sentirse incompleta o fracasada (Melis, 2010).

Tabla 10

Actividades en el tiempo libre

	Nunca	Algunas veces	Siempre
Estar con amigos	52,6%	37%	10,4%
Estar con la pareja	52,6%	19,5%	27,9%
Ver la TV	64,9%	27,3%	7,8%
Salir de fiesta	61,7%	29,9%	8,4%
Leer	62,3%	24%	13,6%
Ir al cine	68,8%	25,3%	5,8%
Escuchar música	51,9%	23,4%	24,7%
Hacer deporte	66,9%	19,5%	13,6%
Navegar por internet	59,1%	25,3%	15,6%
Pasear	53,2%	29,2%	17,5%
Otros	69,9%	7,8%	22,2%

Como podemos observar en la Tabla, las mujeres entrevistadas dedican su tiempo libre a estar con la pareja o escuchar música. Las actividades menos concurridas son ir al cine, hacer deporte y ver la televisión.

Una vez analizadas todas las cuestiones del instrumento relacionadas con el perfil individual de la muestra podemos decir que las mujeres extranjeras que se encuentran en las prisiones españolas vienen, mayoritariamente, de América del Sur y tienen entre 26 y 36 años de edad. Además, se trata de mujeres solteras con hijos a su cargo con los que tienen muy buena relación y, en el caso de aquellas que tienen pareja, ésta nunca ha estado en prisión.

También conocemos que la práctica totalidad tiene algún hermano, destacando aquellas que tienen cinco o más. Además, podemos decir que antes de entrar en prisión convivían con más de un familiar, especialmente hijos y padres; el tiempo dedicado al ocio lo dedican a estar con su pareja.

5.4. Instrumentos de la investigación

5.4.1. Diseño de los instrumentos

En toda investigación, la selección y diseño de los instrumentos a utilizar es un asunto de suma importancia. Nosotros, hemos optado por la aplicación de un *cuestionario sociobiográfico* dirigido a las mujeres extranjeras que se encuentran en prisión y, una *entrevista semiestructurada* para los subdirectores/as de tratamiento de los centros que participan en la investigación.

El cuestionario sociobiográfico para las internas, como instrumento principal, ha sido elaborado expresamente para esta investigación. Para el diseño de este instrumento nos hemos basado en la literatura científica y especialmente en el trabajo “Delincuencia femenina e intervención pedagógica. Un estudio sobre la cuestión en Galicia”, realizado en el año 1996 por la profesora Lorenzo, codirectora de este trabajo, en el que aplicó un instrumento similar que nosotros hemos adaptado al caso de las extranjeras en particular.

En su diseño partimos de dos supuestos clave: la fiabilidad y la validez. La validez es la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido construida, y no otras parecidas. Es decir, una escala tiene validez cuando mide lo que afirma medir (Bernardo y Calderero, 2000).

Consideramos la importancia de la validez de contenido, tratándose, ésta, del grado en el que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. Generalmente, la validez de contenido se centra en el juicio de expertos (Latiesa, 2000, p.417).

Consideramos que la validez de este cuestionario queda garantizada por el proceso seguido en su elaboración. En primer lugar llevamos a cabo un estudio bibliográfico para delimitar las diferentes dimensiones que debíamos recoger; en segundo lugar, sometimos el cuestionario a un juicio de expertos en el que

participaron los directores de esta tesis doctoral; y, por último, con todas las consideraciones recogidas, elaboramos el cuestionario definitivo.

La revisión de los expertos se ha centrado, por un lado, en la parte sintética, es decir, la adecuación de las preguntas del cuestionario a la finalidad de la investigación, la estructura y disposición equilibrada de sus partes, la falta de alguna cuestión de importancia y el tamaño o la reiteración de las preguntas; y, por otro lado, en la parte específica, analizando cada uno de los ítems por separado evaluando si se adecúan a las características del cuestionario.

El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es la fiabilidad. Por fiabilidad de un instrumento, entendemos "el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales" (Albert, 2006, p. 64). Para determinar esta fiabilidad consideramos la estabilidad, la equivalencia y la consistencia interna.

En las respuestas a este cuestionario debemos considerar la llamada *deseabilidad social*, o la tendencia a contestar las preguntas presentadas en función de lo que se considera socialmente apropiado. A esto debemos añadir la desconfianza por parte de este colectivo en relación a su anonimato, ya que de no garantizarla creen que puede acarrearles consecuencias negativas.

Tras realizar los trabajos de revisión y reformulación, se obtuvo el resultado final que se utilizó para la recogida de datos.

Por su parte, la inclusión de la entrevista a los profesionales de los centros contribuirá a obtener un panorama más global y contrastado de la realidad penitenciaria en nuestro país y de la situación socioeducativa de estas mujeres. De este modo, planteamos una entrevista semiestructurada y dirigida, de cara a descubrir o proyectar cuestiones que nos ayuden a reconstruir la realidad tal como la observan los sujetos de un sistema social definido, en este caso, los subdirectores y subdirectoras de tratamiento de los Centros Penitenciarios.

Para diseñar la entrevista, seguimos el modelo de planificación propuesto por Bisquerra (2004) (ver Cuadro 6):

Cuadro 6

Secuencia de planificación de la entrevista

Momento de preparación	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar los objetivos de la entrevista. • Identificar las personas que van a ser entrevistadas. • Formular las preguntas y secuenciarlas. • Localizar y preparar el lugar donde va a realizarse la entrevista.
Momento de desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Crear un clima de familiaridad y confianza. • Mantener una actitud abierta y positiva que favorezca y facilite la comunicación. • Facilitar la comunicación, adoptando una serie de formalismos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentarnos profesionalmente. 2. Indicar el objetivo y motivo de la entrevista. 3. Establecer las condiciones de confiabilidad y difusión de la información. 4. Puntualizar la duración, número de encuentros necesarios, etc. • Registrar la información de la entrevista. • Llevar a cabo las preguntas, que deben estar estructuradas.
Momento de valoración	<p>Se trata de que el entrevistador se auto-pregunte sobre las decisiones que ha tomado, como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pertinencia de los objetivos. • La calidad de las preguntas. • La calidad de la secuencia de las preguntas. • El entorno utilizado. • La duración de la entrevista. • El tipo de registro utilizado. <p>Para valorar el desarrollo de la entrevista, el entrevistador ha de revisar y analizar la cantidad (si las preguntas están orientadas a comprobar que la información recibida es suficiente para describir y comprender la situación de estudio y calidad de la información obtenida) y la calidad (si la información es superficial o profunda, si proporciona otras vías de indagación, si es fiable y creíble).</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de Bisquerra (2004).

Para el diseño de la entrevista también hemos partido del estudio realizado por Lorenzo Moledo (1997).

Con la entrevista realizada a los Subdirectores y Subdirectoras de Tratamiento pretendemos obtener datos de los centros penitenciarios, conocer su funcionamiento, características y analizar la nueva realidad multicultural que caracteriza a estas instituciones. Tras explicar el proceso de elaboración, teniendo en cuenta aquellas cuestiones de interés para la investigación, procedemos a su detallada descripción.

5.4.2. Descripción de los instrumentos

El cuestionario dirigido a las internas extranjeras pretende recoger información socio-biográfica de la muestra, incluyendo su perfil criminológico y su perspectiva sobre la vida en prisión. Para ello, hemos dividido el cuestionario en siete categorías con 67 preguntas (ver anexo 1):

1. Perfil individual y familiar. Este bloque está compuesto por 8 preguntas que responden a las características individuales y familiares de las mujeres de la muestra.
2. Proyecto migratorio. Incluimos cuestiones para analizar la existencia, o no, de un proyecto migratorio a través de 10 ítems.
3. Perfil escolar. Recoge 11 preguntas sobre su trayectoria escolar y la de sus padres.
4. Perfil laboral. La vida laboral de las internas está recogida en 10 preguntas.
5. Consumo de drogas. Se analiza el consumo de drogas a partir de 6 ítems.
6. Carrera delictiva/perfil criminológico. Los datos referidos a la carrera delictiva y al perfil criminológico de las mujeres entrevistadas se recogen en 13 preguntas.
7. Vida en prisión. Los aspectos relacionados con la vida en prisión implican 8 cuestiones.

Este cuestionario se compone de preguntas cerradas con categorías o alternativas de respuesta previamente delimitadas; es decir, se presentan a las participantes las posibilidades de respuesta y ellas deben circunscribirse a ellas. De estas, 19 son dicotómicas y 37 tienen varias alternativas de respuesta. También incluimos 11 preguntas abiertas, teniendo en cuenta que deben ser pocas, fundamentales y realmente reveladoras (Marín y Pérez Serrano, 1985, p. 66).

De cara a estructurar la entrevista a los subdirectores hemos confeccionado una ficha técnica compuesta por 23 preguntas abiertas que hemos agrupado en cinco bloques, con el objetivo de seguir un guión que nos facilitase el proceso, además de añadir un apartado de otros datos de interés (ver anexo 2):

1. Datos generales del centro. Localización, organigrama y fecha de entrada en funcionamiento. En algunos casos, estos datos ya fueron cubiertos parcialmente con la información disponible en la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2. Características del centro/módulo. Tipo de centro/módulo, tipo de construcción, capacidad, ocupación real, número de celdas, servicios generales de los que dispone el centro, servicios a los que pueden acceder las internas, existencia de módulos específicos.
3. Recursos Humanos. Personal con el que cuenta el centro/módulo y, específicamente, personal educativo.
4. Programas de Tratamiento. Programas de tratamiento del centro y del módulo y sus características.
5. Relaciones con la comunidad. Convenios con administración local, autonómica, central, ONGs u otras instituciones, así como las actividades del centro/módulo en el exterior.

5.4.3. Aplicación de los instrumentos y recogida de datos

En el pase del cuestionario a las internas hemos optado por estar presentes y llevar a cabo el proceso de forma individual. Para ello, ha sido necesario solicitar los permisos oportunos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) (ver anexos 3 y 4).

Una vez obtenidos dichos permisos se produce el primer contacto con cada una de las prisiones con la solicitud de una primera reunión para explicar tanto los objetivos como el interés de la investigación adecuándonos a su disponibilidad de horarios.

Posteriormente tienen lugar las reuniones con los Subdirectores/as de Tratamiento o, en su caso, con el Director/a en función de su disponibilidad. En esta toma de contacto se realiza tanto una presentación personal como del tema de investigación. Agradecemos anticipadamente la posibilidad de acceder al interior para pasar el cuestionario y la necesidad de realizar una entrevista con ellos.

En función de las actividades de cada uno de los centros por un lado, y de las ocupaciones de las mujeres seleccionadas por otro, los momentos de pase fueron adaptándose en todo momento, siendo preferibles, de forma general, las horas que comprenden entre las 10h y las 13h (en los centros penitenciarios el tiempo disponible de las internas es muy limitado). Este tema puede considerarse una de las primeras trabas con las que nos hemos encontrado en el proceso.

Hemos escuchado en reiteradas ocasiones que las personas que están en un centro penitenciario disponen de “todo el tiempo del mundo”. Pero esto no es así en la práctica. El “aprovechamiento del tiempo” es una cuestión a la que se da una gran importancia, se trata de que las mujeres estén ocupadas, la mayor parte del tiempo, en actividades asociadas tradicionalmente con el rol femenino; además, la rutina se presenta como una “aliada” de la espera en la que se ven embaucados los internos durante su tiempo en prisión, siendo esta espera el modo sobre el que la cárcel organiza la vida cotidiana. La institución penitenciaria utiliza el tiempo para disciplinar, normalizar, organizar el castigo y la interacción social (Viedma, 2013). Las personas privadas de libertad tratan de conseguir una independencia de esa gestión del tiempo ocupándolo, aprovechando esa espera y organizando el regreso a su vida una vez salgan de prisión (Del Val et al., 2012).

Así pues, finalmente, se desarrolla la reunión en la prisión, en un espacio habilitado para tal fin, con cada una de las mujeres de forma individual, explicándoles el proceso que seguiríamos, solicitando su colaboración y garantizando el total anonimato (anexo 5). Esta forma de proceder explica que la muestra aceptante sea idéntica a la productora de datos, ya que pasamos el cuestionario estando presentes en todo momento.

Cuadro 7

Ficha Técnica del cuestionario a las internas

Ámbito	España
Universo	Mujeres extranjeras en prisión
Población	Mujeres extranjeras en prisión en los Centros Penitenciarios del territorio español
Tamaño de la muestra	Invitada: 262 Aceptante: 159 Productora de datos: 159
Puntos de muestreo	7 Centros Penitenciarios
Procedimiento de muestreo	Primer nivel: para elegir los centros - muestreo no probabilístico intencional Segundo nivel: para elegir a las mujeres extranjeras - no probabilístico accidental
Error muestral	Para un nivel de confianza del 0,95 y $P=Q=0,5$, el error muestral es de $\pm 5\%$ para el conjunto de la muestra
Nivel de confianza	95%
Fecha de aplicación	Mayo – Septiembre 2012

En cuanto al tiempo empleado para aplicar el cuestionario, en la literatura científica se recomienda que pueda ser contestado entre media y una hora (Sierra Bravo, 1995). De todos modos, debemos tener en cuenta que este tiempo dependerá del grado de información y el interés que se tenga al contestar al cuestionario.

En este sentido, cabe decir que las mujeres con las que hemos trabajado, mostraban un claro interés por responder a las cuestiones planteadas, resaltando la oportunidad de hacerse oír, de forma que aunque en la mayor parte de los casos las reuniones tenían una duración de 40 minutos, en otros, superábamos la hora. Bien es cierto que en algunas internas existía una actitud negativa hacia el estudio por motivos diversos, aunque, el más generalizado responde a la desconfianza hacia la seguridad del anonimato, hecho que les preocupaba en gran medida y que condiciona la sinceridad de la respuesta.

Tras realizar los cuestionarios de las internas, procedimos con las entrevistas a los Subdirectores/as de Tratamiento. Una vez hecho el primer contacto con estos/as profesionales concertamos una cita con cada uno de ellos para realizarles la entrevista.

Aunque se recomienda la utilización de una grabadora, por las circunstancias del contexto en el que trabajamos en el que la seguridad es una cuestión fundamental, no se ha permitido, lo cual nos ha llevado a registrar las entrevistas, tomando nota por escrito de los aspectos relevantes de la forma más exhaustiva posible.

En relación al tiempo que hemos invertido, ha sido muy variable, dependiendo de la disponibilidad de los entrevistados; en todo caso, las entrevistas han durado entre una hora y una hora y media. Pese a todas las dificultades con las que nos hemos podido encontrar, reconocemos un buen espíritu de colaboración por parte de los profesionales, siendo la amabilidad la nota predominante en el desarrollo de la entrevista.

5.5. Codificación y análisis de datos

5.5.1. Procesamiento de la información

Una vez recogidos los datos, debemos sacar las conclusiones pertinentes en cada caso y, para ello, es necesario procesarlos tras diferenciar cada uno de los instrumentos y las preguntas que los componen. Esta información nos permitirá sintetizar los resultados en una serie de gráficas y tablas que nos ayudarán extraer las consideraciones finales. Siguiendo a Cabero y Hernández (1995), tras la recogida de información y previo a la presentación de resultados, aparece el proceso de análisis de datos, que consiste en convertir los textos originales en datos manejables para su interpretación. Así, una vez realizado el pase de los cuestionarios y las entrevistas procedimos a la codificación de los datos.

En relación a los cuestionarios, en primer lugar, tuvimos que realizar el vaciado de las respuestas a las preguntas abiertas, codificándolas de forma que establecimos una serie de categorías y anotando sus frecuencias. Continuamos con el proceso codificando también las respuestas de las cuestiones cerradas. Las respuestas de las internas fueron introducidas en una matriz de datos utilizando el paquete estadístico SPSS v.20 para proceder con su análisis estadístico.

Para las entrevistas hemos utilizado la técnica de análisis cualitativo de la rejilla. La técnica de la rejilla es un procedimiento de evaluación semi-estructurado dirigido a evaluar los constructos personales del entrevistado y, generalmente, se incluye dentro de las “técnicas subjetivas” (Feixas, 2003). Este instrumento fue creado para obtener y analizarlos constructos personales, y explorar sus interrelaciones y estructura. Una vez administrada la entrevista, generamos una matriz numérica que, a partir de ciertos parámetros, nos ayuda a organizar la información y analizarla.

5.5.2. Análisis de datos

Las técnicas de análisis de datos nos permiten organizar y tratar la información para que se pueda describir, analizar e interpretar. Su propósito fundamental es disponer los datos de la investigación de forma que nos facilite dar respuesta al problema que planteamos y decidir si las hipótesis fueron afirmadas o rechazadas (Bisquerra, 1989, p. 3). Rodríguez Gómez, Gil Flores, y García Giménez (1996, p. 197) señalan que “los datos recogidos constituyen las piezas de un puzzle que el investigador se encarga de ir encajando, utilizando la evidencia recogida para orientar la búsqueda de nuevas evidencias susceptibles de incorporarse a un esquema emergente de significados que dé cuenta de la realidad estudiada”.

De este modo, con respecto al cuestionario, realizamos en primer lugar un análisis estadístico descriptivo para ajustar las características de la muestra, una vez hecho, hemos traducido los resultados en una serie de gráficas y tablas que recogen los datos obtenidos.

Así, tras describir las variables, realizaremos cruces estadísticos, para valorar las contestaciones de estas mujeres en función de determinadas variables de contraste (red de apoyo social, área geográfica, proyecto migratorio y carrera delictiva). Para comprobar si las diferencias observadas con respecto a estas variables son o no estadísticamente significativas, recurrimos a diferentes contrastes o pruebas que tienen por objetivo comparar en qué medida las divergencias contempladas a nivel muestral podrían ser extrapoladas al resto de la población. Es decir, el uso de las técnicas por contrastes bivariados nos permitirá poner a prueba la hipótesis nula que mantiene que las diferencias entre sujetos son iguales a cero, o lo que es lo mismo, no significativos en términos estadísticos.

La literatura estadística indica que para utilizar pruebas paramétricas se deben comprobar los supuestos paramétricos (homoscedasticidad, normalidad y linealidad) y, en caso contrario, debemos utilizar pruebas no paramétricas (García Ferrando, Ibáñez, y Alvira, 2000; Castro y Ruiz, 2004; Tejedor y Etxeberria, 2006; Guardia, 2007).

Por lo tanto, para aquellas variables que son categóricas utilizaremos la prueba de Chi – cuadrado, mientras que para las escalares debemos llevar a cabo, en primer lugar, la prueba de Kolmogorov–Smirnov para determinar si se cumple el supuesto de normalidad y, por lo tanto, saber si necesitamos una prueba paramétrica o no paramétrica; en el caso de que se produzca una distribución normal emplearemos la prueba t para muestras independientes, mientras que si la distribución no cumple los parámetros de normalidad utilizaremos las pruebas U de Mann Whitney (para dos muestras) y la prueba estadística Kruskal Wallis (para más de dos muestras).

Así, en función de los objetivos planteados, en primer lugar llevaremos a cabo un estudio de las características de las prisiones y los módulos en los que hemos trabajado, a través de las respuestas de los Subdirectores/as de Tratamiento. Posteriormente, establecemos el perfil socio-educativo de las mujeres de la muestra por medio de un análisis descriptivo de sus características. Y, por último, analizaremos las diferencias que se producen según la red de apoyo social con la que cuentan, el área de procedencia, si vivían en España o no antes de entrar en prisión, y, por último, si tenían ya carrera delictiva.



CAPÍTULO 6:

**ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS. LAS MUJERES EXTRANJERAS EN
LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ALCALÁ DE
GUADAÍRA, BRIEVA, MADRID I, TEIXEIRO,
PEREIRO DE AGUIAR, BONXE Y A LAMA**



CAPÍTULO SEXTO. ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. LAS MUJERES EXTRANJERAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ALCALÁ DE GUADAÍRA, BRIEVA, MADRID I, TEIXEIRO, PEREIRO DE AGUIAR, BONXE Y A LAMA

6.1. Introducción

En este capítulo tratamos de analizar los resultados obtenidos a partir de los instrumentos utilizados en esta investigación. Nos centraremos en las características de los centros/módulos de mujeres apoyándonos, por un lado, en los datos oficiales, y, por otro, en la perspectiva de los/as subdirectores/as de dichos centros que hemos recogido por medio de las entrevistas.

Una vez señaladas las particularidades de los centros, analizaremos las respuestas de las mujeres de la muestra al cuestionario que hemos diseñado, para examinar sus características socioeducativas.

Tras este análisis descriptivo es el momento de estudiar las diferencias entre las mujeres extranjeras que se encuentran en los centros penitenciarios en España por medio de un análisis comparativo.

Indagaremos en la influencia de ciertas variables de estudio con el objetivo de ver si existen diferencias entre los distintos grupos de internas para sacar conclusiones con la finalidad de concretar la propuesta de intervención.

6.2. Las prisiones y módulos de mujeres en España: la perspectiva de los Subdirectores de Tratamiento

Fueron siete los Subdirectores de Tratamiento entrevistados en este proceso, correspondientes a los centros con los que hemos podido trabajar. Las entrevistas se han plasmado en una ficha de cada prisión con cinco apartados claramente señalados:

- Datos generales

- Características del centro/módulo
- Recursos Humanos
- Programas de Tratamiento
- Relaciones con la comunidad
- Otros datos

Como ya apuntamos en el capítulo anterior, estas entrevistas han sido analizadas por medio de la técnica de la rejilla. Para ello, el primer paso fue codificar los centros; en este apartado nos referiremos a cada uno de ellos a través de los datos de identificación que les hemos designado (ver Cuadro 8).

Cuadro 8

Datos de identificación

Centro	Código	Provincia	Tipo de centro
Alcalá de Guadaíra	E1	Sevilla	Centro Penitenciario de Régimen Ordinario exclusivo de mujeres
Madrid I	E2	Madrid	Centro Penitenciario de Régimen Ordinario exclusivo de mujeres
Brieva	E3	Ávila	Centro Penitenciario de Régimen Ordinario exclusivo de mujeres
Teixeiro	M1	A Coruña	Módulo de mujeres
Bonxe	M2	Lugo	Módulo de mujeres
A Lama	M3	Pontevedra	Módulo de mujeres
Pereiro de Aguiar	M4	Ourense	Módulo de mujeres

Las siete personas entrevistadas (cuatro mujeres y tres hombres) ejercían como Subdirectores/as de Tratamiento de estos Centros Penitenciarios en el momento de la realización del estudio.

Los Subdirectores de Tratamiento forman parte del Consejo de Dirección de cada Centro Penitenciario¹³ y se encargan, en primera instancia, de dirigir al Equipo Técnico¹⁴; además, también forman parte de la Junta de Tratamiento.

¹³ Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

¹⁴ Art. 274 del RD 190/1996 de 9 de febrero. El Equipo Técnico podrá estar compuesto por un Jurista, un Psicólogo, un Pedagogo, un Sociólogo, un Médico, un Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado universitario en Enfermería, un Maestro o Encargado de Taller, un Educador, un Trabajador Social, un Monitor Sociocultural o Deportivo y un Encargado de Departamento.

Las funciones tanto del Equipo Técnico como de la Junta de Tratamiento se regulan en los artículos 273 y 275 del Reglamento Penitenciario (RD 190/1996 de 9 de febrero) y ya han sido especificadas en el capítulo cuarto, dedicado al Tratamiento Penitenciario.

Así, una vez conocemos las tareas específicas en las que participan estos profesionales, es momento de centrarnos en la descripción de los centros que ellos mismos han realizado.

De este modo, comenzamos a analizar cada uno de los centros para llegar a una conclusión general a partir de los datos proporcionados por los Subdirectores.

Cabe decir que hemos tratado de ser exhaustivas al recoger las respuestas, por lo que pueden detectarse diferencias a la hora de la interpretación de las cuestiones o en la extensión del discurso.

Además, hemos codificado cada apartado para la clarificación de las consideraciones finales así como cada una de las categorías que conforman estos apartados.

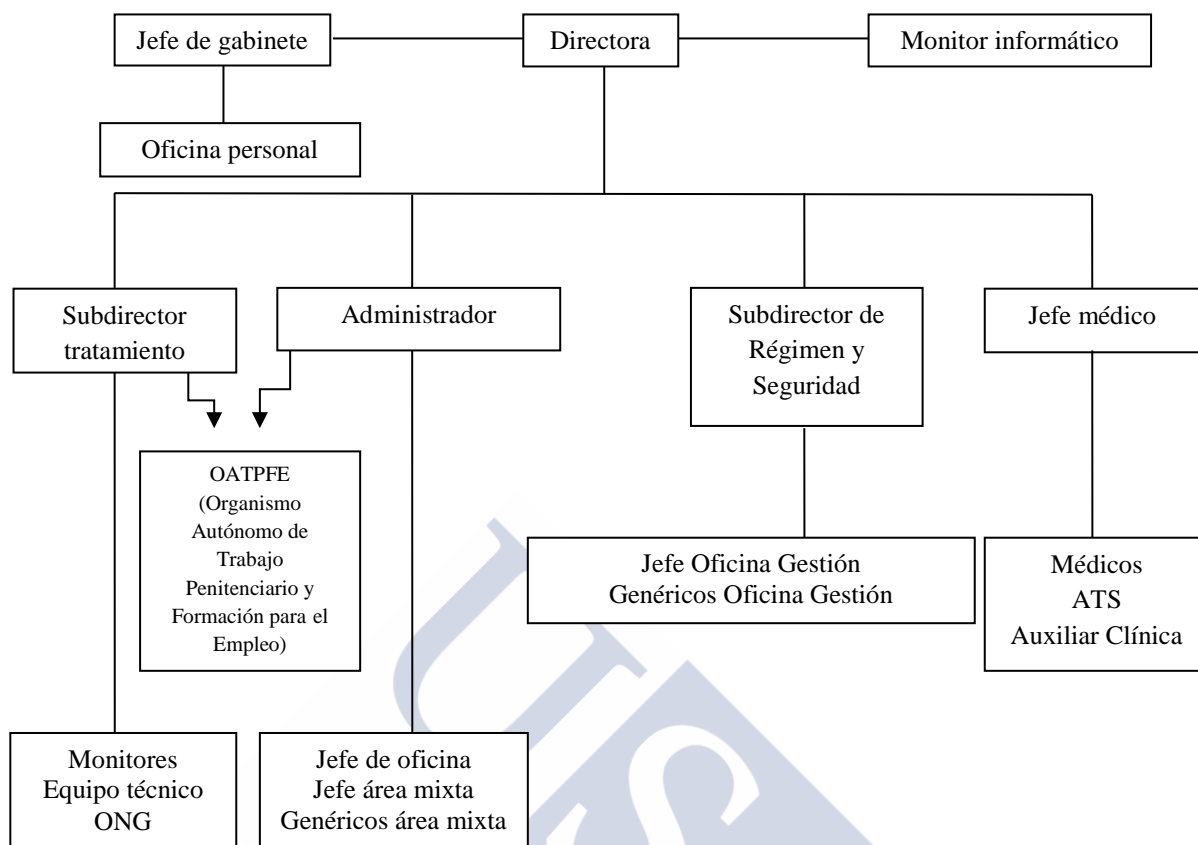
6.2.1. Datos generales de los centros/módulos

En este punto tratamos de recabar los datos generales de las prisiones, su localización, el organigrama y la fecha de entrada en funcionamiento. Así, comenzaremos por señalar las características generales de los centros para continuar con las de los módulos.

a) Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Código E1)

- Localización (LE1). Este centro está situado en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Se encuentra a una distancia de 5 km de la población urbana de Alcalá de Guadaíra, y a 22 km de Sevilla. Se trata, pues, de un centro penitenciario bastante próximo a núcleos urbanos, lo que facilita las comunicaciones familiares y la relación con la comunidad.

- Organigrama (OE1).

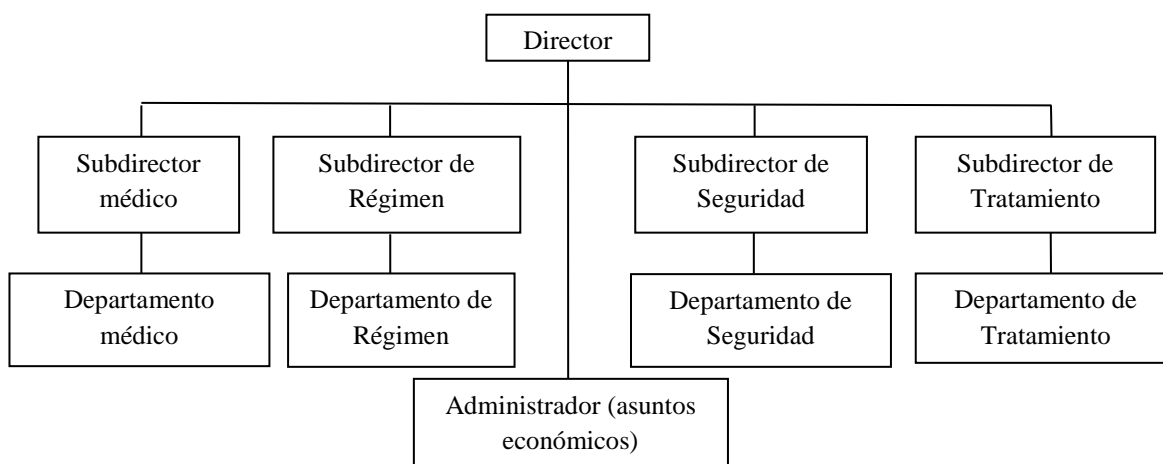


- Fecha de entrada en funcionamiento (FE1). Creado por Orden Ministerial de fecha 9 de septiembre de 1991, es el primer y único Establecimiento Penitenciario en la Comunidad Autónoma Andaluza dedicado a una población exclusivamente femenina. En él se presta una especial atención a internas madres que mantienen con ellas a sus hijos menores de tres años. Parte del actual Equipo Directivo, participó en su acondicionamiento, planificación y desarrollo desde su inauguración el 23 de marzo de 1992, por el entonces Ministro de Justicia D. Tomás de la Quadra - Salcedo.

b) Centro Penitenciario de Madrid I (Código E2)

- Localización (LE2). El centro está situado en la carretera Alcalá-Meco, Alcalá de Henares, a una distancia de 8 km del núcleo urbano más cercano (Alcalá de Henares) y a 40 km de Madrid capital. Es decir, nos encontramos con una distancia con la comunidad considerable.

- Organigrama (OE2).

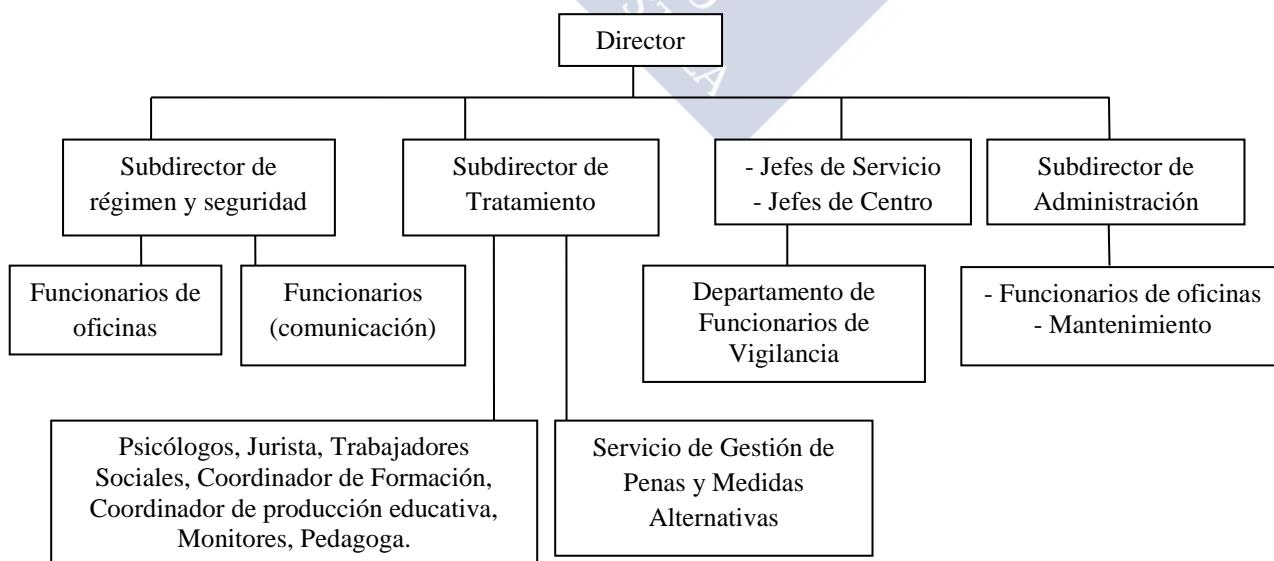


- Fecha de entrada en funcionamiento (FE2). Este centro empezó su cometido en el año 1984, es decir, es de los primeros centros construidos después de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979.

c) Centro Penitenciario de Brieva (Código E3)

- Localización (LE3). Este centro pertenece al ámbito territorial del ayuntamiento de Brieva (Ávila), un municipio de 76 habitantes que se encuentra a 7 km de Ávila. Es el centro que, en cuanto a localización, se encuentra más próximo a la comunidad.

- Organigrama (OE3).



- Fecha de entrada en funcionamiento (FE3). Este centro exclusivo para mujeres, pero con un módulo masculino, empezó a funcionar el 9 de enero de 1989.

d) Centro Penitenciario de Teixeiro (Código M1)

- Localización (LM1). Se encuentra en Teixeiro-Curtis (A Coruña), a una distancia de 7 kilómetros del centro urbano más cercano.

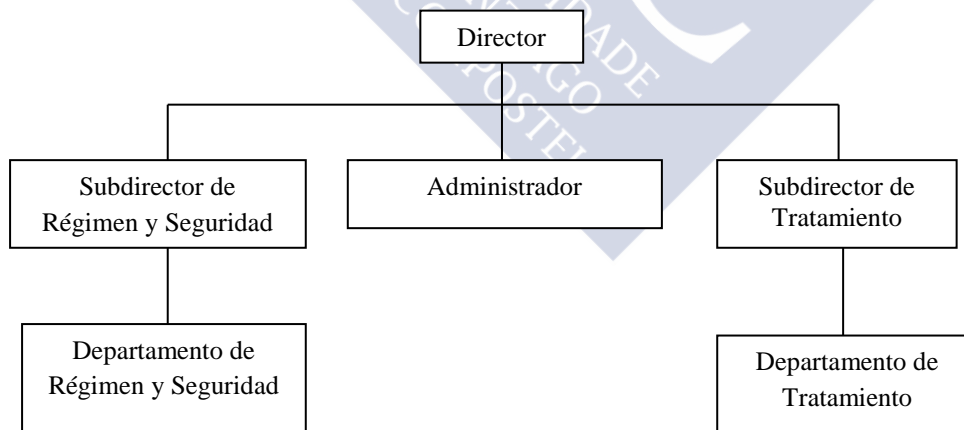
- Organigrama (OM1). Se trata de un centro tipo, por lo que el organigrama responde a la estructura del centro tipo que señalaremos al término de este apartado.

- Fecha de entrada en funcionamiento (FM1). Este centro fue construido por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y entró en funcionamiento en 1998.

e) Centro Penitenciario de Bonxe (Código M2)

- Localización (LM2). Se sitúa en Outeiro de Rei (Lugo), a 3 km de Rábade, ayuntamiento de 1.700 habitantes y a 15 km de Lugo capital. Es decir, relativamente cerca de un núcleo poblacional.

- Organigrama (OM2).

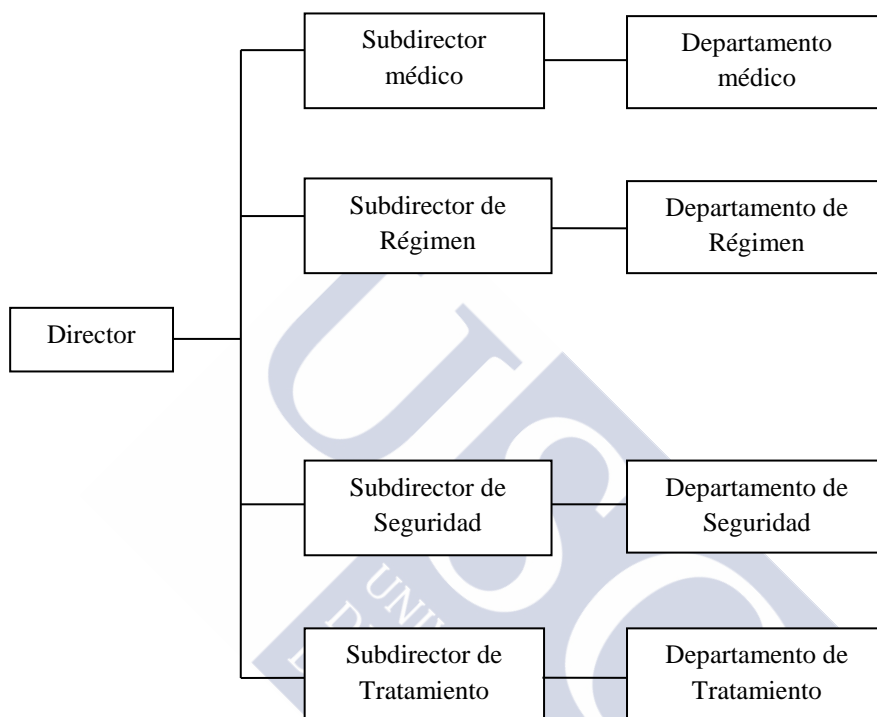


- Fecha de entrada en funcionamiento (FM2). Este centro penitenciario se construye en 1981, año en el que se aprueba el primer Reglamento Penitenciario (BOE 23/06/1981).

f) Centro Penitenciario de A Lama (Código M3)

- Localización (LM3). Se encuentra a 27 km de la ciudad de Pontevedra y el núcleo más cercano (A Lama) está a 2 km.

- Organigrama (OM3). El organigrama sigue la estructura de un centro tipo aunque desde el centro se facilita el siguiente modelo organizativo:

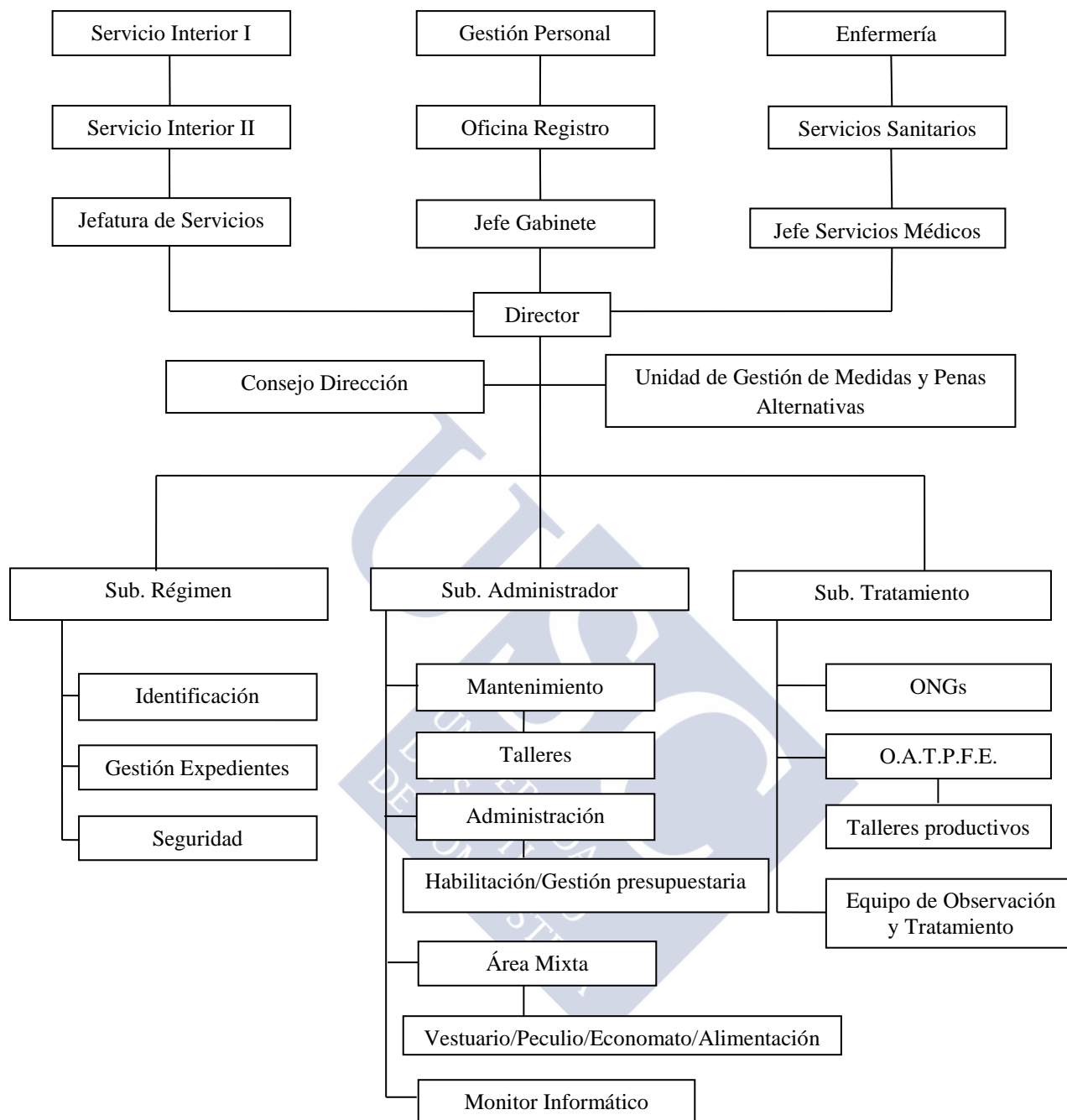


- Fecha de entrada en funcionamiento (FM3). Este centro entra en funcionamiento en 1999, a partir de la creación de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios que nació con el objetivo de responder a las particularidades de la LOGP.

g) Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Código M4)

- Localización (LM4). Se encuentra en Pereiro de Aguiar (Ourense), municipio de 6300 habitantes, a 9 km de la ciudad de Ourense. Se trata de un centro de los denominados provinciales.

- Organigrama (OM4).



- Fecha de entrada en funcionamiento (FM4). Este centro comienza a desarrollar sus funciones en el año 1987, es decir, antes de que comenzasen a construirse los centros tipo.

Los centros penitenciarios se encuentran, generalmente, a una distancia considerable de los núcleos de población más cercanos aunque, como es el caso de Brieva, encontramos ciertas excepciones, lo que dificulta las comunicaciones de los internos con sus familias y de la cárcel con la comunidad. Por este motivo,

desde la Comisión de Calidad de Vida del Consejo Social Penitenciario se elabora, en 2011, una guía de transporte para que sirva de utilidad a aquellos que necesiten desplazarse hasta uno de ellos¹⁵.

Sin embargo, vemos que únicamente existe un servicio de transporte público regular al centro ubicado en Madrid, en Bonxe hay un servicio de 3 autobuses cada día y para el centro de Brieva dos días a la semana. Los centros de Alcalá de Guadaíra, Pereiro de Aguiar, Teixeiro y A Lama no cuentan con servicio de transporte público, hecho que dificulta las visitas por parte de los familiares, e incluso la salida de los internos/as para disfrutar de sus permisos. Esto es muy importante ya que como hemos defendido, la comunidad debe ser uno de los ejes fundamentales del tratamiento penitenciario.

Por otro lado, como podemos ver, los organigramas presentados reflejan una estructura diferente en cada centro. Entendemos que en cada situación el organigrama se adapta a las necesidades y demandas que se presentan, por ello, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se ofrece un ejemplo de organigrama para los Centros Tipo¹⁶ (ver Figura 5), en el que se diferencian dos departamentos, por un lado, la Oficina de Dirección y Personal, donde destaca la figura del Jefe de Gabinete y el Cuerpo Especial y Ayudantes; y, por otro, el director, que gestionará el Cuerpo Superior de Técnicos, Facultativo y Especial; y es el encargado de las áreas de Seguridad y Vigilancia, Gestión Penitenciaria, Sanidad, Tratamiento, Medios, Inserción Socio-laboral y Trabajo. De nuestra muestra de centros, los de A Lama y Teixeiro son centros tipo que obedecen a esta estructura.

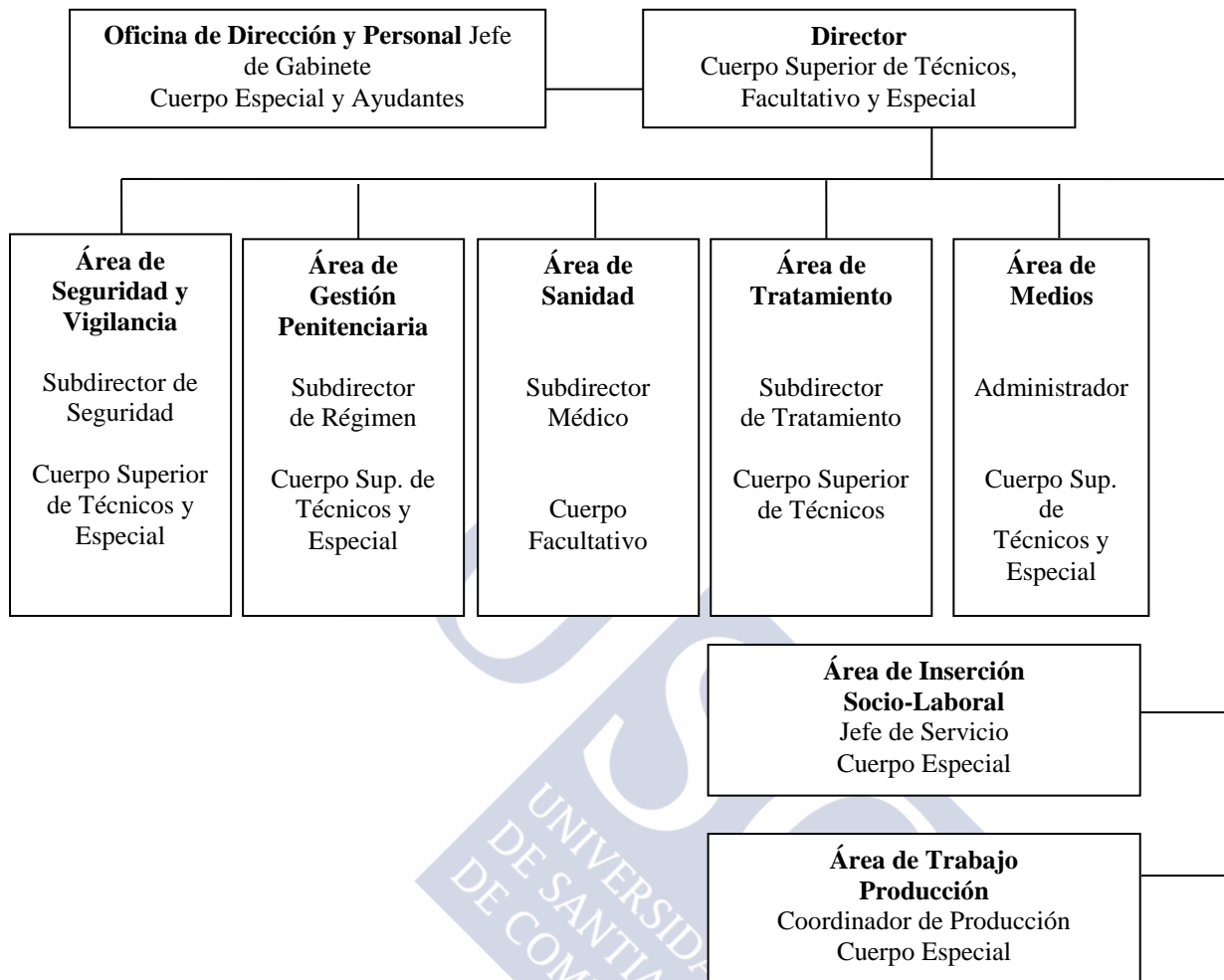
¹⁵

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/Guia_de_transporte_2014_definitivo.pdf

¹⁶ <http://www.institucionpenitenciaria.es/>

Figura 5.

Organigrama Centro Tipo.



Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Por otra parte, vemos que la fecha proporcionada por los subdirectores coincide en cuatro de los siete centros con la fecha de construcción del mismo facilitada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Cuadro 9). Esta distorsión puede ser debida a varios factores, entre ellos, la constante movilidad del personal de Instituciones Penitenciarias que provoca cierto desconocimiento de algunos datos o un error de interpretación ante la cuestión planteada. La cárcel más antigua en nuestro caso es Madrid I y la más moderna es A Lama, que se construyó con el primer plan de Administración y Creación de Centros Penitenciarios.

Cuadro 9

Fecha de construcción y entrada en funcionamiento de los Centros Penitenciarios de la muestra

Centro	Fecha de construcción	Fecha de entrada en funcionamiento
Alcalá de Guadaíra	1991	1992
Madrid I	1978	1984
Brieva	1989	1989
Teixeiro	1998	1998
Bonxe	1981	1981
A Lama	1998	1999
Pereiro de Aguiar	1987	1987

6.2.2. Características de los centros/módulos

En este caso agrupamos las características específicas de los centros en los que hemos trabajado. Entre ellas destacamos el tipo de centro, de construcción, la capacidad o la ocupación real, así como el número de celdas con las que cuentan. También nos centramos en los servicios generales de los que dispone el centro centrándonos en aquellos a los que pueden acceder las internas y, por último, la existencia de módulos específicos.

a) Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Código E1)

- Tipo de centro (TE1). Se trata de un Centro Penitenciario de régimen ordinario de mujeres. Su superficie total es de 68.229 m², de los cuales se encuentran edificadas aproximadamente 9.100 m².

- Tipo de Construcción (TCE1). Lo construyó el Ministerio de Defensa, para albergar una prisión militar sin embargo, finalizada la obra, fue adquirido por el Ministerio de Justicia en 1991 (responsable de las prisiones entonces), adecuándose sus instalaciones al uso actual. Su creación se debió fundamentalmente a la necesidad de contar en Andalucía con un centro de estructura adecuada para albergar una Unidad de Madres, en un momento en que la población reclusa femenina estaba creciendo muy significativamente.

- Capacidad de internas del centro (CIE1). 220 internas, pero su ocupación real (ORE1) es de 142 de las que 28 son extranjeras (19,7% del total), distribuidas en un total de 104 celdas (NCE1). Esto implica que algunas de ellas deben compartir espacio.

- Servicios generales de los que dispone el centro (SGE1). En la estructura del Centro se pueden diferenciar dos zonas:

1.- Exterior: Conjunto de edificios independientes, separados por zonas verdes y amplios espacios, donde se encuentran las oficinas administrativas, el cuerpo de guardia y el pabellón de comunicaciones. Además, en la sección abierta (3er grado) se dispone de 20 celdas, zonas comunes, aula y jardines.

2.- Intramuros: con tres grandes espacios:

a) Módulo B: totalmente independizado, cuenta con consulta médica, comedor, tres aulas multiusos, 20 celdas y un patio diseñado como una plaza de recreo típica de Andalucía.

b) Módulo A: también tiene consulta médica, comedor y un aula multiuso, 10 habitaciones y un patio similar al Módulo B.

c) Interior: zona residencial en planta alta con tres módulos de dormitorios, con la siguiente composición: módulo I: 22 celdas de una cama; módulo III: 16 celdas de tres camas; y módulo V: 12 celdas de 5 camas; zona residencial en planta baja con enfermería, con capacidad para 10 plazas, ingresos y aislamiento (4 celdas); y zona educativa en planta baja con patio general, comedor, capilla, enfermería, sala de descanso, economato, cocina, lavandería, biblioteca, etc.

Para la realización de actividades formativas se cuenta con los siguientes espacios: polideportivo, taller productivo de confección, peluquería, y cuatro aulas multiusos donde se imparten las clases de la escuela y programas formativos.

- Servicios a los que pueden acceder las internas (SAE1). Las internas pueden acceder a todos los servicios del centro ya que estamos en un centro exclusivo de mujeres.

- Existencia de módulos específicos (MEE1). El centro cuenta con un Módulo de Respeto.

b) Centro Penitenciario de Madrid I (Código E2)

- Tipo de centro (TE2). Centro con 8 módulos (A1, A2, A3, B1, B2, B3), Departamento de Enfermería, Departamento de Aislamiento e Ingresos.

Los datos referentes a Tipo de Construcción (TCE2) y a la Capacidad de internas del centro (CIE2) no eran conocidos por el Subdirector de Tratamiento.

Es un centro con una ocupación real (ORE2) de 600 mujeres aproximadamente, aunque el número de celdas (NCE2) sea únicamente de 385 celdas más 38 complementarias.

- Servicios generales de los que dispone el centro (SGE2). Biblioteca, escuela, talleres, mantenimiento, piscina, cocina, panadería, economato central, economatos en los módulos, huertos y jardines.

- Servicios a los que pueden acceder las internas (SAE2). Pueden acceder a todos los servicios generales.

- Existencia de módulos específicos (MEE2). 2 módulos de respeto y 1 módulo de semirespeto, es decir, comparten espacio aquellas internas que han decidido aceptar las normas de un módulo de respeto con aquellas que no están conformes.

c) Centro Penitenciario de Brieva (Código E3)

En este caso, la Subdirectora de Tratamiento tampoco conocía los datos relativos al tipo de centro (TE3) y al tipo de construcción (TCE3).

- Capacidad de internas del centro (CIE3). Puede albergar a 260 mujeres, aunque en el momento de la entrevista la ocupación real (ORE3) es de 179 internas para un total de 187 celdas (NCE3).

- Servicios generales de los que dispone el centro (SGE3). Biblioteca, polideportivo, cocina, lavandería, talleres (ocupacionales y productivos), salón de actos, cafetería, economatos y servicio de demandadero (compras en exterior).

- Servicios a los que pueden acceder las internas (SAE3). Pueden acceder a todos los servicios.

- Existencia de módulos específicos (MEE3). En el centro cuentan con 5 módulos curiosamente conocidos por colores: verde (1er grado), amarillo (sancionadas), rojo (régimen de vida normal), azul (respeto) y sección abierta. Sin embargo, no existen módulos específicos.

d) Centro Penitenciario de Teixeiro (Código M1)

- Tipo de centro (TM1). Centro Tipo para cumplimiento de penas de régimen ordinario.

- Tipo de Construcción (TCM1). Modular - rectangular, es decir, una estructura modular en la que se integran edificios, calles y plazas sobre una base rectangular.

- Capacidad de internas del módulo (CIM1). 144 mujeres, aunque cuando se realiza la entrevista hay 80 mujeres en el centro (ORM1).

- Número de celdas del centro/módulo (NCM1). 944 celdas y 148 complementarias en el centro, de las cuales 72 se destinan a mujeres.

- Servicios generales de los que dispone el módulo (SGM1). Comedor, sala de estar (de tv), patio, gimnasio, peluquería, aulas escolares, talleres ocupacionales...

- Servicios a los que pueden acceder las internas (SAM1). A todos los descritos y a los del exterior del módulo y que son comunes como polideportivo, escuela (EPAPU), campo de fútbol, trabajos en el centro (lavandería, limpieza...).

- Existencia de módulos específicos (MEM1). Este Centro Penitenciario cuenta con los siguientes módulos específicos:

Módulo 1 – Programa de “Inclusión Social”. Participando Instituciones Penitenciarias, Xunta de Galicia e INJUVE.

Módulo 5 – Módulo de Respeto y Deportivo de Nivel 2, penados 2º grado y preventivos.

Módulo 6 – Programa Terapéutico de deshabituación de drogas.

Módulo 7 – Módulo de Respeto de Nivel 3, penados de 2º grado y preventivos, destinos ínter modulares.

Módulo 8 – Módulo de Respeto de Nivel 3, penados de 2º grado, destinos de Talleres Productivos.

Módulo 9 – P.A.I.E.M. Programa de Atención Integral al Enfermo Mental. Módulo de Respeto de Nivel 3, penados de 2º grado y preventivos.

Módulo 10 – Módulo de Mujeres, dividido en Módulo de Respeto Nivel 3 (2ª planta) y Módulo ordinario (1ª planta).

e) Centro Penitenciario de Bonxe (Código M2)

- Tipo de centro/módulo (TM2). Se trata de un centro mixto, que alberga tanto a hombres como a mujeres.

- En cuanto al Tipo de Construcción (TCM2). El subdirector no contaba con la información necesaria para responder a la pregunta.

- Capacidad de internas del módulo (CIM2). En el módulo tienen cabida 24 mujeres, aunque su ocupación real (ORM2) es de 17 mujeres, 6 de ellas extranjeras, con un total de 14 celdas (NCM2).

- Servicios generales de los que dispone el centro (SGM2). Biblioteca, escuela (EPAPU), talleres, gimnasio y peluquería.

- Servicios a los que pueden acceder las internas (SAM2). Pueden acceder a todos los servicios.

- Existencia de módulos específicos (MEM2). Disponen únicamente de un Módulo de respeto.

f) Centro Penitenciario de A Lama (Código M3)

- Tipo de centro (TM3). A Lama es un Centro Tipo de cumplimiento de penas de régimen ordinario.

- Tipo de Construcción (TCM3). Modular – rectangular, al igual que el centro de Teixeiro.

- Capacidad de internas del módulo (CIM3). En el módulo hay espacio para 100 mujeres, aunque la ocupación real del módulo (ORM3) es justo la mitad; sin embargo, hay un centenar de celdas (NCM3).

- Servicios generales de los que dispone el centro (SGM3). Lavandería, panadería, economato, cocina, mantenimiento, biblioteca, escuela, polideportivo, campo de fútbol, enfermería...

- Servicios a los que pueden acceder las internas (SAM3). Pueden acceder a todos los servicios.

- Existencia de módulos específicos (MEM3). Una UTE y 8 módulos de respeto en todo el centro.

g) Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Código M4)

Los datos relativos al Tipo de centro (TM4) y al Tipo de Construcción (TCM4) no fueron facilitados por la Subdirectora de Tratamiento del centro.

- Capacidad de internas del módulo (CIM4). El centro tiene una capacidad total de 500 internos y de 80 mujeres, pero cumplen condena 371 internos, de los cuales 15 son mujeres y únicamente 1 es extranjera (ORM4).

El centro cuenta con 243 celdas sin que se pueda precisar exactamente cuántas hay en el módulo de mujeres (NCM4).

- Servicios generales de los que dispone el centro (SGM4). Lavandería, economato, cocina, biblioteca, escuela, polideportivo, canchas, gimnasio, enfermería, aulas audiovisuales, piscinas...

- Servicios a los que pueden acceder las internas (SAM4). Todos.

- Existencia de módulos específicos (MEM4). Comunidad terapéutica intrapenitenciaria (CTI) y 6 módulos de respeto (4 generales, un departamento de destino y uno de mujeres).

Después de este recorrido podemos observar como cuatro de los centros son módulos de mujeres en cárceles destinadas a población masculina mientras que tres son centros exclusivos de mujeres. De la información y datos obtenidos podemos concluir que los centros que se construyen de forma más reciente (Teixeiro y A Lama) se constituyen como centros tipo.

Los Centros Tipo poseen la base de una estructura urbana modular en la que se integran edificios, calles y plazas¹⁷. Su ordenación está basada en la definición de diversos anillos concéntricos de seguridad alrededor de un recinto interior, identificado como urbanización interior. En función del uso de los edificios se pueden clasificar en:

a) Edificios externos que son los utilizados por personas no internas: control de accesos, oficinas y cuerpo de guardia y jefatura de servicios y comunicaciones.

b) Edificios de servicios, destinados a los internos de forma no continuada: cocinas, talleres productivos y deportivo-cultural.

¹⁷ <http://www.institucionpenitenciaria.es>

c) Edificios con presencia permanente de internos: módulos polivalentes, módulos residenciales, módulos de régimen cerrado, enfermería e ingresos, salidas y tránsitos.

En relación a la construcción, aunque es un dato bastante desconocido por los Subdirectores de Tratamiento, es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP SA), la compañía estatal encargada del diseño, planificación y ejecución de las nuevas instituciones penitenciarias, y ha desarrollado este modelo tipo que ha servido de base para la construcción de las actuales instalaciones. Esta Sociedad ha sido la encargada de edificar los centros de Teixeiro y A Lama, sin embargo, los centros que han sido construidos con anterioridad a 1992 no forman parte de los trabajos de este organismo.

Los centros exclusivos de mujeres son centros pequeños, como reflejamos en la tabla 11, mientras que la capacidad de los módulos depende de si el centro en el que se ubican es centro tipo o no.

Respecto a la capacidad del centro/módulo, su ocupación real y el número de celdas con las que cuenta (ver Tabla 11), podemos ver que no existe una sobreocupación de los espacios ya que la capacidad, en todo caso, supera la ocupación real de mujeres.

La Administración Penitenciaria debe garantizar una adecuada calidad de vida de las personas que están en prisión, de forma que dispongan de las prestaciones y espacios apropiados para el acceso a la educación, la formación profesional, las actividades culturales, deportivas, laborales y demás programas desarrollados por el cuadro de profesionales y entidades colaboradoras, encaminados a su reinserción en la sociedad cuando cumplan su condena. Por ello, en la totalidad de los centros, los profesionales afirman que las internas pueden acceder a todos los servicios que se ofrecen. Entre ellos, debemos destacar aquellos que coinciden en todos los establecimientos, como son, escuela, cocina, enfermería, lavandería, talleres, economato e instalaciones destinadas a la práctica deportiva y cultural. Sin embargo, las mayores restricciones se presentan en las mujeres que cumplen condena en centros destinados a hombres, ya que, siguiendo a Rivera (2005), la política que se lleva a cabo en los centros ordinarios siempre acaba priorizando las necesidades del colectivo masculino por encima del femenino de forma que se destinan menos recursos económicos,

materiales y personales para las mujeres internas, lo que implica menos posibilidades de tratamiento.

Tabla 11

Capacidad de Internas, ocupación real de los centros y número de internas

Centro	Capacidad de internas	Ocupación real	Número de celdas
E1	220 internas	142 en total, 28 extranjeras	104 celdas
E2	-	600 aprox. en total, 138 extranjeras	385 + 38 complementarias
E3	260 mujeres	179 internas, 66 extranjeras	187 celdas
M1	144 mujeres	80, 11 extranjeras	72 celdas
M2	24 mujeres	17 internas, 6 extranjeras	14 celdas
M3	100 mujeres	50 internas, 12 extranjeras	100 celdas
M4	80 mujeres	15 internas, 1 extranjera	-

Finalmente, entre los módulos que tienen una especial organización o funcionamiento destacamos el Módulo de Respeto que se encuentra en la totalidad de los centros. La finalidad de estos módulos es lograr un clima de convivencia y máximo respeto entre los internos, su ingreso es voluntario y se regulan por una serie de normas de convivencia centradas en el área personal (higiene, aspecto, vestuario y cuidado de celda), área de cuidado del entorno (utilización y mantenimiento de los espacios comunes), área de las relaciones interpersonales y área de actividades (regularizada por medio de un PIT).

Sin embargo, cuando en los centros únicamente existe un módulo de mujeres, las posibilidades de que haya un módulo de respeto se reducen. De este modo, en uno de los centros (Teixeiro) el módulo de mujeres se configura como de “semirespeto” al igual que en Madrid, en donde, aunque sí que encontramos módulos de respeto, uno de ellos es de semirespeto. Este hecho supone la convivencia en el mismo espacio de aquellas personas que aceptan las normas de estos módulos con aquellas que no las aceptan. Esta realidad puede conllevar conflictos internos entre las mujeres que cumplen condena, y es algo que los mismos profesionales explicitan.

También destaca la presencia de los Módulos Terapéuticos. El más común es la UTE o Unidad Terapéutica y Educativa, que estaría presente en dos de los centros con los que hemos podido trabajar, sin embargo, en estas Unidades no es habitual la presencia de mujeres. Su eje de intervención son los grupos terapéuticos de internos y un Equipo Multidisciplinar; este modelo está basado en la metodología que se viene

desarrollando en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) desde 1992. En uno de los centros también se destaca la labor de la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria (CTI) que está orientada a la deshabituación del consumo de drogas además de perseguir objetivos como la normalización de la vida en la prisión y la reducción de la reincidencia en el delito.

Ninguno de los centros de la muestra cuenta en la actualidad con una Unidad de Madres. Como venimos diciendo en capítulos anteriores, son alrededor de 160 los niños que viven con sus madres en prisión, pero son pocos los centros que ofrecen esta posibilidad. Hasta abril de 2011 en uno de estos centros sí que existía una Unidad de Madres pero por diferentes motivos, entre ellos el bajo número de internas con hijos, han hecho que Instituciones Penitenciarias lo convierta en un módulo destinado a internos con enfermedades mentales. Este hecho ha producido que las internas que en ese momento se encontraban con sus hijos en el centro fuesen trasladadas en su mayoría, al centro penitenciario de León.

6.2.3. Los recursos humanos de los centros/módulos

En relación a los recursos humanos de los Centros Penitenciarios, cabe decir, en primera instancia, que existen diferentes tipos de profesionales en las distintas áreas de trabajo, cuya labor se lleva a cabo por medio de equipos multidisciplinares. Así, procedemos con las respuestas de los subdirectores a este respecto.

a) Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Código E1)

- Personal con el que cuenta el centro (RH1E1).

Este establecimiento mantiene una dotación de 122 personas que pertenecen al personal funcionario y 11 al personal laboral. Además, se cuenta con una media de 8-10 personas en contrataciones temporales para la impartición de cursos de formación y actividades deportivas y terapéuticas. De ellas, 79 están dedicadas a labores de vigilancia en turnos de trabajo de mañana, tarde y noche.

El Equipo Directivo se compone de cuatro personas: Directora, Subdirectora de Tratamiento, Subdirector de Régimen – Seguridad, y Administrador.

El área de Tratamiento está compuesta por, jurista, psicóloga, educadores, maestros, profesores, y personal adjunto. En la sanitaria hay 2 Médicos, 4 ATS, y 1 Auxiliar de Clínica.

- Personal educativo del centro (RH2E1).

Además del personal ya mencionado, tenemos que sumar el personal adjunto y los trabajadores eventuales que realizan tareas de formación y producción.

b) Centro Penitenciario de Madrid I (Código E2)

- Personal con el que cuenta el centro (RH1E2).

El centro cuenta con, aproximadamente, 112 funcionarios de interior.

- Personal educativo del centro/módulo (RH2E2).

En cuanto a personal educativo se destacan 7 educadores, 4 psicólogos, 4 juristas y 5 trabajadores sociales.

c) Centro Penitenciario de Brieva (Código E3)

- Personal con el que cuenta el centro (RH1E3).

Los más destacados son los funcionarios de oficinas, los funcionarios de comunicación, mantenimiento y los funcionarios de vigilancia.

- Personal educativo del centro/módulo (RH2E3).

En este centro penitenciario trabajan 3 profesores y además, el Departamento de Tratamiento consta de 1 pedagoga, 2 psicólogos, 1 jurista, 4 educadores, 2 trabajadores sociales y 1 gestor de formación.

d) Centro Penitenciario de Teixeiro (Código M1)

- Personal con el que cuenta el centro (RH1M1).

Diferenciamos entre los funcionarios de vigilancia y el Equipo técnico del centro en donde se encuentran los psicólogos, los juristas, los educadores y los trabajadores sociales.

- Personal educativo del centro (RH2M1).

En este caso se hace referencia a la EPAPU, centro público de educación de personas adultas que se configura como un centro educativo propio, dependiente

de la Xunta de Galicia. Con el RD 1203/1999 (BOE 21/07/1999) se establece la integración del personal de las escuelas de los centros penitenciarios en el cuerpo de maestros. En Galicia, Comunidad a la que pertenecen cuatro de los centros de la muestra, resaltamos que en el año 2007 fue creada la red de centros (Decreto 116/2007 de 31 de maio DOG 15/06/2007) por el que se crearon centros públicos de educación y promoción de adultos con sede en los centros penitenciarios de Galicia, de forma que los trabajadores de estos centros pertenecen a la *Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria*.

e) Centro Penitenciario de Bonxe (Código M2)

- Personal con el que cuenta el centro/módulo (RH1M2).

Se contabilizan 200 funcionarios en total.

- Personal educativo del centro/módulo (RH2M2).

El subdirector se refiere con personal educativo a 4 trabajadoras sociales, 6 educadores, 2 psicólogas, 2 juristas y 1 sociólogo.

f) Centro Penitenciario de A Lama (Código M3)

- Personal con el que cuenta el centro/módulo (RH1M3).

La subdirectora no conoce los datos referentes al personal.

- Personal educativo del centro/módulo (RH2M3).

Al igual que en el centro anterior se destaca la existencia de la escuela (EPAPU) y el personal que en ella desempeña su función, sin especificar el número y el tipo de profesionales.

g) Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Código M4)

- Personal con el que cuenta el centro/módulo (RH1M4).

El centro cuenta con 3 psicólogos, 2 juristas, 3 trabajadores sociales y 1 coordinador de trabajo social.

- Personal educativo del centro/módulo (RH2M4).

Suman en total 5 educadores, 4 maestros y 1 director de la escuela, como personal educativo.

En función de las respuestas de los subdirectores con respecto a los Recursos Humanos, lo primero que nos llama la atención es que no conozcan el número de personas que se dedican a tareas educativas, ya que siendo la educación parte del tratamiento, es un dato que se presenta esencial.

Por otra parte, se confunde, en ciertos casos, el personal educativo con los trabajadores de la escuela del centro, que, dependen de la Consejería de Educación de cada Comunidad Autónoma. Parece que los subdirectores reducen la educación a la escuela en exclusividad y no consideran la educación como base del tratamiento penitenciario. Por el contrario, en algunos casos, los Subdirectores consideran personal educativo a todos los profesionales que forman parte de la Junta de Tratamiento.

En relación a los perfiles que encontramos, el dato que más sorprende es que el pedagogo solo figura en uno de los centros. Lo que sí sucede es que algunos de los funcionarios de interior son licenciados en pedagogía.

6.2.4. Los Programas de Tratamiento de los centros/módulos

En este apartado se especifican los programas que cada uno de los centros/módulos desarrollan con las mujeres internas.

Así, en el centro E1 (Alcalá de Guadaíra) se presenta una relación detallada de todos los programas que tienen lugar en el momento de hacer la entrevista:

1. Programas de Formación Profesional-Ocupacional, del Organismo Autónomo e inicio de los programas del Servicio Andaluz de Empleo a través de la ONG “Batá”: curso de maquinista de confección industrial, curso de adornista textil, cursos de informática y curso de alfarero-ceramista.

2. Programa Educativo: enseñanza reglada, enseñanza semipresencial y a distancia, escuela de verano (actividades de formación de adultos a cargo de los educadores del centro, para dar una continuidad escolar en vacaciones) y programa de animación a la lectura.

3. Talleres ocupacionales: costura/bordado, decoración de azulejos y manualidades.

4. Programas de promoción del deporte (continuidad y mantenimiento de los distintos grupos según sus necesidades y edades). Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, campeonatos, celebraciones deportivas, senderismo y conferencias, seminarios, charlas-coloquio, exhibiciones, bailes de salón y regionales, etc...

5. Programas de formación, motivación y difusión cultural: programa cultural (cine, música y teatro) y programa de actividades para distintas conmemoraciones (Día de la mujer, del libro, de la Merced, contra la violencia de género, del SIDA, de los Derechos Humanos, Navidad...).

6. Programas específicos del establecimiento: Programa de atención individualizada, Programa de jóvenes, Programa de inserción y acompañamiento para las internas de 3er grado y Art. 100.2., Programa de deshabituación tabáquica para internas y trabajadores del centro penitenciario, Programa de mejora de la autonomía e independencia de internas con especiales problemáticas físico-psicológicas, Programa de formación en valores y convivencia social, Programa de promoción de la salud, información y divulgación, Programa de preparación para los permisos de salida, Programa de integración del voluntariado a través del Consejo Social Penitenciario Local, Programa de asesoramiento jurídico en colaboración con el Colegio de Abogados de Sevilla, Programa de intervención con internas con discapacidad intelectual (ONG FEAPS), Programa de intervención con internas con enfermedades mentales (ONG ASAENES), Programa de intervención a través de la filosofía, Programa de intervención a través del psicodrama (Fundación AZVI), Programas de orientación laboral y de desarrollo personal implementados por varias ONG.

7. Programas generales e institucionalizados: Programa de Estrategias de actuación con enfermos mentales (PAIEM); Consolidación y realización de los ajustes necesarios en la implementación del Módulo de Respeto. Formación continua y supervisión del personal por parte del Subdirector de Tratamiento; Programas de Intervención con Drogodependientes (GAD); Programa para la prevención de víctimas de violencia de género; y el Programa de prevención de suicidios.

Por su parte, el centro E2 (Madrid I) mantiene una respuesta más generalizada ante la existencia de los programas de tratamiento, centrándose en

programas de Drogodependencias, Enfermos Mentales, el Proyecto Oxígeno¹⁸, cursos de Formación Profesional coordinados por el INEM o el proyecto G.R.U.T.E.A.R.¹⁹.

También se hace referencia a diferentes cursos que se desarrollan en el Centro, dato que contrastaremos con las respuestas al cuestionario de las internas. Entre ellos destacan cursos de cocina, informática, confección industrial, estética, panadería, talleres (laborales, deportivos, ocupacionales, formativos, culturales y educativos), cursos de seguridad vial y talleres literarios.

El siguiente centro (E3, Breiva) nos presenta, también de un modo más general, una serie de programas por bloques temáticos como son programas de Extranjería, Prevención de Recaídas, actuaciones en Igualdad o proyectos dirigidos exclusivamente a jóvenes; además de referirse al módulo de respeto como un programa en sí, también enumera algún programa concreto como el Programa para Enfermos Mentales (PAIEM), actuaciones de prevención de la violencia de género como puede ser el Programa de Prevención de Violencia de Género para las mujeres en centros penitenciarios sermujer.es²⁰ o TACA (Terapia Asistida Con Animales).

El centro M1 (Teixeiro) cuenta con los siguientes programas:

- Programas específicos de tratamiento: agresores sexuales, violencia de género, prevención de recaídas, entrenamiento en habilidades sociales...
- Actividades Educativas Regladas: enseñanzas básicas iniciales, educación secundaria, tutorías en bachillerato, UNED.
- Actividades deportivas (en los módulos residenciales y en el polideportivo): Fútbol, baloncesto, atletismo, boxeo, gimnasia, tenis...

¹⁸ Los Ministerios de Medio Ambiente e Interior, a través de la Fundación Biodiversidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo pusieron en marcha en 2007 este proyecto dirigido a centros penitenciarios. Esta iniciativa tiene como objetivo crear espacios de formación en los centros que faciliten a sus internos el desarrollo de habilidades profesionales relacionadas con el medio ambiente.

¹⁹ Grupo de Terapia Antiadicciones Rehabilitadora (<http://www.grutearadicciones.com/>)

²⁰ http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Documento_Penitenciario_9_Ser_Mujer_profesionales.pdf

- Actividades culturales (en el módulo sociocultural): teatro, música, cine, club de lectura, conferencias y charlas. Concursos (a nivel Teixeiro y a nivel de Instituciones Penitenciarias) de poesía, relatos cortos, pintura...

- Actividades Ocupacionales (en los módulos residenciales): Marquetería, cerámica, pintura, hilos, espejos, cuero, abalorios, papiroflexia, costura, pirograbado, informática, video-forum...

- Actividades Recreativas (en los módulos residenciales): juegos de mesa (parchís, damas, ajedrez, puzzles...).

- Cursos de Formación (con titulación oficial): fontanería, electricidad, pintor de edificios, carpintería, peluquería, albañilería, alicatador, tapicero de muebles, informática, cocina, repostería, marroquinería...

- Talleres productivos: cocina, panadería, lavandería, mantenimiento, cuadros eléctricos, marroquinería...

En el centro penitenciario de Bonxe (M2) cuentan con programas como sermujer.es, al que ya nos hemos referido, la puesta en marcha del Programa PAIEM (Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales), o un convenio con la ONG Cruz Roja Española con quienes realizan actividades de diversa índole en relación con las drogodependencias.

Del mismo modo, el centro M3 (A Lama) también hace hincapié en el Programa TACA que sirve de complemento a programas de tratamiento destinados a internos con problemas de afectividad y autoestima, en los programas destinados a agresores, de violencia de género, resolución de conflictos, seguridad vial, o los dirigidos a enfermos mentales o discapacitados intelectuales, entre otros.

La última de las instituciones, Pereiro de Aguiar, especifica que en el centro existen programas de control de agresión sexual, intervención con maltratadores en el ámbito familiar, intervención con discapacitados intelectuales o atención integral a enfermos mentales, además, se refiere a la intervención multicultural con internos extranjeros, terapia asistida con animales, o un programa de deshabituación. A mayores las ONG desarrollan otros proyectos específicos.

Para concluir este apartado, es importante señalar que los subdirectores se han referido a los programas institucionales, destacando, especialmente en los módulos,

programas generales en los que las mujeres no tienen cabida ya que están dirigidos exclusivamente a los hombres como es el programa de control de la agresión sexual o la intervención con maltratadores. Nos llama la atención que muchos de los programas que se presentan desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ya comentados en el capítulo cuarto, no son conocidos por los propios subdirectores; ninguno de ellos ha hecho referencia a la mayor parte de los mismos.

Por otro lado, cabe subrayar la evidente presencia de las ONGs o asociaciones para desarrollar los diferentes programas. Concordamos con Del Pozo, Jiménez, y Turbi (2013) en que aunque esta realidad favorezca la “oxigenación comunitaria” en la participación carcelaria, es cierto que delega la responsabilidad principal del mandato constitucional de la reeducación y reinserción social al tercer sector, que no siempre cuenta con la formación profesional necesaria.

6.2.5. Relaciones con la comunidad de los centros/módulos

Las relaciones con la Comunidad se llevan a cabo por medio de convenios con diferentes entidades, tanto públicas como privadas.

De este modo, el centro E1 (Alcalá de Guadaíra) indica que mantiene acuerdos puntuales con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra; además, el programa de drogodependencias lo dirige la Diputación de Sevilla. Los Convenios con la Administración autonómica se centran en el profesorado del centro, que depende de la Junta de Andalucía, que además subvenciona a ONGs para desempeñar su labor en prisión, que en este caso son muchas. La Administración Central es la que gestiona los centros, particularmente el Ministerio del Interior, de forma que, en caso de que otros Ministerios, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mantenga algún tipo de colaboración, esta ya llega programada al centro.

La subdirectora también explica que los alumnos de las titulaciones de Pedagogía y Psicología de la Universidad de Sevilla tienen la posibilidad de realizar su practicum en el centro.

En relación a las actividades en el exterior, en el momento de la entrevista, las internas llevaban a cabo una exposición de cuadros de cerámica de azulejos en la Casa de la Cultura de la Diputación de Sevilla.

El segundo de los subdirectores entrevistados (E2, Madrid I) también afirma que se mantienen convenios, aunque no especifica de qué tipo, con el Ayuntamiento, la Diputación, la Administración Autonómica y la Administración Central. Igualmente, al preguntar por las ONG que en ese momento desarrollan algún programa, destacan las siguientes: ACOPE (Asociación de Colaboradores con las Mujeres Presas), Fundación Prolibertas, Asociación Marillac, Asociación Arcoiris, Asociación Darse, Asociación Puente, Las Hijas de la Caridad, Proyecto Hombre y Fundación Atenea.

También se resalta la colaboración con la Fundación “la Caixa” así como cursos subvencionados por parte de la Unión Europea o los estudios universitarios con la UNED.

Con el Proyecto Oxígeno Valsaín (Segovia) las internas realizan el mantenimiento de espacios. Se constituye como actividad en el exterior cuyo objetivo es hacer del medio ambiente una herramienta formativa que permita a quienes cumplen condena aprender una profesión y cubrir las vacantes que ofrecen los nuevos yacimientos de empleo del sector.

En Brieva mantienen convenios con el ayuntamiento de Ávila, que proporciona personal para la impartición de diferentes charlas; así como con la Diputación y la Administración autonómica, con quienes firman acuerdos puntuales.

A nivel nacional, el Instituto de la Mujer apoya un taller jurídico para las internas impartido por una abogada, y la Dirección General de Tráfico desarrolla talleres de seguridad vial y para la obtención del carnet de conducir. Por otro lado, desde fundaciones u obras sociales de entidades financieras como es el caso de Caja Ávila (con los lunes literarios) o “la Caixa” (proporcionando monitores de tiempo libre) se ofrecen distintos servicios y actividades. También, los alumnos de la Universidad de Salamanca pueden optar por hacer sus prácticas en esta institución.

En lo que respecta a las ONG, constan convenios con ACOPE (Asociación de Colaboradores con las Mujeres Presas), AMPROS (Asociación de Mujeres para el Progreso Social), APROMAR (Asociación Pro-Recuperación de Marginados), BASIDA, Cáritas Diocesanas, Asociación Criminon, Faema y Feafes (Familiares, Amigos y Personas con Discapacidad por Enfermedad Mental de Ávila), Cruz Roja Española, Asociación La Paz es Posible, Horizontes Abiertos, Prolibertas, Fundación Real Madrid (partidos de fútbol y baloncesto un día a la semana), y con la Federación

de Baloncesto. Las internas tienen la posibilidad de acudir a la Protectora de Animales para desarrollar la Terapia Asistida con Animales (TACA).

El centro M1 (Teixeiro) mantiene un convenio con la Administración Autonómica para el desarrollo del "Programa de preparación para la vida en libertad", a cargo de un equipo de inclusión social de la Xunta de Galicia. Hay varias ONGs que trabajan en el módulo de mujeres: Horizontes Abiertos (alfabetización y educación sociocultural); Érguete - Integración (desarrolla programas y actividades de inserción sociolaboral, cursos de formación, etc); AGATA (Asociación Galega de Terapias Holísticas) que desarrolla un programa de terapia de la risa; Proyecto Hombre; Asfedro o Remar.

En cuanto a las actividades en el exterior se presentan salidas programadas previstas en la legislación penitenciaria (art. 114 del RP) para la educación medioambiental, visitas a edificios emblemáticos (Catedral de Santiago...) con el propósito de preparar para la vida en libertad. Sin embargo, llama la atención que no se haga referencia explícita a actuaciones de diversa índole como es el caso del Proyecto ANOCA, desarrollado en este centro penitenciario y sirviendo como canal de comunicación entre los internos de la escuela y los adolescentes de los centros de secundaria de Galicia (<http://proxectoanoca.blogspot.com.es/>).

El Subdirector especifica que se trata de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en prisión y posibilitar que ellas puedan acceder a cualquier programa, ocupación o trabajo al igual que el personal masculino.

El centro M2 (Bonxe), por su parte, presenta convenios con todas las Administraciones, tanto a nivel local como autonómico y estatal pero no se especifican. Son cuatro, las asociaciones que tienen cabida en estos momentos en el módulo de mujeres del centro, Cruz Roja Española, Alume (Asociación Lucense de enfermedades mentales), Proyecto Hombre y la Pastoral Penitenciaria. Además, tienen la oportunidad de realizar Cursos de Cocina en el exterior y "la Caixa" ha instaurado el programa Reincorpora con el cual también pueden acudir a instalaciones exteriores. Con Cáritas llevan a cabo salidas puntuales como por ejemplo, especifica el subdirector, al club fluvial.

En el centro penitenciario de A Lama mantienen relaciones con los ayuntamientos de Pontecaldelas y de A Lama, con la Diputación de Pontevedra y con la

la *Consellería de Sanidade* y la *Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria*. También se destacan las colaboraciones con la Fundación Barrié de la Maza, la Asociación AGATA (Asociación Galega de Terapias Holísticas), Asociación Sonrisas Compartidas y con la Asociación Agareso (Asociación Galega de Reporteiros Solidarios).

Desde la Universidad de Vigo y la de Santiago de Compostela se envían alumnos para que realicen sus prácticas dentro de este centro, y el Colegio de Abogados de Pontevedra así como el C.F. Pontevedra también prestan su colaboración.

Con respecto a las actividades en el exterior, cabe decir que se realiza la Limpieza de una Ruta de Senderismo en Pontecaldelas y A Lama.

Por su parte, el centro de Pereiro de Aguiar destaca su participación en colegios/asociaciones impartiendo charlas a padres de prevención de consumo de alcohol. En este caso, el ayuntamiento proporciona los recursos pero lo gestiona la asociación APES. RACE y la Confederación Nacional de autoescuelas se encargan de la Educación Vial y la obtención del carnet de conducir, cursos, psicotécnicos y preparación del examen teórico. También colabora el Instituto de la Mujer con actividades puntuales o la Fundación Real Madrid proporcionando monitores de baloncesto y fútbol.

Del trabajo con drogodependientes, se encarga, por un lado Cruz Roja, que 4 días a la semana interviene a nivel terapéutico, formativo y ocupacional, así como la Asociación Atox. La tutela de internos en permiso 2 días a la semana la gestiona el Comité Anti-sida. También colaboran con Alcohólicos Anónimos, Ecos do Sur (internos extranjeros), Fademga (internos que presentan discapacidad intelectual), Morea (enfermos mentales) o Reto a la Esperanza que trata de dar acogida en los permisos, mientras que Apromega dirige la mediación en conflictos y apoyo a la comisión de convivencia. Además, realizan intervenciones puntuales asociaciones como Cimo o Proyecto Hombre. La Fundación Érguete desarrolla talleres sobre drogas y salud y educación sexual y la Fundación “la Caixa” también participa con las “ciberaulas solidarias”.

La Fundación Barrié se encarga de la financiación de los módulos de respeto, de los programas de atención a enfermos mentales y del pago del personal FEAFES.

También sobresalen las prácticas de alumnos de las Universidades de Vigo, Santiago de Compostela y la UNED.

Como actividades en el exterior destaca una vez más el Programa Reincorpora e itinerarios de inserción laboral por parte de la Fundación “la Caixa”; la asociación “Deporte y Trasplante” se encarga de las charlas sobre trasplante de órganos; y la Fundación Carlos Sainz ofrece becas para los hijos de los internos junto con la subvención de rastrillos solidarios.

Son muy numerosas las entidades, tanto a nivel público como privado, que mantienen relaciones directas con los Centros Penitenciarios. Las Administraciones Públicas a nivel estatal, autonómico y local, como vemos, mantienen convenios con todos estos centros siguiendo la misma línea de actuación. La norma general es la proporción de recursos económicos y humanos para desarrollar distintas intervenciones que, en la mayor parte de los casos, se hacen presentes por medio de ONGs u otras organizaciones que se encargan de gestionar las actividades. Además, otro tipo de instituciones, como las Universidades o incluso Fundaciones de entidades bancarias, desarrollan su labor social en los centros.

La colaboración de las diferentes entidades privadas se ha desarrollado conforme al catálogo de programas de intervención presentado por la Instrucción 2/2012²¹, en las siguientes áreas: inserción laboral, integración social, actuaciones con colectivos específicos, programas sanitarios y con drogodependientes, programas formativos-educativos, programas de sensibilización y comunicación del medio penitenciario a la sociedad.

Todo ello se coordina a través del Consejo Social Penitenciario²², órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, a través de los Consejos Sociales Penitenciarios Locales, adscritos a los Establecimientos Penitenciarios y Centros de Inserción Social. Para facilitar esta participación, la Administración Penitenciaria suscribe convenios de ordenación y

²¹ Instrucción referida a la intervención de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades colaboradoras en el ámbito penitenciario.

²² Orden INT/3191/2008, de 4 de noviembre, de creación del Consejo Social Penitenciario y de los Consejos Sociales Penitenciarios Locales (BOE 8/11/2008).

regulación de las obligaciones mutuas, garantizando la dirección y control penitenciario de los procesos y actuaciones.

Las actividades realizadas en el exterior también son bastante comunes y están dirigidas, en máxima instancia, a la inserción laboral de las internas por medio de trabajos en beneficio de la comunidad. De todos modos, la oferta de actividades en el exterior no es muy amplia en el caso de las mujeres ya que su escasa presencia en el medio penitenciario justifica la inviabilidad de estos programas.

El programa que se desarrolla con más frecuencia en el exterior es “Reincorpora”, que consiste en desenvolver un itinerario de inserción específico para personas reclusas, en el cual reciben formación en una materia concreta con prácticas en empresas. Los cursos formativos están ligados a las posibilidades que en su momento ofrece el mercado laboral, como los sectores de hostelería y limpieza de inmuebles. El itinerario se complementa con orientación laboral individualizada para una búsqueda activa de empleo y la finalidad que se persigue es la inserción laboral del beneficiario/a.

6.3. Estudio socioeducativo de la muestra. Análisis descriptivo de las respuestas al cuestionario de mujeres

Comenzamos este apartado con el análisis de las características de las mujeres extranjeras en Centros Penitenciarios que forman parte de la muestra de esta investigación. Para ello, nos centramos en seis puntos clave que recogen el contenido de los cuestionarios que se realizaron.

Con el objetivo de recoger su perfil socioeducativo, además de su perfil individual y familiar, que ya analizamos en el anterior capítulo, el primero de los puntos se refiere al proyecto migratorio. Posteriormente, analizamos su trayectoria escolar y laboral, así como la criminológica y establecemos las características de su vida en prisión para terminar centrándonos en el consumo de drogas.

6.3.1. Proyecto migratorio de las mujeres de la muestra

Es el momento de conocer las características relacionadas con el proceso migratorio de las mujeres que participan en este estudio. Para ello, nos detendremos en comentar aquellas cuestiones recogidas en el cuestionario que hemos utilizado y que definen su perfil.

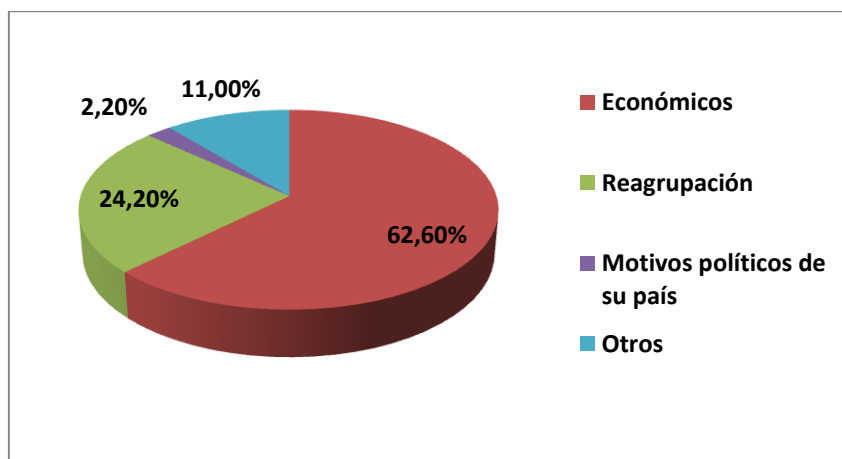
El 41,5% de las mujeres extranjeras que han respondido no vivía en España antes de entrar en prisión frente al 58,5% que sí lo hacía. Este dato nos sitúa directamente sobre las claves de su trayectoria, puesto que poco más del 40%, fueron detenidas en los aeropuertos y, por lo tanto, en muchos casos, no contaban con un proyecto migratorio como tal.

En este punto, es necesario hacer una distinción entre mujeres extranjeras y mujeres inmigrantes, ya que su situación de partida es muy diferente. Entre las mujeres inmigrantes existe una amplia gama de situaciones: desde aquellas que cuentan con nacionalidad española y son de origen comunitario, tienen permisos de larga duración, las que tienen permisos anuales, aquellas que tienen permiso de residencia pero no tienen trabajo hasta las que están en situación irregular. De este modo, siguiendo a Miranda y Martín (2007) consideramos inmigrantes a aquellas que, procedentes de otros países, establecen su residencia, tengan o no papeles, en el país de acogida. Sin embargo, en el contexto penitenciario, nos referimos a mujeres extranjeras, incluyendo a aquellas mujeres que sin residencia previa en el país de acogida entran en contacto con el sistema policial, judicial y penal y acaban cumpliendo condena en el territorio español. Esta realidad es fruto del contexto actual de movimientos de la población pero también del auge de las mafias internacionales. Sirva de ejemplo como estudios anteriores (Miranda y Barberet, 1998) nos muestran que únicamente el 12,6% de las internas no residían en España antes de su ingreso en prisión.

Analizamos, en primer lugar, cuales fueron los principales motivos para venir a España (Gráfica 16).

Gráfica 16

Principal motivo para venir a España

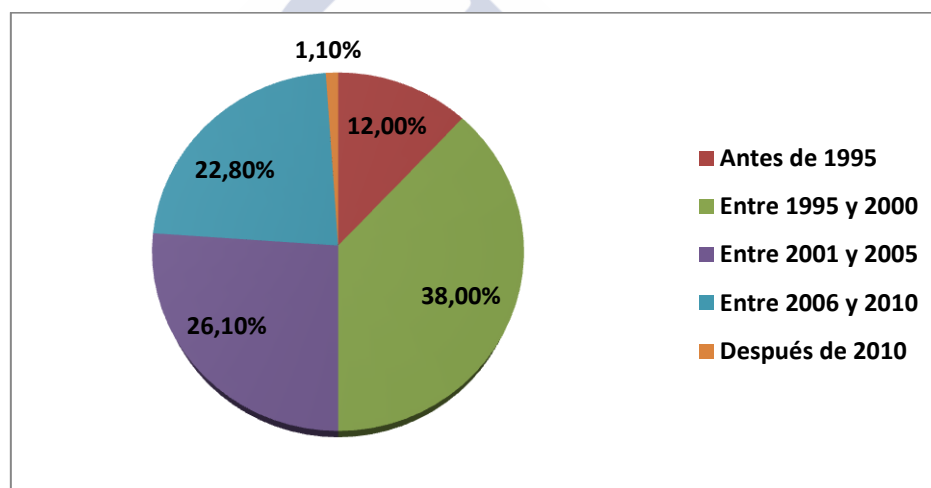


Como podemos observar, predominan los motivos económicos (62,6%) seguidos por la reagrupación familiar (24,2%). Representan porcentajes residuales aquellas mujeres que han decidido emigrar por motivos políticos en sus países de origen (2,2%) y en el 11% estarían todo un conjunto de razones de diversa índole. Por tanto, la mayoría de estas mujeres (86,8%) han decidido emigrar por motivos económicos y de reagrupación familiar. Si bien antes ellas eran objeto de la reagrupación familiar por parte de sus maridos, ahora estamos asistiendo a un panorama de normalización de la mujer como iniciadora de la cadena migratoria (Lorenzo Moledo y Priegue, 2014).

También hemos preguntado a aquellas que ya vivían aquí en qué momento tomaron la decisión de emigrar (Gráfica 17).

Gráfica 17

Año en el que vino a España por primera vez.



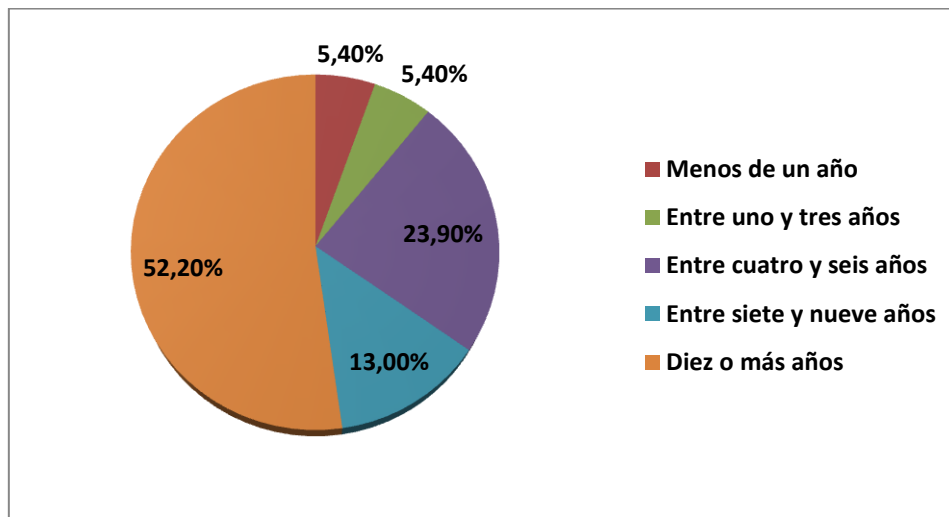
Entre las mujeres que vivían en España antes de ser detenidas, destacan las que han venido entre 1995 y 2000 (38%), seguidas por aquellas que llegaron con posterioridad, concretamente entre 2001 y 2010 (26,1%). Únicamente el 1,1% ha tomado la decisión de emigrar después del año 2010 cuando irrumpe con mayor fuerza la crisis económica. Son muchos los factores que inciden en el hecho de emigrar en una época u otra, en buena medida explicados por las políticas migratorias europeas que han ido modificando sus objetivos a lo largo de los años. Así pues, durante las décadas de 1950 y 1960 surge un énfasis en el reclutamiento de mano de obra y control de los trabajadores inmigrantes; en los 70 se produce un control de la inmigración y repatriación; a principios de la década de 1980 el foco se centra en la gestión de la crisis urbana y el recorte del bienestar; el orden público y control de la inmigración son la prioridad a finales de los 80 y principios

de los 90 (Castles, 2000); y, a todo ello, tenemos que añadir, a partir del año 2000 una nueva vuelta a las políticas securitarias (Wacquant, 2000; Ladipo, 2001).

En la misma línea, tratamos de conocer cuántos años llevan las mujeres extranjeras en prisión viviendo de forma permanente en el país de acogida (Gráfica 18).

Gráfica 18

Años viviendo en España

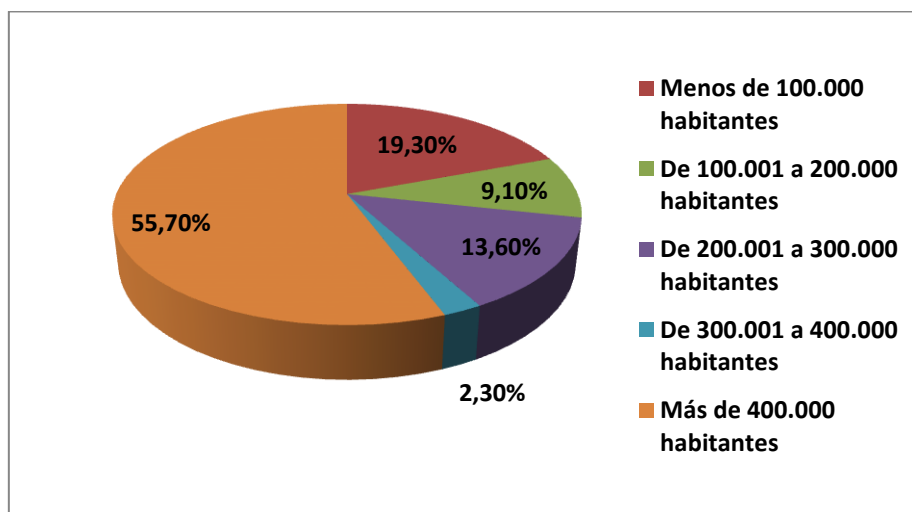


De este modo, las mujeres afirman llevar (52,2%) diez o más años viviendo de forma permanente en este país, seguidas por las que residen aquí entre cuatro y seis años (23,9%) o entre siete y nueve años (13%). Aquellas que llevan menos de cuatro viviendo en el país representan el 10,8% del total. Como vemos, la mayor parte de las mujeres que residían en España acumulan más de cuatro años de residencia lo que indica que su proyecto migratorio ya estaba consolidado antes de entrar en prisión. Es más, la mayor parte (65,2%), llega a España antes del comienzo de la crisis económica ya que llegaron hace más de siete años.

Las características de la última ciudad en la que habitaban pueden darnos ciertas claves en cuanto a las decisiones que toman estas mujeres cuando emigran. Así, es importante conocer el número de habitantes de las localidades donde vivían antes de su entrada en prisión (Gráfica 19).

Gráfica 19

Número de habitantes de la última ciudad española en la que vivió

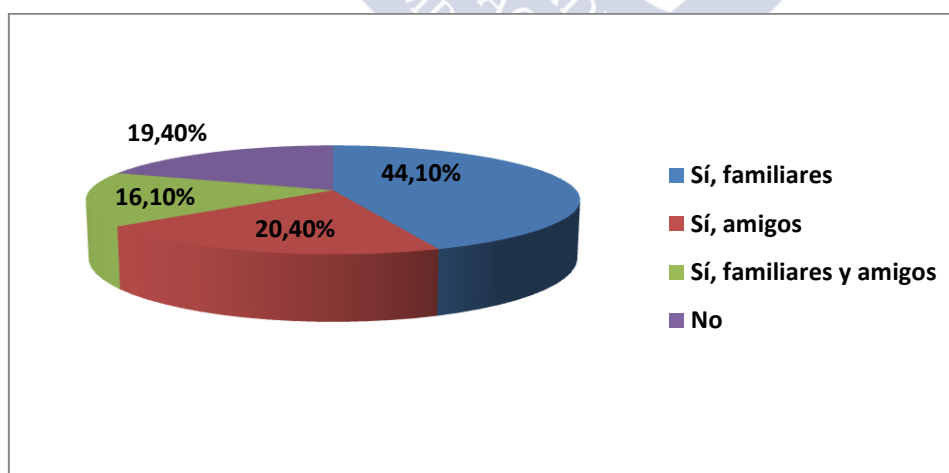


Al respecto, una gran parte (55,7%) optaron por ciudades de más de 400.000 habitantes, siendo el dato más cercano el opuesto; es decir, el siguiente rango con mayor porcentaje (19,3%) es el de las que han decidido vivir en urbes de menos de 100.000 habitantes y el 13,6% vivía en ciudades de entre 200.001 y 300.000 habitantes.

Es momento de estudiar si contaban con familiares o amigos que hayan podido influir a la hora de tomar la decisión de emigrar (Gráfica 20).

Gráfica 20

Tenía familiares o amigos antes de su llegada



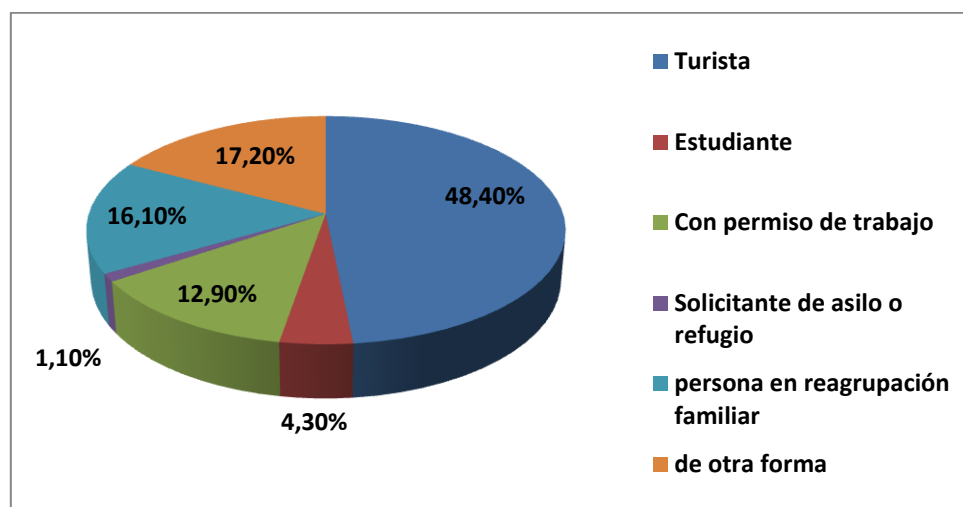
No son pocas las mujeres que carecían de familiares o amigos viviendo ya en este país antes de su llegada (19,4%), aunque el porcentaje no sea muy alto. El hecho de emprender la marcha a un país diferente conlleva una serie de consecuencias a nivel social y emocional que se palian parcialmente si en el lugar

de destino se cuenta con algún tipo de acompañamiento. El 44,1% tenía ya familiares en este país, el 20,4% únicamente amigos y el 16,1% contaba con familiares y amigos. Cuando se concreta qué familiares eran, observamos una gran diversidad de respuestas, destacando los padres y hermanos.

Por su parte, en la Gráfica 21 indicamos el modo en el que llegan a España iniciando su proyecto migratorio.

Gráfica 21

Cómo llegó a España por primera vez

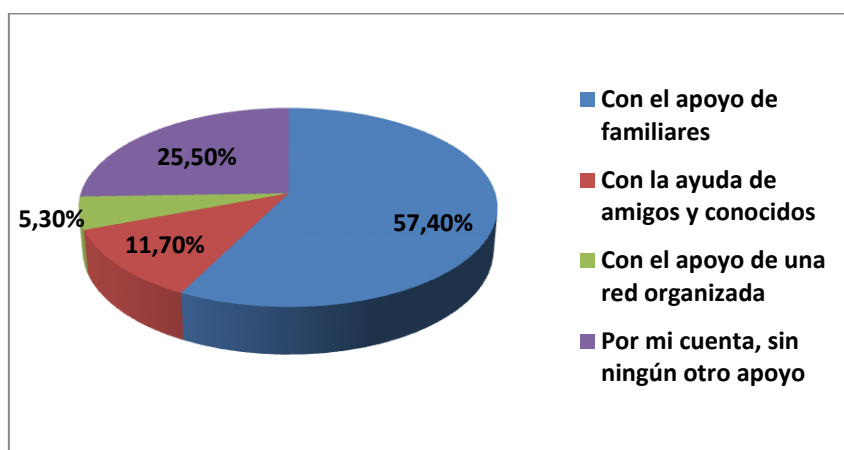


Han llegado a nuestro país, sobretodo como turistas (48,4%), seguidas por las que vienen para reagruparse con su familia (16,1%), y únicamente el 12,9% acuden con permiso de trabajo. Por su parte, un 4,3% ha llegado con algún tipo de permiso para estudiar en los centros educativos del país. Además, 17,2% afirma llegar de otras formas como puede ser víctima de tráfico de personas o de forma ilegal.

En términos de apoyo social en el país de acogida, es importante señalar si contaron con algún tipo de ayuda de cara a facilitar su integración en la nueva sociedad (Gráfica 22).

Gráfica 22

Con qué apoyo contó para venir a España

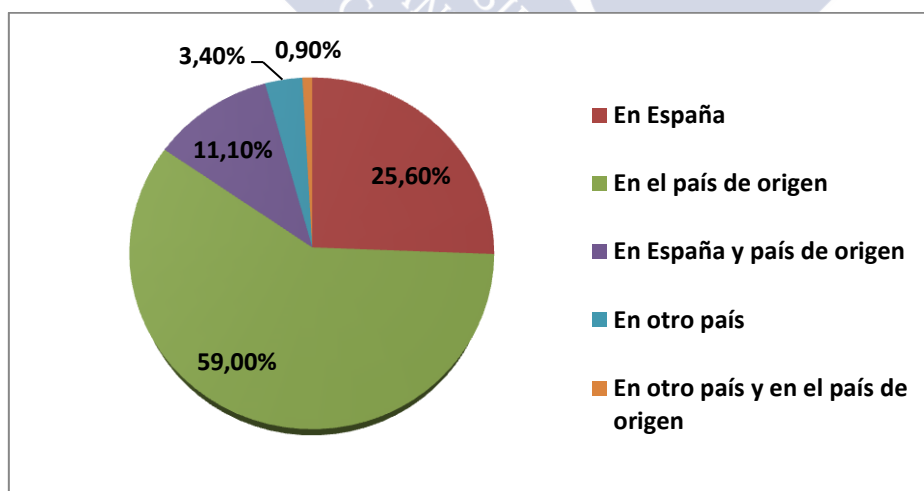


Solo el 25,5% de estas mujeres han llegado a su país de destino por su cuenta, sin contar con el apoyo de familiares, amigos o algún tipo de red; prevalecen aquellas que han contado con la ayuda de familiares (57,4%) y amigos y conocidos (11,7%). Las redes organizadas representan, en este caso, el 5,3%.

Por otro lado, son muchas las que emigran a otro país y dejan a sus hijos en el de origen, tal y como presentamos en la Gráfica 23.

Gráfica 23

Sus hijos están en España o en su país de origen



Observamos que el 59% de las entrevistadas que tienen hijos atestiguan que éstos se encuentran en su país, frente a los que ya residen en España (25,6%). Pero también el 11,1% tienen a sus hijos repartidos entre España y su país de origen o incluso en otro país diferente y su país de origen (0,9%). Únicamente el 3,4% tiene a sus hijos en otro país que no se corresponde con el suyo propio ni con España.

A modo de recapitulación, podemos decir que, con respecto al proceso migratorio, prácticamente la mitad de estas mujeres no residía en España antes de ser detenida. Entre aquellas que sí vivían en España, los motivos que más pesan para emigrar son los económicos y tomaron la iniciativa entre 1995 y 2000, la mayoría lleva diez o más años en nuestro país.

Además, las mujeres extranjeras escogen las grandes ciudades como lugar de residencia y ya contaban, antes de su llegada, con familiares en el país de destino. La mayor parte ha llegado con visado de turista y sin ningún tipo de apoyo externo, dejando, en muchos casos, a sus hijos en el país de origen.

6.3.2. Perfil escolar de las mujeres de la muestra

Tratamos ahora de definir el perfil escolar de las mujeres que forman parte de la muestra. Para ello estudiaremos una serie de variables relacionadas que resumen las características escolares que más nos interesan.

Las primeras variables a analizar serán la asistencia o no a la escuela y si esa asistencia era o no regular (ver Tabla 12). Además, tratamos de conocer, en esta misma línea, la edad en la que comenzaron su escolarización (Tabla 13) y el tipo de centro al que asistieron (Tabla 14).

Tabla 12

Ha ido a la escuela y asistencia

	Sí	No
Ha ido a la escuela	98%	2%
Asistía con regularidad	93,4%	6,6%

Tabla 13

Edad de comienzo en la escuela

Edad comienzo escuela	Menos de 3 años	3 - 6 años	7 - 9 años	10 - 12 años	Más de 12 años	No sabe
	13,4%	59,1%	19,5%	3,4%	4%	0,7%

Tabla 14*Tipo de escuela*

Tipo escuela	Pública	Religiosa	Privada	Militar
	80,3%	10,9%	8,2%	0,7%

El primero de los aspectos a tratar es la asistencia a la escuela. Sorprende el alto porcentaje de mujeres que sí ha ido a la escuela (98%) frente a las que no han ido (2%). Comienzan a asistir entre los 3 y 6 años (59,1%), e incluso, el 13,4% empezaron a frecuentar la escuela antes de esa edad. Además, el 19,5% inició sus estudios entre los 7 y los 9 años frente al 3,4% y el 4% que representan aquellas que lo han hecho entre los 10 y los 12 años y con más de 12, respectivamente. Este dato dependerá en gran medida del país de procedencia y de la edad de escolarización de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la actualidad, la tasa de escolarización de las niñas que tienen 5 años en Uruguay es de 95,86% mientras que en Guatemala es 46,22%, siendo estos países los que representan los porcentajes más extremos en Latinoamérica; sin embargo, en el caso de Guatemala, cuando hablamos del siguiente rango de edad, que comprende entre los 6 y los 8 años, el dato sube a 85,81% (Siteal, 2011). Asimismo, los dos países más representados en la muestra presentan tasas similares (Colombia 71,21% y República Dominicana 76,46%).

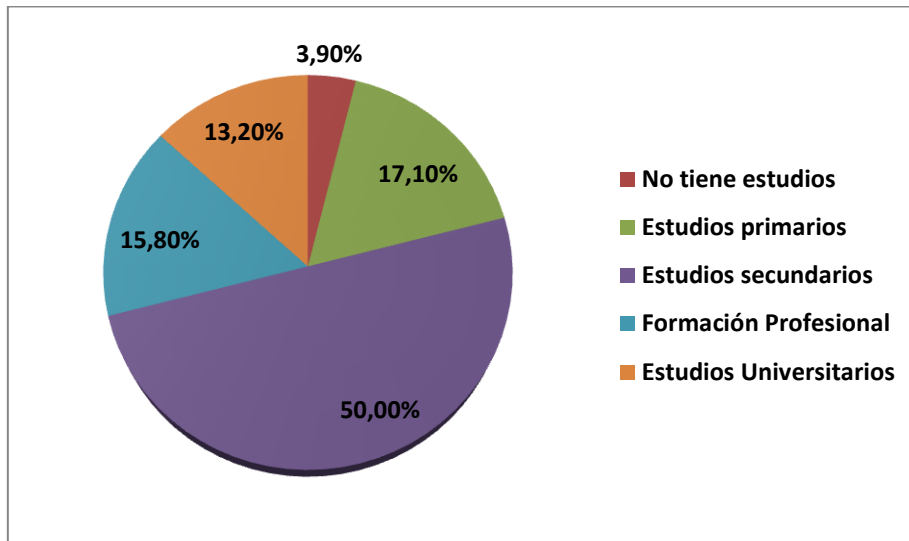
También es necesario tener en cuenta que el 93,4% asistía con regularidad, en caso contrario, los motivos para no hacerlo responden a la falta de recursos económicos de sus familias cuya consecuencia será la necesidad de comenzar a trabajar desde edades muy tempranas o el cuidado de hermanos. Estos motivos concuerdan con los citados por Yagiie y Cabello (2005) cuando presentan el abandono escolar de las internas como consecuencia de la necesidad de ayudar en casa, encontrar un empleo o simplemente porque no les gustaba.

Por otro lado, consideramos importante el hecho de que el 80,3% de estas mujeres han estudiado en centros educativos públicos, el 10,9% ha acudido a un centro religioso, el 8,2% a un centro privado, e incluso el 0,7% a una escuela militar.

Es el momento de analizar el nivel de estudios de las mujeres pertenecientes a la muestra (Gráfica 24).

Gráfica 24

Nivel de estudios

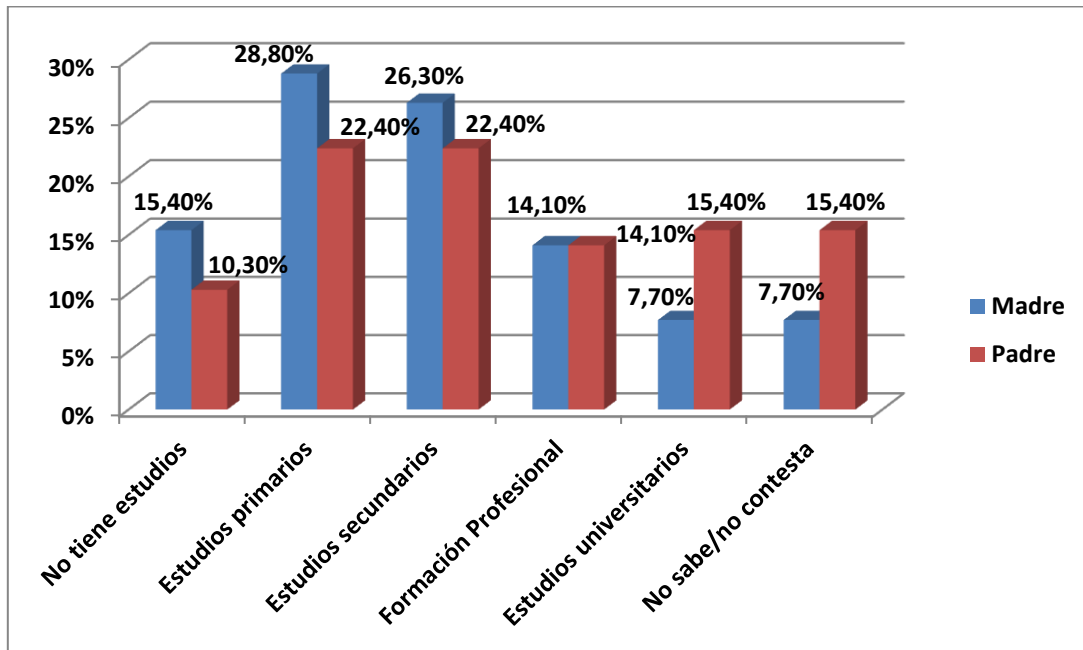


El análisis que hemos llevado a cabo nos permite afirmar que este colectivo está compuesto por mujeres con un nivel de estudios medio-alto. La mitad cuenta con estudios secundarios (50%) y el 13,2% ha concluido una carrera universitaria. Únicamente el 3,9% asegura no tener estudios. Sin embargo, las estadísticas señalan que las mujeres que delinquen se caracterizan por tener un bajo nivel de estudios y trabajos como los de Cervelló (2006) o Fernández Galán (2011) presentan un 40% de analfabetismo en este colectivo. Concretamente, Melis (2010) al centrarse en las características personales, psicológicas y sociofamiliares de las mujeres en prisión nos presenta las altas tasas de analfabetismo y nula cualificación profesional, añadiendo que este hecho estará correlacionado con ser menos competentes socialmente.

En esta misma línea, también nos hemos interesado por el nivel de estudios de su madre y de su padre (Gráfica 25).

Gráfica 25

Nivel de estudios de madre y padre



La mayor parte de las madres y padres de las internas cuenta con estudios primarios (28,8% y 22,4%, respectivamente) o secundarios (26,3% y 22,4%, respectivamente). En relación a los estudios universitarios, el porcentaje se incrementa cuando nos referimos a los padres, aumentando en casi 8 puntos porcentuales (7,7% frente a 15,4%).

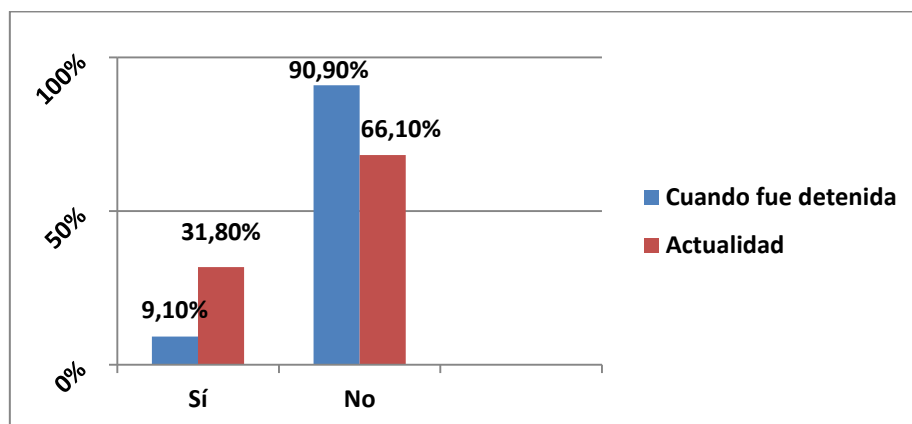
La Formación Profesional es similar en los dos progenitores y, es bastante más alto el porcentaje de mujeres que no conocen los estudios de su padre que las que no conocen los de su madre (15,4% frente al 7,7%). Los que no tienen estudios representan un 15,4% en el caso de las madres, y un 10,3% para los padres.

Por norma general, los padres cuentan con niveles de estudios más altos que las madres, lo cual podemos atribuir, en muchos casos, a las sociedades patriarcales de procedencia, en donde la posibilidad de estudio para las mujeres es más reducida que para los hombres.

Como podemos ver en la Gráfica 26, en ocasiones el centro penitenciario se convierte en un lugar en el que retomar de nuevo los estudios ya que ofrece unas oportunidades que, en muchos casos, no son accesibles en las circunstancias con las que las mujeres cuentan en el exterior.

Gráfica 26

Estudiaba al ser detenida y en la actualidad

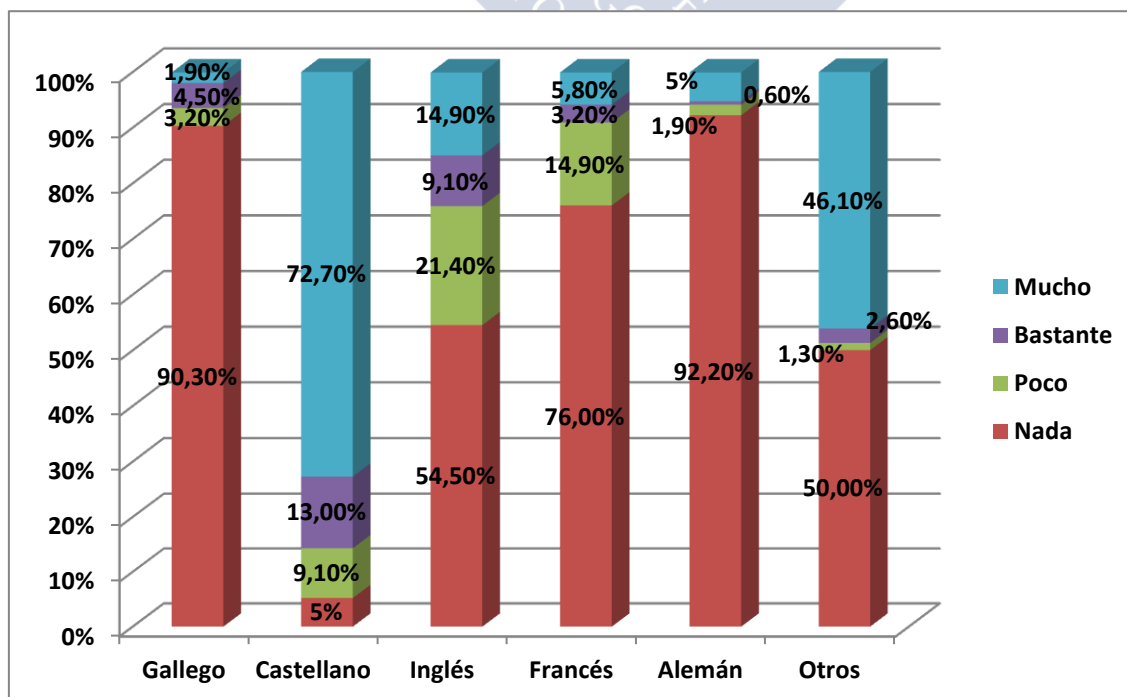


Así, el 90,9% de las mujeres no estudiaban cuando fueron detenidas, sin embargo, el porcentaje disminuye cuando se trata de analizar los estudios dentro de la prisión, puesto que el 31,8% está cursando algún tipo de estudios. Trabajos similares nos presentan que un 26,8% de las mujeres mejoran su nivel educativo durante su estancia en prisión (Fernández Galán, 2011).

El idioma, cuyos datos se ven representados en la Gráfica 27, es uno de los principales hándicaps para aquellas personas que deciden emigrar a otro país y puede condicionar su integración social.

Gráfica 27

Conocimiento de idiomas



En este sentido, únicamente el 5% de las mujeres entrevistadas no tenían ningún conocimiento del castellano, lengua oficial en España, por ello, en algún caso hemos procedido a traducir el cuestionario conforme se iban planteando las cuestiones y en otros casos, eran las propias internas las que hacían de intérpretes y nos facilitaban el trabajo en gran medida.

Al predominar las mujeres de Latinoamérica, la previsión de que conocerían el idioma era bastante alta y, en el caso de las no hispanohablantes han tenido distintas oportunidades a lo largo de su vida tanto en el exterior como en la propia prisión para, cuanto menos, entenderlo. Buena prueba de ello, es que el gallego es conocido en diferentes grados por un 9,6% de estas mujeres.

La lengua inglesa también es dominada por muchas de estas mujeres (el 54,5% afirma no tener ningún conocimiento de este idioma), siendo, el francés y el alemán más desconocidos (76% y 92,2%, respectivamente, no los conoce en absoluto). En “otros” están incluidos todos aquellos idiomas que representan la lengua materna de alguna de las mujeres de la muestra u otros que conocían al haberlos estudiado en algún momento de su vida, como pueden ser el italiano o el portugués.

En definitiva, el perfil escolar de las mujeres extranjeras que se encuentran en estos centros se caracteriza por una escolarización temprana (entre los 3 y los 6 años), y su asistencia a la escuela, que son fundamentalmente públicas.

Cuentan, además, con un nivel de estudios relativamente alto puesto que la mayoría ha superado los estudios secundarios. En relación a sus progenitores, los padres tienen un nivel de estudios ligeramente más alto que las madres ya que estas superan en cinco puntos porcentuales a los padres en el caso de no tener estudios, sin embargo, son más conocedoras de los estudios específicos de sus madres, lo cual nos puede indicar que muchas de ellas no han tenido una convivencia normalizada con su progenitor.

No estudiaban en el momento de ser detenidas pero el porcentaje aumenta en la actualidad ya que el 30% está cursando algún nivel educativo en prisión. Conocen el idioma del país.

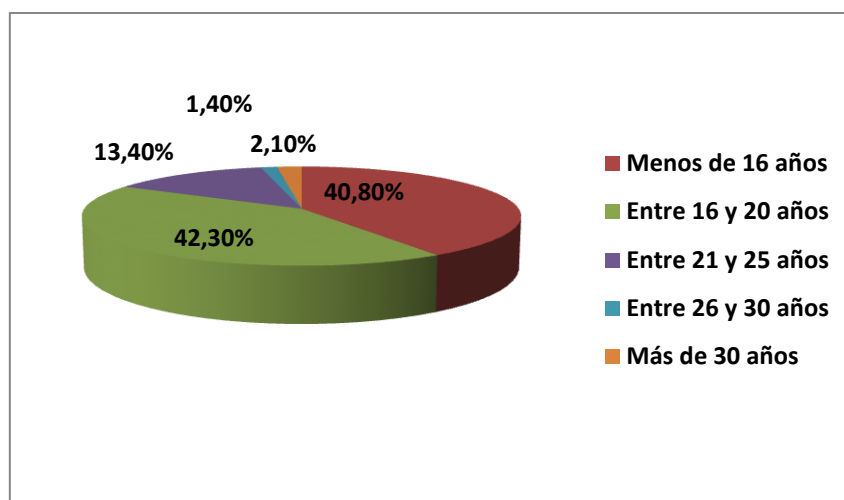
6.3.3. Perfil laboral de las mujeres de la muestra

Es el momento de identificar los datos relativos al perfil laboral de estas mujeres, aspecto que nos dará las claves necesarias para actuar en consonancia con sus características, dado que la inserción social va unida, en todo caso, a la inserción laboral.

La primera cuestión se refiere a si han trabajado fuera de casa alguna vez y la edad de comienzo (Gráfica 28).

Gráfica 28

Edad a la que empezó a trabajar fuera de casa

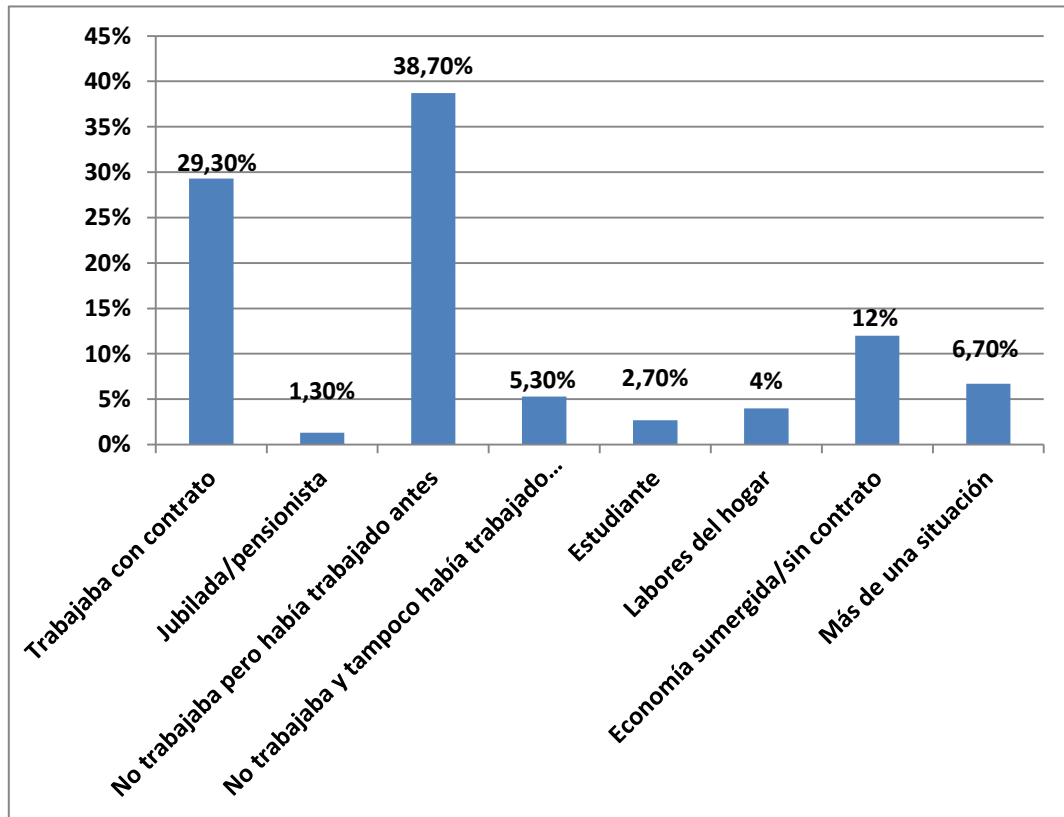


Casi la totalidad de las mujeres han tenido la oportunidad de desempeñar un empleo fuera de casa (94,1%) frente a un 5,9% que no ha trabajado. Lo que sí nos sorprende es que, como podemos observar en la Gráfica 28, el 40,8% haya empezado a desempeñar un trabajo con anterioridad a los 16 años cuando la edad legal para tener un empleo se sitúa justo en los 16 años, en España, aunque la regulación laboral en sus países de origen sea muy distinta, pero en todo caso refleja que comienzan a trabajar antes de finalizar su escolarización. Y, el 42,3% entre los 16 y los 20, lo que implica que el 83,1% de las mujeres comenzaron a trabajar antes de los 20 años.

En relación a los sectores en los que han trabajado, debemos indicar que una gran mayoría lo han hecho en más de dos sectores, pero en todo caso, la hostelería, el comercio y el servicio doméstico son los más concurridos. Al ser detenidas, como podemos ver en la Gráfica 29, las mujeres se encontraban en diferentes situaciones laborales.

Gráfica 29

Situación en el momento de ser detenida



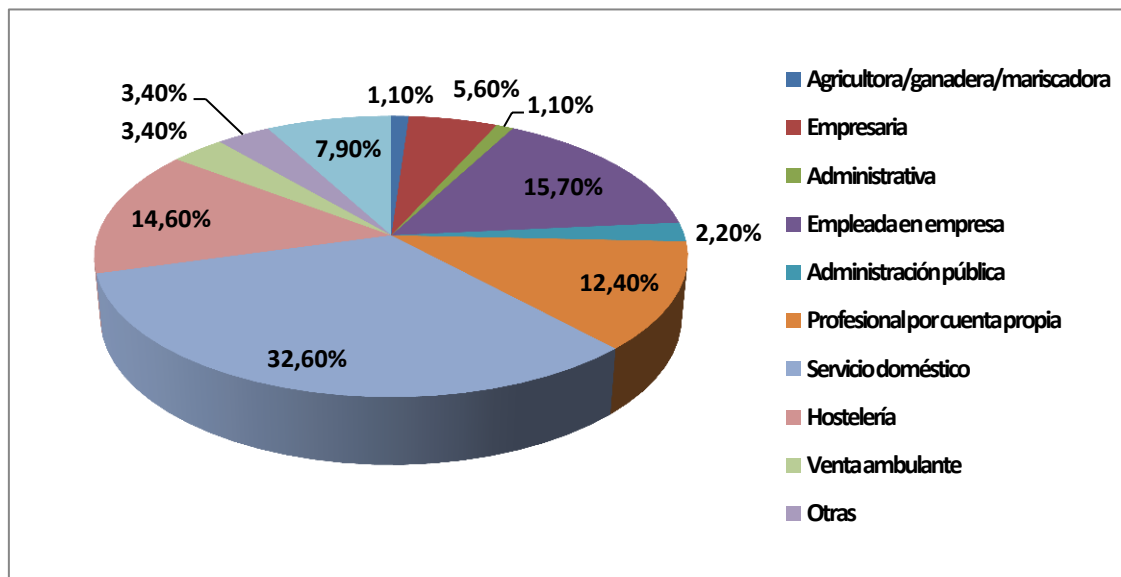
De este modo, la mayor parte no trabajaba pero sí lo había hecho antes (38,7%) seguidas por aquellas que sí trabajaban con un contrato (29,3%) y las que desempeñaban un trabajo pero no contaban con contrato laboral (12%). El 14,7% se encontraba en otra situación como ser pensionista o jubilada, estudiante o bien se dedicaba a las labores del hogar. Asimismo, el 5,3% no trabajaba ni lo había hecho antes.

Tratando de comparar estos datos con análisis similares, vemos que en el estudio realizado por Villagrà, González Menéndez, Fernández García, Casares, Martín y Rodríguez Lamelas (2011) en el centro penitenciario de Villabona (Asturias), el 74,6% de las mujeres entrevistadas se encontraban en situación de desempleo, datos muy divergentes a los nuestros.

De entre las mujeres que sí trabajaban en el momento de ser detenidas, la Gráfica 30 refleja los sectores de ocupación.

Gráfica 30

En qué trabajaba al ser detenida

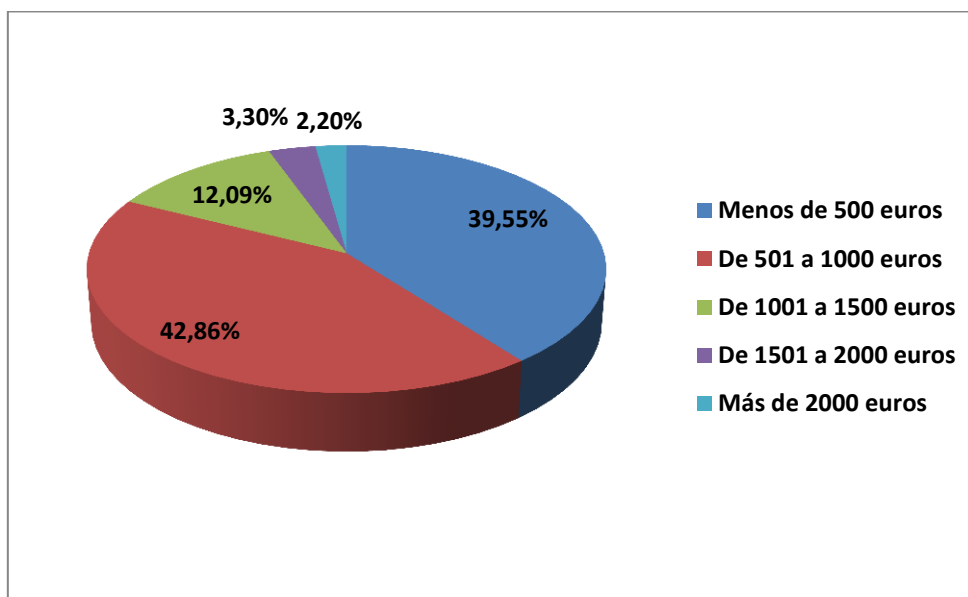


Vemos que el sector más representado es el servicio doméstico (32,6%), seguido por aquellas que trabajaban para una empresa (15,7%) y las que se dedicaban a la hostelería (14,6%). No nos deja de sorprender el porcentaje de profesionales por cuenta propia (12,4%) que, junto con las que se declaran empresarias, llega al 20,2%.

En este sentido, Pereda (2007) hace una aproximación al caso del empresariado étnico en España, de este modo, en 1999 las mujeres extranjeras ocupadas por cuenta propia suponían el 12,1% del total de extranjeras ocupadas en España; el peso de estas mujeres sobre el total de mujeres ocupadas en el país en el sector estaría en torno al 1,6% teniendo en cuenta las altas en la Seguridad Social. Por su parte, tres de cada cuatro mujeres extranjeras se empleaban en hostelería, comercio y profesiones liberales.

La economía sumergida es una de las salidas más comunes en los colectivos más desfavorecidos, como es el caso de las mujeres extranjeras. Aunque afecte tanto a españoles como a extranjeros, estos últimos carecen de un colchón social con el que sí cuentan los autóctonos; además, anida más fácilmente en los sectores en los que estas mujeres tienen más presencia como son la hostelería o el servicio doméstico.

Continuando con las condiciones de trabajo antes de entrar en prisión, un aspecto importante a considerar son los ingresos mensuales percibidos por realizar su trabajo. En 2013 el salario mínimo para cualquier actividad quedaba determinado en 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes en función de si el salario está fijado por días o por meses. Presentamos pues, la realidad laboral de estas mujeres en la Gráfica 31.

Gráfica 31*Ingresos mensuales*

Casi el 40% de las mujeres que responden al cuestionario recibían unos ingresos de menos de 500 euros, es decir, por debajo del salario mínimo interprofesional; además, el 42,86% contaba con un salario de entre 500 y 1000 euros. Vemos también que en torno al 17% obtenían sueldos superiores. A pesar de sus ingresos, el 74,74% de estas mujeres considera que sus condiciones laborales son buenas.

Es momento de identificar si desempeñan o han desempeñado algún tipo de trabajo dentro del centro penitenciario, si envían dinero a su familia (remesas) y si han realizado o realizan algún tipo de curso de formación laboral (Tabla 15).

Tabla 15*Trabajo en prisión*

	Sí	No	Antes sí, ahora no
Realiza algún trabajo en prisión	48,4%	49%	2,6%
Envía dinero a su familia	18,8%	81,2%	0%
Cursos de formación laboral en prisión	53,2%	46,8%	0%

Observamos, que prácticamente la mitad de las mujeres de la muestra realiza algún tipo de trabajo en prisión (48,4%), sin embargo, únicamente el 18,8% envía dinero a su familia. También corresponde a la mitad (53,2%) el porcentaje de ellas que realizan o han realizado algún tipo de curso de formación laboral dentro de la institución. El término más utilizado al concretar el tipo de curso por parte de

estas mujeres es curso de “inserción laboral”. Entre aquellas mujeres que desempeñan un trabajo en prisión destacan la limpieza (26,3%) o a la cocina (15,8%). Es frecuente que en los centros se las encasille en actividades “propriadamente femeninas”, como son la costura, cocina, lavandería o limpieza siendo destinadas, en numerosas ocasiones, para el mantenimiento y limpieza de zonas comunes (Yagüe, 2002).

Sintetizando los datos que hemos venido trazando en relación al perfil laboral, podemos decir que prácticamente la totalidad de la muestra ha trabajado fuera de casa en algún momento de su vida, sobretudo en la hostelería, el comercio y el servicio doméstico y lo ha hecho antes de los 20 años.

En el momento de ser detenidas no trabajaban pero lo habían hecho con anterioridad y, entre las que sí lo hacían, estaban ocupadas dentro del servicio doméstico.

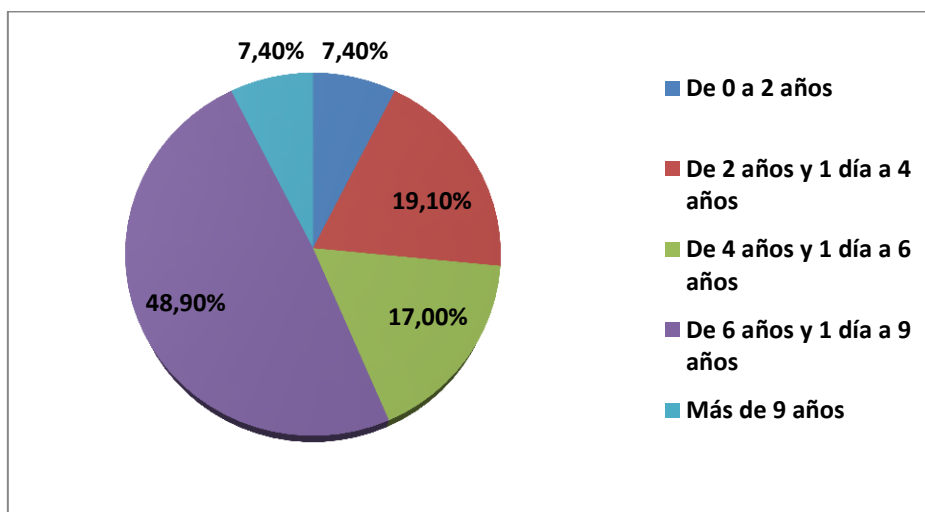
Por su trabajo obtenían unos ingresos mensuales de entre 500 y 1000 euros y afirman que las condiciones de su trabajo eran buenas. También realizan algún tipo de trabajo en prisión pero no envían dinero a sus familias; además, la mitad de estas mujeres han realizado cursos de formación laboral dentro del medio penitenciario.

6.3.4. Perfil criminológico de las mujeres de la muestra

El perfil criminológico nos guiará también en el camino a seguir de cara a una intervención centrada en las características de la muestra. Los motivos para delinquir y el tipo de delito, entre otros, son cuestiones fundamentales para diseñar propuestas de intervención pedagógicas.

La mayor parte de las internas están penadas (61,4%), es decir, cuentan con una sentencia firme; mientras que el 38,6% están en un régimen preventivo, a las que ampara el principio básico de presunción de inocencia, a la espera de juicio o, en caso de haberse celebrado, sin sentencia firme.

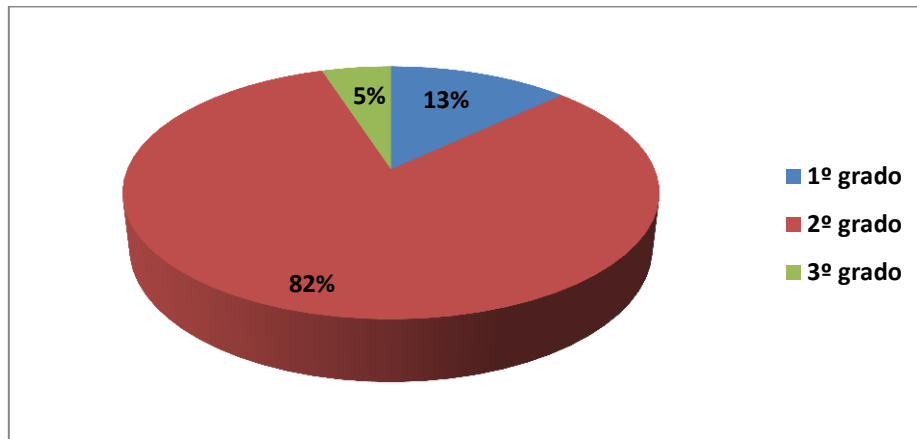
Las mujeres penadas tienen condenas menores de 10 años, como podemos ver en la Gráfica 32.

Gráfica 32*Tiempo de condena*

Prácticamente la mitad cuenta con una condena de entre 6 años y 1 día y 9 años; el 19,1% tiene que cumplir entre 2 años y 1 día y 4 años; porcentaje que disminuye cuando la condena es de entre 4 años y 1 día y 6 años (17%). Por último, tanto las condenas más bajas como las más altas representan porcentajes que no alcanzan el 10%.

La reforma del Código Penal de 1995 incrementa sustancialmente el tiempo en prisión por el tráfico de drogas prohibidas, endureciendo las penas para delitos contra la salud pública, pasando de los 8 años con posibilidad de redención a un mínimo de 9 sin posibilidad de redención, hecho con una gran influencia en las mujeres en general y en las mujeres extranjeras en particular.

El grado asignado determina un régimen de medidas de control y seguridad, más severas en el caso del primero, que se flexibilizan progresivamente, hasta alcanzar el tercero. En la determinación del grado se tienen en cuenta aspectos como su personalidad, su historial penitenciario individual, familiar, social y delictivo, la duración de la condena impuesta, así como otros factores establecidos en la legislación penitenciaria. Podemos ver la clasificación de las mujeres de la muestra en la Gráfica 33.

Gráfica 33*Grado en el que está clasificada*

Observamos que la mayoría de las mujeres cumplen condena en Segundo Grado (82%) frente a las que lo hacen en Primer Grado (13%) y las que se encuentran en Tercer Grado (5%), este bajo porcentaje responde a que las mujeres que se encuentran en este grado están en otro tipo de dispositivos (sección abierta o CIS). Debemos comentar a este respecto que el riesgo de fuga de las internas extranjeras o no tener una red de apoyo social obstaculizan, en gran medida, su paso al tercer grado.

En la Tabla 16 presentamos la tipología delictiva por la que estas mujeres han sido juzgadas (en el caso de las penadas) o han sido encarceladas (preventivas).

Tabla 16*Tipo de delito*

No sabe	1,4%
Salud pública	76,9%
Inmigración ilegal	2%
Pelea	4,1%
Robo con violencia e intimidación	3,4%
Prostitución (trata)	3,4%
Estafa	1,4%
Asesinato	1,4%
Robo	2%
Tentativa de homicidio	0,7%
Homicidio	1,4%
Blanqueo de dinero	0,7%
Hurto	1,4%

En relación al tipo de delito por el que están en prisión, un 76,9% ha sido o será juzgada por un delito contra la salud pública, repartiéndose el resto de mujeres en otras categorías, pero con porcentajes muy pequeños. Diferentes estudios a nivel nacional e internacional señalan que una de cada tres mujeres encarceladas ingresa en prisión por delitos relacionados con las drogas, comparado con una de cada ocho mujeres en la década anterior (Zurhold, 2005; Castillo y Ruiz, 2006; Cervelló, 2006; Defensor del Pueblo Andaluz, 2006).

Castillo y Ruiz (2009) afirman que en el año 2006 el 48,2% de las mujeres reclusas se encontraban en prisión por delitos contra la salud pública y el 24,1% por robos. En todo caso, nos topamos ante la escasa presencia de delitos violentos entre las mujeres reclusas, ya sean nacionales o extranjeras.

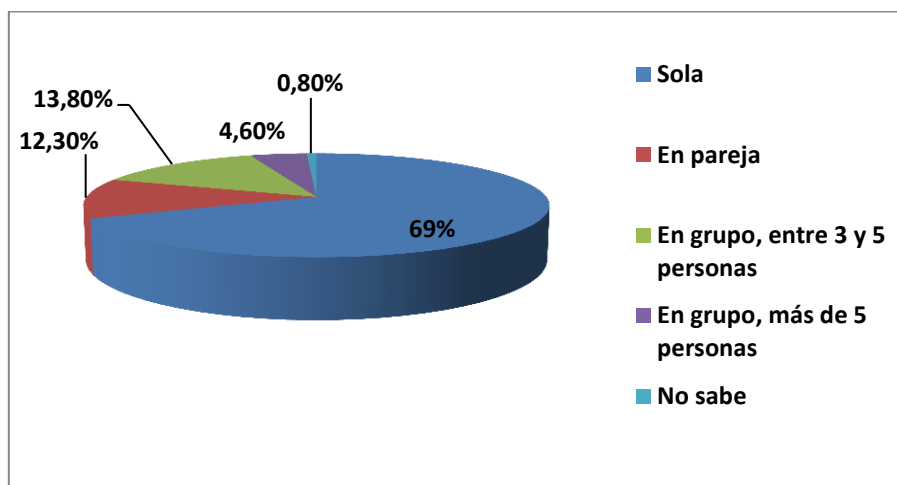
En esta línea, cabe señalar que ninguna de las mujeres entrevistadas forma parte del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (Régimen FIES). Este régimen contempla una serie de categorías en las que se abarcan diferentes tipologías delictivas (Arribas, 2009): FIES 1 (control directo) en el que tienen cabida aquellos internos considerados especialmente conflictivos; FIES 2 (delincuencia organizada) en donde entraría el narcotráfico, el blanqueo de dinero o el tráfico de personas; FIES 3 (bandas armadas); FIES 4 (fuerzas de seguridad y funcionarios) con el fin de protegerlos de otros presos; y, FIES 5 (características especiales).

Por otro lado, cuando se les pregunta por los motivos que le llevaron a cometer el delito, la mayor parte esgrime motivos económicos (64,3%), exceptuando delitos específicos que fueron motivados por algún tipo de problema familiar o por drogas. Además, el 16,4% de las mujeres de la muestra asegura haber sido engañada a la hora de llevar a cabo el delito, de forma que no explicita ningún motivo al negar su comisión. Como podemos observar, las que han cometido el delito por un motivo económico y aquellas que niegan su comisión, representan prácticamente el total de las mujeres (80,7%).

Asimismo, en la Gráfica 34 mostramos la forma de comisión de estos delitos.

Gráfica 34

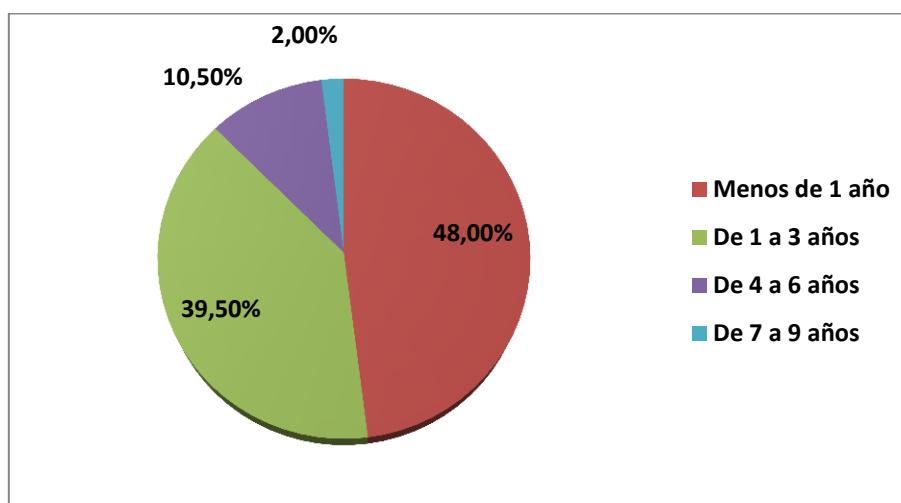
Forma de comisión del delito



El 69% afirma que ha cometido el delito sola, sin la ayuda de ninguna red organizada o persona. El 13,8% dice haberlo cometido en un grupo de entre 3 y 5 personas y el 12,3% lo ha hecho en pareja. Aquellas que afirman haber infringido la ley en grupo de más de 5 personas representan únicamente el 4,6% del total.

Nos sorprende el dato de aquellas que dicen haber infringido la ley en grupo de más de 5 personas, este bajo porcentaje nos puede llevar a diferentes conclusiones. Por un lado, que las mujeres no quieran revelar datos que puedan implicar a más personas en este delito por miedo a las consecuencias; y, por otro, que estas mujeres no consideren delincuentes a las “cabezas” de las organizaciones por el mero hecho de estar en un eslabón más alto de la que podemos denominar “pirámide delictiva”, en donde las “mulas”, que representan un alto porcentaje de estas mujeres, estarían prácticamente en la base. Las mujeres que llegan a la frontera cometiendo un delito contra la salud pública son, siguiendo a Miranda (1997), distribuidoras internacionales de drogas en un último escalón, en su menor cuantía.

Es momento de conocer cuántos años llevan estas mujeres cumpliendo condena, realidad que plasmamos en la Gráfica 35.

Gráfica 35*Tiempo que lleva en prisión*

Como vemos, prácticamente la mitad (48%) lleva menos de un año en prisión seguidas por las que lo hacen entre 1 y 3 años (39,5%). Los porcentajes que representan a las que llevan más tiempo cumpliendo condena son más bajos, ya que el 10,5% lleva cumpliendo condena entre 4 y 6 años y el 2% entre 7 y 9 años.

También se les ha preguntado si tenían otras condenas pendientes, a lo cual la totalidad de las mujeres de la muestra ha respondido que no. Es decir, ninguna de ellas tiene cuentas pendientes con la justicia. Por su parte, el 3,9% ha estado una vez más en prisión y el 0,7% tres veces contando con la actual. El porcentaje restante se corresponde con aquellas mujeres que se encuentran en un centro penitenciario por primera vez. En conclusión, la práctica totalidad de las mujeres de la muestra son primarias. Las que ya habían estado en prisión con anterioridad lo hicieron por haber cometido un delito contra la salud pública y cuando tenían entre 26 y 47 años. Únicamente el 0,7% ingresó en prisión por primera vez en otro país frente al 99,3% que lo hizo en España.

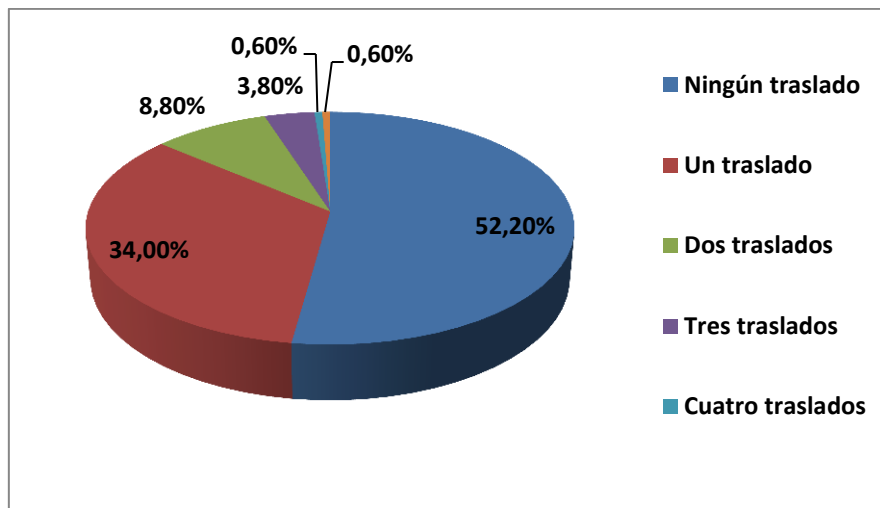
Cabe señalar que estudios como el de Yagüe (2006b) señalan que las mujeres que tienen una media de edad comprendida entre los 31 y 40 años, se caracterizan por haber tenido tres o más ingresos previos en prisión (33,4%), situándose el índice de reincidencia en el 54% para las mujeres frente al 60% en los hombres. Estos datos se alejan de los que hemos obtenido en nuestro trabajo.

Otro aspecto a estudiar en cuanto al perfil de la muestra es el que atañe a los traslados entre los centros penitenciarios. Un 47,8% ha sido trasladada al menos una vez

desde su ingreso en prisión mientras que el 52,2% solamente ha estado en el centro actual, tal y como presentamos en los datos de la Gráfica 36.

Gráfica 36

Número de traslados

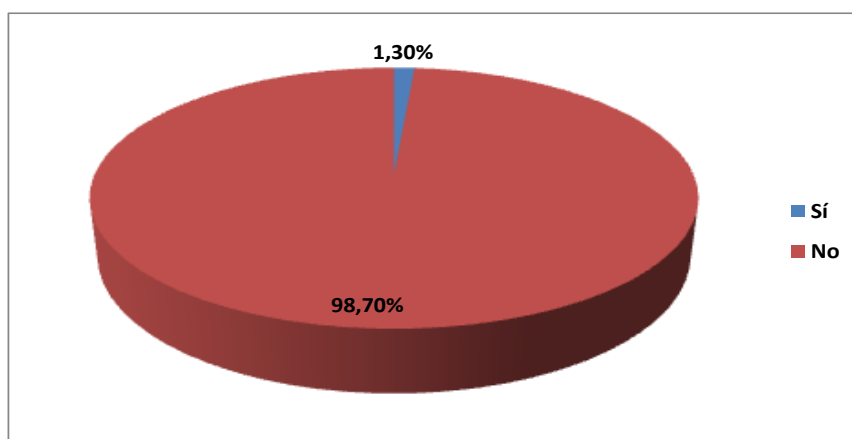


La mayor parte de las mujeres trasladadas lo han sido una única vez (34%), el 8,8% ya ha cuenta con dos traslados, el 3,8% ha cambiado de prisión tres veces y el 0,6% restante cuatro o más. Teniendo en cuenta el tiempo que llevan estas mujeres internas en los centros (la mayoría menos de un año) se considera un porcentaje muy alto. En algunos trabajos publicados sobre extranjeros en prisión se habla de “dirigismo institucional” hacia unos centros determinados en los que se concentran las mujeres extranjeras (Ribas, Almeda, y Bodelón, 2002), hecho que se sustenta en el criterio de falta de arraigo.

Por último, en relación a su pasado en instituciones similares (Gráfica 37), solo el 1,3% de ellas ha estado interna en algún tipo de centro de menores. Datos que no coinciden con los presentados por el estudio de Yagüe y Cabello (2005) quienes presentan que el 16,2% de las mujeres españolas entrevistadas han sido institucionalizadas en alguna otra etapa de su vida.

Gráfica 37

Pasado en instituciones similares



Resumiendo este punto, podemos decir que el perfil criminológico se caracteriza porque la mayoría de las mujeres extranjeras que se encuentran internas en estas prisiones lo hacen en condición de penadas; entre ellas, la mitad cuenta con condenas de entre 6 años y 1 día y 9 años y, casi el total, en régimen ordinario de segundo grado.

Teniendo en cuenta el tipo de delito por el cual se encuentran en prisión, sobresalen aquellos contra la salud pública, cometidos por motivos económicos y en solitario.

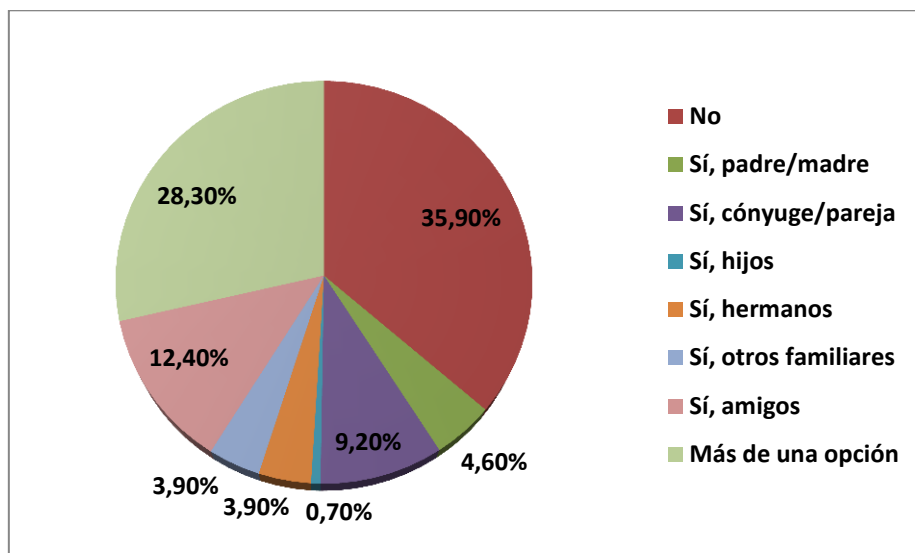
Prácticamente la mitad lleva en prisión menos de un año y la totalidad afirma no contar con ninguna otra condena pendiente. Para más del 95% de estas mujeres es esta su primera vez en un centro penitenciario. También la mitad de ellas han sido trasladadas al menos en una ocasión entre las prisiones de nuestro Sistema Penitenciario. En relación a su paso por centros de menores con anterioridad, el 95% dice no haber pasado por ninguna institución similar.

6.3.5. Vida en prisión de las mujeres de la muestra

Es el momento de centrarnos en la vida en prisión de las internas extranjeras. Así, comenzamos por las visitas que reciben durante su reclusión (Gráfica 38).

Gráfica 38

Visitas en prisión



El 35,9% no ha tenido ninguna visita frente al 64,1% que responde afirmativamente. Así, el 28,3% menciona que recibe distintas visitas, aunque son los amigos los más representados entre todos los grupos (12,4%), -bien es cierto que, en ocasiones, identificaban como amigos a diferentes organizaciones sociales que trabajan en este ámbito-, seguidos de las parejas/cónyuges (9,2%). De todos modos, al tiempo de cumplimentar el cuestionario, se referían a visitas puntuales que se habían producido en alguna ocasión. Eran pocas las que aseguraban contar con visitas regulares puesto que en la mayor parte de los casos, la distancia es un claro hándicap que dificulta la regularidad. Estos datos difieren en el caso de las nacionales. Por ejemplo, en el estudio realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz (2006), el 50% de las mujeres entrevistadas aseguraron contar con visitas de toda su familia de forma habitual.

Un aspecto clave a tener en cuenta en la evaluación del ambiente en los centros es la relación que mantienen las propias internas entre ellas y también con los funcionarios (ver Tabla 17).

Tabla 17*Relación con los funcionarios de la prisión y con las compañeras del módulo*

	Relación con los funcionarios	Relación con las compañeras
No existe relación	10,6%	5,2%
Muy mala	1,3%	1,3%
Mala	4%	5,9%
Buena	55%	63,4%
Muy buena	29,1%	24,2%

En este caso los datos son muy positivos ya que la relación con los funcionarios es buena (55%) o muy buena (29,1%) en la práctica totalidad de las respuestas. Cuando se examina la relación con sus compañeras, el 63,4% dice tener una buena relación, e incluso el 24,2% la define como muy buena.

Esta cuestión nos indica un cambio de percepción en relación a los funcionarios de prisiones. Yagüe (2002) afirma que predominan valores de solidaridad entre las reclusas, refiriéndose a apoyo y solidaridad en las ocasiones que lo necesiten, especialmente en el caso de compañeras que presentan algún tipo de problema físico o psíquico. Además, Miranda, y Barberet (1998) sostienen que en el caso de las mujeres no ocurre como en los establecimientos que albergan presos varones, en donde se constata la oposición entre internos y funcionarios; mantienen que por encima del rol de presas y funcionarias se sitúa la solidaridad como mujeres. Sin embargo, Fernández Galán (2011) concluye que uno de los recuerdos más negativos de la prisión por parte de las internas son las relaciones con otras reclusas. En cuanto a la relación con internas nacionales, no se detectan, generalmente, actitudes ni comportamientos racistas entre las reclusas de distintas nacionalidades; prevaleciendo el estatus de presa sobre el derivado de la nacionalidad (Castillo y Ruiz, 2010).

Este apartado contiene, además de las que ya hemos comentado, cinco preguntas abiertas que responden a ¿en qué actividades está participando en prisión?, ¿qué le gustaría hacer o aprender mientras esté en prisión?, ¿cómo son las condiciones de la celda?, ¿qué cambiaría dentro de la prisión para estar mejor? y, por último, ¿qué proyectos tiene para cuando salga del centro?

Así, la práctica totalidad está realizando alguna actividad física en prisión: deportes, sobre todo fútbol, baloncesto y aeróbic; y baile. Por su parte, mayoritariamente también señalan, en este punto, su asistencia a la escuela y a diferentes cursos de inserción laboral. Además, destacan su implicación en

distintos talleres relacionados con la lectura y con manualidades. Muchas de ellas dedican su tiempo libre a la costura, al coro o al teatro. Los idiomas y la informática son actividades por las que estas mujeres se interesan en gran medida.

Al preguntarles por lo que les gustaría hacer o aprender mientras se encuentran en prisión, la primera reacción de las mujeres ha seguido dos vías: por un lado, aquellas que creen que en la prisión no se puede aprender nada; y, por otro, las que defienden que deben aprovechar el tiempo al máximo y que las propuestas son bienvenidas. Este último grupo es el más representado entre la muestra, y afirman que necesitan aprender todo aquello que sea posible de cara a enfrentarse con la realidad una vez se encuentren en libertad. Así, la enseñanza de idiomas y los cursos de informática son los más solicitados por este colectivo. También resaltan cursos dirigidos a desarrollar alguna profesión, especialmente panadería y cocina.

En lo que respecta a las condiciones de la celda, la respuesta, en general, es positiva. Afirman tener condiciones adecuadas siendo conscientes de que están en una prisión. La mayoría se encuentra en una celda individual o comparte celda con una compañera. Entre las respuestas, podemos destacar comentarios como *“Son buenas, porque no se puede exigir tanto, bien sé que es una prisión y no un hotel de cinco estrellas”*; *“El chabolo es bastante para una persona, pero para dos es muy pequeña y en invierno muy frío porque las ventanas no cierran bien y es viejo”*; *“Considerando que es una cárcel, pienso que está bien, podrían estar más limpias las paredes y más iluminada”*; *“Sí, dentro de lo que cabe y en comparación con la de otros países se puede vivir por un tiempo aquí, aunque más vale que nunca hubiésemos tenido que venir”*; *“No son adecuados, los colchones son de espuma que causan mucho daño a nuestra espalda y columna”*... (Centro E2).

También les hemos preguntado qué cambiarían dentro de la prisión y, aunque una buena parte asegura que el único cambio necesario es la libertad, también existen comentarios sobre la cantidad y calidad de la comida con la que, en general, no se está conforme; también demandan más variedad de cursos y trabajo remunerado. Además, en algunos casos, cuestionan el trabajo de los profesionales del centro. Destacamos testimonios como: *“Que los funcionarios nos traten mejor, los trabajadores, como directores y psicólogos, si nos escucharan y*

entendieran un poquito que aunque somos delincuentes se considere la oportunidad de creernos y tratarnos como personas para poder reinsertarnos...” (Centro E2).

“Los cursos o talleres no están bien planificados en el sentido de decir a qué hora son y cuántos días duran, no hay nadie (aparte de que una moleste a sus compañeras) que explique las reglas de este sitio, no hay una amplia información en cuanto a qué días y horas atienden los funcionarios, sus nombres y para qué sirve cada uno” (Centro E2).

“Que las funcionarias sean más educadas y nos traten mejor, que nos dieran los medicamentos que necesitamos, que fuéramos más escuchadas por los directores y subdirectores y el comité completo” (Centro E2).

La última de las cuestiones se refiere a los proyectos de futuro, a los planes que tienen una vez abandonen la prisión. Muchas de estas mujeres tienen claro que quieren quedarse en España y trabajar, particularmente emprender abriendo un negocio propio. Señalan como principal prioridad el trabajo, aunque en un nivel similar está el reunirse con sus familias en el exterior. Son pocas las mujeres que desean volver a su país, de este modo, pretenden salir con un tercer grado y buscar un trabajo que le permita obtener los papeles en caso de no contar con ellos, puesto que, de lo contrario, serán expulsadas a su país de origen. Entre las respuestas más significativas podemos destacar *“Lo que quiero es trabajar mucho para sacar mi familia adelante y estar con ellos el más tiempo posible para enmendar el daño que les estoy causando”* (Centro E3); *“Quiero estar al lado de mis hijos para cuidarlos y trabajar para que puedan estudiar y ser unas personas de bien y no cometan el mismo error que yo”* (Centro E2); *“Quiero buscar trabajo, en peluquería o cocina en España, si no encuentro volvería a mi país”* (Centro E1); *“Hacer negocios, montar una tienda de importación/exportación”* (Centro M3).

Refiriéndonos a estos proyectos de futuro, la intención de continuar su proyecto de vida en nuestro país, se conforma como un sólido argumento de cara a la necesidad de intervención con este colectivo. La prioridad de las mujeres que se encuentran en prisión será conseguir empleo seguido de recuperar la relación con sus hijos y parejas (Fernández Galán, 2011).

Tratamos ahora de simplificar los resultados obtenidos con respecto a la vida en prisión de las mujeres. Así, el 65% han sido visitadas en prisión en momentos puntuales por amigos y familiares. Se encuentran muy satisfechas con la relación con funcionarios y compañeras que definen como buenas o muy buenas.

Dentro de prisión la práctica de deporte es la actividad más concurrida y entre lo que más les gustaría aprender están la informática y los idiomas y, cuando se refieren a las condiciones de la celda, están, cuanto menos, conformes. Sus proyectos de futuro tienen lugar en España, en donde su deseo es desenvolverse como emprendedoras.

6.3.6. Consumo de drogas de las mujeres de la muestra

El consumo de drogas es un aspecto que también ayuda a definir el perfil individual y criminológico de las mujeres en prisión y condiciona el trabajo a realizar pensando en su reinserción. El 12,9% de las mujeres de la muestra afirman haber consumido drogas antes de entrar en prisión frente al 87,1% que se declaran no consumidoras. Este dato contrasta con el de la población penitenciaria femenina general. Las mujeres autóctonas que se encuentran en prisión, presentan, en su mayoría, algún tipo de problema por abuso de sustancias (Singer, Bussey, Song, y Lunghofer, 1995; Haas y Peters, 2001; Yagüe y Cabello, 2005; Villagrà et al., 2011). Si como afirman Smith, Simonian, y Yarussi (2006) el riesgo de comportamientos violentos, reincidencia e indigencia es mayor cuando hablamos de drogodependientes, al existir un porcentaje más bajo de consumidoras de drogas entre las extranjeras, el índice de reincidencia será menor.

Cabe ahora centrarse en el tipo de drogas consumidas (ver Tabla 18).

Tabla 18

Drogas consumidas

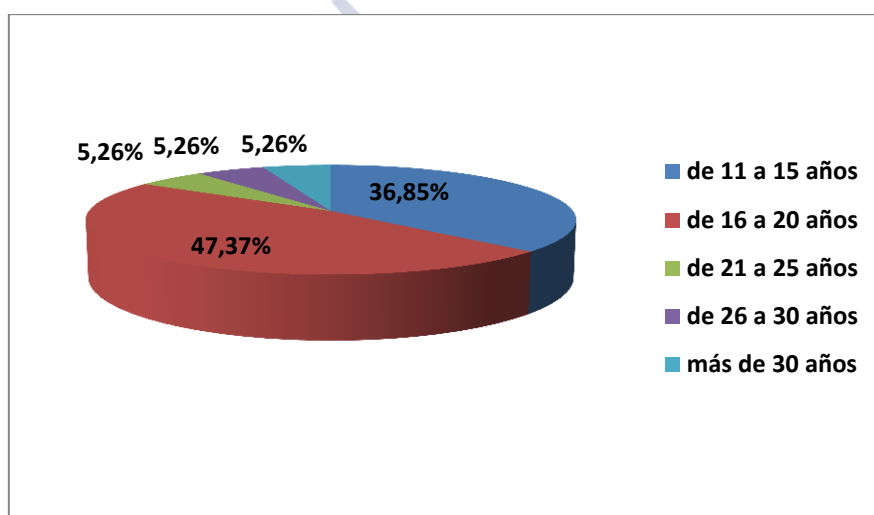
	Nunca	Ocasionalmente	Frecuentemente
Heroína/morfina/opio	65%	0%	35%
Marihuana/hachís	30%	20%	50%
Barbitúricos/benzodiacepinas	90%	5%	5%
Disolventes/colas...	95%	5%	0%
Cocaína	35%	30%	35%
Speed/éxtasis	75%	15%	10%
LSD	85%	10%	5%
Otras drogas	85%	0%	15%

Como se advierte en la tabla, en relación al tipo de drogas consumidas, el 50% de las consumidoras fumaba, de forma frecuente, marihuana o hachís, seguidas por el 35% que usaban heroína, morfina u opio o cocaína. Los motivos de comienzo de consumo son muy diferentes, aunque el más común es la curiosidad por conocer la sensación que producen ciertas sustancias, pero también los sitúan en los hábitos que tenían familiares, pareja o amigos, o debido a la ansiedad o estrés.

Se presentan dispares, asimismo, las edades de comienzo de consumo, como refleja la Gráfica 39.

Gráfica 39

Edad de comienzo de consumo



El 36,85% de las mujeres que dicen consumir drogas han empezado antes de los 15 años y, el 47,37% entre los 16 y 20 años, representando las edades superiores el 15,78% del total, lo cual está en consonancia con los motivos que se aluden para iniciar con el consumo.

Yagüe y Cabello (2005) afirman que entre las internas drogodependientes, el 81% había iniciado el consumo antes de los 25 años y más concretamente a los 15, el 44% ya eran toxicómanas. La droga más consumida entre la muestra analizada era el hachís, seguida por la heroína y la cocaína, empezando, por lo general, su consumo con el grupo de amigos.

La Tabla 19 muestra los datos de las mujeres consumidoras y su tratamiento de desintoxicación.

Tabla 19*Tratamiento de desintoxicación*

	Sí	No
Tratamiento de desintoxicación en la calle	30%	70%
Tratamiento de desintoxicación en prisión	15%	85%

Únicamente el 30% ha participado en algún tipo de tratamiento para desintoxicarse en la calle y un 15% lo ha hecho en prisión. En general, no creen en la necesidad de recibir programas con este objetivo porque no se consideran consumidoras habituales. Dos de estas mujeres han estado internas, antes de su paso por prisión, en un centro de desintoxicación y otra de ellas se sometía a tratamiento en la calle, y también lo hace en prisión, concretamente a un programa de metadona. Las demás mujeres no especifican el tipo de tratamiento pero sí aseguran haber tenido terapia con psicólogos y psiquiatras para dejar esta adicción.

A modo de recapitulación, podemos decir que las mujeres extranjeras que se encuentran en los centros penitenciarios pertenecientes a la muestra no consumen drogas. Entre las que sí lo hacen destaca el consumo de marihuana y hachís comenzando entre los 16 y los 20 años. Además, no han recibido, de forma general, ningún tratamiento de desintoxicación ni en la calle ni en el centro.

6.4. Análisis de diferencias en las respuestas de las mujeres de la muestra

Una vez identificadas las características del colectivo de mujeres extranjeras que se encuentran en prisión, es momento de analizar sus diferencias con la finalidad de responder a los objetivos planteados en este trabajo de investigación.

De este modo, hemos establecido, como variables de análisis, la red de apoyo social con la que cuentan, el área geográfica de procedencia, el hecho de contar o no con un proyecto migratorio en nuestro país y su carrera delictiva (ver Cuadro 10).

Cuadro 10

Variables. Análisis de diferencias.

VARIABLE	GRUPO
Área geográfica (I2)	Red de apoyo social
Edad (I3)	
Estado civil (I4)	
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	
Pareja en prisión (I5)	
Tiene hijos (I6)	
Tiene hermanos (I10)	
Vivía en España (M1)	
Motivo para venir a España (M2)	
Años viviendo en España (M4)	
Hijos en España o país de origen (M10)	
Ha ido a la escuela (E1)	
Nivel de estudios (E6)	
Estudiaba al ser detenida (E9)	
Estudia en la actualidad (E10)	
Ha trabajado fuera de casa (L1)	
Trabajo en prisión (L8)	
Envía dinero a su familia (L9)	
Formación laboral en prisión (L10)	
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	
Tipo de delito (C4)	
Ha estado en prisión (C9)	
Ha sido trasladada (C13)	
Relación con los funcionarios (V2)	
Relación con sus compañeras (V3)	
Edad (I3)	Área geográfica
Estado civil (I4)	
Pareja en prisión (I5)	
Tiene hijos (I6)	
Tiene hermanos (I10)	
Vivía en España (M1)	
Motivo para venir a España (M2)	
Años viviendo en España (M4)	
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	
Hijos en España o país de origen (M10)	
Ha ido a la escuela (E1)	
Nivel de estudios (E6)	
Estudiaba al ser detenida (E9)	
Estudia en la actualidad (E10)	
Ha trabajado fuera de casa (L1)	
Trabajo en prisión (L8)	
Envía dinero a su familia (L9)	
Formación laboral en prisión (L10)	
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	
Tipo de delito (C4)	
Ha estado en prisión (C9)	
Ha sido trasladada (C13)	
Le visitan en prisión (V1)	
Relación con los funcionarios (V2)	
Relación con sus compañeras (V3)	
Área geográfica (I2)	Proceso migratorio
Edad (I3)	
Estado civil (I4)	

VARIABLE	GRUPO
Pareja en prisión (I5)	
Tiene hijos (I6)	
Tiene hermanos (I10)	
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	
Hijos en España o país de origen (M10)	
Ha ido a la escuela (E1)	
Nivel de estudios (E6)	
Estudiaba al ser detenida (E9)	
Estudia en la actualidad (E10)	
Ha trabajado fuera de casa (L1)	
Trabajo en prisión (L8)	
Envía dinero a su familia (L9)	
Formación laboral en prisión (L10)	
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	
Tipo de delito (C4)	
Ha estado en prisión (C9)	
Ha sido trasladada (C13)	
Le visitan en prisión (V1)	
Relación con los funcionarios (V2)	
Relación con sus compañeras (V3)	
Área geográfica (I2)	Carrera delictiva
Edad (I3)	
Estado civil (I4)	
Pareja en prisión (I5)	
Tiene hijos (I6)	
Tiene hermanos (I10)	
Vivía en España (M1)	
Motivo para venir a España (M2)	
Años viviendo en España (M4)	
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	
Hijos en España o país de origen (M10)	
Ha ido a la escuela (E1)	
Nivel de estudios (E6)	
Estudiaba al ser detenida (E9)	
Estudia en la actualidad (E10)	
Ha trabajado fuera de casa (L1)	
Trabajo en prisión (L8)	
Envía dinero a su familia (L9)	
Formación laboral en prisión (L10)	
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	
Tipo de delito (C4)	
Ha sido trasladada (C13)	
Le visitan en prisión (V1)	
Relación con los funcionarios (V2)	
Relación con sus compañeras (V3)	

Para analizar las diferencias que se producen entre las mujeres de la muestra hemos dividido las variables, en cada caso, en dos subgrupos (ver Cuadro 11), transformando las variables en dos grupos de respuesta, es decir, en variables dicotómicas para poder comparar sus medias, recodificándolas, cuando fue necesario, a través del paquete estadístico SPSS v.20.

Cuadro 11*Subdivisión de los grupos*

Grupo	Subgrupo 1	Subgrupo 2
Red de apoyo social	Le visitan en prisión	No le visitan en prisión
Área geográfica	Procedentes de Latinoamérica	No procedentes de Latinoamérica
Proceso migratorio	Vivía en España	No vivía en España
Carrera delictiva	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión

Una vez divididos los subgrupos es el momento de establecer las variables que pueden tener cierta capacidad de influencia y así, en función de su naturaleza, aplicar las pruebas más adecuadas.

Cuando la variable sea categórica, utilizaremos la prueba estadística Chi-Cuadrado, y, en el caso en el que esta sea una variable escalar analizaremos, en primer lugar, si muestra una distribución normal por medio de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Cabe decir que al no tratarse de una distribución normal hemos utilizado pruebas no paramétricas, descartando la utilización de la prueba t de Student en el caso de las variables escalares y optando por la de Kruskal Wallis.

Así, la prueba de Chi-cuadrado sirve para comprobar si una distribución de frecuencias se ajusta a una distribución modelo. Se utiliza para valorar las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas, evaluando la independencia o asociación entre dos variables, decidiendo sobre la probabilidad de que el valor empírico represente una asociación real o debida al azar (Pérez Juste, Galán, y Quintalán, 2012). Cuando el tamaño muestral es reducido la utilización de la distribución Chi-cuadrado para aproximar las frecuencias puede introducir algún sesgo en los cálculos, de modo que el valor del estadístico tiende a ser mayor. De este modo, utilizaremos una corrección para eliminar este sesgo que, para el caso de tablas 2x2 se conoce como la corrección de Yates.

Kolmogorov-Smirnov es un procedimiento de bondad de ajuste, que nos permitirá medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica; contrasta si las observaciones podrían proceder de una distribución normal (García Bellido, González Such, y Jornet, 2010).

Por su parte, la prueba de Kruskal Wallis es una ampliación de la prueba de U de Mann-Whitney para dos medianas y se llevará a cabo cuando el análisis de la varianza no sea aplicable debido a incumplimientos de las suposiciones del modelo; se configura como el equivalente no paramétrico del análisis de varianza, permitiendo conocer si hay diferencias en las distribuciones de la variable estudiada (Camacho, 2004).

1. Grupo Red de apoyo social

a) Apoyo social - Perfil individual

Con respecto al perfil individual hemos seleccionado las variables que consideramos más representativas (I2, I3, I4, I5, I6 e I10).

Podemos observar (Tabla 20) que únicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas cuando analizamos el área geográfica ($\chi^2= 11,096$, $p\leq 0,05$). Las mujeres de América del Sur son las que más visitas reciben en prisión, dato que, al declararse representativo, puede ser extrapolado a la población objeto de estudio.

Sin embargo, la edad ($\chi^2=3,506$, $p\leq 0,47$) no marca diferencias significativas respecto a si reciben o no visitas en prisión.

En el caso del estado civil ($\chi^2=5,469$, $p\leq 0,24$) aunque tampoco se muestran diferencias significativas, sí que observamos que el porcentaje de mujeres casadas que reciben visitas es mayor que el resto, seguido, muy de cerca, por el que representan las mujeres solteras.

También reciben más visitas las mujeres que no tienen ni han tenido a sus parejas en un centro penitenciario, aunque las diferencias no son significativas ($\chi^2=1,620$, $p\leq 0,44$).

Son más las mujeres que tienen hijos y reciben visitas que las que no los tienen, pero tampoco se presentan diferencias significativas ($\chi^2=,334$, $p\leq 0,56$), al igual que las que tienen hermanos ($\chi^2=,005$, $p\leq 0,94$).

Tabla 20*Grupo Red de apoyo social. Apoyo social - Perfil individual*

Variables	Categorías	Recibe visitas en prisión	No recibe visitas en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Área geográfica (I2)	Europa	25	19	11,096	5	$p \leq 0,05$
	América del Norte	0	3			
	América del Sur	63	25			
	América Central	3	1			
	Asia	0	1			
	África	7	6			
Edad (I3)	Menor de 25 – 25 años	15	12	3,506	4	$p \leq 0,47$
	Entre 26 y 36 años	45	21			
	Entre 37 y 47 años	22	13			
	Entre 48 y 58 años	10	8			
	Mayor de 58 años	0	1			
Estado civil (I4)	Soltera	40	23	5,469	4	$p \leq 0,24$
	Casada	27	7			
	Viuda	5	5			
	Separada/divorciada	10	9			
	Vive en pareja	15	9			
Pareja en prisión (I5)	Sí, en una prisión española	18	11	1,620	2	$p \leq 0,44$
	No, pero ha estado con anterioridad	3	1			
	No, nunca ha estado en prisión	45	15			
Tiene hijos (I6)	Sí	78	40	,334	1	$p \leq 0,56$
	No	20	14			
Tiene hermanos (I10)	Sí	89	50	,005	1	$p \leq 0,94$
	No	9	4			

b) Apoyo social. Proyecto migratorio

Teniendo en cuenta el proyecto migratorio, hemos analizado las diferencias de las variables M1, M2, M4, M6 y M10, y vemos que todas ellas presentan diferencias significativas excepto la M4 (Tabla 21).

Así, la prueba de Chi-cuadrado nos permite, en este caso, observar variaciones importantes en función del proyecto migratorio de estas mujeres. Las que ya vivían en España antes de estar en prisión reciben visitas en mayor medida que las que no lo hacían ($\chi^2 = 12,283$, $p \leq 0,00$). También observamos diferencias estadísticamente significativas cuando se trata de analizar el motivo para venir a España ($\chi^2 = 8,035$, $p \leq 0,04$) siendo, las que tomaron la decisión por motivos económicos y por reagrupación familiar las que contemplan un mayor porcentaje a la hora de recibir visitas (80,95% y 81,48%, respectivamente).

En cuanto a los años viviendo en España ($\chi^2= 5,020$, $p\leq 0,28$) podemos decir que más de la mitad de aquellas que reciben visitas llevan en España 10 años o más, mientras que el porcentaje disminuye cuando nos referimos a las que no son visitadas.

Además, las mujeres que tenían amigos o familiares en España antes de venir tienen más visitas que las que no contaban con apoyo ($\chi^2= 9,750$, $p\leq 0,02$). Concretamente, las que tenían amigos y familiares son visitadas en un 92,85% de los casos, las que tenían únicamente familiares un 85% y las que tenían amigos un 63,15%, mientras que las que no contaban con allegados, únicamente el 55% han sido visitadas en alguna ocasión.

Cuando preguntamos por la situación geográfica de los hijos de las que son madres también encontramos diferencias claramente significativas ($\chi^2= 14,871$, $p\leq 0,00$) en correspondencia con las visitas en prisión. Son las que tienen a sus hijos en nuestro país, las que más visitas reciben.

Tabla 21

Grupo Red de apoyo social. Proyecto migratorio

Variables	Categorías	Recibe visitas en prisión	No recibe visitas en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Vivía en España (M1)	Sí	69	22	12,283	1	$p\leq 0,00$
	No	29	33			
Motivo para venir a España (M2)	Económicos	44	12	8,035	3	$p\leq 0,04$
	Reagrupación	17	4			
	Motivos políticos de su país	0	2			
	Otros	6	4			
Años viviendo en España (M4)	Menos de 1 año	3	1	5,020	4	$p\leq 0,28$
	Entre 1 y 3 años	4	1			
	Entre 4 y 6 años	18	4			
	Entre 7 y 9 años	6	6			
	10 años o más	37	10			
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	Sí, familiares	34	6	9,750	3	$p\leq 0,02$
	Sí, amigos	12	7			
	Sí, familiares y amigos	13	1			
	No	10	8			
Hijos en España o país de origen (M10)	España	25	4	14,871	4	$p\leq 0,00$
	País de origen	39	30			
	España y país de origen	11	2			
	Otro país	1	3			
	Otro país y país de origen	0	1			

c) Apoyo social. Perfil escolar

Cuando tratamos de cruzar los datos relacionados con el perfil escolar, vemos que en las variables analizadas (E1, E6, E9, y E10) no se presentan diferencias significativas (Tabla 22). Sin embargo, el 64,18% de las mujeres que ha ido a la escuela, recibe visitas frente al 100% de las que no ha asistido ($\chi^2=1,655$, $p\leq 0,19$); bien es cierto que la población que no ha ido representa un porcentaje muy pequeño con respecto al total. Además, aunque los porcentajes se muestren bastante semejantes, en relación al nivel de estudios ($\chi^2=1,657$, $p\leq 0,79$), las que sí reciben visitas predominan entre las que han estudiado Formación Profesional (70,83%).

Las respuestas que tienen que ver con estudiar al ser detenida ($\chi^2=,000$, $p\leq 1,00$) muestran prácticamente los mismos porcentajes cuando la respuesta es sí (64,28%) o no (64,49%) por lo que no podemos extrapolar los datos obtenidos al conjunto de la población; al igual que las respuestas en relación a si estudia o no en la actualidad ($\chi^2=,000$, $p\leq 1,00$) cuyos porcentajes también son muy similares (65,30% y 64,07%, respectivamente).

Tabla 22

Grupo Red de apoyo social. Perfil escolar

Variables	Categorías	Recibe visitas en prisión	No recibe visitas en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha ido a la escuela (E1)	Sí	95	53	1,655	1	$p\leq 0,19$
	No	3	0			
Nivel de estudios (E6)	No tiene estudios	3	2	1,657	4	$p\leq 0,79$
	Estudios primarios	14	11			
	Estudios secundarios	51	25			
	Formación Profesional	17	7			
	Estudios universitarios	12	8			
Estudiaba al ser detenida (E9)	Sí	9	5	,000	1	$p\leq 1,00$
	No	89	49			
Estudia en la actualidad (E10)	Sí	32	17	,000	1	$p\leq 1,00$
	No	66	37			

d) Apoyo social. Perfil laboral

En cuanto al perfil laboral (L1, L8, L9 y L10) tampoco observamos diferencias significativas, aunque alguno de los datos nos muestra claves de las conclusiones a las que podemos llegar (Tabla 23). Así, aquellas que sí han

trabajado fuera de casa representan un mayor porcentaje cuando hablamos de las que reciben visitas ($\chi^2 = ,041$, $p \leq 0,84$), que, además, se caracterizan por desenvolver algún tipo de trabajo en prisión ($\chi^2 = 2,095$, $p \leq 0,35$); en cuanto a la relación entre enviar dinero a su familia y las visitas recibidas, el porcentaje de las que sí envían y reciben visitas es levemente mayor (68,96%) que las que no lo hacen (62,90%), sin embargo, como venimos diciendo, las diferencias no se presentan estadísticamente significativas ($\chi^2 = ,158$, $p \leq 0,69$). También analizamos, en este perfil, la conexión entre las visitas y la formación laboral ($\chi^2 = 1,012$, $p \leq 0,31$), para afirmar que las que han realizado algún curso dentro del centro penitenciario dirigido a su formación laboral reciben más visitas que las que no lo han hecho.

Tabla 23

Grupo Red de apoyo social. Perfil laboral

Variables	Categorías	Recibe visitas en prisión	No recibe visitas en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha trabajado fuera de casa (L1)	Sí	92	50	,041	1	$p \leq 0,84$
	No	5	4			
Trabajo en prisión (L8)	Sí	51	23	2,095	2	$p \leq 0,35$
	No	43	31			
	Antes sí, ahora no	3	1			
Envía dinero a su familia (L9)	Sí	20	9	,158	1	$p \leq 0,69$
	No	78	46			
Formación laboral en prisión (L10)	Sí	56	26	1,012	1	$p \leq 0,31$
	No	42	29			

e) Apoyo social. Consumo de drogas

Las mujeres que no son consumidoras reciben más visitas en prisión que las que sí toman algún tipo de sustancia ($\chi^2 = 2,738$, $p \leq 0,09$); particularmente, el 66,91% de mujeres que no consumen reciben visitas frente al 45% que sí lo hace (Tabla 24).

Tabla 24

Grupo Red de apoyo social. Consumo de drogas

Variables	Categorías	Recibe visitas en prisión	No recibe visitas en prisión	Chi - cuadrado		
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	Sí	9	11	χ^2	gl	Sig.
	No	89	44	2,738	1	$p \leq 0,09$

f) Apoyo social. Carrera delictiva

Tal y como puede verse en la Tabla que sigue, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el apoyo social con respecto a la carrera delictiva. Aun así, nos gustaría comentar varios aspectos que resultan interesantes para nuestra investigación. Son las mujeres que han cometido un delito contra la Salud Pública las que reciben visitas en prisión en mayor medida que las que han cometido otro tipo de delito ($\chi^2 = ,010$, $p \leq 0,92$), aunque los porcentajes son cercanos (el 64,60% salud pública frente al 61,76% otro tipo de delito). Aquellas que han cumplido condena dos veces, en su totalidad, recibe visitas, mientras que cuando se trata de las que manifiestan no haber pasado antes por el contexto penitenciario el porcentaje disminuye, al igual que las que ya han estado tres veces en un centro ($\chi^2 = 2,362$, $p \leq 0,30$). Asimismo, tanto las que han sido trasladadas como las que no han cambiado de prisión, con un 60,52% y un 67,53% respectivamente, manifiestan recibir visitas por parte de familiares o amigos ($\chi^2 = ,815$, $p \leq 0,36$).

Tabla 25

Grupo Red de apoyo social. Carrera delictiva

Variables	Categorías	Recibe visitas en prisión	No recibe visitas en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Tipo de delito (C4)	Salud Pública	73	40	,010	1	$p \leq 0,92$
	Otro	21	13			
Veces que ha estado en prisión (C9)	Una vez	95	51	2,362	2	$p \leq 0,30$
	Dos veces	3	3			
	Tres veces	0	1			
Ha sido trasladada (C13)	Sí	46	30	,815	1	$p \leq 0,36$
	No	52	25			

g) Apoyo Social. Vida en Prisión

Vemos, respecto a la vida en prisión, que la relación con los funcionarios es mejor para aquellas que sí reciben visitas ($K-W = ,675$, $p \leq 0,41$) (Tabla 26).

Por su parte, en cuanto a la relación con sus compañeras, se produce una diferencia más amplia ($K-W = ,1,658$, $p \leq 0,19$) ya que la media de las que reciben visitas supera la “buena” relación ($\bar{X} = 4,11$) mientras que aquellas que no las reciben se sitúan entre los valores “mala” y “buena” ($\bar{X} = 3,80$).

Tabla 26*Grupo Red de apoyo social. Vida en prisión*

Variables	Categorías	Recibe visitas en prisión	No recibe visitas en prisión	Kolmogorov-Smirnov		Kruskal – Wallis	
				K-S	Sig.	K-W	Sig.
Relación con los funcionarios (V2)	No existe relación	$\bar{x} = 3,98$	$\bar{x} = 3,78$	4,584	,000	,675	$p \leq 0,41$
	Muy mala						
	Mala						
	Buena						
	Muy buena						
Relación con sus compañeras (V3)	No existe relación	$\bar{x} = 4,11$	$\bar{x} = 3,80$	4,649	,000	1,658	$p \leq 0,19$
	Muy mala						
	Mala						
	Buena						
	Muy buena						

Al analizar aquellas variables que están relacionadas con el apoyo social con el que cuentan las mujeres de la muestra vemos que encontramos diferencias significativas si tenemos en consideración el área geográfica, siendo, las mujeres de América del Sur, las que más visitas reciben en prisión.

Además, el hecho de contar con un proyecto migratorio como tal, también se relaciona con esta variable, las mujeres que vivían en España tienen más apoyo, especialmente las que cuentan con familiares o amigos antes de su llegada y cuyos hijos viven en este país. Sin embargo, también podemos afirmar que el perfil escolar y laboral de las mujeres no se relaciona con el apoyo recibido en prisión, no existiendo, en este caso, diferencias estadísticamente significativas. Tampoco el hecho de consumir drogas incide en el recibir o no visitas en prisión, al igual que la carrera delictiva o la relación con sus compañeras y funcionarios.

2. Grupo Área Geográfica.

a) Área Geográfica. Perfil individual

Comenzamos con los análisis en relación al área geográfica. Hemos subdividido el grupo en función de la procedencia, por un lado estarán aquellas mujeres de origen latinoamericano y, por otro, las de distintos orígenes. Así, encontramos diferencias estadísticamente significativas al analizar la edad en función de la procedencia ($\chi^2 = 10,738$, $p \leq 0,03$) de forma que aquellas que proceden de Latinoamérica son levemente mayores que las que proceden de otras zonas ya que en el primer caso priman las mujeres de entre 26 y 47 años y, en el segundo, entre 25 y 36 (Tabla 27).

En cuanto a la relación entre el estado civil de las internas y su procedencia, aunque no se presentan diferencias significativas ($\chi^2= 3,395$, $p\leq 0,49$), vemos que únicamente superan las otras procedencias a las latinoamericanas cuando están divorciadas o separadas, y en el resto de situaciones siempre son las de latinoamérica las que predominan.

En esta línea, las que tienen una pareja que nunca ha estado en prisión se caracterizan por proceder de Latinoamérica ($\chi^2= 5,842$, $p\leq 0,05$), confirmándose, en este caso, diferencias significativas.

También es el colectivo de mujeres de origen latinoamericano el que se define por tener más hijos ($\chi^2= 12,484$, $p\leq 0,00$), presentando diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta las que tienen o no hermanos, no encontramos diferencias significativas según el área de procedencia ($\chi^2= 5,91$, $p\leq 0,44$).

Tabla 27

Grupo Área Geográfica. Perfil individual

Variables	Categorías	Latinoamérica	Otra procedencia	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Edad (I3)	Menor de 25 – 25 años	11	17	10,738	4	$p\leq 0,03$
	Entre 26 y 36 años	38	28			
	Entre 37 y 47 años	30	10			
	Entre 48 y 58 años	13	5			
	Mayor de 58 años	1	0			
Estado civil (I4)	Soltera	39	25	3,395	4	$p\leq 0,49$
	Casada	22	12			
	Viuda	7	3			
	Separada/divorciada	8	11			
	Vive en pareja	14	11			
Pareja en prisión (I5)	Sí, en una prisión española	14	15	5,842	2	$p\leq 0,05$
	No, pero ha estado con anterioridad	3	1			
	No, nunca ha estado en prisión	45	16			
Tiene hijos (I6)	Sí	81	38	12,484	1	$p\leq 0,00$
	No	12	24			
Tiene hermanos (I10)	Sí	87	55	,591	1	$p\leq 0,44$
	No	6	7			

b) Área Geográfica. Proyecto migratorio

También observamos diferencias significativas cuando cruzamos las variables relacionadas con el área geográfica y el proyecto migratorio de las mujeres que forman parte de la muestra (Tabla 28). Así, en cuanto al motivo para venir a España ($\chi^2= 9,750$, $p\leq 0,02$), las latinoamericanas se caracterizan por tomar la decisión teniendo en cuenta principalmente causas económicas, seguidas por las que vinieron por reagrupación,

mientras que los motivos de las que tienen otras procedencias se presentan más dispares. Por su parte, aunque el porcentaje comparativo de las que vivían en España sea mayor si analizamos las mujeres de Latinoamérica (el 62,5% de ellas vivían en España frente al 52,38% de las que provienen de otras zonas), no se presentan estadísticamente significativas ($\chi^2= 1,215$, $p\leq 0,27$). Tampoco encontramos diferencias en cuanto a los años que llevaban viviendo en nuestro país ($\chi^2= ,386$, $p\leq 0,98$) presentándose un paralelismo en los dos grupos.

Resulta interesante el hecho de que las mujeres latinoamericanas contaban, en general, con familiares o amigos en España, especialmente familiares mientras que no se da la misma situación cuando se tienen en cuenta otros orígenes, en este caso, las diferencias estadísticamente significativas son claras ($\chi^2= 14,697$, $p\leq 0,00$).

Cuando cruzamos la variable que responde al paradero de sus hijos no encontramos claras diferencias en función de la nacionalidad de las internas ($\chi^2= 6,140$, $p\leq 0,18$).

Tabla 28

Grupo Área Geográfica. Proyecto migratorio

Variables	Categorías	Latinoamérica	Otra procedencia	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Vivía en España (M1)	Sí	60	33	1,215	1	$p\leq 0,27$
	No	36	30			
Motivo para venir a España (M2)	Económicos	39	18	9,750	3	$p\leq 0,02$
	Reagrupación	16	6			
	Motivos políticos de su país	0	2			
	Otros	3	7			
Años viviendo en España (M4)	Menos de 1 año	3	2	,386	4	$p\leq 0,98$
	Entre 1 y 3 años	3	2			
	Entre 4 y 6 años	14	8			
	Entre 7 y 9 años	7	5			
	10 años o más	32	16			
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	Sí, familiares	32	9	14,697	3	$p\leq 0,00$
	Sí, amigos	9	10			
	Sí, familiares y amigos	12	3			
	No	6	12			
Hijos en España o país de origen (M10)	España	24	6	6,140	4	$p\leq 0,18$
	País de origen	45	24			
	España y país de origen	9	4			
	Otro país	1	3			
	Otro país y país de origen	1	0			

c) Área Geográfica. Perfil escolar

El perfil escolar presenta diferencias, en muchos casos, en función de la procedencia (Tabla 29). De este modo, vemos que aunque el hecho de ir o no ir a la escuela no presenta diferencias significativas ($\chi^2= 2,411$, $p\leq 0,12$) ya que el total de latinoamericanas ha asistido frente a la práctica totalidad de los demás colectivos, sí que observamos diferencias en cuanto al nivel de estudios ($\chi^2= 10,036$, $p\leq 0,04$), ya que mientras el 16,6% de las americanas cuenta con estudios universitarios, únicamente han cursado estos estudios el 8,9% del segundo colectivo.

La mayor parte no estudiaba en el momento de ser detenida por lo que no se presentan diferencias significativas ($\chi^2= ,359$, $p\leq 0,54$); sin embargo, en la actualidad son más las que no tienen procedencia latinoamericana entre las que sí cursan estudios, encontrándose, ahora sí, diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2= 4,642$, $p\leq 0,03$).

Tabla 29

Grupo Área Geográfica. Perfil escolar

Variables	Categorías	Latinoamérica	Otra procedencia	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha ido a la escuela (E1)	Sí	92	58	2,411	1	$p\leq 0,12$
	No	0	3			
Nivel de estudios (E6)	No tiene estudios	1	5	10,036	4	$p\leq 0,04$
	Estudios primarios	14	12			
	Estudios secundarios	50	26			
	Formación Profesional	11	13			
	Estudios universitarios	15	5			
Estudiaba al ser detenida (E9)	Sí	10	4	,359	1	$p\leq 0,54$
	No	83	57			
Estudia en la actualidad (E10)	Sí	23	26	4,642	1	$p\leq 0,03$
	No	70	35			

d) Área Geográfica. Perfil laboral

El porcentaje de mujeres latinoamericanas que ha trabajado fuera de casa en algún momento de su vida es mayor que las que proceden de otros orígenes, de forma que observamos diferencias significativas ($\chi^2= 4,175$, $p\leq 0,04$). Sin embargo, cuando

hablamos del trabajo dentro de la prisión, no encontramos diferencias significativas entre ambos grupos ($\chi^2= ,361$, $p\leq 0,83$) (Tabla 30).

Mientras que el 16% de las latinas envía dinero a su familia, en el segundo caso, el porcentaje aumenta ligeramente, correspondiéndose con un 23%. De todos modos, tampoco las diferencias son tan importantes como para ser significativas ($\chi^2= ,720$, $p\leq 0,29$).

En cuanto a la formación laboral realizada dentro del centro penitenciario, podemos señalar que las latinoamericanas pertenecientes a la muestra tienen menos formación que las que no son de esta procedencia ($\chi^2= 2,747$, $p\leq 0,09$) (Tabla 30).

Tabla 30

Grupo Área Geográfica. Perfil laboral

Variables	Categorías	Latinoamericana	Otra procedencia	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha trabajado fuera de casa (L1)	Sí	90	54	4,175	1	$p\leq 0,04$
	No	2	7			
Trabajo en prisión (L8)	Sí	44	30	,361	2	$p\leq 0,83$
	No	47	28			
	Antes sí, ahora no	2	2			
Envía dinero a su familia (L9)	Sí	15	14	,720	1	$p\leq 0,29$
	No	78	47			
Formación laboral en prisión (L10)	Sí	44	38	2,747	1	$p\leq 0,09$
	No	49	23			

e) Área Geográfica. Consumo de drogas

Aunque muy pocas mujeres de la muestra se declaran consumidoras de algún tipo de droga, son las latinoamericanas las que lo hacen en menor medida ($\chi^2= 1,663$, $p\leq 0,19$) (Tabla 31).

Tabla 31

Grupo Área Geográfica. Consumo de drogas

Variables	Categorías	Latinoamericana	Otra procedencia	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	Sí	9	11	1,663	1	$p\leq 0,19$
	No	85	50			

f) Área geográfica – Carrera delictiva

En relación a la carrera delictiva son tres las variables escogidas para analizar la influencia de la procedencia (C4, C9 y C13) (Tabla 32). Resulta interesante observar que cuando se trata de un delito contra la salud pública son las mujeres latinoamericanas las que predominan ($\chi^2= 9,215$, $p\leq 0,00$) existiendo, en este caso, diferencias estadísticamente representativas, por lo que podemos decir que son las mujeres que proceden de algún país de latinoamérica las que se caracterizan por cometer delitos de esta tipología.

El hecho de haber estado una, dos o tres veces en prisión no difiere en cuanto a la nacionalidad de las internas ($\chi^2= 1,616$, $p\leq 0,44$), sin embargo son las mujeres no latinoamericanas las que han sido trasladadas en mayor medida ($\chi^2= 11,345$, $p\leq 0,00$).

Tabla 32

Grupo Área Geográfica. Carrera delictiva

Variables	Categorías	Latinoamericana	Otra procedencia	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Tipo de delito (C4)	Salud Pública	76	37	9,215	1	$p\leq 0,00$
	Otro	13	21			
Veces que ha estado en prisión (C9)	Una vez	88	58	1,616	2	$p\leq 0,44$
	Dos veces	4	2			
	Tres veces	0	1			
Ha sido trasladada (C13)	Sí	35	41	11,345	1	$p\leq 0,00$
	No	57	20			

g) Área Geográfica. Vida en prisión

La vida en prisión es el último de los aspectos analizados respecto a la procedencia de las internas (ver Tabla 33). De este modo, observamos diferencias estadísticamente significativas cuando se trata de las visitas que reciben, siendo, las latinoamericanas, las más visitadas entre rejas ($\chi^2= 5,114$ $p\leq 0,02$).

Por otro lado, en cuanto a la relación con los funcionarios, aunque no observamos diferencias significativas, las mujeres que tienen otras procedencias superan la media de las latinoamericanas ya que tienen mejor relación (K-W= 1,057, $p\leq 0,30$); mientras que cuando se trata de preguntar por la relación entre las compañeras del centro, son las latinoamericanas las que dicen tener mejor trato (K-W= 2,082, $p\leq 0,14$).

Tabla 33*Grupo Área Geográfica. Vida en prisión*

Variables	Categorías	Latinoamericana	Otra procedencia	Chi - cuadrado			Kolmogorov-Smirnov		Kruskal – Wallis	
				χ^2	gl	Sig.	K-S	Sig.	K-W	Sig.
Le visitan en prisión (V1)	Sí	66	32	5,114	1	$p \leq 0,02$				
	No	26	29							
Relación con los funcionarios (V2)	No existe relación	$\bar{x} = 3,80$	$\bar{x} = 4,07$				4,584	$p \leq 0,00$	1,057	$p \leq 0,30$
	Muy mala									
	Mala									
	Buena									
	Muy buena									
Relación con sus compañeras (V3)	No existe relación	$\bar{x} = 4,07$	$\bar{x} = 3,90$				4,649	$p \leq 0,00$	2,082	$p \leq 0,14$
	Muy mala									
	Mala									
	Buena									
	Muy buena									

Como hemos visto en este punto, el área geográfica de procedencia marca diferencias significativas entre las mujeres. Así, podemos afirmar que las mujeres latinoamericanas que se encuentran en prisión tienen más edad que las que no lo son y sus parejas no han estado ni están en prisión. Además, tienen más hijos y emigran por motivos económicos y de reagrupación contando, en el país de destino, con más familiares y amigos que las de otros orígenes. También cuentan con un mayor nivel de estudios pero no estudian en prisión y han trabajado, en mayor medida, fuera de casa. Se caracterizan así mismo por haber cometido delitos de forma casi exclusiva contra la salud pública mientras que las de otras procedencias presentan una mayor variedad en cuanto a la tipología delictiva y, por último, las que proceden de Latinoamérica han sido trasladadas en menor medida en prisión.

3. Grupo Proceso migratorio

a) Proceso migratorio. Perfil individual

Es el momento de analizar las diferencias existentes entre aquellas que vivían en España, es decir, contaban con un proyecto migratorio como tal, y las que, antes de ser detenidas, no estaban asentadas en nuestro país (Tabla 34).

Encontramos diferencias significativas en cuanto a la procedencia, siendo las de origen de América del Sur y África, las que ya vivían en España frente a las que vienen de Europa, América del Norte, América Central y Asia ($\chi^2= 14,499$, $p\leq 0,01$), que no lo hacían.

Sin embargo, cuando se trata de la edad ($\chi^2= 6,678$, $p\leq 0,15$), del estado civil ($\chi^2= 4,631$, $p\leq 0,32$) y de si su pareja está o no en prisión ($\chi^2= 3,316$, $p\leq 0,19$), las diferencias no se presentan importantes por lo que no son significativas.

Además, tampoco encontramos diferencias significativas en relación a si tienen hijos ($\chi^2= ,182$, $p\leq 0,66$) y hermanos ($\chi^2= ,000$, $p\leq 1,00$), aunque las que ya vivían en España representan un mayor porcentaje, en ambos casos, que las que no vivían.

Tabla 34

Grupo Proceso migratorio. Perfil individual

Variables	Categorías	Vivía en España	No vivía en España	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Área geográfica (I2)	Europa	22	24	14,499	5	$p\leq 0,01$
	América del Norte	0	3			
	América del Sur	59	33			
	América Central	1	3			
	Asia	0	1			
	África	11	2			
Edad (I3)	Menor de 25 – 25 años	17	11	6,678	4	$p\leq 0,15$
	Entre 26 y 36 años	45	21			
	Entre 37 y 47 años	20	20			
	Entre 48 y 58 años	8	10			
	Mayor de 58 años	0	1			
Estado civil (I4)	Soltera	39	25	4,631	4	$p\leq 0,32$
	Casada	23	11			
	Viuda	3	7			
	Separada/divorciada	11	8			
	Vive en pareja	15	10			
Pareja en prisión (I5)	Sí, en una prisión española	18	11	3,316	2	$p\leq 0,19$
	No, pero ha estado con anterioridad	1	3			
	No, nunca ha estado en prisión	42	19			
Tiene hijos (I6)	Sí	73	46	,182	1	$p\leq 0,66$
	No	20	16			
Tiene hermanos (I10)	Sí	85	57	,000	1	$p\leq 1,00$
	No	8	5			

b) Proceso migratorio. Proyecto migratorio

Aquellas mujeres que no residían en el país antes de ser detenidas no contaban con familiares o amigos aquí, sin embargo, la mayor parte de las que sí lo hacían, tenían familiares ($\chi^2= 4,212$, $p\leq 0,23$), aunque, como vemos, no se observan diferencias estadísticamente significativas (Tabla 35).

Sí que encontramos, cuando nos centramos en el país en el que viven sus hijos, diferencias claramente significativas ($\chi^2= 32,429$, $p\leq 0,00$). De esta forma, las residentes en España viven con sus hijos; sin embargo, las mujeres que no tienen un proyecto migratorio, destacan porque sus hijos se encuentran, mayoritariamente, en sus países de origen.

Tabla 35

Grupo Proceso migratorio. Proyecto migratorio

Variables	Categorías	Vivía en España	No vivía en España	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	Sí, familiares	41	0	4,212	3	$p\leq 0,23$
	Sí, amigos	19	0			
	Sí, familiares y amigos	15	0			
	No	17	1			
Hijos en España o país de origen (M10)	España	28	2	32,429	4	$p\leq 0,00$
	País de origen	28	41			
	España y país de origen	12	1			
	Otro país	3	1			
	Otro país y país de origen	0	1			

c) Proceso migratorio. Perfil escolar

En este caso, se dan diferencias estadísticamente significativas únicamente cuando analizamos si difiere, en función del proyecto migratorio, el hecho de estudiar en el momento de su detención (Tabla 36). Concretamente, las que no vivían en España representan un mayor porcentaje de estudiantes ($\chi^2= 8,063$, $p\leq 0,00$).

También hemos analizado las variables referentes a si han ido a la escuela ($\chi^2= ,687$, $p\leq 0,40$), su nivel de estudios ($\chi^2= 6,027$, $p\leq 0,19$) y si estudian en la actualidad ($\chi^2= ,001$, $p\leq 0,97$), no encontrando diferencias significativas

resaltables. De todos modos, en cuanto al nivel de estudios, cabe señalar que las que no viven en nuestro país cuentan, en general, con un mayor nivel de estudios.

Tabla 36

Grupo Proceso migratorio. Perfil escolar

Variables	Categorías	Vivía en España	No vivía en España	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha ido a la escuela (E1)	Sí	89	61	,687	1	p≤ 0,40
	No	3	0			
Nivel de estudios (E6)	No tiene estudios	5	1	6,027	4	p≤ 0,19
	Estudios primarios	16	10			
	Estudios secundarios	50	26			
	Formación Profesional	10	14			
	Estudios universitarios	11	9			
Estudiaba al ser detenida (E9)	Sí	3	11	8,063	1	p≤ 0,00
	No	90	50			
Estudia en la actualidad (E10)	Sí	29	20	,001	1	p≤ 0,97
	No	64	41			

d) Proyecto migratorio. Perfil laboral

Tampoco encontramos diferencias significativas cuando estudiamos los contrastes entre el proceso migratorio y el perfil laboral de las internas extranjeras (Tabla 37).

Un mayor porcentaje de mujeres asentadas en nuestro país habían trabajado fuera de casa en algún momento antes de su entrada en prisión; sin embargo, no podemos extrapolar estos datos ya que las diferencias no son significativas ($\chi^2=$,409, $p\leq 0,52$).

El hecho de trabajar o no en prisión tampoco difiere según el proyecto migratorio ($\chi^2= 2,911$, $p\leq 0,23$), al igual que el envío de dinero a su familia ($\chi^2=$,244, $p\leq 0,62$).

La formación laboral en prisión no presenta suficiente evidencia como para aceptar que hay diferencias significativas entre esta variable y el proyecto migratorio de las mujeres presas ($\chi^2=$,671, $p\leq 0,41$).

Tabla 37*Grupo Proceso migratorio. Perfil laboral*

Variables	Categorías	Vivía en España	No vivía en España	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha trabajado fuera de casa (L1)	Sí	88	56	,409	1	p≤ 0,52
	No	4	5			
Trabajo en prisión (L8)	Sí	45	29	2,911	2	p≤ 0,23
	No	43	32			
	Antes sí, ahora no	4	0			
Envía dinero a su familia (L9)	Sí	19	10	,244	1	p≤ 0,62
	No	73	52			
Formación laboral en prisión (L10)	Sí	46	36	,671	1	p≤ 0,41
	No	46	26			

e) Proceso migratorio. Consumo de drogas

No se encuentran diferencias significativas si tenemos en cuenta el consumo de drogas de aquellas que ya vivían en España y las que no lo hacían ($\chi^2 = ,060$, $p \leq 0,80$) (Tabla 38).

Tabla 38*Grupo Proceso migratorio. Consumo de drogas*

Variables	Categorías	Vivía en España	No vivía en España	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	Sí	13	7	,060	1	p≤ 0,80
	No	80	55			

f) Proceso migratorio. Carrera delictiva

Cuando comenzamos a analizar la carrera delictiva en función del proyecto migratorio nos encontramos que el tipo de delito sí presenta diferencias estadísticamente significativas (Tabla 39), ya que son más las mujeres que cometen un delito contra la salud pública que no vivían en España que las que sí lo hacían. Prácticamente la totalidad de las que fueron detenidas en cuanto llegaron al país están cumpliendo condena por este delito ($\chi^2 = 6,442$, $p \leq 0,01$).

Las variables que representan las veces que han estado en prisión ($\chi^2=2,194$, $p\leq 0,33$) y si han sido trasladadas ($\chi^2= ,792$, $p\leq 0,37$) no presentan diferencias significativas, aunque bien es cierto que son más las que vivían en España y no han sido trasladadas que las que venían de sus países.

Tabla 39

Grupo Proceso migratorio. Carrera delictiva

Variables	Categorías	Vivía en España	No vivía en España	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Tipo de delito (C4)	Salud Pública	60	53	6,442	1	$p\leq 0,01$
	Otro	27	7			
Veces que ha estado en prisión (C9)	Una vez	85	61	2,194	2	$p\leq 0,33$
	Dos veces	5	1			
	Tres veces	1	0			
Ha sido trasladada (C13)	Sí	42	34	,792	1	$p\leq 0,37$
	No	49	28			

g) Proceso migratorio. Vida en prisión

Las visitas en prisión, en este caso, sí que presentan diferencias significativas ($\chi^2= 20,764$, $p\leq 0,00$). Como era de esperar, las mujeres que ya vivían en este país reciben más visitas que las que llegaron y fueron detenidas (ver Tabla 40).

Al analizar las diferencias entre el proyecto migratorio y la relación con los funcionarios de la prisión, aunque la media es un poco más alta cuando se trata de mujeres con residencia en España, no se encuentran diferencias significativas (K-W= ,003, $p\leq 0,95$).

Igualmente, la relación con las compañeras tampoco representa diferencias significativas en cuanto al proyecto migratorio (K-W= ,137, $p\leq 0,71$). Aun así, mientras las que vivían aquí se encuentran en el rango “buena-muy buena” ($\bar{x}=4,02$), las que no residían en el país están por debajo de la “buena relación” ($\bar{x}=3,97$), aunque, como podemos constatar, las medias son muy cercanas.

Tabla 40*Grupo Proceso migratorio. Vida en prisión*

Variables	Categorías	Vivía en España	No vivía en España	Chi - cuadrado			Kolmogorov-Smirnov		Kruskal – Wallis	
				χ^2	gl	Sig.	K-S	Sig.	K-W	Sig.
Le visitan en prisión (V1)	Sí	69	29	20,764	7	$p \leq 0,00$				
	No	22	33							
Relación con los funcionarios (V2)	No existe relación	$\bar{x} = 3,97$	$\bar{x} = 3,82$				4,584	0,00	,003	$p \leq 0,95$
	Muy mala									
	Mala									
	Buena									
	Muy buena									
Relación con sus compañeras (V3)	No existe relación	$\bar{x} = 4,02$	$\bar{x} = 3,97$				4,649	0,00	,137	$p \leq 0,71$
	Muy mala									
	Mala									
	Buena									
	Muy buena									

Una vez cruzadas las diferentes variables con el proyecto migratorio de las mujeres de la muestra podemos constatar que existen diferencias significativas en cuanto al área geográfica de procedencia, siendo, las de América del Sur las que ya vivían, predominantemente, en nuestro país antes de entrar en prisión. Además, las que residían aquí cuentan con sus hijos en el país de destino y no estudiaban al ser detenidas. Por su parte, el tipo de delito también presenta una relación no provocada por el azar con el proyecto migratorio de forma que aquellas que no vivían en España se caracterizan por haber cometido, de forma casi exclusiva, delitos contra la salud pública.

4. Grupo Carrera delictiva

a) Carrera delictiva. Perfil individual

El área geográfica no presenta diferencias significativas cuando se trata de analizar la carrera delictiva de las internas ($\chi^2 = 4,397$, $p \leq 0,49$) (Tabla 41). Tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a la edad ($\chi^2 = 7,346$, $p \leq 0,11$).

Sin embargo, el estado civil sí que presenta diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2 = 14,797$, $p \leq 0,00$), ya que ninguna de las que ha estado en prisión con anterioridad se encuentra casada en la actualidad, viviendo en pareja, casada o viuda. Estos tres grupos representan prácticamente el 50% de las mujeres que no habían estado antes en un centro penitenciario.

Aquellas que no son primarias aseguran que sus parejas no han pasado por estos centros, frente al segundo colectivo que está más repartido. No obstante, la representación es muy baja y las diferencias no son significativas ($\chi^2=,556$, $p\leq 0,75$).

Por su parte, el 100% de las mujeres que dicen haber estado ya antes en prisión tienen hijos, mientras que, este porcentaje se reduce al 76% en el grupo de primarias ($\chi^2=,980$, $p\leq 0,32$). Además, en cuanto a los hermanos, tampoco se presentan diferencias significativas ($\chi^2=,000$, $p\leq 1,00$).

Tabla 41

Grupo Carrera delictiva. Perfil individual

Variables	Categorías	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Área geográfica (I2)	Europa	1	43	4,397	5	$p\leq 0,49$
	América del Norte	0	3			
	América del Sur	4	84			
	América Central	0	4			
	Asia	0	1			
	África	2	11			
Edad (I3)	Menor de 25 – 25 años	1	26	7,346	4	$p\leq 0,11$
	Entre 26 y 36 años	1	65			
	Entre 37 y 47 años	2	33			
	Entre 48 y 58 años	3	15			
	Mayor de 58 años	0	1			
Estado civil (I4)	Soltera	3	60	14,797	4	$p\leq 0,00$
	Casada	0	34			
	Viuda	0	10			
	Separada/divorciada	4	15			
	Vive en pareja	0	24			
Pareja en prisión (I5)	Sí, en una prisión española	0	29	,556	2	$p\leq 0,75$
	No, pero ha estado con anterioridad	0	4			
	No, nunca ha estado en prisión	1	59			
Tiene hijos (I6)	Sí	7	111	,980	1	$p\leq 0,32$
	No	0	34			
Tiene hermanos (I10)	Sí	6	133	,000	1	$p\leq 1,00$
	No	1	12			

b) Carrera delictiva. Proyecto migratorio

No encontramos diferencias significativas al cruzar si vivía o no en España y su trayectoria en prisión ($\chi^2= 1,110$, $p\leq 0,29$). Aun así, la relación es mayor cuando se trata de aquellas que han estado antes en prisión y vivían en este país (Tabla 42).

Mientras que el total de las mujeres que ya habían estado en un centro penitenciario asegura haber venido a España por motivos económicos, estos motivos únicamente representan el 60% de las que no habían estado internas anteriormente ($\chi^2= 3,791$, $p\leq 0,28$). Además, las que ya habían pasado por el sistema penitenciario, llevan 10 o más años viviendo en España mientras que en el segundo grupo, las que llevan tanto tiempo en el país representan el 50%.

Entre las que ya habían estado en prisión prevalece la afirmación de que ya tenían amigos antes de su llegada a España; sin embargo, para las que no habían estado, sobresalen los familiares ($\chi^2= 3,794$, $p\leq 0,28$).

La última cuestión sí que presenta diferencias significativas ($\chi^2= 17,243$, $p\leq 0,00$), y podemos afirmar que los hijos de las extranjeras primarias están, en su mayoría, en el país de origen.

Tabla 42

Grupo Carrera delictiva. Proyecto migratorio

Variables	Categorías	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Vivía en España (M1)	Sí	6	85	1,110	1	$p\leq 0,29$
	No	1	61			
Motivo para venir a España (M2)	Económicos	6	50	3,791	3	$p\leq 0,28$
	Reagrupación	0	21			
	Motivos políticos de su país	0	2			
	Otros	0	10			
Años viviendo en España (M4)	Menos de 1 año	0	4	5,881	4	$p\leq 0,20$
	Entre 1 y 3 años	0	5			
	Entre 4 y 6 años	0	22			
	Entre 7 y 9 años	0	12			
	10 años o más	6	41			
Tenía familiares o amigos antes de su llegada (M6)	Sí, familiares	2	38	3,794	3	$p\leq 0,28$
	Sí, amigos	3	16			
	Sí, familiares y amigos	0	14			
	No	1	17			
Hijos en España o país de origen (M10)	España	1	28	17,243	4	$p\leq 0,00$
	País de origen	2	67			
	España y país de origen	2	11			
	Otro país	2	2			
	Otro país y país de origen	0	1			

c) Carrera delictiva. Perfil escolar

En relación al perfil escolar y su cruce con la carrera delictiva, ninguna de las variables analizadas presenta diferencias estadísticamente significativas (Tabla 43). Pero, podemos observar que un mayor porcentaje de mujeres que no han estado en prisión anteriormente ha ido a la escuela ($\chi^2= 1,002$, $p\leq 0,31$). Además, cuando nos centramos en el nivel de estudios, un 14% de las reincidentes no tiene estudios frente al 3% de las primarias ($\chi^2= 3,993$, $p\leq 0,31$).

Las diferencias en cuanto a si estudiaban al ser detenidas ($\chi^2= ,038$, $p\leq 0,84$) y en la actualidad ($\chi^2= ,000$, $p\leq 1,00$) tampoco son resaltables, ya que las frecuencias están muy próximas.

Tabla 43*Grupo Carrera delictiva. Perfil escolar*

Variables	Categorías	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha ido a la escuela (E1)	Sí	6	142	1,002	1	$p\leq 0,31$
	No	1	2			
Nivel de estudios (E6)	No tiene estudios	1	4	3,993	4	$p\leq 0,31$
	Estudios primarios	2	23			
	Estudios secundarios	2	74			
	Formación Profesional	1	23			
	Estudios universitarios	1	19			
Estudiaba al ser detenida (E9)	Sí	0	14	,038	1	$p\leq 0,84$
	No	7	131			
Estudia en la actualidad (E10)	Sí	2	47	,000	1	$p\leq 1,00$
	No	5	98			

d) Carrera delictiva. Perfil laboral

En la misma línea de las variables anteriores contrastadas con la carrera delictiva, no se presentan diferencias significativas cuando se trata del perfil laboral (Tabla 44). Así, tras analizar si han trabajado fuera de casa ($\chi^2= ,000$, $p\leq 1,00$) podemos concluir que no existen diferencias significativas entre la carrera delictiva y si ha trabajado o no fuera de casa. Por otra parte, el porcentaje de las que sí tienen trabajo en el centro es mayor entre las reincidentes ($\chi^2= 1,583$, $p\leq 0,45$).

No encontramos, tampoco, diferencias significativas en cuestiones como el envío de dinero a sus familiares ($\chi^2 = ,000$, $p \leq 1,00$) o la formación laboral en prisión ($\chi^2 = ,337$, $p \leq 0,56$).

Tabla 44

Grupo Carrera delictiva. Perfil laboral

Variables	Categorías	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Ha trabajado fuera de casa (L1)	Sí	7	135	,000	1	$p \leq 1,00$
	No	0	9			
Trabajo en prisión (L8)	Sí	5	69	1,583	2	$p \leq 0,45$
	No	2	72			
	Antes sí, ahora no	0	4			
Envía dinero a su familia (L9)	Sí	1	28	,000	1	$p \leq 1,00$
	No	6	118			
Formación laboral en prisión (L10)	Sí	5	77	,337	1	$p \leq 0,56$
	No	2	69			

e) Carrera delictiva. Consumo de drogas

Aunque no encontramos diferencias significativas, las que no han estado antes en prisión aseguran, en mayor medida que en el caso opuesto, no consumir drogas ($\chi^2 = ,451$, $p \leq 0,50$) (ver Tabla 45).

Tabla 45

Grupo Carrera delictiva. Consumo de drogas

Variables	Categorías	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Consumía drogas antes de entrar en prisión (D1)	Sí	2	18	,451	1	$p \leq 0,50$
	No	5	128			

f) Carrera delictiva. Carrera delictiva

Las primarias se caracterizan por cometer delitos contra la salud pública, mientras que las reincidentes, representan poco más del 50% del total ($\chi^2 = ,418$, $p \leq 0,65$) (Tabla 46).

Por otro lado, los traslados entre centros no se relacionan con el hecho de haber estado o no con anterioridad en prisión ($\chi^2 = ,000$, $p \leq 0,98$).

Tabla 46*Grupo Carrera delictiva. Carrera delictiva*

Variables	Categorías	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión	Chi - cuadrado		
				χ^2	gl	Sig.
Tipo de delito (C4)	Salud Pública	4	109	,655	1	p≤ 0,41
	Otro	3	31			
Ha sido trasladada (C13)	Sí	4	72	,000	1	p≤ 0,98
	No	3	74			

g) Carrera delictiva. Vida en prisión

Reciben más visitas las que están en prisión por primera vez, pero las diferencias no son estadísticamente significativas ($\chi^2= 5,290$, $p\leq 0,62$). Aunque tampoco son significativas las diferencias entre los dos grupos respecto de la relación con los funcionarios (K-W= ,315, $p\leq 0,57$) y con las compañeras (K-W= ,002, $p\leq 0,96$), sí que podemos ver que las que ya habían entrado en el sistema penitenciario aseguran tener mejor relación en ambos casos (Tabla 47).

Tabla 47*Grupo Carrera delictiva. Vida en prisión*

Variables	Categorías	Ha estado antes en prisión	No ha estado antes en prisión	Chi - cuadrado			Kolmogorov-Smirnov		Kruskal – Wallis	
				χ^2	gl	Sig.	K-S	Sig.	K-W	Sig.
Le visitan en prisión (V1)	Sí	3	95	5,290	7	p≤ 0,62				
	No	4	51							
Relación con los funcionarios (V2)	No existe relación	$\bar{x}= 4,29$	$\bar{x}=3,89$				4,584	p≤ 0,00	,315	p≤ 0,57
	Muy mala									
	Mala									
	Buena									
	Muy buena									
Relación con sus compañeras (V3)	No existe relación	$\bar{x}= 4,14$	$\bar{x}= 3,99$				4,649	p≤ 0,00	,002	p≤ 0,96
	Muy mala									
	Mala									
	Buena									
	Muy buena									

En este último apartado referente a la carrera delictiva de las mujeres encontramos diferencias reseñables en cuanto al estado civil y al paradero de sus hijos. De este modo, aquellas que han estado antes en prisión son solteras o separadas/divorciadas mientras que las primarias se caracterizan por estar, en su

mayoría, solteras y casadas. Además, cabe decir que aquellas que se encuentran en prisión por primera vez tienen a sus hijos, de forma predominante, en el país de origen.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Comenzamos este último apartado tratando de sintetizar los resultados obtenidos en la investigación que hemos llevado a cabo. Es momento de centrar nuestra atención en aquello que ha resultado más representativo e importante de acuerdo a los objetivos que nos han guiado a lo largo del trabajo y teniendo presente que el colectivo de mujeres extranjeras que se encuentran en prisión ha sido nuestro principal foco de estudio.

Una vez realizado el recorrido por el marco teórico en la primera parte, creemos haber estudiado una serie de aspectos que, además de proporcionarnos un amplio conocimiento sobre el colectivo en el que nos centramos, nos han permitido constatar que esta población es muy heterogénea con características diferenciadas respecto de las mujeres autóctonas a las que hay que atender a la hora de diseñar una intervención socioeducativa que contribuya a su inserción social.

En esta línea, comprobamos que a lo largo de la historia se ha producido un trato diferencial de la delincuencia en función del género, de forma que las mujeres han estado en un segundo plano en la normativa que ha regido el sistema penitenciario. Aunque es cierto que la atención al colectivo femenino ha aumentado en los últimos años gracias a diferentes políticas de igualdad que se han hecho eco en la sociedad, todavía queda mucho camino por andar, prueba de ello es que únicamente existan, en nuestro sistema, tres centros penitenciarios exclusivos femeninos, lo que obliga a activar módulos de mujeres en prisiones masculinas.

Las diferentes teorías que han tratado de explicar la delincuencia lo han hecho desde un punto de vista antropocéntrico, centradas en el hombre, extrapolando el discurso al colectivo femenino. Así, las teorías de la delincuencia masculina se aplican, de igual modo, a la femenina, sin tener en cuenta sus particularidades. Históricamente, la delincuencia de las mujeres ha sido asociada a una desviación de su rol tradicional, entendiéndose, el delito, como propiamente masculino. Sin embargo, estamos inmersos en un contexto en donde la presencia de mujeres en contacto con el sistema judicial, penal y penitenciario es cada vez mayor.

Ello nos lleva a analizar la triple discriminación que se produce en el sistema penitenciario por el hecho de ser mujer, extranjera y haber cometido un delito tipificado como tal por el código penal. Comprobamos cómo la feminización de la inmigración

que se explica, especialmente, por los cambios que se producen en las sociedades receptoras, conlleva que cada vez sean más las mujeres que toman la iniciativa de iniciar el proceso migratorio de forma autónoma, al contrario que en épocas pasadas, cuando emigraban a través de la reagrupación.

La repercusión que ha tenido la inmigración en nuestro país se ha visto reflejada en el sistema penitenciario, dándose una sobrerrepresentación de las personas extranjeras en prisión. Así, si el 10% de la población que vive en España son extranjeros, este porcentaje aumenta hasta el 30% en el caso de las prisiones. Esto ha provocado una asociación entre inmigración y delincuencia, alimentada, en muchas ocasiones, por el tratamiento del asunto en los medios de comunicación, criminalizando a determinados colectivos. Es innegable que en las prisiones existe un porcentaje de extranjeros, en general, y mujeres extranjeras, en particular (30%), muy elevado.

Sin embargo, esta realidad no supone que los extranjeros delincan en mayor medida que los nacionales, sino que, son los factores ambientales y personales los que determinan esta situación. Entre ellos, podemos destacar la tendencia demográfica en España, que apunta a un descenso del sector poblacional joven, de modo que los españoles en edad de delinquir cada vez son menos, mientras que son precisamente estas edades las que predominan entre las personas extranjeras.

Por otra parte, la invisibilidad que ha caracterizado al colectivo femenino en prisión, ha tratado de justificarse por su baja representatividad, hecho que ha provocado que la investigación no lo haya tenido en cuenta en los estudios realizados desde las Ciencias Sociales, y menos aún, desde la Pedagogía. Si bien es cierto que en los últimos tiempos ha sido objeto de interés creciente, este interés se reduce si nos ocupamos de las mujeres extranjeras.

Centrándonos ya en la cárcel y su finalidad de reeducación y reinserción social, comprobamos, por un lado, que las posibilidades de intervención socioeducativa se reducen si hablamos de mujeres, cuanto más si son extranjeras. El hecho de que las mujeres tengan que convivir, en la mayor parte de los casos, en un único módulo sin tener en cuenta sus características (como es el caso de los varones) limita de forma considerable las opciones de trabajo con ellas. Por otro lado, aunque la educación tiene un papel primordial en el tratamiento si seguimos los parámetros constitucionales, en la práctica el mayor peso lo asumen los profesionales de la Psicología o el Derecho, siendo residual la figura del pedagogo en el tratamiento penitenciario. El principio de

individualización que se propone desde el modelo de tratamiento educativo-comunitario o de reintegración requiere que los profesionales de la educación sean valorados y se configuren como pilar fundamental del proceso.

Aunque cada vez es mayor la colaboración de diferentes asociaciones, ONGs o fundaciones para conseguir el fin último de la prisión, realmente ésta se asienta como un “aparte” de la sociedad civil, lo que imposibilita que pueda aprovecharse del potencial educativo que tiene la comunidad. Así, la presencia del tercer sector es un gran apoyo para la reeducación y reinserción social, aunque debemos tener claro que en muchos casos, no disponen de personal cualificado y formado para esta tarea.

Diversos metaanálisis han demostrado la eficacia de determinados programas en la intervención educativa con delincuentes, por lo que es necesario basarse en los principios de esta intervención eficaz para sentar los cimientos de programas socioeducativos que contribuyan a la reinserción de los internos/as, justamente, en estos términos, la investigación demuestra la eficacia del Programa de Pensamiento Prosocial. En este sentido, después del análisis de los principales referentes teóricos que sustentan nuestra investigación, nos adentramos en el trabajo que hemos realizado en siete cárceles del país, tres centros exclusivos (Alcalá de Guadaíra, Brieva y Madrid I) y cuatro módulos de mujeres (Teixeiro, A Lama, Bonxe y Pereiro de Aguiar) para estudiar el perfil socioeducativo de las mujeres extranjeras que cumplen condena así como el papel de la educación en la gestión del tratamiento penitenciario.

En primer lugar, debemos afirmar que los centros penitenciarios se encuentran a una distancia considerable de núcleos poblacionales, lo que separa, una vez más, a las prisiones de la comunidad en la que están inmersas. Esta realidad complica las visitas de sus allegados ya que las comunicaciones no son sencillas, pero también la necesaria relación entre centro y comunidad que preconiza el modelo educativo-comunitario.

Los centros exclusivos son centros antiguos, y que incluso no fueron pensados para albergar a este tipo de población. Así, el último centro de mujeres se construye hace más de 20 años, lo que muestra que las mujeres presas continúan siendo un colectivo invisible y la Administración Penitenciaria no ha tenido en cuenta una realidad que ha ido en aumento. Esta situación provoca que muchas de ellas cumplan condena en módulos específicos en cárceles masculinas. Así, la clasificación penitenciaria se complica cuando todas ellas se encuentran en el mismo módulo, ya que no se siguen los principios que la legislación recoge de clasificación conforme a las características

personales y tipología delictiva. Ello explica, por ejemplo, la situación de los módulos de semirespeto, donde en un mismo espacio unas mujeres deben cumplir unas normas a las que no están sujetas otras, lo que, evidentemente, genera conflictos de convivencia, y la discutida viabilidad de estos.

Por otro lado, aunque las mujeres pueden acceder a todos los servicios de los que disponen los centros, para las que residen en módulos específicos las posibilidades se reducen, lo que afecta también a su participación en programas de tratamiento. Podemos intuir que, cumplir condena en un centro exclusivo de mujeres ofrecerá a éstas más oportunidades y servicios que tengan en cuenta sus particularidades.

En este contexto, la educación sigue vinculándose, en muchos casos, única y exclusivamente, a la escuela, buena prueba de ello es que los subdirectores de tratamiento no consideran otro personal educativo más allá de los maestros y profesores, que cumplen su función en la escuela del centro y que no es personal de Instituciones Penitenciarias.

En este sentido, los programas ofertados a las mujeres se pueden clasificar en cinco grupos principalmente. El primero, recoge todas las iniciativas y actividades para trabajar la violencia de género, donde las mujeres se presentan como víctimas; el segundo, se centra en las drogodependencias, en el que el colectivo de extranjeras, como sabemos, poco participa ya que mayoritariamente no son consumidoras; el tercero, agrupa a los de inserción laboral, que en muchos casos, especialmente en los módulos, refuerzan el rol tradicional de la mujer; el cuarto grupo es aquel que se dedica al ocio, focalizado, sobre todo, en el deporte; y, el último, será el que tiene que ver con la educación reglada, desarrollada fundamentalmente en la escuela del centro. Debemos resaltar que en ninguno de los centros estudiados se está aplicando un programa con los fundamentos del Programa de Competencia Prosocial. Complementariamente, desde instituciones penitenciarias se propone el Programa de Intervención con Internos Extranjeros como única actuación específica con este colectivo, que se divide en tres bloques temáticos: intervención educativa, intervención multicultural y educación en valores y habilidades cognitivas. Partimos de que la prisión es un espacio multicultural en el que hay que gestionar la diversidad étnico-cultural. Pero además, estas personas se insertarán en una sociedad caracterizada por esos mismos rasgos de diversidad. Sin embargo, instituciones penitenciarias asume una perspectiva reduccionista al centrar el tratamiento de la diversidad únicamente en los extranjeros. En definitiva, las mujeres

extranjeras son consideradas como un grupo con características similares a las autóctonas y no se atienden sus necesidades específicas.

Sin embargo, las extranjeras que ocupan estos espacios constituyen un colectivo con identidad propia que necesita intervenciones centradas en sus particularidades, ya que su perfil difiere del de las mujeres autóctonas. Se trata de mujeres jóvenes procedentes de América del Sur con un nivel educativo medio-alto y que son madres solteras. En este grupo, nos topamos ante dos situaciones diferenciadas: aquellas que contaban con un proyecto migratorio en España, que emigraron principalmente, por motivos económicos; y las que son detenidas en la frontera y no presentan un proyecto migratorio como tal. A las primeras las podemos identificar como propiamente inmigrantes, mientras que a las segundas las clasificamos como extranjeras.

Entre las que ya vivían aquí sobresalen las que tomaron la iniciativa de emigrar entre el año 1995 y el 2000; es decir, llevan más de 10 años de residencia en el país. Escogen grandes ciudades para fijar su residencia y cuentan en el momento de su llegada con familiares en España. Llegan con visado de turista y sus hijos se encuentran, fundamentalmente, en el país de origen.

Todas ellas, se caracterizan por una temprana escolarización y por asistir de forma regular a la escuela, que es, fundamentalmente, pública. Sus padres tienen un nivel de estudios ligeramente más alto que las madres pero son más desconocedoras de los estudios de sus progenitores varones, lo que nos podría indicar que muchas de ellas no han convivido con ambos. Conocen el idioma español y aunque no cursaban estudios al ser detenidas, sí se animan a retomarlos cuando entran en prisión.

En cuanto a su perfil laboral, cabe decir que prácticamente la totalidad trabajaba antes de entrar en prisión, sobretudo en la hostelería, el comercio y el servicio doméstico; es decir, los sectores más propensos a la economía sumergida. En este sentido, la mitad de estas mujeres ha realizado algún curso de formación laboral en el centro penitenciario, pero no envían dinero a su familia, lo cual se explica porque las mujeres tienen escasas posibilidades de acceder a trabajos remunerados en el interior.

Cometen delitos contra la salud pública y cumplen condenas de entre 6 años y 1 día y 9 años, que se consideran, en muchos casos, desproporcionadas, si tenemos en cuenta que los delitos no son de naturaleza violenta y ellas carecen de carrera delictiva. Además, no son consumidoras de drogas, aspecto importante teniendo en cuenta la

dificultad que esto supone para la reinserción social. Se trata, pues, de mujeres primarias, para las que es la primera vez que pasan por un centro penitenciario, no cuentan con otras condenas pendientes y no han tenido contacto, con anterioridad, con ninguna institución similar cuando eran menores.

Aunque reciben visitas, son, principalmente, de carácter puntual ya que se encuentran lejos de sus familias y amigos, lo que nos sitúa ante la falta de arraigo social y familiar. Justamente, reunirse con sus familiares y el deseo de encontrar un empleo, son los principales proyectos que les motivan una vez salgan de prisión.

Las mujeres que más visitas reciben se caracterizan por ser de América del Sur y contar con un proyecto migratorio en nuestro país, proyecto para el que, además, fueron ayudadas por familiares o amigos, y tienen aquí a sus hijos/as. Esto significa que un número importante de mujeres solo pueden mantener contacto con sus familias a través del correo postal o del teléfono, pero no reciben apoyo directo de familia o amigos, lo que puede hacer más difícil su estancia en prisión.

Son también las latinoamericanas las que tienen más edad, son madres y las que tienen parejas sin perfil delictivo. Así mismo, aunque vinieron a España por motivos económicos, ya tenían familiares o amigos antes de su llegada, y cuentan con un mayor nivel educativo, aunque no estudian en la cárcel. Se caracterizan por haber trabajado en mayor medida en el exterior y haber cometido, casi exclusivamente, delitos contra la salud pública. Tampoco han sido trasladadas de cárcel, lo que también nos indica que son mujeres con un bajo nivel de conflictividad y que se adaptan al sistema penitenciario.

Las que ya vivían en España antes de ser detenidas procedían, especialmente, de América del Sur y África y sus hijos/as viven aquí con ellas. No estudiaban sino que estaban trabajando y la tipología delictiva es más dispar en este caso que entre las que no residían en este país, que se caracterizan por la comisión de delitos contra la salud pública.

Las mujeres reincidentes están solteras o separadas/divorciadas, situación que, en buena medida, puede estar provocada por sus ingresos en prisión. Al mismo tiempo, las primarias, tienen a sus hijos viviendo en el país de origen con su familia.

Son pues, dos grupos de mujeres extranjeras con características diferenciadas, en cuanto a carrera y tipología delictiva, arraigo en España, estudios y vida en prisión, lo

que debería ser considerado a efectos del tratamiento penitenciario e incluso de la adopción de medidas alternativas al internamiento, pero también con perfiles distintos al de las autóctonas, sobre todo en lo que respecta al consumo de drogas.

Tras plantear las principales cuestiones de esta investigación, creemos estar en condiciones de presentar, coherentemente con los objetivos y las hipótesis expuestas algunas conclusiones sobre la temática estudiada. Así, podemos confirmar las hipótesis señaladas en el capítulo quinto del trabajo:

- La presencia de mujeres en prisión, y más concretamente, de extranjeras, es una realidad que se ha visto aumentada en los últimos años pero aún no ha sido objeto de estudio en profundidad por lo que es preciso desarrollar más trabajos científicos rigurosos centrados en este colectivo equiparándose a aquellos que se realizan si tenemos en cuenta la delincuencia masculina.

- El perfil individual y social de las mujeres extranjeras internas en centros penitenciarios difiere, en gran medida, del de las mujeres autóctonas que se encuentran en la misma situación. Y entre las extranjeras, también es fácil identificar dos grupos, aquellas que ya vivían en nuestro país, y las que no cuentan con un proyecto migratorio.

- El perfil socioeducativo de las mujeres de la muestra es diferente en función de su procedencia, sin embargo, no se presentan distinciones en cuanto a la carrera delictiva ya que esta es prácticamente inexistente. En todo caso, el origen de la carrera delictiva se relaciona significativamente con las circunstancias del proceso migratorio de estas mujeres, de forma que en función de si vivían o no en España el tipo de delito varía. De este modo, aquellas que fueron detenidas al llegar a la frontera, lo hicieron por delitos contra la salud pública casi exclusivamente.

- Las mujeres extranjeras internas en centros penitenciarios carecen de una red de apoyo social que pueda contribuir al proceso de inserción social; de forma circunstancial reciben visitas puntuales en el centro por parte de familiares, amigos u organizaciones.

- La gestión del multiculturalismo en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias carece de sistematización. El diseño de actuaciones centradas en los extranjeros como colectivo sobrerrepresentado en estos espacios y, mujeres extranjeras en particular, requiere de una mayor atención por parte de la Administración y de los profesionales, ampliando esta intervención a los

autóctonos ya que se incorporarán a una sociedad multicultural. La intervención ofrece muchas más posibilidades cuando se enmarca en un centro exclusivo para mujeres que cuando es un módulo en un centro masculino.

- Es preciso poner en marcha aquellos programas que han demostrado su eficacia en este contexto, como es el caso del Programa de Pensamiento Prosocial, rigurosamente evaluado con diferentes colectivos.

- La intervención penitenciaria debe considerar las particularidades de aquellos colectivos minoritarios que presentan culturas diferentes para poder actuar teniendo en cuenta sus características y necesidades.

- Se presenta necesario avanzar en cuanto a la formación específica de la gestión multicultural de los educadores que trabajan en el contexto penitenciario así como valorizar la figura del pedagogo como pieza clave en esta realidad.

Una vez señaladas estas consideraciones finales es momento de hablar en prospectiva. Debemos tener en cuenta, en primera instancia, que las mujeres extranjeras cuando finalizan el cumplimiento de su condena se enfrentan a dos situaciones distintas. Por un lado, aquellas que tienen su situación administrativa regularizada en nuestro país podrán continuar con su proyecto de vida aquí; y, por otro, las que no tienen permiso de residencia serán objeto de expulsión. Así pues, con el objeto de diseñar una propuesta de intervención, debemos también atender a esta doble realidad de futuro.

Así, consideramos que es necesario trabajar fundamentalmente en seis ámbitos para lograr la reeducación y reinserción social de las mujeres extranjeras internas en centros penitenciarios. Ámbitos que no pueden ser vistos como compartimentos estancos sino de forma integral.

La primera línea de intervención, que se configura como base de las siguientes, centra su foco en el desarrollo de la competencia social. Como hemos relatado en el capítulo cuarto, el Programa de Pensamiento Prosocial tiene buenos resultados con diferentes grupos de delincuentes. En este sentido, se debería trabajar, por un lado, la competencia social, es decir, desarrollar una serie de recursos y habilidades personales que permitan al individuo relacionarse de forma efectiva con los demás; y, por otro, el comportamiento prosocial, es decir, actuar teniendo en cuenta al otro. Se trata de aumentar las habilidades sociales y las cognitivas que afectan a la esfera emocional, básicas para el proceso de integración social. Es importante trazar una trayectoria de

éxito en su vida, identificar las circunstancias que le ayudan a transformar una situación adversa de partida en otra de crecimiento personal y analizar cuáles son los factores que le separan de ésta. Debemos proporcionar a las internas una serie de habilidades necesarias para enfrentarse a los problemas con sus propios recursos, consiguiendo un mejor ajuste personal y social y evitando, de este modo, los problemas derivados de los conflictos en sus relaciones sociales. Entendemos que sobre este pilar se deben ir articulando las demás vías de intervención, si a lo que aspiramos es al éxito del tratamiento penitenciario.

La segunda de ellas tiene que ver con las destrezas digitales, dado que una de las principales características de este mundo global es el rápido avance de las tecnologías que impregnan la vida laboral, educativa, cultural y económica de una sociedad. Vivimos inmersos en un desarrollo tecnológico tan potente que las personas que no estén en contacto con este desarrollo son excluidas socialmente. Permanecer ajenos a estas tecnologías durante años, que por motivos de seguridad no son accesibles en la cárcel, supone un proceso de resocialización complicado para que estas mujeres aprendan a manejarse en una sociedad digital. Se trata de tomar medidas que posibiliten el mantenimiento de los vínculos con la sociedad, tratando de minimizar los efectos desocializadores del internamiento en prisión, es decir, evitar la ruptura con el medio social. Un ejemplo a seguir son los módulos de inclusión social para jóvenes que existen en las cárceles radicadas en Galicia donde se les enseña, previa salida en tercer grado, las habilidades y destrezas básicas digitales. Pero también este debería ser un programa a desarrollar en los CIS vinculándolo a la búsqueda de empleo.

La tercera línea de trabajo debería ser la orientación laboral. Aunque se llevan a cabo distintas iniciativas de inserción sociolaboral dentro del contexto penitenciario, estas actuaciones presentan carencias evidentes como la escasa oferta o el refuerzo de los roles tradicionales de género. Es por ello por lo que se presenta necesario diseñar un programa adaptado a las demandas de las mujeres y a las necesidades que existen en el exterior, es decir, a sus posibles nichos de empleo. Además, esta formación debe ampliarse a la orientación laboral, analizando herramientas fundamentales para la búsqueda de empleo y el desarrollo de competencias transversales primordiales para la inserción laboral.

En cuarto lugar debemos señalar la importancia de la gestión socioeducativa de la diversidad étnico-cultural, que implica no solo la consideración de las personas de

procedencia extranjera, sino también la gestión de la cárcel como espacio multicultural y la preparación de todos los internos para la inserción en una sociedad caracterizada por la diversidad. De este modo, es necesario trabajar asumiendo los parámetros de la educación intercultural como una educación ligada a procesos de comunicación, interacción y negociación y el enriquecimiento entre formas culturales diversas (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2003b).

Como hemos señalado, la mayor parte de estas mujeres han sido madres ya muy jóvenes por lo que será necesario atender a su perspectiva maternal, impulsando un programa de educación familiar. Aunque es cierto que existen iniciativas, evidenciamos que no se llevan a cabo programas integrales, de forma sistemática, que aborden aspectos como la educación para la salud, planificación familiar, educación sexual, prevención de la violencia, formación de padres y madres en estilos parentales u orientación familiar. El programa de Educación Familiar les permitiría afrontar las implicaciones familiares que conlleva su entrada en un centro penitenciario y cómo pueden educar a sus hijos en la distancia.

Además, de forma complementaria, siguiendo los presupuestos del modelo educativo-comunitario, la comunidad debe tener un papel activo en el proceso de reinserción, tanto en el momento en el que las mujeres cumplen condena como una vez salen en libertad ya que se convierte en la vía para abrir nuevas posibilidades de futuro. Justamente, esta perspectiva comunitaria es uno de los rasgos distintivos de los programas que han demostrado ser eficaces. Debemos tener en cuenta medidas de base comunitaria, para dar apoyo a las mujeres y reducir la reincidencia, fomentando una mayor participación en las iniciativas sociales para atajar conductas proclives a la criminalidad. Es importante que las medidas tomadas en este contexto sean duraderas y responsables, siguiendo prácticas basadas en datos objetivos. Las organizaciones cívicas y las comunidades locales son un importante recurso para aumentar la participación de la comunidad en la prevención del delito por lo que debe estimularse, configurándose como una parte esencial de un tratamiento eficaz. Si la comunidad es incluida en el proceso existirán más oportunidades de cambio de actitudes y conductas por lo que los enfoques comunitarios deben ser globales y equilibrados, siendo esencial que incluyan criterios de prevención, intervención y reinserción. Por lo tanto, el tratamiento debe iniciarse en el medio penitenciario, pero necesariamente debe culminar fuera de él. Es decir, el trabajo debe continuar en la comunidad.

En definitiva, creemos que hemos logrado nuestro objetivo principal, es decir, analizar las características socioeducativas de las mujeres extranjeras que se encuentran cumpliendo condena en el Sistema Penitenciario Español, para sentar las bases, con criterio científico, de una intervención centrada en sus necesidades y demandas. Pero con esta investigación también pretendemos visibilizar la realidad de las mujeres en instituciones penitenciarias y el papel que debe jugar la educación en este complejo contexto, reclamando que la intervención educativa eficaz es posible. Son muchas las vías a explorar en un campo olvidado por la investigación social en general y por la pedagógica en particular. Con humildad creemos haber contribuido a fortalecer el corpus de conocimientos pedagógicos que ayude a afrontar con más garantías el fin último de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social.







BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFÍA

- ACAIP. (2015). *Página web de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias*. Recuperado de www.acaip.es 23/04/2015.
- Adelantado, J., y Moreno, R. (2005). Ciudadanía y Estado del Bienestar: la inmigración femenina en España. En C. Solé, y L. Flaquer (Eds.), *El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes* (pp. 67-94). Madrid: Instituto de la Mujer-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Adler, F. (1975). *Sisters in Crime. The rise of the new female criminal*. New York: MacGraw Hill.
- Agnew, R. (2001). Building on the foundation of general strain theory: specifying the types of strain most likely to lead to crime and delinquency. *Journal of research in crime and delinquency*, 38(4), 319-361.
- Alba, J. L. (2008). *El tratamiento de los delincuentes juveniles en el marco de la actual Ley del Menor*. (Tesis doctoral). Valencia: Universidad de Valencia.
- Alba, J.L., Garrido, V., López-Latorre, M.J., Burgués, M., Alcázar, M., López Morales, J., Baró, B., y Chordi, F. (2005). El programa del pensamiento prosocial versión corta para jóvenes. En V. Garrido, y M. J. López-Latorre (Eds.). *Manual de Intervención Educativa en Readaptación Social (2)*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Alba, J.L., López-Latorre, M.J., Burgués, M., Alcázar, M., López Morales, J., Baró, B., y Chordi, F. (2006). *Generalització, Validesa i Seguiment del Programa del pensament prosocial*. Barcelona: Edicions del Departament de Justícia de Catalunya.
- Albert, M. (2006). *La Investigación Educativa: Claves Teóricas*. Madrid: Mc Graw-Hill.
- Almeda, E. (1999). *Passat i present de les presons de dones. Un estudi de cas al centre penitenciari de Brians*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Almeda, E. (2002). *Corregir y castigar. El ayer y el Hoy de las Carceles de Mujeres*. Barcelona: Bellaterra.
- Almeda, E. (2003). *Mujeres encarceladas*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Almeda, E. (2005a). Pasado y presente de las cárceles femeninas en España *Sociológica*, 6, 75-106.
- Almeda, E. (2005b). Las experiencias familiares de las mujeres encarceladas. El caso de Cataluña. En J. L. Segovia, E. Almeda, J. C. Ríos, C. Manzanos, y E. Barañí, *Las cárceles de la democracia. Del déficit de la ciudadanía a la producción del control* (pp. 305-337) Madrid: Ediciones Bajo Cero.

- Alvarado, R. (2012). *Perspectiva histórica y problemas actuales de la institución penitenciaria en España. Las mujeres encarceladas toman la palabra*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Alvazzi, A. (2010). Crime and criminal justice statistics challenges. En S. Harrendorf, M. Heiskanen, y S. Malby (Eds.), *International Statistics on Crime and justice* (pp. 167-179). Helsinki: Heuni-Undoc.
- Andrews, D. A., Zinger, I., Hoge, R. D., Bonta, J., Gendreau, P., y Cullen, F. T. (1990). Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis. *Criminology*, 28(3), 369-404.
- Annan, K. (2000). Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI. *Asamblea General de las Naciones Unidas. 23ª Sesión Especial de la Asamblea General " Mujeres 2000 "*. Nueva York: Inédito.
- Añanos, F.T. (Coord.) (2011). *Las mujeres en las prisiones. La educación social en contextos de riesgo y conflictos*. Barcelona: GEDISA
- Añanos, F. T., Fernández-Sánchez, M. P., y Llopis, J. J. (2013). Aproximación a los contextos en prisión: Una perspectiva socioeducativa. *Pedagogía Social*, 22, 13-28.
- Aranda, M. J. (2006a). Una aproximación práctica a la clasificación penitenciaria. *Revista de Estudios Penitenciarios*, 252, 37-77.
- Aranda, M. J. (2006b). *Reeducación y reinserción social. Tratamiento Penitenciario. Análisis teórico y aproximación práctica*. Accésit Premio Nacional Victoria Kent. Madrid: Ministerio del Interior.
- Arenal, C. (1865). *Cartas a los delincuentes*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/> 17/06/2013.
- Arenal, C. (1877). *Estudios Penitenciarios*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/> 12/05/2013.
- Arenal, C. (1899). *El visitador del preso*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/> 14/05/2013.
- Arias, F. (2006). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Valencia: Episteme.
- Armenta, F.J., y Rodríguez Ramírez, V. (2001). *Reglamento Penitenciario Comentado*. Sevilla: MAD.
- Armenta, F. J., y Rodríguez Ramírez, V. (2006). *Reglamento penitenciario comentado: análisis sistemático y recopilación de legislación*. Sevilla: Textos legales.

- Arnal, J., Del Rincón, D., y Latorre, A. (1994). *Investigación educativa. Fundamentos y metodología*. Barcelona: Labor.
- Aroca, C. (2010). *La violencia filio-parental: una aproximación a sus claves*. (Tesis doctoral). Valencia: Universidad de Valencia.
- Arribas, E. (2009). *El Régimen Cerrado en el Sistema Penitenciario Español*. Madrid: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
- Austin, R. L. (1981). *Liberation and female criminality in England and Wales*. Londres: The British Journal of Criminology.
- Austin, R. L. (1993). Recent trends in official male and female crime rates: the convergence controversy. *Journal of Criminal Justice*, 21, 457-466.
- Avilés, J. (2003). *Inmigración y Delincuencia*. Obtenido de Real Instituto El Cano de Estudios Internacionales y Estratégicas. Recuperado de <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/328/ARI-103-2003-E.pdf> 21/09/2014.
- Balch, R. (1975). The medical model of delinquency. *Crime and Delinquency*, 21(2) 116-130.
- Banckston, C. L. (1998). Youth gangs and the new second generation: A review essay. *Aggression and Violent Behavior*, 3(1), 35-45.
- Barbeito, I. (1991). *Cárceles y mujeres en el Siglo XVII*. Madrid: Castalia-Instituto de la Mujer.
- Bartolomé, G. R., Montañés, M., Rechea, C., y Montañés, J. (2009). Los Factores de Protección frente a la conducta antisocial: ¿Explican las diferencias en violencia entre chicas y chicos? *Revista Española de Investigación Criminológica*, 3(7), 1-15.
- Beccaria, C. (1984). *Dei delitti e delle pene / Cesare Beccaria ; a cura di Gianni Francioni; con Le edizioni italiane del Dei delitti e delle pene, di Luigi Firpo*. Milano: Mediobanca.
- Becerra, J. (2012). Las prisiones españolas vistas desde Europa. Un análisis comparado. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª Época, 7, 381-406.
- Belknap, J., y Holsinger, K. R. (2006). The Gendered Nature of Risk Factors for Delinquency. *Feminist Criminology*, 1(1), 48-71.
- Bell, B., y Machin, S. (2011). Immigration and Crime. En A. F. Constant, y K. F. Zimmermann (Eds.), *International Handbook on the Economics of Migration IZA Program Director of Migration (pp. 1-10)*. UK: Cheltenham.

- Bericat, E. (1998). *La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social*. Barcelona: Ariel.
- Bermejo, J. L. (1986). Tormentos, apremios, carceles y patíbulos a finales del Antiguo Regimen. *Anuario de Historia del Derecho Español*, 56, 683-727.
- Bernardo, J., y Calderero, J. (2000). *Aprendo a Investigar en Educación*. Madrid: RIALP.
- Besalú, X. (2002). *Diversidad cultural y educación*. Madrid: Síntesis.
- Bisquerra, R. (1989). *Métodos de investigación educativa*. Barcelona: CEAC.
- Bisquerra, R. (2004). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: La Muralla.
- Blanco García, A. I. (1990). *Bases para el establecimiento de un modelo de intervención diferencial en el campo de la delincuencia juvenil: una aproximación biográfica*. Madrid: Universidad Complutense.
- Bodelón, E. (2007). Mujer inmigrante y sistema penal en España. La construcción de la desigualdad de género en el sistema penal. En E. Alameda, y E. Bodelón (Coords), *Mujeres y castigo: un enfoque socio-jurídico y de género* (pp. 105-132). Madrid: Dykinson.
- Booth, J. A., Farrell, A., y Varano, S. (2008). Social Control, Serious Delinquency, and Risky Behavior. A Gendered Analysis. *Crime and Delinquency OnlineFirst*, 0, 1-34.
- Briseño, M. (2006). *Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión*. Ciudad de México: Inmujeres, UNDP.
- Burgess, E. W. (1979). La familia en una sociedad que cambia. En A. Etzioni (Coord.), *Los cambios sociales* (pp. 182- 188). México: Fondo de Cultura Económica.
- Burgos, F. (1996). Evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. *Anales de la Universidad de Cádiz*, 11, 253-266.
- Cabero, J., y Hernández, M.J. (1995). *Utilizando el vídeo para aprender. Una experiencia con los alumnos de magisterio*. Sevilla: Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla.
- Calhoun, G., Jurgens, J., y Chen, F. (1993). The neophyte female delinquent: A review of the literature. *Adolescence*, 28, 461-471.
- Camacho, J. (2004). *Estadística con SPSS para Windows. Versión 12*. Madrid: Ra-Ma.
- Canteras, A. (1990). *Delincuencia femenina en España*. Madrid: Ministerio de Justicia.
- Castles, S. (2000). *Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen*. Londres: Sage Publications.

- Castillo, J., y Ruiz, M. (2006). Mujer extranjera en la prisión española actual. En V. Ferrer, y E. Bosch (Eds.), *Los Feminismos como herramientas de cambio social* (pp. 236-276). Palma de Mallorca: Universidad de las Islas Baleares.
- Castillo, J., y Ruiz, M. (2007). Un reto educativo en el Siglo XXI: La educación de delincuentes dentro del ámbito penitenciario. Una perspectiva de géneros. *XXI, Revista de Educación*, 9, 301-314.
- Castillo, J., y Ruiz, M. (2009). Globalización, Delito y Género en España. En M. Jaime (Ed.), *Identidades Femeninas en un Mundo Plural* (pp. 143-150). Sevilla: Arcibel.
- Castillo, J., y Ruiz, M. (2010). Mujeres extranjeras en prisiones españolas. *Revista Internacional de Sociología*, 68(2), 473-498.
- Castro, M., y Ruiz, C. (2004). *Análisis y tratamiento de datos de investigación educativa*. Murcia: ICE de la Universidad de Murcia.
- Catan, L. (1988). *The Development of Young Children in HMP Mother and Baby Units (Working Papers In Psychology)*. Sussex: University of Sussex.
- Catan, L. (1992). Infants with Mothers in Prison. En R. Shaw (Ed.), *Prisoners' Children. What are the Issues?* (pp. 13-28). Londres: Routledge.
- Cea D'Ancona, M. (1996). *Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas de Investigación Social*. Madrid: Síntesis.
- Cecil, D. (2006). Ceguera de Género. La falta de consideración de las delincuentes femeninas por parte de la Criminología. En J. L. Guzmán, y A. Serrano Maíllo (Eds.), *Derecho Penal y Criminología como fundamentos de la política criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez* (pp. 171-183). Madrid: Dykinson.
- Cendón, J.M., Belinchón, E., y García Casado, H. (2011). *Módulos de Respeto. Manual de aplicación*. Madrid: Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica.
- Cerezo, A. I., y García España, E. (2007). *La prisión en España. Una perspectiva criminológica*. Granada: Comares.
- Cervelló, V. (2001). *Derecho penitenciario*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Cervelló, V. (2006). Las prisiones de mujeres desde una perspectiva de género. *Revista General de Derecho Penal Iustel*, 5, 1-27.
- Chesney-Lind, M., y Pasko, L. (2004). *The female offender. Girls, women, and crime*. Thousand Oaks: Sage.

- CIS. (2012). *Actitudes hacia la inmigración Estudio nº 2967*. Recuperado de http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2960_2979/2967/es2967mar.pdf 16/03/2013.
- Clemente, M. (1987). *La Delincuencia Femenina: Un enfoque psicosocial*. Madrid: UNED.
- Colectivo IOÉ. (1998). *Mujeres inmigrantes en España. Proyectos migratorios y trayectorias de género. Suplemento diciembre*. Madrid: OFRIM.
- Colectivo IOÉ. (2000). Panorámica de la inmigración en España. *Documentación Social*, 121, 73-91.
- Comisión de las Comunidades Europeas. (2006). *Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal. Plan de Acción de la Unión Europea 2006-2010*. Bruselas: Autor.
- Consejo General del Poder Judicial (2015). Página web del Consejo General del Poder Judicial. Recuperado de www.poderjudicial.es 28/01/2015.
- Corda, A. (2011). *Encarcelamiento por delitos relacionado con estupefacientes en Argentina*. Buenos Aires: Intercambios Asociación Civil, Universidad de Buenos Aires.
- Cowie, J., Cowie, V., y Slater, E. (1968). *Delinquency in Girls*. Londres: Heinemann.
- Crites, L. (1976). Women Offenders: Myth versus reality. En L. Crites (Ed.), *The female offender* (pp. 36-39). Lexington: MA Lexington Books.
- Cruells, M., e Igareda, N. (2006). *Mujeres, Integración y Prisión*. Barcelona: Aurea.
- Cuello, E. (1958). *La moderna penología*. Barcelona: Bosch.
- Cullen, F.T., y Gendreau, P. (2006). Evaluación de la rehabilitación correccional: política, práctica y perspectivas. En R. Barberet, y J. Barquín (Eds.), *Justicia penal siglo XXI: Una selección de Criminal Justice 2000* (pp. 275-348). Granada: Editorial Comares.
- Curran, D. J., y Renzetti, C. M. (1994). *Theories of crime*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dalaker, J. (2005). *Alternative poverty estimates in the United States: 2003*, U.S. Current Population Reports, junio de 2005. Recuperado de <http://www.censusbureau.biz/prod/2005pubs/p60-227.pdf#page=1> 17/10/2014.
- Daly, K., y Chesney-Lind, M. (1988). Feminism and criminology. *Justice Quarterly*, 4(5), 497-538.
- Davids, T., y Van Driel, F. (2005). *The gender question in globalisation*. Aldershot: Ashgate.

- Defensor del Pueblo Andaluz. (2006). *Mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de Andalucía. Informe Especial al Parlamento Andaluz*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- De la Cuesta Aguado, P. (1992). Perfiles criminológicos de la Delincuencia Femenina. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2, 219-239.
- De la Cuesta Arzamendi, J.L., Etxeberria, F., y Pérez Machío, A.I. (2010). *Situación penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturrarán durante la Guerra Civil española y la primera posguerra. Hacia la recuperación de su memoria*. Donosti: Emakunde.
- De la Fuente, Y. M., y Martín, P. (2003). Mujer y juventud. Hacia la efectividad en el tratamiento de la delincuencia. *Gazeta de Antropología*, 19, 1-19.
- De Miguel, E. (2012). *Relaciones Amorosas de Pareja en las Trayectorias Vitales de las Mujeres Encarceladas* (Tesis doctoral). Vizcaya: Universidad del País Vasco.
- Del Olmo, R. (1998). *Criminalidad y criminalización de la mujer en la región andina*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Del Pozo, F. (2008). Los programas individualizados socioeducativos de tratamiento en las Unidades dependientes de madres. En F. Añaños, F. Del Pozo, y I. Mavrou (Coords.), *Educación Social en el Ámbito Penitenciario: Mujeres, Infancia y Familia* (pp. 488-503). Granada: Nativola.
- Del Pozo, F., y Añaños, F. (2013). La Educación Social Penitenciaria: ¿De dónde venimos y hacia donde vamos? *Revista Complutense de Educación*, 24(1), 47-68.
- Del Pozo, F. y Gil Cantero, F. (2012). Profesionalización educativa de la reinserción en los centros penitenciarios. En S. Morales, J. Lirio, y R. Marí (Coords.), *La Pedagogía Social en la Universidad. Investigación, formación y compromiso social* (pp. 285-299). Valencia: Nau Llibres.
- Del Pozo, F., y Gil Cantero, F. (2014). A educación como eixo vertebrador do tratamento penitenciario. *Revista Galega de Educación*, 59, 15-17.
- Del Pozo, F., Jiménez, F., y Turbi, A.M. (2013). El Tratamiento con mujeres: Actuación socioeducativa y sociolaboral en prisiones. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 22, 57-72.
- Del Val, C., Viedma, A., Gutiérrez, J., García de Cortázar, M., Frutos, L., y Yagüe, C. (2012). *Condenadas a la desigualdad*. Madrid: Icaria.
- Deutsch, H. (1952). *La psicología de la mujer*. Buenos Aires: Losada.

- Díaz y García Conlledo, M. (2007). *Protección y expulsión de extranjeros en derecho penal*. Madrid: La Ley.
- Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2005). *Programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar. Grupo de trabajo sobre violencia de género*. Madrid: Ministerio del Interior – Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2006a). *Plan Marco de Intervención Educativa con Internos Extranjeros*. Madrid: Ministerio del Interior - Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2006b). *El control de la agresión sexual: Programa de intervención en el medio penitenciario Un programa de tratamiento para delincuentes sexuales en prisión. Manual del Terapeuta*. Madrid: Ministerio del Interior – Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Instituciones Penitenciarias (2006c). *Comisión de estudio sobre el abordaje de los internos con discapacidades intelectuales, físicas o sensoriales Programa de intervención*. Madrid: Ministerio del Interior – Secretaría General Técnica.
- Düinkel, F. (2005). Outlook - 5 theses on women's imprisonment. En F. Düinkel, C. Kestermann, y J. Zolondek (Dir.), *International Study on Women Prison System. Evaluation, needs assessment and best practices* (pp. 40-43). Greifswald: University of Greifswald, Department of Criminology.
- Durán, L.M. (2008). Apuntes sobre Criminología Feminista. *Criminología y Sociedad*, 1, 1-15.
- Echeburúa, E. (1991). Personalidad y delincuencia: una revisión crítica. *Cuadernos de política criminal*, 43, 69-74.
- Echeburúa, E., y De Corral, P. (1992). El tratamiento psicológico en las instituciones penitenciarias: alcance y limitaciones. En V. Garrido, y S. Redondo (Eds.), *La intervención educativa en el medio penitenciario. Una década de reflexión* (pp. 105-116). Madrid: Diagrama.
- Echeverría, B. (1983). La investigación empírica de carácter educativo en las universidades españolas "1980-1983". *Revista de Investigación Educativa*, 2(1), 144-204.
- Elliott, D., Pampel, F., y Huizinga, D. (2004). *Youth violence: Continuity and desistance. A supplemental report to Youth Violence: A report of the Surgeon General*. Colorado: Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavior Science, University of Colorado.
- Ellis, L. (2005). A theory explaining biological correlates of criminality. *European Journal of Criminology*, 3(2), 287-315.

- Escrivá, A. (2000). ¿Empleadas de por vida? Peruanas en el servicio doméstico de Barcelona, *Papers*, 60, 327-342.
- EUROSTAT. (2009). *Harmonised European time use surveys. 2008 guidelines*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- EUROSTAT. (2012). *Estadísticas sobre delincuencia*. Recuperado de http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_statistics/es 11/10/2013
- Exner, F. (1946). *Biología Criminal en sus rasgos fundamentales*. Barcelona : Bosch.
- Eysenck, H., y Eysenck, M. (1987). *Personalidad y diferencias individuales*. Madrid: Pirámide.
- Fagan, A., Van Horn, M. L., Hawkins, J. D., y Arthur, M. W. (2007). Gender Similarities and Differences in the Association Between Risk and Protective Factors and Self-Reported Serious Delinquency. *Prevention Science*, 8(2), 115-124.
- Farrington, D. (1986). Age and crime. En M. Tonry, y N. Morris (Eds.), *Crime and justice: An annual review of research* (pp. 189-250). Chicago: University of Chicago Press.
- Farrington, D., y Painter, K. (2004). *Gender differences in offending: Implications for risk-focus prevention*. Londres: Home office online report.
- Feixas, G. (2003). Subjective methods. En R. Fernández Ballesteros (Ed.), *The encyclopedia of Psychological Assessment* (pp. 937-943). London: Sage Publications.
- Felson, M. (2006). *Crime and nature*. California: Sage.
- Fernández Arevalo, L. (1994). *Práctica forense penitenciaria*. Madrid: Cívitas.
- Fernández Arevalo, L., y Nistal, J. (2012). *Manual de derecho penitenciario* (2ª ed.). Navarra: Aranzadi.
- Fernandez Galán, R. (2011). *Exclusión social de las mujeres presas: Análisis de necesidades y su percepción del proceso de Rehabilitación en el Centro Penitenciario de Villabona*. Oviedo: Universidad de Oviedo, Departamento de Psicología.
- Fernández García, J. (2010). El derecho penitenciario. Concepto. En I. Berdugo (Coord.), *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal. Tomo IV. Derecho Penitenciario* (pp. 39-68). Madrid: Iustel.

- Ferracuti, F., y Newman, G. R. (1977). *Psychological theories of delinquency (from criminology in perspective - essays in honor of israel drapkin*. Lexington: Lexington Books.
- Figueira-McDonough, J. (1989). Men and women as interest groups in the abortion debate in the united states. *Women's studies international forum*, 12(5), 539-550.
- Flaquer, L. (1998). *El destino de la familia*. Barcelona: Ariel.
- Flaquer, L. (2005). Régimen de bienestar, familiarismo y ciudadanía. En C. Solé y L. Flaquer (Eds.). *El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes* (pp. 21-52). Madrid: Instituto de la Mujer-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Flaquer, L., Ribas, N., Almeda, E., Bodelón, E., y Martínez, A. (2001). *Rastreado lo invisible. Mujeres extranjeras en las cárceles*. Barcelona: Anthropos.
- Fleetwood, J. (2011). Five kilos. Penalties and Practice in the International Cocaine Trade. *British Journal of Criminology*, 51, 375-393.
- Fox, D. (1981). *El proceso de investigación en Educación*. Pamplona: Eunsas.
- Francés, P., y Serrano, G. (2011). *Mujeres en prisión. Voces desde dentro del centro penitenciario de pamplona*. Pamplona: Salhaketa.
- Freud, S. (1934). *Nuevas Aportaciones al Psicoanálisis. Obras completas. Tomo II*. Buenos Aires: Biblioteca Nueva.
- Fuentes, J. L. (2011). Sistema de clasificación penitenciaria y el «periodo de seguridad» del art. 36.2 CP. *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, 1, 1-29.
- Gallizo, M. (2007). Presentación. En Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. *Estrategia Global de actuación en salud mental*. Madrid: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
- García Bellido, R, González Such, J., y Jornet, J.M. (2010). *SPSS: Pruebas No Paramétricas*. Recuperado de http://www.uv.es/innovamide/spss/SPSS/SPSS_0802A.pdf 11/07/2014.
- García de Cortazar, M. (Dir.) (2012). *Estudio Sobre Discriminación en el Ámbito Penitenciario: Extranjeras en las Prisiones Españolas*. Recuperado de www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2012/docs/Estudios_discriminacion_penitenciario_.pdf 28/02/2013
- García España, E. (2001). *Inmigración y delincuencia en España: Análisis criminológico*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- García España, E. (2014). Delincuencia de inmigrantes y motivaciones delictivas. *InDret Revista para el análisis del derecho*, 4, 1-21.

- García España, E., Becerra, J., y Aguilar, A. (2012). *Realidad y política penitenciarias*. Málaga: Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología.
- García Ferrando, M., Ibáñez, J., y Alvira, F. (2000). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza Editorial.
- García Pablos, A. (1988). *Manual de criminología. Introducción y teorías de la criminalidad*. Madrid: Espasa Calpe.
- García Pablos, A. (2000). *Derecho Penal. Introducción*. Madrid: Editorial Complutense.
- García Pablos, A. (2005). *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- García Roldán, J. (1995). *Cómo elaborar un proyecto de investigación*. Alicante: Universidad de Alicante.
- García Sancho, F. J. (2006). La Función Pedagógica en el ámbito penitenciario: Una Aproximación dentro del marco Jurídico-Institucional de Cataluña. *Revista de Ciències de l'Educació*. Universitat Rovira i Virgili. Junio 247-258
- García Valdés, C. (1982). *Comentarios a la legislación penitenciaria 2ª edición*. Madrid: Cívitas.
- García Valdés, C. (1985). *Teoría de la pena*. Madrid: Tecnos.
- García Valdés, C. (1997). *Historia de la Prisión. Teorías economicistas. Crítica*. Madrid: Edisofer.
- García Valdés, C. (1999). Las casa de corrección de mujeres. Un apunte histórico. En J. Cerezo, R. F. Suárez Montes, A. Beristain, y C. M. Romeo (Eds.), *Libro en homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López* (pp. 587-592). Granada: Comares.
- Garrido, V. (1985). Introducción. En M. Segura Morales (Ed.), *Tratamientos eficaces de delincuentes juveniles* (pp. 11-82). Madrid: Dirección General de protección Jurídica del Menor. Ministerio de Justicia.
- Garrido, V. (1987). Pasado, presente y futuro de la intervención con delincuentes. En V. Garrido, y M. B. Vidal (Dir.), *Lecturas de Pedagogía Correccional* (pp. 13-22). Valencia: Nau Llibres.
- Garrido, V. (1988). La prisión como institución de ayuda educativa. *Bordón*, 40(4), 639-648.
- Garrido, V. (1992). El tratamiento penitenciario en la encrucijada. En V. Garrido, y S. Redondo (Dir.), *La intervención en el medio penitenciario. Una década de reflexión* (pp. 191-213). Madrid: Diagrama.

- Garrido, V. (1997). Prólogo. En M. Lorenzo Moledo (1997). *La delincuencia femenina en Galicia. La intervención pedagógica*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Presidencia.
- Garrido, V., y Alba, J. L. (2005). La relación terapéutica entre el educador y el joven delincuente. En V. Garrido (Ed.), *Manual de intervención educativa en readaptación social* (pp. 192-227). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Garrido, V., y Gómez Piñana, A. M. (1995). La Educación Social en el ámbito penitenciario. *Comunicación, Lenguaje y Educación*, 27, 53-60.
- Garrido, V., y Gómez Piñana, A. M. (1996a). El modelo cognitivo aplicado a delincuentes institucionalizados: el pensamiento prosocial. *Revista Complutense de Educación*, 7(2), 137-156.
- Garrido, V., y Gómez Piñana, A. M. (1996b). *Guía introductoria del programa: El pensamiento prosocial*. Valencia: Serrano Villalba.
- Garrido, V., y López-Latorre, M. J. (2005). *Manual de intervención educativa en readaptación social. Los fundamentos de la intervención*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Garrido, V., y Martínez, M. D. (1998). *Educación Social para Delincuentes*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Garrido, V., Redondo, S., y Sánchez Meca, J. (1999). Tratamiento de los delincuentes y reincidencia: una evaluación de la efectividad de los programas aplicados en Europa. *Anuario de Psicología Jurídica*, 9, 11-38.
- Garrido, V., Stangeland, P., y Redondo, S. (2006). *Principios de Criminología*. 3ª Edición. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Gatti, U., Malfatti, D., y Verde, A. (1997). *Minorities, Crime and Criminal Justice in Italy. Migrants and Crime*. Londres: Sage.
- Gaviría, J. (2000). El muestreo y su problemática en las evaluaciones de programas institucionales. *Revista de Investigación Educativa*, 18(2), 393-404.
- Gendreau, P., y Ross, R. (1987). Revivification of rehabilitation: Evidence from the 1980s. *Justice Quarterly* 4, 349-407.
- Giacomello, C. (2013). Women, drug offenses and penitentiary systems in Latin America International. *Drug Policy Consortium Briefing Paper October*, 1-24.
- Gibbens, T. C., y Prince, J. (1962). *Shoplifting*. London: Institute for the Study and Treatment of Delinquency.
- Gibbons, D. C. ,y Krohn, M. D. (1981). *Delinquent Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.

- Gibbs, A., y Beal, R. (2000). Straight thinking in New Zealand/Aotearoa. *Probation Journal*, 47, 250-255.
- Gil Cantero, F. (2010). La acción pedagógica en las prisiones. Posibilidades y límites. *Revista Española de Pedagogía*, 245, 49-64.
- Giles, M., y Le, A. T. (2010). Investment in Human Capital during Incarceration and Employment Prospects of Prisoners. *Labor: Human Capital Abstracts*, 2(9), 1-34
- Giménez, E. (1989). ¿Condena o privilegio? En J. De la Cuesta Arzamendi, I. Dendaluce, y E. Echeburúa (Coords), *Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona* (pp. 1153-1168). San Sebastián: Instituto Vasco de Criminología.
- G. V. Glass, B. McGaw, y M. L. Smith (1981). *Meta-analysis in social research*. Beverly Hills: Sage.
- Gómez Piñana, A. (1993). *Adaptación y aplicación del modelo cognitivo para la intervención en delincuentes* (Tesis doctoral). Valencia: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia.
- González Cano, M. I. (1994). *La ejecución de la pena privativa de libertad*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- González Parra, R. (1997). Jeremy Bentham. El utilitarismo y su influencia en la reforma del sistema penitenciario. En C. García Valdés (Dir.), *Historia de la prisión: teorías economistas*. Madrid: Edisofer.
- González Tascón, M. M. (2014). *Estudio teórico y práctico de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad*. Madrid: Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica.
- Gordaliza, A.M. (2005). Inmigración, Juventud y Prisión. *Revista de Estudios de Juventud*, 69, 62-75.
- Gray, J. (1970). Sex differences in Emotional Behaviour in Mammals Including Man-endocrine Basis. *Acta Psychol*, 35, 29-46.
- Guardia Olmos, J. (2007). *Análisis de datos en Psicología*. Madrid: Delta.
- Guerra, J., y Lerma, A. (1989). Aspectos psicobiológicos de la delincuencia femenina. En A. Berinstein, y J. De la Cuesta (Coord.), *Cárceles de Mujeres. Ayer y Hoy de la mujer delincuente y víctima* (pp. 65-77). Bilbao: Mensajero.
- Haas, A., y Peters, R. (2001). Development of substance abuse problems among drug-involved offenders: evidence for the telescoping effect. *Journal of Substance Abuse*, 12, 241-253.

- Hausmann, R., Tyson, L. D., y Zahidi, S. (2008). *The Global Gender Gap Report, Ginebra: World Economic Forum*. Recuperado de <http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf> 12/09/2012.
- Heimer, K., y Kruttschnitt, C. (2006). *Gender and Crime: Patterns in victimization and offending*. New York: New York University Press.
- Hentig, H. V. (1946). *Estudios de Psicología Criminal*. Barcelona: Bosch.
- Hernández Holgado, F. (2005). Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de Prisiones de la Segunda República. *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 27, 271-290
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista, P. (1998). *Metodología de la investigación*. México DF: McGraw Hill.
- Hernandez y Moreno, J. (1989). Introducción. En A. Ferrández Arenaz, *Modelos de educación en Centros Penitenciarios* (pp. 3-5). Barcelona: Humanitas.
- Herrero, C. (1988). *Seis lecciones de Criminología*. Madrid: Dirección General de la Policía, División de Formación.
- Heuyer, G. (1968). *La delincuencia juvenil*. Caracas: Tiempo Nuevo.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University de California.
- Hirschi, T., y Gottfredson, M.R. (1993). *The generality of desviance*. London: Trancsaction Publishers.
- Hochschild, A.R. (2000). Global Care Chains and Emotional Surplus Value. En A. Giddens, y W. Hutton (Eds.), *On the Edge. Globalization and the New Millennium* (pp. 130-146). Londres: Sage.
- Hoffman-Bustamante, D. (1973). The Nature of Female Criminality. *Issues in Criminology*, 8, 17-36.
- Igareda, N. (2007). Mujeres de Prisión. En A. Cerezo, y E. García España (Coords.), *La prisión en España: una perspectiva criminológica* (pp. 75-100). Granada: Comares.
- Igareda, N. (2009). La maternidad de las mujeres presas. En G. Nicolás, y E. Bodelón, *Género y dominación. Críticas feministas del derecho y el poder*. (pp. 159-194). Barcelona: Anthropolos.
- INE. (2011). *Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010. Resultados definitivos del Instituto Nacional de Estadística*. Recuperado de <http://www.ine.es/prensa/np669.pdf> 19/05/2014.

- INE. (2014). *Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014*. Recuperado de <http://www.ine.es/prensa/np838.pdf> 8/10/2014.
- INE. (2015). *Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. Datos a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia*. Recuperado de <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do> 22/05/2015.
- Izquierdo, A. (2000). El proyecto migratorio de los indocumentados según género. *Papers, Revista de Sociología*, 60, 225-240.
- Jensen, G., y Rojec, D. (1980). *Delinquency: a sociological view*. Lexington: Heath.
- Jimenez, J. M. (2004). La calidad de la atención educativa que reciben los menores residentes con sus madres en los centros penitenciarios españoles. *Apuntes de Psicología*, 22(1), 45-59.
- Juliano, D. (2006). Migraciones y adscripción étnica. En I. Rivera, H. Silveira, E. Bodelón, y A. Recasens (Eds.), *Contorno y pliegues del Derecho: Homenaje a Roberto Bergalli* (pp. 101-112). Barcelona: Anthropos.
- Juliano, D. (2009). *Consideraciones sobre el delito desde la perspectiva de género*. Barcelona: COPOLIS.
- Juliano, D. (2012). Género y trayectorias migratorias en época de crisis. *Papers, Revista de Sociología*, 97(3), 523-540.
- Kerlinger, F.N. (1985). *Investigación del comportamiento*. México: Interamericana.
- Killias, M. (2011). *Immigration and Crime: The European Experience en EU-US Immigration Systems*. San Domenico di Fiesole: European University Institute.
- Kruttschnitt, C. (1982). Women, Crime and Dependency: an application of the Theory of Law. *Criminology*, 19, 495-513.
- Ladipo, D. (2001). El crecimiento del complejo carcelario-industrial en Estados Unidos. *New Left Review*, 7, 71-85.
- Lanctôt, N., Cernkovich, S. A., y Giordano, P. C. (2007). Predicting adolescent and adult antisocial behavior among adjudicated delinquent females. *Crime and Delinquency*, 54(1), 3-33.
- Landrove, G. (1998). *La moderna victimología*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Lanier, M. M., y Henry, S. (1998). *Essential Criminology*. Colorado: Westview Press.
- Larrauri, E. (1992). La mujer ante el derecho penal. *Revista de derecho penal y criminología*, 2, 291-310
- Larrauri, E. (1994). *Mujeres, derecho penal y criminología*. Madrid: Siglo XXI.

- Larrauri, E. (2000). *La herencia de la criminología crítica*. Madrid: Siglo XXI.
- Latiesa, M. (2000). Validez y fiabilidad de las observaciones sociológicas. En M., García Ferrando, J. Ibáñez, y F. Alvira (Comp.), *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación* (pp. 409-443). Madrid: Alianza Editorial.
- Latorre, A., Del Rincón, D., y Arnal, J. (2003). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona: Hurtado.
- Laurenzo, P. (2004). Últimas reformas en el derecho penal de extranjeros. Un nuevo paso en la política de exclusión. *Jueces para la Democracia*, 50, 30-35.
- Leganés, S. (2004). *La evolución de la Clasificación Penitenciaria. Premio Nacional Victoria Kent*. Madrid: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
- Lilly, J. R., Cullen, F. T., y Ball, R. A. (2010). *Criminological Theory. Context and consequences*. California: SAGE Publications.
- Lipsey, M.W. (1992). Juvenile delinquency treatment: A meta-analytic inquiry into the variability of effects. En T. D. Cook, H. Cooper, D. S. Cordray, H. Hartmann, L. V. Hedges, R. J. Light, T. A. Louis, y F. Mosteller (Eds.), *Meta-analysis for explanation: A casebook* (pp. 83-124). New York: Russell Sage Foundation.
- Loeber, R., Farrington, D., y Redondo, S. (2011). La Transición desde la Delincuencia Juvenil a la Delincuencia Adulta. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 1(9) 1-41.
- Lorenzo Moledo, M. (1997). *La delincuencia femenina en Galicia. La intervención pedagógica*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Presidencia.
- Lorenzo Moledo, M. (2002). La delincuencia femenina. *Psicothema*, 14, 174-180.
- Lorenzo Moledo, M. (2014). Ser universitario nun centro penitenciario: unha análise dende o Espazo Europeo de Educación Superior. *Revista Galega de Educación*, 59, 26-32.
- Lorenzo Moledo, M., Aroca, C., y Alba, J. L. (2013). La pedagogía penitenciaria en España: luces y sombras. *Revista de Educación*, 360, 119-139.
- Lorenzo Moledo, M., Godás, A., Priegue, D., y Santos Rego, M. A. (2009). *Familias inmigrantes en Galicia La dimensión socioeducativa de la integración*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
- Lorenzo Moledo, M., y Lagares, N. (2009). *In-migración. Educación, cultura e políticas para a inclusión social en Galicia*. Pontevedra: Unipro Toxosoutos.

- Lorenzo Moledo, M., y Priegue, D. (2012). Tecendo a convivencia: inmigración e retos familiares. En M. J. Méndez Lois, y C. Taboada (Coords.), *Igualdade de trato: retos e respostas socioeducativas* (pp. 101-126). Santiago de Compostela: Instituto de Ciencias de Educación.
- Lorenzo Moledo, M., y Priegue, D. (2014). La Mujer en los Flujos Migratorios: Implicaciones en el Desarrollo Personal y Social. En C. Aroca, y C. Ros, *Pedagogía Multidisciplinar para la Salud. Claves para la Intervención Psico-educativa, socio-comunitaria y físico-ambiental*. (pp. 308-336). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Lorenzo Moledo, M., y Santos Rego, M. A. (1997). Sentido e posibilidades da intervención educativa nos cárceres. *Revista Xurídica Galega*, 15, 309-327.
- Lorenzo Moledo, M., y Santos Rego, M. A. (2003). Los flujos migratorios como flujos culturales en Europa. Una lección de educación para la convivencia. *Bordón*. 55(4), 583-592.
- Lorenzo Rubio, C. (2006). El mal necesario o la política penitenciaria en la transición. *Mientras Tanto*, 99, 85-98.
- Lösel, F. (1995). The efficacy of correctional treatment: A review and synthesis of recent meta-evaluations. En J. McGuire (Ed.), *What Works: Reducing Reoffending*, (pp. 79-111). West Sussex: John Wiley.
- Lozano, I. (2009). *Guía de Género, migraciones y empleo. Dinámicas de adaptación y resistencias en los campos de acción trasnacional*. Madrid: ACSUR.
- Malik, K. (Dir.) (2014). *Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia*. New York: PNUD.
- Manzanos, C., y Balmaseda, J. (2003). *Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco*. San Sebastián: Gobierno Vasco.
- Mapelli, B. (1989). La crisis de nuestro modelo legal de tratamiento penitenciario. *Eguzkilo*, 2, 99-112.
- Mapelli, B. (2006). Una nueva versión de las normas penitenciarias europeas. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 8, 1-44.
- Marín, R., y Pérez Serrano, G. (1985). *Pedagogía Social y Sociología de la Educación. Unidades Didácticas 1,2 y 3*. Madrid: UNED.
- Martínez Benlloch, I. (2008). *Imaginario cultural, construcción de identidades de género y violencia: formación para la igualdad en la adolescencia*. Madrid: Instituto de la Mujer.

- Martínez Galindo, G. (2002). *Galerianas, corrientes y presas: nacimiento y consolidación de las cárceles de mujeres en España 1608-1913*. Madrid: Edisofer.
- Martínez Lanz, P., Carabanza, R., y Hernández, A. (2008). Factores de riesgo predisponentes a la delincuencia en una población penal femenina. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 13(2), 301-318.
- Martínez Veiga, U. (2004). *Trabajadores invisibles: precariedad, rotación y pobreza de la inmigración en España*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Martínez, R., y Lee, M. T. (2004). Inmigración y delincuencia. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 1, 1-34.
- Martín, V. M. (2006). *Actitudes de los internados en prisión, menores de veintiún años, ante la función reeducadora del medio penitenciario en el ámbito andaluz*. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.
- Martín, V. M., Vila, E., y De Oña, J.M. (2013). La investigación educativa en el ámbito de las instituciones penitenciarias: panorámica, desafíos y propuestas. *Revista de Educación*, 360, 16-35.
- Matthews, R. (2003). *Pagando tiempo. Una introducción a la sociología del encarcelamiento*. Barcelona: Bellaterra.
- Maya, I. (2004). Sentido de comunidad y potenciación comunitaria. *Apuntes de Psicología*, 22 (2), 187-211.
- McCord, J., y Otten, L. (1983). A Consideration of Sex Roles and Motivations for Crime. *Criminal Justice and Behavior*, 10(1), 3-12.
- Melis, F. (2010). *Mujeres en Prisión*. Madrid: Fundación AGAPE.
- Medina, P.M. (2013). *Evaluación experimental de la eficacia de los programas psicológicos de tratamiento penitenciario*. Premio nacional Victoria Kent 2012. Madrid: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
- Mednick, S. A., Gabrielli, W. H., y Hutchings, B. (1984). Genetic influences in criminal convictions: Evidence from an adoption cohort. *Science*, 224, 891-894.
- Mestre, R. (2001). Inmigración, exclusión y género. En N. Fernández Sola, y M. Calvo García (Coords.), *Inmigración y Derechos* (pp. 99-110). Zaragoza: Mira Editores.
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014). *Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia en Vigor*. Recuperado de <http://www.empleo.gob.es> 10/12/2014.

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2015). Página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Recuperado de www.empleo.gob.es 9/07/2015.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2014). *Derechos de las mujeres inmigrantes*. Recuperado de <http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/MujeresExtranj/dchosMujeresInm/home.htm> 3/11/2014.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2015). Página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado de www.msssi.gob.es 23/02/2015.
- Ministerio del Interior (2010). *Unidades Externas de Madres*. Madrid: Autor
- Ministerio del Interior (2012). *Programa de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario*. Madrid: Autor .
- Ministerio del Interior. (2014). *Anuario estadístico del Ministerio del Interior del año 2013*. Madrid: Secretaría General Técnica.
- Ministerio del Interior. (2015). Página web del Ministerio del Interior. Recuperado de www.interior.gob.es. 1/05/2015.
- Mir, C. (2012). *Derecho Penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad*. Barcelona: Atelier.
- Miralles, T. (1982). *Métodos y técnicas de la criminología*. México D. F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Miralles, T. (1983). *El Pensamiento Criminológico*. Bogotá: Temis.
- Miranda, M. (1997). Mujeres en Prisión. *Revista 8 de marzo*, 27, 19-21.
- Miranda, M., y Barberet, R. (1998). *Análisis de la eficacia y adecuación de la política penitenciaria a las necesidades y demandas de las mujeres presas*. Madrid: Instituto de la Mujer.
- Miranda, M., y Martín Palomo, M. T. (2007). Mujeres no nacionales en prisión. En E. Almeda, y E. Bodelón (Eds.), *Mujeres y Castigo: un enfoque socio-jurídico y de género* (pp. 187-210). Madrid: Dykinson.
- Miranda, M., Martín, M. T., y Vega, C. (2003). Mujeres inmigrantes en prisión. Articulación de las políticas penales y de extranjería en el contexto de la Unión Europea. *Cuaderno del Instituto de Investigaciones Feministas*, 3, 1-32.
- Miranda, M., Martín, M. T., y Vega, C. (2005). *Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

- Moffit, T. E., Caspi, A., Rutter, M., y Silva, P. A. (2001). *Sex differences in antisocial behavior, Conduct disorder, delinquency, and violence in the Dunedin longitudinal study*. Cambridge: Cambridge University.
- Moguel, M.C. (2014). *Mujeres, Cárcel y Educación: Un Estudio sobre las Estructuras Formativas en dos Centros Penitenciarios de la Provincia de Cádiz (Puerto II y Botafuegos)*. Cádiz: Universidad de Cádiz.
- Morant, J. (2003). *La delincuencia Juvenil*. Recuperado de: <http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-Penal/200307-58551523610332031.html> 21/09/2014.
- Naredo, M. (1999). Reclusas con hijos en la cárcel. La punta del iceberg de la “sinrazón” penitenciaria. En I. Rivera (Coord.), *La cárcel en España en el fin del milenio: a propósito del vigésimo aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria* (pp. 25-35). Barcelona: Bosch.
- Naredo, M. (2007). Reclusas con hijos/as en la cárcel. En E. Almeda, y E. Bodelón, (Eds.). *Mujeres y Castigo: Un enfoque socio-jurídico y de género* (pp. 263-277). Madrid: Editorial Dykinson.
- Nikken, P. (1994). El concepto de derechos humanos. En A. Astrúbal, *Estudios básicos de derechos humanos, Tomo I*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- OATPFE (2015). Página web de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Recuperado de www.oatpfe.es 13/05/2015.
- Oliver, P. (2006). Dos perspectivas de la historiografía del castigo en España. En I. Rivera, H. Silveira, E. Bodelón, y A. Recasens (Coords.), *Contornos y pliegues del derecho. Homenaje al profesor Roberto Bergalli* (pp. 482-486). Barcelona: Anthropos.
- ONU. (1985). *VII Congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente*. Milán: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales.
- Oso, L. (1998). *La migración hacia España de mujeres jefas de hogar*. Madrid: Instituto de la Mujer.
- Oso, L., y Garson, L.P. (2005). *The feminisation of international migration. Migrant women and the Labour Market: Diversity and Challenges*. Brussels: OECD and European Commission Seminar, 25-27 september, 1-16
- Pajares, M. (2005). *La integración ciudadana*. Barcelona: Icaria.

- Palacios, J., y Jiménez, J. (1998). *Niños y Madres en Prisión: Desarrollo Psicosociobiológico de los Niños Residentes en Centros Penitenciarios*. Madrid: Ministerio del Interior.
- Parella, S. (2003). *Mujer, inmigrante, trabajadora: la triple discriminación*. Barcelona: Anthropos.
- Parella, S. (2005). Segregación laboral y "vulnerabilidad social" de la mujer inmigrante a partir de la interacción entre clase social, género y etnia. En C. Solé, y L. Flaquer (Eds.), *El uso de las políticas sociales por las mujeres inmigrantes* (pp. 97-138). Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- Parke, R., y Collmer, C. (1975). Child abuse: An interdisciplinary review. En E. M. Hetherington (Ed.), *Review of child development research*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pascual, A. (2014). *La reinserción social de las mujeres encarceladas. XVII Premio SIEM de investigación feminista "Concepción Gimeno de Flaquer"*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- Pearson, F. S., Lipton, D. S., Cleland, C. M., y Yee, D. S. (2002). The effects of behavioural/cognitive-behavioural programmes on recidivism. *Crime and Delinquency*, 48, 476-496.
- Peláez, F., y Bernal, J. M. (1999). *Artículos doctrinales: derecho procesal penal*. Obtenido de Las medidas cautelares en el proceso penal. Recuperado de www.noticiasjuridicas.com/articulos 21/09/2013.
- Peña Saavedra, V. (1991). *Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar: la impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia*. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas.
- Peña Mateos, J. (1997). Antecedentes de la prisión como pena privativa de libertad en Europa hasta el Siglo XVII. En C. García Valdés (Dir.), *Historia de la prisión. Teorías economicistas. Crítica* (pp. 63-78). Madrid: Edisofer.
- Pereda, C. (2007). Trabajadoras inmigrantes por cuenta propia. Una aproximación descriptiva. En J. Beltrán, *Empresariado étnico en España*. Madrid: Fundación CIDOB.
- Pérez Juste, R., Galán, A., y Quintalán, J. (2012). *Métodos y diseño de investigación en educación*. Madrid: UNED.
- Pérez-Lozao, M., y Arenas, C. (Coord.) (2006). *Intervención sobre drogas en centros penitenciarios. Actuar es posible*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Piquero, A., Farrington, D., y Blumstein, A. (2007). *Key issues in criminal career research: New analyses of the Cambridge Study in Delinquent Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pla, I. (2009). *La feminización de las migraciones y la cadena global de cuidados*. Obtenido de Servicio de Información y noticias científicas. Recuperado de www.agenciasinc.es 30/05/2012
- Pollino, F., y Vela, M. (1999). *Delincuencia, mujer y prisión en Valladolid. Análisis social y posibles alternativas de tratamiento*. Valladolid: Área de Acción Social y Participación Ciudadana.
- Pollock, J. (1977). Early theories of female criminality. En L. Bowker (Ed.), *Women, crime and the criminal justice system* (pp. 25-56). Toronto: Heath and Company.
- PRECA. (2011). *Informe Prevalencia de Trastornos Mentales en Centros Penitenciarios Españoles (Estudio Preca)*. Barcelona: Grupo PRECA.
- Quintáns, I. (2005). A situación da muller inmigrante en Galicia. *Andaina*, 39. Recuperado de <http://www.andainamulleres.org/> 18/09/2013.
- Quisbert, E. (2008). *Historia del derecho penal a través de las escuelas penales y sus representantes*. Madrid: Centro de estudios de derecho.
- Ramos, I. (2006). Cárceles públicas y privadas en el Derecho medieval y castellano. El delito de cárceles particulares. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 28, 339-386.
- Ramos, I. (2008). *Arrestos, cárceles y prisiones en los derechos históricos españoles*. Premio Victoria Kent 2007. Madrid: Ministerio del Interior.
- Ramos, I., y Blázquez, B. (2011). *La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas penitenciarias en España*. Córdoba: Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba.
- Rangel, H. (2008). Desafíos y Perspectivas de la Educación en Establecimientos Penitenciarios en América Latina. En UNESCO. *Educación en Prisiones en América Latina. Derechos, libertad y ciudadanía* (pp.171-184). Brasilia: Autor.
- Rechea, C., Benítez, M. J., y Fernández Molina, E. (2008). Evolución de la Delincuencia en España. Un análisis de los datos oficiales. En L. A. Arroyo, J. Montañés, y C. Rechea (Coords.), *Estudios de Criminología 3* (pp. 1-14). Castilla La Mancha: Universidad de Castilla La Mancha.
- Reckless, W. (1961). *The Crime Problem (3ª edición.)*. New York: Appleton Century-Crofts, INC.
- Redondo, S. (2008). *Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes*. Madrid: Pirámide.

- Redondo, S., Martínez Catena, A., y Andrés, A. (2011). *Factores de éxito asociados a los programas de intervención con menores infractores*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Requena, M., y Díez, M. (1993). Formas de familia en la España de hoy. En L. Garrido Medina, y E. Gil Calvo (Eds.), *Estrategias familiares* (pp. 249–270). Madrid: Alianza.
- Ribas, N. (2004). *Una invitación a la sociología de las migraciones*. Barcelona: Bellaterra.
- Ribas, N., Almeda, E., y Bodelón, E. (2002). La criminalización femenina de la inmigración: resultados de una investigación. En F. García Castaño, y C. Muriel (Eds.), *La inmigración en España: contextos y alternativas, vol II* (pp. 45-78). Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales.
- Ribas, N., y Martínez, J. (2003). Mujeres extranjeras en las cárceles españolas. *Sociedad y Economía*, 5, 65-88.
- Rivera, I. (1999). Radiografía del reformismo penitenciario (veinte años de reforma penitenciaria en España). En I. Rivera (Coord.), *La cárcel en España en el fin del milenio* (pp. 23-30). Barcelona: Bosch.
- Rivera, I. (Coord.) (2005). *Política Criminal y Sistema Penal. Viejas y nuevas racionalidades punitivas*. Barcelona: Anthropos.
- Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., y García Jiménez, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Algibe.
- Rodríguez Rodríguez, F. (2008). Mujeres jóvenes inmigrantes: otro “rostro” de la globalización. *Revista de Estudios de Juventud*, 83, 195-211.
- Rodríguez, J. A. (2009). Criminología y género: Comentarios a partir del gender gap. *Capítulo Criminológico*, 37(4), 161-182.
- Rodríguez, J. A., y Mirón, L. (2008). Grupo de Amigos y Conducta Antisocial. *Capítulo Criminológico*, 36, 121-149.
- Rodríguez López, R., y Bravo, M. J. (2010). *Experiencias jurídicas e identidades femeninas*. Madrid: Dykinson.
- Rojas, R. M. (1990). El Orden Jurídico Espontáneo. *Revista Libertas*, 13, 1-36.
- Romero, M. y Aguilera, R. M. (2002). ¿Por qué delinquen las mujeres? Parte I. Perspectivas teóricas tradicionales. *Salud Mental*, 25(5), 10-22.
- Ross, R. (1992). Razonamiento y Rehabilitación: un programa cognitivo para el tratamiento y la prevención de la delincuencia. En V. Garrido, y L. Montoro

- (Dírs.), *La reeducación del delincuente juvenil: los programas de éxito* (pp. 49-68). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Ross, R., y Fabiano, E. (1985). *Time to think: cognitive model of delinquency prevention and offender rehabilitation*. Pensilvania: Institute of Social Sciences and Arts.
- Ross, R., Fabiano, E., Garrido, V., y Gómez Piñana, A. M. (1996). *El pensamiento prosocial. El modelo cognitivo para la prevención y tratamiento de la delincuencia y abuso de drogas*. Valencia: Serrano Villalba.
- Rottman, D., y Simon, R. (1975). Women in the Courts: Present Trends and Future Prospect. *Chitty's Law Journal*, 23(1), 24-32.
- Rowe, D., y Osgood, W. (1984). Heredity and Sociological Theories of Delinquency: A Reconsideration. *American Sociological Review*, 49(4), 526-540.
- Ruíz, M. A. (2014). Situación de la mujer y sus hijos en los centros penitenciarios. Unidad externa de madres Padre Jaime Garralda. En F. Del Pozo, y C. Peláez, (Coords.). *Educación Social en Situaciones de Riesgo y Conflicto en Iberoamérica* (pp.187-195). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Rutter, M., Giller, H., y Hagell, A. (2000). *La conducta antisocial de los jóvenes*. Madrid: Cambridge University.
- Shafir, N. (2014). The international congresses scientific and diplomatic technology: global intellectual exchange in the International Prison Congress, 1860-90. *Journal of Global History* 9, 72-93.
- Salillas, R. (1918). *Evolucion penitenciaria en España, Madrid, Imprenta clasica espanola*. Pamplona: Facsimil de Analecta.
- Salillas, R. (1888). *La vida penal en Espana*. Pamplona: Facsimil de Analecta.
- Sánchez Sánchez, C. (2013). La Aparición y Evolución de los Sistemas Penitenciarios. *Anales De Derecho*, 31, 139-179.
- Sanchís, J.R. (1990). *Aplicación de un programa de Competencia Psicosocial a menores delincuentes* (Tesis doctoral). Valencia: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia.
- Santibañez, R. (1998). El debate sobre valores y delincuencia: investigaciones recientes y líneas de intervención educativa. En V. Garrido, y M. D. Martínez (Eds.), *Educación Social para delincuentes* (pp. 137-196). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Santos Rego, M. A. (2006). *Estudios sobre flujos migratorios en perspectiva educativa y cultural*. Granada: Grupo Editorial Universitario.

- Santos Rego, M. A. (2009). Preparar ciudadanos en una era global: ¿Puede Ayudar La Educación Intercultural? *Avances en supervisión educativa: Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España*, 11, 1-13.
- Santos Rego, M. A. (2014). A xestión da diversidade cultural nos centros penitenciarios. Unha cuestión de saber pedagóxico. *Revista Galega de Educación*, 59, 36-42.
- Santos Rego, M. A., y Lorenzo Moledo, M. (1996). Política y legislación penitenciaria en España. ¿Qué le interesa saber al pedagogo? *Revista de Educación*, 311, 255-278.
- Santos Rego, M. A., y Lorenzo Moledo, M. (2003a). Los Flujos Migratorios como flujos culturales de Europa: una lección de educación para la convivencia. *Bordón, Revista de pedagogía*, 55 (4), 583-592.
- Santos Rego, M. A., y Lorenzo Moledo, M. (2003b). Immigrants in spanish prisons: searching for an educational way out, *Intercultural Education*, 14, 4, 435-447.
- Santos Rego, M. A., y Lorenzo Moledo, M. (2003c). How to change fatalism in educative treatment in female delinquency? A case study from Spain, *European Journal of Education*, 38, 1, 117-129.
- Santos Rego, M. A., y Lorenzo Moledo, M. (2007). *Universidade e construción da sociedade civil en Galicia*. Vigo: Xerais.
- Santos Rego, M. A., y Lorenzo Moledo, M. (2012). *Estudios de Pedagogía Intercultural*. Barcelona: Octaedro.
- Sautu, R. (2005). *Todo es Teoría: objetivos y métodos de investigación*. Buenos Aires: Lumiere.
- Scarfó, F. J. (2003). El Derecho a la Educación en las cárceles como garantía de la Educación en Derechos Humanos. *Revista IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos)* 36, 291-327.
- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (2009). *Protocolo de aplicación del Programa Marco de Atención Integral a enfermos mentales en centros penitenciarios (PAIEM)*. Madrid: Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.
- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (2010). *Programa de prevención de violencia de género para las mujeres. Manual para profesionales*. Madrid: Ministerio del Interior – Secretaría General Técnica.
- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (2014a). *El Sistema Penitenciario Español*. Madrid: Ministerio del Interior.
- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (2014b). *Informe general de 2013*. Madrid: Ministerio del Interior.

- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (2015). *Página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias*. Recuperado de www.institucionpenitenciarias.es 22/04/2015.
- Segura, M. (1985). *Tratamientos eficaces de delincuentes juveniles*. Madrid: Ministerio de Justicia.
- Serrano Maíllo, A. (2006). *Introducción a la criminología (4ª edición.)*. Madrid: Dykinson.
- Serrano Tárraga, M. (2010). La consideración de género en la ejecución de las penas privativas de libertad. *Estudios penales y criminológicos*, 30, 481-544.
- Serrano Tárraga, M. D., y Vázquez González, C. (2006). Delincuencia femenina: nuevas perspectivas para su estudio. *Cuadernos de política criminal*, 90, 159-198.
- Sierra Bravo, R. (1995). *Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios*. Madrid: Paraninfo.
- Sierra Rodríguez, J. (2012). *Manual de políticas públicas penitenciarias: aproximación a través de estudios de caso*. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- Simon, R. J. (1975). *Women and crime*. Lexington: Lexington Books.
- Singer, M., Bussey, J. Song, L., y Lunghofer, L. (1995). The psychosocial issues of women serving time in jail. *Social Work*, 40, 103-113.
- Sipi Mayo, R. (2002). *Inmigración y género. El caso de Guinea Ecuatorial*. San Sebastián: Tercera Prensa- Hirugarren Prentsa.
- Siteal (2011). *Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Tasa de escolarización para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay*. Argentina: Autor.
- Smart, C. (1976). *Women, Crime and Criminology, a Feminist Critique*. Londres: Routledge et Kegan Paul.
- Smart, C. (1979). *The New Female Criminal. Reality or myth?* London: British Journal of Criminology.
- Smith, D.F. (1997). Ethnic Origins, Crime and Criminal Justice in England and Wales. *Ethnicity, Crime, and Immigration. Crime and Justice*, 21, 82-101.
- Smith, B., Simonian, N., y Yarussi, J. (2006). The health concerns of incarcerated women. Part 2: Communicable diseases and treatment issues. *Women, Girls and Criminal Justice*, 7, 49-64.

- Solís, A. (1997). *Criminología. Panorama Contemporáneo*. Lima: Intercopy
- Soria, M. A., y Sáiz, D. (2006). *Psicología criminal*. Madrid: Pearson.
- Steffensmeier, D. y Allan, E. A. (1996). Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending. *Annual Review of Sociology*, 22, 459-487.
- Stenglein, G., y Sánchez Bayon, A. (2012). *Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistémica europea*. Saarbrücken: Editorial académica española.
- Storvoll, E., y Wichstrom, L. (2002). Do the risk factors associated with conduct problems in adolescents vary according to gender? *Journal of Adolescent*, 25 (2), 183-202.
- Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. (2007). *Estrategia Global de actuación en salud mental*. Madrid: Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
- Subirats, J. (Dir.) (2005). *Análisis de los factores de exclusión social*. Barcelona: Institut d'Estudis Autònomic, Generalitat de Catalunya.
- Suárez – Orozco, C., y Suárez – Orozco, M. (2003). *La infancia de la inmigración*. Madrid: Morata.
- Sunkel, G. (2006). *El papel de la familia en la protección social en América Latina*. Santiago de Chile: División de Desarrollo Social.
- Sutherland, E. (1939). *Principles of criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott.
- Tamarit, J. (2001). *Curso de derecho penitenciario*. Barcelona: Tirant lo Blanch.
- Tamayo, M. (2005). *Diccionario de la Investigación Científica*. México: Limusa.
- Tamayo, T., y Tamayo, M. (1994). *El proceso de la investigación científica*. México: Limusa.
- Tejedor, F., y Etxeberría, J. (2006). *Análisis inferencial de datos en educación*. Madrid: La Muralla.
- Tellez, A. (1998). *Los sistemas penitenciarios y sus prisiones*. Madrid: Edisofer.
- Telo, M. (1995). *Concepción Arenal y Victoria Kent. Las prisiones. Vida y Obra*. Madrid: Instituto de la Mujer.
- Thibos, M., Lavin-Loucks, D., y Martin, M. (2007). *The feminization of poverty. Empowering women*. Dallas: Williams Institute and YWCA.
- Tong, L.S.J., y Farrington, D.P. (2006). How effective is the «Reasoning and Rehabilitation» program in reducing reoffending? A metaanalysis of evaluations in four countries. *Psychology, Crime and Law*, 12, 3-24.

- UNED. (2015). *Página web de la Universidad Nacional de Educación a Distancia*. Recuperado de portal.uned.es 19/02/2015.
- UNESCO. (1995). *La educación básica en los establecimientos penitenciarios*. Hamburgo: Instituto de Educación de la UNESCO.
- UNODC. (2011). *Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito*. New York: Naciones Unidas.
- UTE Villabona. (2005). *Unidad Terapéutica y Educativa Centro Penitenciario Villabona. Un modelo de intervención penitenciaria*. Madrid: Ministerio del Interior – Secretaría General Técnica.
- Valls, F., y Belzunegui, A. (2014). *La pobreza en España desde una perspectiva de género*. Barcelona: Fundación FOESSA.
- Vázquez Cano, E. (2013). Expectativas, obstáculos y hábitos de estudio de los internos que cursan enseñanzas universitarias en la UNED. Un estudio de caso: centro penitenciario de Madrid VII. *Revista de Educación*, 360, 62-88.
- Vela, A. (2005). *Las familias monoparentales. Su regulación genérica actual y su tratamiento jurisprudencial. Hacia su consideración jurídica unitaria y su protección integral*. Granada: Comares.
- Viedma, A. (2013). La educación a distancia en prisión. Estudios de los alumnos de la UNED en centros penitenciarios. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 6(2) 97-120.
- Viedma, A., y Del Val, C. (2012). *Condenadas a la desigualdad. Sistema de indicadores de discriminación penitenciaria*. Barcelona: Icaria.
- Villagrà, P. González Menéndez, A., Fernández García, P. Casares, M., Martín, J., y Rodríguez Lamelas, F. (2011). Perfil adictivo, delictivo y psicopatológico de una muestra de mujeres en prisión. *Adicciones*, 23(3), 219-226.
- Villavicencio, F. (1997). *Introducción a la criminología*. Lima: Grijley
- Vinyes, R. (2002). *Irredentas, las presas políticas y sus hijos en carceles franquistas*. Madrid: Temas de Hoy.
- Virgolini, J. (2004). *Crímenes excelentes. Delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción*. Buenos Aires: Del Puerto.
- Visher, C. A. (1983). Gender, police arrest decisions, and notions of Chivalry. *Criminology*, 21, 5-28
- Vold, G. B., Bernard, T.J., y Snipes, J.B. (2002). *Theoretical Criminology*. Oxford: Oxford University Press.

- Wacquant, L. (2000). *Las cárceles de la miseria*. Madrid: Alianza.
- Walsh, A., y Ellis, L. (2007). *Criminology: An interdisciplinary approach*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ward, T. (2002). Good lives and the rehabilitation of offenders: Promises and problems. *Aggression and Violent Behaviour*, 7, 1-17.
- Ward, T., y Gannon, T. A. (2006). Rehabilitation, etiology, and self-regulation: the comprehensive good lives model of treatment for sexual offenders. *Aggression and Violent Behavior*, 11, 77-94.
- Weis, J. G. (1982). The invention of the new female Criminal. En L. D. Savitz, y N. Johnson (Eds.), *Contemporary Criminology* (pp. 152-167). New York: John Wiley and Sons.
- Wolfe, D. (1987). *Child abuse: Implications for child development and psychopathology*. London: Sage Publications.
- Yagüe, C. (2002). Mujer: Delito y Prisión, un Enfoque diferencial sobre la Delincuencia Femenina. *Revista de Estudios Penitenciarios*, 249, 135-169.
- Yagüe, C. (2006a). *Madres en prisión: Historia de las Cárceles de Mujeres a través de su vertiente maternal*. Granada: Comares.
- Yagüe, C. (2006b). Las Mujeres encarceladas. En T. C. Susinos, *Mujeres en la periferia: algunos debates sobre género y exclusión social*. Barcelona: Icaria.
- Yagüe, C. (2007a). *Madres en prisión. Historia de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal*. Granada: Comares.
- Yagüe, C. (2007b). Mujeres en prisión. Intervención basada en sus características, necesidades y demandas. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 5, 1-24.
- Yagüe, C., y Cabello, M. I. (2005). Mujeres jóvenes en prisión. *Revista de Estudios de Juventud*, 69, 30-49.
- Zaragoza, J., y Gorjón, F. (2006). El tratamiento penitenciario español. Su aplicación. Letras Jurídicas. *Revista Electrónica de Derecho*, 3. Recuperado de <http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/03/JZH2006.pdf> 2/09/2013.
- Zurhold, H. (2005). Responses of European prison systems to problematic drug users. *International Journal of Prisoner Health*, 1, 127-141.



ÍNDICE DE
CUADROS, TABLAS,
FIGURAS Y
GRÁFICAS



ÍNDICE DE CUADROS, TABLAS, FIGURAS Y GRÁFICAS

CUADROS.

Cuadro 1. <i>Normativa de Naciones Unidas sobre Delincuencia</i>	38
Cuadro 2. <i>Resumen de las Teorías explicativas de la Delincuencia Femenina</i>	113
Cuadro 3. <i>Investigación sobre Mujer y Delincuencia en España</i>	141
Cuadro 4. <i>Variables de investigación referidas a las internas</i>	229
Cuadro 5. <i>Variables de los centros</i>	231
Cuadro 6. <i>Secuencia de planificación de la entrevista</i>	246
Cuadro 7. <i>Ficha Técnica del cuestionario a las internas</i>	250
Cuadro 8. <i>Datos de identificación</i>	258
Cuadro 9. <i>Fecha de construcción y entrada en funcionamiento de los Centros Penitenciarios de la muestra</i>	267
Cuadro 10. <i>Variables. Análisis de diferencias</i>	319
Cuadro 11. <i>Subdivisión de los grupos</i>	321

TABLAS.

Tabla 1. <i>Población reclusa penada por grado de tratamiento. Diciembre 2014</i>	65
Tabla 2. <i>Tipología delictiva de la población reclusa penada. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal. Noviembre 2014</i>	84
Tabla 3. <i>Detenciones e Imputaciones por Causa de Infracción Penal de mujeres</i>	133
Tabla 4. <i>Mujeres en prisión en función del grado. Diciembre 2014</i>	135
Tabla 5. <i>Distribución de las mujeres reclusas según condena. Diciembre de 2013</i> ...	136
Tabla 6. <i>Madres e hijos en prisión. Media del año 2013</i>	138
Tabla 7. <i>Extranjeros residentes en España según procedencia. Julio 2014</i>	148
Tabla 8. <i>Representación de extranjeros en España y en prisión. Enero de 2014</i>	150
Tabla 9. <i>Muestra</i>	235
Tabla 10. <i>Actividades en el tiempo libre</i>	243

Tabla 11. <i>Capacidad de Internas, ocupación real de los centros y número de internas.....</i>	<i>274</i>
Tabla 12. <i>Ha ido a la escuela y asistencia.....</i>	<i>294</i>
Tabla 13. <i>Edad de comienzo en la escuela.....</i>	<i>294</i>
Tabla 14. <i>Tipo de escuela.....</i>	<i>295</i>
Tabla 15. <i>Trabajo en prisión.....</i>	<i>303</i>
Tabla 16. <i>Tipo de delito.....</i>	<i>306</i>
Tabla 17. <i>Relación con los funcionarios de la prisión y con las compañeras del módulo.....</i>	<i>313</i>
Tabla 18. <i>Drogas consumidas.....</i>	<i>316</i>
Tabla 19. <i>Tratamiento de desintoxicación.....</i>	<i>318</i>
Tabla 20. <i>Grupo Red de apoyo social. Apoyo social - Perfil individual.....</i>	<i>323</i>
Tabla 21. <i>Grupo Red de apoyo social. Proyecto migratorio.....</i>	<i>324</i>
Tabla 22. <i>Grupo Red de apoyo social. Perfil escolar.....</i>	<i>325</i>
Tabla 23. <i>Grupo Red de apoyo social. Perfil laboral.....</i>	<i>326</i>
Tabla 24. <i>Grupo Red de apoyo social. Consumo de drogas.....</i>	<i>326</i>
Tabla 25. <i>Grupo Red de apoyo social. Carrera delictiva.....</i>	<i>327</i>
Tabla 26. <i>Grupo Red de apoyo social. Vida en prisión.....</i>	<i>328</i>
Tabla 27. <i>Grupo Área Geográfica. Perfil individual.....</i>	<i>329</i>
Tabla 28. <i>Grupo Área Geográfica. Proyecto migratorio.....</i>	<i>330</i>
Tabla 29. <i>Grupo Área Geográfica. Perfil escolar.....</i>	<i>331</i>
Tabla 30. <i>Grupo Área Geográfica. Perfil laboral.....</i>	<i>332</i>
Tabla 31. <i>Grupo Área Geográfica. Consumo de drogas.....</i>	<i>332</i>
Tabla 32. <i>Grupo Área Geográfica. Carrera delictiva.....</i>	<i>333</i>
Tabla 33. <i>Grupo Área Geográfica. Vida en prisión.....</i>	<i>334</i>
Tabla 34. <i>Grupo Proceso migratorio. Perfil individual.....</i>	<i>335</i>
Tabla 35. <i>Grupo Proceso migratorio. Proyecto migratorio.....</i>	<i>336</i>
Tabla 36. <i>Grupo Proceso migratorio. Perfil escolar.....</i>	<i>337</i>

Tabla 37. <i>Grupo Proceso migratorio. Perfil laboral</i>	338
Tabla 38. <i>Grupo Proceso migratorio. Consumo de drogas</i>	338
Tabla 39. <i>Grupo Proceso migratorio. Carrera delictiva</i>	339
Tabla 40. <i>Grupo Proceso migratorio. Vida en prisión</i>	340
Tabla 41. <i>Grupo Carrera delictiva. Perfil individual</i>	341
Tabla 42. <i>Grupo Carrera delictiva. Proyecto migratorio</i>	342
Tabla 43. <i>Grupo Carrera delictiva. Perfil escolar</i>	343
Tabla 44. <i>Grupo Carrera delictiva. Perfil laboral</i>	344
Tabla 45. <i>Grupo Carrera delictiva. Consumo de drogas</i>	344
Tabla 46. <i>Grupo Carrera delictiva. Carrera delictiva</i>	345
Tabla 47. <i>Grupo Carrera delictiva. Vida en prisión</i>	345

FIGURAS.

Figura 1. <i>Planta de Centro Tipo</i>	68
Figura 2. <i>Estrategias de integración de métodos</i>	224
Figura 3. <i>Secuencia de fases de la investigación</i>	226
Figura 4. <i>Centros de la muestra</i>	234
Figura 5. <i>Organigrama Centro Tipo</i>	266

GRÁFICAS.

Gráfica 1. <i>Evolución de la población reclusa penada en la última década</i>	83
Gráfica 2. <i>Evolución de las mujeres en el sistema penitenciario español (2004-2014)</i>	134
Gráfica 3. <i>Penadas por grupos de edad. Noviembre 2014</i>	135
Gráfica 4. <i>Preventivas por grupos de edad. Noviembre 2014</i>	135
Gráfica 5. <i>Mujeres extranjeras detenidas e imputadas según procedencia. Año 2013</i>	155

Gráfica 6. <i>Evolución de la presencia de mujeres extranjeras y nacionales en prisión 2004-2014</i>	155
Gráfica 7. <i>Áreas geográficas de procedencia</i>	236
Gráfica 8. <i>Edad</i>	236
Gráfica 9. <i>Estado Civil</i>	237
Gráfica 10. <i>Pareja en prisión</i>	238
Gráfica 11. <i>Número de hijos</i>	238
Gráfica 12. <i>Edades de los hijos</i>	239
Gráfica 13. <i>Relación con sus hijos</i>	240
Gráfica 14. <i>Número de hermanos</i>	241
Gráfica 15. <i>Convivencia antes de entrar en prisión</i>	242
Gráfica 16. <i>Principal motivo para venir a España</i>	288
Gráfica 17. <i>Año en el que vino a España por primera vez</i>	289
Gráfica 18. <i>Años viviendo en España</i>	290
Gráfica 19. <i>Número de habitantes de la última ciudad en la que vivió</i>	291
Gráfica 20. <i>Tenía familiares o amigos antes de su llegada</i>	291
Gráfica 21. <i>Cómo llegó a España por primera vez</i>	292
Gráfica 22. <i>Con qué apoyo contó para venir a España</i>	293
Gráfica 23. <i>Sus hijos están en España o en su país de origen</i>	293
Gráfica 24. <i>Nivel de estudios</i>	296
Gráfica 25. <i>Nivel de estudios de madre y padre</i>	297
Gráfica 26. <i>Estudiaba al ser detenida y en la actualidad</i>	298
Gráfica 27. <i>Conocimiento de idiomas</i>	298
Gráfica 28. <i>Edad a la que empezó a trabajar fuera de casa</i>	300
Gráfica 29. <i>Situación en el momento de ser detenida</i>	301
Gráfica 30. <i>En qué trabajaba al ser detenida</i>	302
Gráfica 31. <i>Ingresos mensuales</i>	303

Gráfica 32. <i>Tiempo de condena</i>	305
Gráfica 33. <i>Grado en el que está clasificada</i>	306
Gráfica 34. <i>Forma de comisión del delito</i>	308
Gráfica 35. <i>Tiempo que lleva en prisión</i>	309
Gráfica 36. <i>Número de traslados</i>	310
Gráfica 37. <i>Pasado en instituciones similares</i>	311
Gráfica 38. <i>Visitas en prisión</i>	312
Gráfica 39. <i>Edad de comienzo de consumo</i>	317





ANEXOS



ANEXO 1

**Cuestionario sociobiográfico
para las mujeres de la muestra**



Cuestionario Socio-Biográfico

Tesis doctoral

“Delincuencia femenina e inmigración. Perfil socioeducativo y propuesta de intervención centrada en la competencia social”.

Dña. Cristina Varela Portela

Directores:

Profa. Dra. Dña. Mar Lorenzo Moledo

Prof. Dr. D. Miguel A. Santos Rego

Año 2012



Cuestionario Biográfico dirigido a Mujeres Internas en los Centros Penitenciarios

Estimada colaboradora,

Mi nombre es Cristina Varela Portela, soy investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela y estoy realizando mi Tesis Doctoral sobre “Delincuencia femenina e inmigración. Perfil socioeducativo y propuesta de intervención centrada en la competencia social”, proyecto que dirigen los profesores Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo (Grupo ESCULCA).

El objetivo principal de este cuestionario es recabar información sobre el perfil individual y social de las mujeres internas en los centros penitenciarios.

Los datos que se recojan de este cuestionario serán absolutamente confidenciales y únicamente podrán ser utilizados para los fines de esta investigación, velando por la intimidad de las personas que participan en la misma.

El siguiente cuestionario es totalmente voluntario. Está usted en su derecho de no responder a las preguntas que no considere apropiadas.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

1. - País y fecha de nacimiento

☐ País _____

☐ Fecha _____

2. - ¿Vivía usted en España antes de entrar en prisión?

☐ Sí

☐ No (pasar a pregunta **11**)

3 - ¿Cuál ha sido el principal motivo para venir a España?

☐ Motivos económicos

☐ Reagrupación familiar

☐ Motivos religiosos

☐ Motivos políticos de su país

☐ Mejorar la formación

☐ Otros (especificar) _____

4. - ¿En qué año vino a este país por primera vez?

Antes de 1995	Entre 1995 y 2000	Entre 2001 y 2005	Entre 2006 y 2010	Después de 2010

5. - ¿Cuántos años lleva usted viviendo en España? (sin contar el tiempo en prisión)

Menos de un año	Entre uno y tres años	Entre cuatro y seis años	Entre siete y nueve años	Diez o más años

6. - ¿Cuál fue la última localidad/ciudad en la que vivió antes de entrar en prisión?

7. - ¿Tenía familiares y/o amigos en España antes de su llegada?

- ☐ Sí, familiares
- ☐ Sí, amigos (pasar a pregunta 9)
- ☐ Sí, familiares y amigos
- ☐ No (pasar a pregunta 9)

8. - ¿Qué familiares eran? (puede marcar más de una opción)

- ☐ Padres
- ☐ Hermanos/as
- ☐ Primos/as
- ☐ Cónyuge/pareja
- ☐ Otros (Especificar) _____

9. - ¿Cuándo Usted llegó a España por primera vez lo hizo como...?

- ☐ Turista
- ☐ Estudiante
- ☐ Con permiso de trabajo
- ☐ Solicitante de asilo o refugio
- ☐ Persona en reagrupación familiar
- ☐ De otra forma (especificar) _____

10. – ¿Con qué apoyo contó para entrar en España?

- ☐ Con el apoyo de familiares
- ☐ Con la ayuda de amigos y conocidos
- ☐ Con el apoyo de una red organizada que se encargaba de traer inmigrantes
- ☐ A través de una Asociación de inmigrantes
- ☐ A través de un sindicato
- ☐ Por mi cuenta, sin ningún otro apoyo
- ☐ De otra forma (especificar) _____

11. - Estado civil:

Soltera	Casada	Viuda	Separada/divorciada	Vive en pareja

12. – En caso de tener pareja, ¿está en prisión?

- ☐ Sí, en una prisión española
- ☐ Sí, en una prisión en su país de origen
- ☐ No, pero lo ha estado con anterioridad
- ☐ No, nunca ha estado en prisión

13. - ¿Tiene hijos/as?

- ☐ Sí (especificar número)
- ☐ No (pase a la pregunta 17)

14. - Edades de los hijos/as:

	Entre 0 y 5 años	Entre 6 y 10 años	Entre 11 y 15 años	Entre 16 y 20 años	Más de 20 años
1º					
2º					
3º					
4º					
5º					

15. -¿Sus hijos/as están aquí en España o en su país de origen?

- ☐ En España
- ☐ En el país de origen
- ☐ En España y en el país de origen

16. - Relación con sus hijos/as:

Muy buena	Buena	No tengo relación	Mala	Muy mala

17.- ¿Tiene hermanos/as?

- ☐ Sí (especificar número)
- ☐ No

18. - ¿Con quién vivía usted antes de entrar en prisión? (si es necesario marque más de una opción)

- ☐ Sola ☐ Pareja
- ☐ Hijos/as ☐ Padres
- ☐ Amigos/as ☐ Otros familiares (especificar)_____

19. - ¿A qué solía dedicar su tiempo de ocio antes de entrar en prisión?

	Nunca	Algunas veces	Siempre
Estar con los amigos/as			
Estar con su pareja			
Ver la TV			
Salir de fiesta			
Leer			
Ir al cine			
Oír música			
Practicar deporte			
Navegar por internet			
Pasear			
Otros (especificar)			

20. - ¿Ha ido usted a la escuela?

☐ Sí

☐ No (pase a la pregunta 23)

21. - En caso de haber ido a la escuela ¿a qué edad comenzó a ir?

Menos de 3 años	Entre 3 y 6 años	Entre 7 y 9 años	Entre 10 y 12 años	Más de 12 años

22. - ¿Asistía a la escuela con regularidad?

☐ Sí (pase a la pregunta 24)

☐ No

23. - En caso de no asistir a la escuela o no hacerlo con regularidad, indique el motivo principal.

- ☐ No me gustaba
- ☐ Mala salud
- ☐ Falta de recursos económicos en la familia para poder pagarla
- ☐ Tener que trabajar
- ☐ Cuidar hermanos/as
- ☐ Traslados de residencia continuos
- ☐ Otros ¿Cuáles?_____

24. - La escuela en la que usted estudió era:

- ☐ Pública
- ☐ Privada religiosa
- ☐ Privada

25. - ¿Con qué nivel de estudios cuenta?

- ☐ No tiene estudios
- ☐ Estudios Primarios
- ☐ Estudios Secundarios
- ☐ Formación Profesional (especificar)_____
- ☐ Universitarios (especificar)_____

26. -¿Con qué nivel de estudios cuenta o contaba su madre?

☐ Sin estudios

☐ Formación Profesional
(especificar)_____

☐ Estudios Primarios

☐ Universitarios
(especificar)_____

☐ Estudios Secundarios

27. -¿Con qué nivel de estudios cuenta o contaba su padre?

☐ Sin estudios

☐ Formación Profesional
(especificar)_____

☐ Estudios Primarios

☐ Universitarios
(especificar)_____

☐ Estudios Secundarios

28. - ¿Estudiaba en el momento de ser detenida?

☐ Sí ¿Qué?_____

☐ No

29. - ¿Está estudiando en la actualidad?

☐ Sí ¿Qué?_____

☐ No

30. - ¿Qué conocimiento tiene de los siguientes idiomas?

	Nada	Poco	Bastante	Mucho
Gallego				
Castellano				
Inglés				
Francés				
Alemán				
Otros (especificar) _____ _____				

31. - ¿Ha trabajado fuera de su casa alguna vez?

☐ Sí

☐ No (pase a pregunta 34)

32. - ¿A qué edad empezó a trabajar fuera de casa?

Menos de 16 años	Entre 16 y 20 años	Entre 21 y 25 años	Entre 26 y 30 años	Más de 30 años

33. - ¿Recuerda en qué sector o sectores de los que se mencionan trabajó?

☐ Agricultura

☐ Pesca

☐ Industria (fábrica)

☐ Construcción

☐ Servicio doméstico

☐ Hostelería/restauración

☐ Comercio

☐ Transportes

☐ Sanidad

☐ Enseñanza/Educación

☐ Profesional liberal

☐ Otros (Especificar)

34. – ¿En cuál de estas situaciones se encontraba usted en el momento de ser detenida?

Trabajaba con contrato	
Jubilada/pensionista	
No trabajaba pero había trabajado antes	
No trabajaba y tampoco he trabajado antes	
Estudiante	
Labores del hogar	
Economía sumergida/sin contrato	

35. - En caso trabajar fuera de casa en el momento de ser detenida, ¿en qué trabajaba?

Agricultora/ganadera/ mariscadora	
Empresaria	
Administrativa	
Empleada en empresa	
Administración pública	
Profesional por cuenta propia	
Servicio doméstico	
Hostelería	
Venta ambulante	
Otras (especificar)	

36. – ¿Podría indicarnos los ingresos mensuales que usted percibía por su trabajo?

37. – ¿Podría decirnos cuáles eran las condiciones de su trabajo?

38. – ¿Realiza algún tipo de trabajo en la prisión?

☐ Sí (especificar) _____

☐ No

39. – ¿Envía usted dinero a su familia?

☐ Sí

☐ No

40. – ¿Ha realizado algún curso de formación laboral en la prisión?

☐ Sí (especificar) _____

☐ No

41. - ¿Consumía usted drogas antes de entrar en prisión?

☐ Sí

☐ No (pase a pregunta 47)

42. - De la lista que sigue marque lo que corresponda respecto a la frecuencia de consumo de estas sustancias.

Sustancia	Frecuencia		
	Nunca	Ocasionalmente	Frecuentemente
Heroína, morfina, opio...			
Hachís, marihuana...			
Barbitúricos, benzodiacepinas...			
Disolventes, colas...			
Cocaína			
Speed, éxtasis...			
LSD			
Otras (especificar) _____			

43. ¿A qué edad comenzó a consumir estas sustancias?

44. -¿Por qué motivo empezó a consumir estas sustancias? (Puede marcar más de una opción)

- ☐ No sabe
- ☐ Lo hacían miembros de su familia
- ☐ Lo hacía su pareja/novio/marido
- ☐ Ansiedad, estrés
- ☐ Integración en el grupo de amigos/as
- ☐ Curiosidad
- ☐ Otros motivos (especificar) _____

45. - ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento para su desintoxicación en la calle?

- ☐ Sí ¿Cuál? _____
- ☐ No

46. - ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento para su desintoxicación en la prisión?

- ☐ Sí ¿Cuál? _____
- ☐ No

47. - ¿En qué situación procesal-penal se encuentra en este momento?

- ☐ Penada
- ☐ Preventiva

48. – En el caso de estar penada, ¿Cuál es el tiempo de su condena?

49. – ¿Nos puede indicar el grado en el que está clasificada?

☐ 1º grado

☐ 2º grado

☐ 3º grado

50. – ¿Cuál es el tipo de delito por el que está en prisión?

51. - ¿Cuál fue el motivo o motivos que le llevaron a cometer el delito?

52.- ¿Puede indicarnos la forma de comisión del delito?

☐ Sola

☐ En pareja

☐ En grupo, entre 3 y 5 personas

☐ En grupo, más de 5 personas

53. - Tiempo que lleva en prisión:

Menos de 1 año	De 1 a 3 años	De 4 a 6 años	De 6 a 9 años	10 o más años

54. - ¿Tiene otras condenas pendientes?

☐ Sí

☐ No

55. - ¿Cuántas veces ha estado en prisión contando con la actual?

Una sola vez (pase a la pregunta 57)	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Más de cuatro veces

56. - En caso de haber estado con anterioridad en prisión, ¿A qué edad tuvo el primer ingreso y por qué fue?

Edad

Motivo _____

57. ¿En qué país se produjo su primer ingreso en prisión?

☐ España

☐ En otro país (especificar) _____

58. ¿Ha sido trasladada alguna vez desde que está en prisión?

☐ No

☐ Sí (especificar en qué otras prisiones ha estado)

59. - ¿Ha estado internada en algún centro de menores o institución similar?

☐ Sí

☐ No

60. - ¿Le visitan en la prisión familiares o amigos? (puede marcar más de una opción)

☐ Sí, mi padre/madre

☐ Sí, mi cónyuge/pareja

☐ Sí, mis hijos/as

☐ Sí, mis hermanos/as

☐ Sí, otros familiares (especificar)

☐ Sí, amigos/as

☐ No

61. - ¿Cómo diría que es su relación con los/as funcionarios/as de la prisión?

No existe relación	Muy mala	Mala	Buena	Muy buena

62. - ¿Cómo diría que es su relación con sus compañeras dentro del módulo?

No existe relación	Muy mala	Mala	Buena	Muy buena

63. - ¿En qué actividades educativas, culturales, laborales, etc... está usted participando en la actualidad?

64. - ¿Qué le gustaría hacer o aprender mientras esté en prisión?

65. - ¿Cómo es su celda, considera que las condiciones son las adecuadas para que pueda vivir una persona?

66. - ¿Qué cambiaría dentro de la cárcel para poder estar mejor?

67. - ¿Cuáles son sus proyectos en cuanto abandone la prisión?







ANEXO 2

**Ficha técnica de la entrevista a
los subdirectores**



FICHA DE LA PRISIÓN.

A. Datos generales

- Localización:
- Organigrama:
- Fecha de entrada en funcionamiento:

B. Características del centro/módulo

- Tipo de centro/módulo:
- Tipo de construcción:
- Capacidad de internas del centro/módulo:
- Ocupación real del centro/módulo:
- Número de celdas del centro/módulo:
- Servicios generales de los que dispone el centro:
- Servicios a los que pueden acceder las internas:
- Existencia de módulos específicos (UTE, módulo de respeto, Unidad de madres...)

C. Recursos Humanos

- Personal con el que cuenta el centro/módulo:
- Personal educativo del centro/módulo:

D. Programas de tratamiento

- Programas de tratamiento existentes en el centro y características
- Programas de tratamiento existentes en el módulo y características

E. Relaciones con la comunidad

- Convenios con Ayuntamiento Sí/No

Cuales _____

- Convenios con la Diputación Sí/No

Cuales _____

- Convenios con la Administración Autonómica Sí/No

Cuales _____

- Convenios con la Administración Central Sí/No

Cuales _____

- Convenios con ONGs Sí/No

Cuales _____

- Convenios con otras instituciones Sí/No

Cuales _____

- Actividades del centro/módulo en el exterior Sí/No

Cuales _____

- Otras Sí/No

Cuales _____

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

ANEXO 3

**Solicitud de permiso a la Secretaría
General de Instituciones
Penitenciarias**



Santiago de Compostela a 27 de Febrero de 2012

D. Ángel Yuste Castillejo
Sr. Secretario General de Instituciones Penitenciarias
C/ Alcalá, 38-40
28014 Madrid

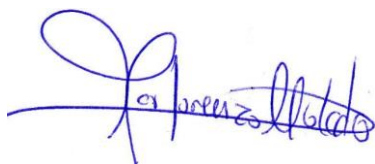
Distinguido Secretario General:

Nos dirigimos a usted al objeto de solicitar Autorización para poder acceder a los Centros Penitenciarios de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Brieve (Ávila), Madrid 1 - Mujeres (Alcalá - Madrid), Teixeiro (A Coruña), Pereiro de Aguiar (Ourense), A Lama (Pontevedra) y Bonxe (Lugo) .


Nuestra intención es pasar a las internas extranjeras el cuestionario que le anexamos, instrumento principal de la Tesis Doctoral de la becaria FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Doña Cristina Varela Portela (DNI 36145319Z) cuyo título es "Delincuencia femenina e inmigración. Perfil socioeducativo y propuesta de intervención centrada en la competencia social", Tesis inscrita en el Departamento de Teoría de la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, y de la que somos directores.

Todos los datos e información que se recaben estarán sometidos a la legislación vigente, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La persona responsable de las entrevistas con las internas será únicamente Doña Cristina Varela Portela.

Esperando su pronta respuesta, quedamos a su disposición con nuestro agradecimiento anticipado,



Dra. Mar Lorenzo Moledo
Asesora UNED C.P. Teixeiro
Profesora Titular de Universidad
Codirectora de la Tesis
E-mail: mdelmar.lorenzo@usc.es
Tlf : 600940158/881813758
Facultade de Ciencias da Educación -
Campus Vida 15782- Universidade de
Santiago de Compostela



D. Miguel A. Santos Rego
Catedrático de Universidad
Codirector de la Tesis
E-mail: miguelangel.santos@usc.es
Tlf: 60094008 1/881813755
Facultade de Ciencias da Educación - Campus
Vida 15782- Universidade de Santiago de
Compostela



ANEXO 4

**Respuesta de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias**





MINISTERIO
DEL INTERIOR

SEC. GRAL. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS SUB. GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	
- 3 ABR 2012	
SALIDA	Nº 779

SECRETARIA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

O F I C I O

S/REF.

N/REF.

FECHA

ASUNTO

29 de marzo de 2012

AUTORIZACIÓN INVESTIGACIÓN

Sra. D^a. Cristina Varela Portela
mdelmar.lorenzo@usc.es
miguelangel.santos@usc.es

Tramitada en esta Unidad de Apoyo, la solicitud de **D^a. Cristina Varela Portela**, becaria FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la realización de entrevistas a internas para integrarlas en el estudio sobre **"Delincuencia femenina e inmigración. Perfil socioeducativo y propuesta de intervención centrada en la competencia social"** en varios Centros penitenciarios, le comunico que se autoriza lo solicitado con las siguientes condiciones:

1º.- La autorización tendrá validez hasta el 30 de septiembre de 2012. Si fuera necesaria su prolongación, deberá tramitar una nueva solicitud justificando las causas de su continuidad.

2º.- La selección de los internos, compaginará los criterios de la investigación con las limitaciones penitenciarias. En cualquier caso, **la colaboración de los internos será voluntaria**, informándoles personalmente de los objetivos de la investigación de manera suficiente, para que su participación sea realmente libre. De esta circunstancia deberá quedar nota escrita en el centro respecto de los internos.

3º.- La investigación garantizará **el carácter anónimo** de los internos participantes, sustituyéndose el nombre de los mismos si se considera necesario. En todo caso se velará por la intimidad los participantes, protegida en el artículo 18.1 de la Constitución, evitando la correspondencia de los datos obtenidos y sus titulares. Igualmente deberá respetarse lo previsto en los artículos 4.2.b y 211 del Reglamento Penitenciario, y lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de datos.

4º.- La Dirección de cada Centro Penitenciario, como garante de la especial situación jurídica de los internos, deberá aprobar antes su realización:

- El modelo escrito de **consentimiento del interno**.
- La información que se va a facilitar al interno, a fin de obtener su **voluntaria participación**.
- Cualquier cambio sustancial que se vaya a producir en el desarrollo de la investigación.

5º.- Del estudio realizado deberá facilitar **copia a esta Secretaría General** por su interés y para valoración conjunta antes de realizar cualquier publicación o explotación pública de los datos o resultados obtenidos. Tampoco deberá facilitar datos a terceros sin autorización de este centro directivo.

CORREO ELECTRÓNICO

sgrelacionesinstitucionales@dgip.mir.es

ALCALÁ, 38
28014 MADRID
TEL.: 91 335 4794
FAX.: 91 335 4050



6º.- La dirección de cada centro fijará las condiciones para que las actividades derivadas de la autorización se desarrollen adecuadamente sin perturbar el desarrollo de los servicios, pero prestando la colaboración necesaria para el desarrollo de la actividad.

7º.- En caso de **publicación del estudio debe remitir a esta Secretaría General un ejemplar** de la misma para incorporarlo al fondo bibliográfico de nuestra Biblioteca y libre consulta de los usuarios de la misma.

Se deberá remitir a estos Servicios Centrales un informe-memoria del trabajo realizado y los resultados obtenidos.

Deberá coordinar con el Director del Centro los días de visita:

C.P. Alcalá de Guadaira:	Tfno: 954102066
C.P. Ávila:	Tfno: 920259020
C.P. Madrid I:	Tfno: 918807815
C.P. Teixeiro:	Tfno: 981779501
C.P. Ourense:	Tfno: 988405691
C.P. A Lama:	Tfno: 986758001
C.P. Bonxe:	Tfno: 982393232



Mercedes Belaustegui Alonso
SUBDIRECTORA GENERAL
DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS



CONDICIONES A RESPETAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “DELINCUENCIA FEMENINA E INMIGRACIÓN. PERFIL SOCIOEDUCATIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA COMPETENCIA SOCIAL”

1º.- La autorización tendrá validez hasta el 30 de septiembre de 2012. Si fuera necesaria su prolongación, deberá tramitar una nueva solicitud justificando las causas de su continuidad.

2º.- La selección de los internos, compaginará los criterios de la investigación con las limitaciones penitenciarias. En cualquier caso, **la colaboración de los internos así como los miembros de los Equipos Técnicos será voluntaria**, informándoles personalmente de los objetivos de la investigación de manera suficiente, para que su participación sea realmente libre. De esta circunstancia deberá quedar nota escrita en el centro respecto de los internos.

3º.- La investigación garantizará **el carácter anónimo** de los internos participantes, sustituyéndose el nombre de los mismos si se considera necesario. En todo caso se velará por la intimidad los participantes, protegida en el artículo 18.1 de la Constitución, evitando la correspondencia de los datos obtenidos y sus titulares. Igualmente deberá respetarse lo previsto en los artículos 4.2.b y 211 del Reglamento Penitenciario y lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de datos.

4º.- La Dirección de cada Centro Penitenciario, como garante de la especial situación jurídica de los internos, deberá aprobar antes su realización:

- El modelo escrito de **consentimiento del interno**.
- La información que se va a facilitar al interno, a fin de obtener **su voluntaria participación**.
- Cualquier cambio sustancial que se vaya a producir en el desarrollo de la investigación.

5º.- Del estudio realizado deberá facilitar **copia a esta Secretaría General** por su interés y para valoración conjunta antes de realizar cualquier publicación o explotación pública de los datos o resultados obtenidos. Tampoco deberá facilitar datos a terceros sin autorización de este centro directivo.

6º.- La dirección de cada centro fijará las condiciones para que las actividades derivadas de la autorización se desarrollen adecuadamente sin perturbar el desarrollo de los servicios, pero prestando la colaboración necesaria para el desarrollo de la actividad.

7º.- En caso de **publicación del estudio debe remitir a esta Secretaría General un ejemplar** de la misma para incorporarlo al fondo bibliográfico de nuestra Biblioteca y libre consulta de los usuarios de la misma.

Presto mi CONFORMIDAD a las condiciones descritas anteriormente, en el desarrollo del trabajo de investigación que me propongo realizar. Como prueba de ello, firmo el presente documento en

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARÍA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS





ANEXO 5

Autorización de las internas



Yo, _____, con N° de Pasaporte/NIS _____, Interna del Centro Penitenciario de _____, doy mi consentimiento de forma voluntaria para que se me entreviste y se haga uso de los datos recogidos en el estudio “Delincuencia femenina e inmigración. Perfil socioeducativo y propuesta de intervención centrada en la competencia social”. Tales datos se utilizarán de forma absolutamente confidencial y exclusivamente para los fines de esta investigación, sin que mis datos personales puedan aparecer en ningún documento.

_____, a _____ de _____ de 2012

Firmado

